

**Universidad Andina Simón Bolívar**

**Sede Ecuador**

**Área de Derecho**

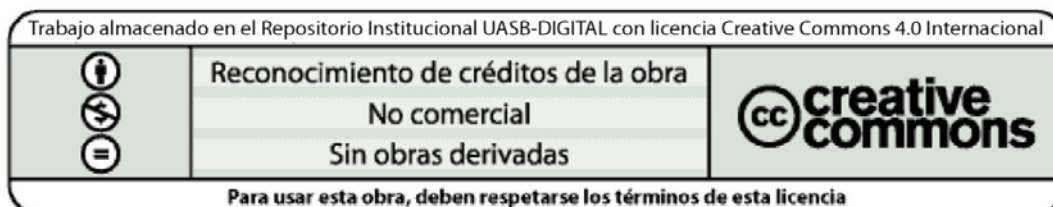
**Maestría Profesional en Derecho Procesal**

## **El error inexcusable y la independencia judicial en Ecuador**

Sergio Luis Cando Shevchukova

Tutor: Gabriel Galán Melo

Quito, 2018





*Yo, Sergio Luis Cando Shevchukova, autor de la tesis intitulada: “El error inexcusable y la independencia judicial en Ecuador”, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.*

*1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo, por lo tanto, la Universidad utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en formato virtual, electrónico, digital u óptico, como usos en red local y en internet.*

*2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.*

*3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.*

.....

*Sergio Luis Cando Shevchukova*

*Quito, 18 de marzo de 2019*





## RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito establecer qué tipo de repercusiones se producen en la esfera de la independencia judicial cuando se aplica la figura del error inexcusable, así como analizar la funcionalidad del error inexcusable en Ecuador; este objetivo general se desarrolla en cada uno de los capítulos y subtemas que se encuentran desplegados en la presente tesis.

Mediante el presente trabajo se realiza un análisis de la figura del error inexcusable, sus definiciones, variantes, orígenes a través de un estudio que parte de la necesidad de determinar su naturaleza jurídica, así como establecer la competencia del órgano que debería determinar su sanción y analizar si dicha infracción es proporcional a la sanción que actualmente se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

A través de parámetros objetivos, lógicos y racionales, el presente trabajo pretende concluir si la aplicación del error inexcusable afecta a la independencia judicial; de esta forma se pretende observar y analizar la funcionalidad de dicha figura jurídica que fue implantada en el sistema jurídico ecuatoriano desde el año 2009 y que hasta la fecha ha dado una serie de cuestionamientos en los diferentes foros.

Los principales temas que se abordan en esta tesis son: la naturaleza jurídica del error inexcusable, la determinación de su existencia, su fundamento constitucional y legal, la pertinencia y el organismo regulador de dicha conducta, si existe proporcionalidad entre la infracción por error inexcusable con la pena previa por la legislación ecuatoriana y la independencia judicial frente al error inexcusable; temas que serán analizados de acuerdo a la doctrina, la jurisprudencia y las leyes.



## AGRADECIMIENTO

Es propicio el momento para dirigir mis agradecimientos a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede-Ecuador, y a todos aquellos académicos que durante este tiempo –sea en forma directa o indirecta- compartieron sus conocimientos y supieron transmitir sus experiencias a través de sus enseñanzas, las que han sido fundamento para que las ideas que se expresan en el presente trabajo tengan su debido soporte.

A mi familia que es sustento de mis ideales y objetivos, quienes siempre me brindaron su incondicional apoyo para la consecución de mis metas. A todas aquellas personas –cuya descripción individual no abarcaría este pequeño espacio- que en el camino de la verdad y de la virtud me han enseñado y compartido sus conocimientos.

A todos ellos mi gratitud...



## ÍNDICE

Introducción.....	11
-------------------	----

### Capítulo I:

#### El error inexcusable: Antecedentes y naturaleza jurídica.

1. Breve noción y acercamiento a su concepto.....	17
2. ¿En qué casos existe el error inexcusable?.....	36
2.1. Errores de procedimiento o <i>in procedendo</i> .....	38
2.2. Errores de juzgamiento o <i>in iudicando</i> .....	44
3. ¿Cómo se determina su existencia?.....	46

### Capítulo II

#### El error inexcusable como causa de sanción administrativa frente a la

#### independencia judicial

1. Fundamento constitucional de la responsabilidad de los administradores de justicia.....	51
2. El error inexcusable como causal de una sanción administrativa.....	56
3. ¿Quién debería establecer la existencia del error inexcusable?.....	67
4. ¿Existe proporcionalidad entre la infracción y la sanción por error inexcusable?.....	71
5. ¿Existe vulneración al principio de independencia judicial cuando se sanciona el error inexcusable?.....	77
Conclusiones.....	93
Bibliografía.....	95

Anexos.....	107
-------------	-----

## INTRODUCCIÓN

El 20 de octubre de 2008 se publicó en el registro oficial una nueva Constitución de la República, conocida también como la de Montecristi; esta Constitución, en comparación de otras, comprende en su estructura una nueva serie de caracteres que redefinen la estructura del Estado y de sus poderes; principalmente, el que es materia del presente estudio: la Función Judicial.

Estos cambios produjeron un nuevo paradigma, en el cual se dio un giro radical al rol que debe desempeñar el juez; se establecieron y describieron como principios de optimización un extenso catálogo de derechos y de garantías que permitían –al menos en su interpretación literal- dotar de mayores capacidades al juez, a fin de que cuide, proteja y garantice los derechos de los ciudadanos.

Este nuevo enfoque precisa que el juez –en su rol- asuma su papel de garante de los derechos que se encuentran reconocidos en nuestra norma suprema. En la Constitución de 2008 se realza la separación técnica de los principios de la administración de justicia con los de la Función Judicial, ello obedece al énfasis que se da a la justicia como derecho fundamental, aliviando el papel y rol del juez como creador del derecho y garante de los derechos fundamentales.<sup>1</sup>

Pero esta nueva orientación no solamente produjo cambios respecto del rol de los jueces, sino que también de su máximo órgano administrativo, esto es, el Consejo de la Judicatura, cuyas atribuciones se vieron modificadas y reforzadas tras la aprobación del referéndum y consulta popular del 7 de mayo de 2011, cuyas preguntas sometidas a consulta popular se relacionaban con el funcionamiento de la administración de justicia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Santiago Andrade Ubidia, “La Función Judicial en la vigente Constitución de la República”, en *La nueva Constitución del Ecuador: Estado, derechos e instituciones* (Quito, Santiago Andrade, Agustín Grijalva, Claudia Storini edit., Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2009), 247.

<sup>2</sup> La pregunta número cuatro señalaba: ¿Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, ENMENDANDO LA CONSTITUCIÓN COMO LO ESTABLECE EL ANEXO 4? Anexo 4.- El artículo 20 del Régimen de Transición dirá: "Art. 20.- Se disuelve el actual Pleno del Consejo de la Judicatura; en su reemplazo se crea un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres delegados designados y sus respectivos alternos: uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social; todos los delegados y sus alternos estarán sometidos a juicio político. Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el

Mediante la aprobación de dicho referéndum y consulta popular se dio paso para la instalación de un Consejo de la Judicatura de transición, con el objeto que transforme el sistema judicial, contando para cuyo efecto con un tiempo de dieciocho meses, a través de un marco de actuación de seis ejes estratégicos: (1) talento humano; (2) modelo de gestión; (3) infraestructura civil; (4) infraestructura tecnológica; (5) cooperación interinstitucional; y, (6) gestión financiera equitativa.<sup>3</sup>

De esta forma el Consejo de la Judicatura se erigió materialmente como un órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial,<sup>4</sup> en tal razón quedó como el órgano encargado de corregir disciplinariamente las actuaciones de los funcionarios bajo su control.

---

Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerán sus funciones por un período improrrogable de 18 meses. El Consejo de la Judicatura definitivo se conformará mediante el procedimiento establecido en el artículo 179 de la Constitución enmendada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asegurará que los miembros del nuevo Consejo de la Judicatura estén designados antes de concluidos los 18 meses de funciones del Consejo de la Judicatura de transición. Queda sin efecto el concurso de méritos y oposición que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Suprimase la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de la Función Judicial."; mientras que la quinta señalaba: ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, COMO LO ESTABLECE EL ANEXO 5. Anexo 5 Enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente manera: Los artículos 179 y 181 de la Constitución de la República dirán: "Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros". "Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. 2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos. 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. 4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial. 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple." [...] 6.- El numeral 7 del artículo 109 dirá: "...7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable; ..." 7.- El numeral 7 del artículo 217 elimínese las palabras "comisiones especializadas". 8.- En el artículo 255 agréguese como numeral 3, lo siguiente: "...3. Manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones; [...]". Consejo Nacional Electoral, Resultados del referéndum y consulta popular 2011. Registro Oficial 490 Suplemento 1, de 13 de julio de 2011, accedido 20 de marzo de 2016, <http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/baselegal/Consulta%20Popular%20y%20Referendum.PDF>.

<sup>3</sup> Consejo de la Judicatura, *¡Cumplimos! Rendición de cuentas julio 2011 – enero 2013*, Quito, 26 de enero de 2013, 11.

<sup>4</sup> Aunque como veremos adelante esta descripción y facultades datan de mucho antes de la Constitución de 2008.



Tanto el principio de independencia judicial como el de responsabilidad se encuentran contemplados en la Constitución de la República; así, el numeral primero del artículo 168 de la Constitución de la República prescribe que los órganos de la Función Judicial gozan de independencia interna y externa y que la violación de este principio conlleva responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley; mientras que el principio de responsabilidad, prescrito en el artículo 233 ibídem, establece que ningún funcionario público se encuentra exento de responsabilidad por sus actos u omisiones. Estos dos principios también se encuentran desarrollados en el Código Orgánico de la Función Judicial, cuerpo normativo que tipifica los títulos de imputación por responsabilidad de los servidores judiciales, así como recalca el principio de independencia judicial.

El 9 de marzo de 2009 entró en vigencia y se promulgó el Código Orgánico de la Función Judicial<sup>5</sup> (en adelante COFJ), cuerpo normativo en el que se introdujeron una serie de normas tendientes al control y ordenamiento del Poder Judicial, entre las cuales se implantó, *inter alia*, como causal de sanción administrativa la figura del error inexcusable.

El error inexcusable se encuentra descrito en el artículo 109 numeral 7 del COFJ, conjuntamente con otros comportamientos que imputan responsabilidad como lo son: las actuaciones dolosas y las actuaciones negligentes o culposas. Actualmente, tras la reforma de 2011 en la que se incluyó a los jueces como sujetos activos del error inexcusable, el texto literal del artículo en mención es el siguiente:

Art. 109.- INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones: (...) 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.

De la meridiana lectura del artículo citado, se puede colegir una distinción entre los diferentes títulos de imputación como: el dolo, la manifiesta negligencia o el error inexcusable, pues, de su interpretación literal se concluye al menos la eventual autonomía entre unos y otros. El Consejo de la Judicatura<sup>6</sup> ha sostenido que estas tres

---

<sup>5</sup> Ecuador, *Código Orgánico de la Función Judicial*, Registro Oficial, Suplemento, No. 544, 09 de marzo de 2009.

<sup>6</sup> Ecuador Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente No. MOT-702-UCD-012-MAC, 07 de marzo de 2013.

causales, si bien son autónomas pueden coexistir unas con otras,<sup>7</sup> es decir, no son excluyentes, sino que incluso pueden llegar a ser concurrentes.

Conforme se verá posteriormente, esta descripción normativa –como causal sancionatoria- aparentemente se encontraría en colisión con el principio de independencia judicial, ya que eventualmente, en este tipo de procedimientos administrativos -bajo el título de imputación de error inexcusable- se han revisado las actuaciones jurisdiccionales, situación que llevó en un determinado momento a que la Veeduría Internacional para la Reforma de la Función Judicial del Ecuador<sup>8</sup> dirija fuertes críticas al respecto.

La Constitución de la República<sup>9</sup> en su artículo 168 numeral 1 consagra y garantiza el principio de independencia judicial tanto externa como interna, contemplando que la violación de este principio conlleva responsabilidades tanto administrativas, como civiles y penales de acuerdo con la ley.

La independencia judicial se concibe en una doble dimensión, la orgánico-institucional o independencia externa que refiere a la función judicial frente a los demás poderes del Estado, y la orgánico-funcional o independencia interna que puntualiza acerca de la actividad de los tribunales y jueces frente a otros jueces o entes de la misma función judicial.

El poder judicial constituye uno de los elementos fundamentales dentro de todo Estado democrático y se enarbola como el punto de equilibrio y estabilidad entre los demás poderes del Estado, ya que de éste depende el control del abuso arbitrario del poder.

Por ello es que la independencia judicial constituye uno de los elementos fundamentales dentro de un Estado democrático de derechos y justicia; sin embargo, para su realización, la independencia debe estar dotada de una serie de garantías y resguardos para su cumplimiento y respeto.

---

<sup>7</sup> Luis Pásara, “La independencia judicial en la reformar de la justicia ecuatoriana”, accedido 06 de enero de 2016, pág. 53, [http://www.dplf.org/sites/default/files/indjud\\_ecuador\\_resumenejecutivo\\_esp.pdf](http://www.dplf.org/sites/default/files/indjud_ecuador_resumenejecutivo_esp.pdf).

<sup>8</sup> Baltasar Garzón et al., “Informe final de la Veeduría Internacional para la Reforma de la Función Judicial del Ecuador” Quito, Diciembre de 2012, accedido 06 de febrero de 2016, <http://www.cpcs.gob.ec/docs/estadoveeduria/28-4.pdf>.

<sup>9</sup> Ecuador, *Constitución de la República del Ecuador*, Registro Oficial No. 449, 20 octubre de 2008.

Empero, en contraparte, la independencia judicial no puede, ni debe entenderse, como un estado de anarquía dentro de la función judicial,<sup>10</sup> pues como lo sostiene Cristina Víquez Cerdas, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, ni del poder estatal, sino un derecho de los ciudadanos y una garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho.<sup>11</sup>

Ninguno de los principios que se encuentran consagrados en nuestra carta fundamental son absolutos; cada uno de ellos comprende una limitación. En efecto, tanto el principio de independencia judicial como el de responsabilidad, ejercido a través de la facultad disciplinaria, implican un límite, situación que será analizada en la presente investigación.

---

<sup>10</sup> Santiago Andrade Ubidia, *Independencia judicial y estado de derecho* en *Temas de derecho constitucional* (Quito, Ediciones Legales EDLE S.A., 2003), 294. Véase también: Andrade Ubidia, “La Función Judicial en la vigente Constitución de la República”, en *La nueva Constitución del Ecuador: Estado, derechos e instituciones*, 248-249.

<sup>11</sup> Cristina Víquez Cerdas, “La independencia judicial y su relación con la responsabilidad disciplinaria y civil del juez”, en *Justicia, libertad y derechos humanos, Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante* (Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2003), 1181.



## CAPÍTULO I

### EL ERROR INEXCUSABLE: ANTECEDENTES Y NATURALEZA JURÍDICA

Conceptualizar el error inexcusable y definir su naturaleza jurídica es un trabajo altamente complejo, sea por las características que presenta el problema planteado, como por las implicaciones que éste actualmente reviste en su puesta en práctica e interpretación. En este primer acápite se estudiará y analizará una breve noción y se realizará un acercamiento a su conceptualización, teniendo en consideración algunas aristas como la aparente distinción de esta figura con el error judicial, para finalmente establecer la configuración y naturaleza jurídica del error inexcusable del modo que lo plantea la legislación ecuatoriana.

#### BREVE NOCIÓN Y ACERCAMIENTO A SU CONCEPTO

Como se había indicado *ut supra*, el 9 de marzo de 2009 entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial;<sup>12</sup> cuerpo normativo que regula la actividad de la Función Judicial, y en la cual se introdujo, entre otros, la figura del error inexcusable como causal de responsabilidad administrativa.

Esta figura de novísima aplicación no tiene antecedentes en la legislación ecuatoriana, por el contrario, el desarrollo del régimen de responsabilidad administrativa por parte de los servidores judiciales –usualmente- se ha visto marcado por la carencia de normas que regulen dichas actividades,<sup>13</sup> a tal punto que, la ex Corte

---

<sup>12</sup> Ecuador, *Código Orgánico de la Función Judicial*, Registro Oficial, Suplemento 544, 09 de marzo de 2009.

<sup>13</sup> La derogada Ley Orgánica de la Función Judicial en su Art. 10 establecía tres tipos de prohibiciones generales para los administradores de justicia, siendo estos el manifestar su opinión anticipada, ser síndicos o depositarios de las cosas litigiosas y ausentarse del lugar de su residencia ordinaria, sin licencia previa del superior de acuerdo a la ley y el reglamento; dicha norma establecía la competencia para nombrar o remover a los ministros de las Cortes Superiores, así como destituir a jueces, funcionarios y

Suprema de Justicia,<sup>14</sup> en un determinado momento, tuvo que resolver con carácter de obligatorio sobre su propia competencia y el procedimiento para ejercer la facultad sancionadora a los funcionarios judiciales que se encontraban incurso en las causales establecidas en la derogada Ley Orgánica de la Función Judicial.<sup>15</sup>

La Constitución de la República en su artículo 178 deja muy en claro que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; esta redacción se ha mantenido en forma similar a partir de la Ley No. 20 que Reformaba la Constitución Política de 1978<sup>16</sup> en la que se incluyó como un órgano de la Función Jurisdiccional al Consejo de la Judicatura con el objeto de ser el ente de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Luego de dos consultas en referéndum popular respecto a si el Consejo Nacional de la Judicatura debía o no ser el órgano de gobierno de la Función Judicial<sup>17</sup> - que obtuvieron finalmente un resultado positivo- estas atribuciones se han establecido con regularidad en las diferentes Constituciones, hasta la actual.<sup>18</sup>

Ahora bien, el artículo 109.7 del COFJ, luego de su publicación original tuvo una modificación en cuanto a uno de los sujetos activos de la infracción, realizada en el año 2011 mediante una ley reformativa,<sup>19</sup> en la que se incluyó a los jueces como sujetos del error inexcusable, quedando actualmente configurado el error inexcusable como una infracción gravísima, que debe ser sancionada por el Consejo de la Judicatura, cuya pena administrativa es la destitución<sup>20</sup>.

El texto anteriormente transcrito, *prima facie*, permite deducir varios elementos y tipos que constituyen la infracción, entre estos: los sujetos, el verbo rector o conducta, el objeto material y el bien jurídico que protege.

---

empleados de la Función Judicial por mala conducta notoria o faltas graves en el cumplimiento de sus deberes o abandono del cargo por más de ocho días.

<sup>14</sup> Ecuador, Corte Suprema de Justicia. Registro Oficial 182, 02 de Octubre de 2003.

<sup>15</sup> Ecuador, *Ley Orgánica de la Función Judicial*, Decreto Supremo 891, Registro Oficial 636, 11 de septiembre de 1974.

<sup>16</sup> Ecuador, *Ley No. 20 Reformatoria a la Constitución Política de la República*, Registro Oficial, Suplemento 93, 21 de diciembre de 1992

<sup>17</sup> Santiago Andrade Ubidia, "La constitución política y la administración de justicia", en *La estructura constitucional del estado ecuatoriano* (Quito: Corporación Editora Nacional, 2004), 254.

<sup>18</sup> *Ibid.* 219.

<sup>19</sup> Ecuador, *Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial*, Registro Oficial, Suplemento 490, 13 de julio de 2011.

<sup>20</sup> Art. 109.- INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones: (...) 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.

Los sujetos de la relación jurídica procesal pueden ser activos o pasivos; los primeros, es decir, los sujetos activos de la infracción constituyen: jueces, fiscales o defensores públicos; y los sujetos pasivos, a pesar de no encontrarse definidos en forma explícita en dicha norma, pero de acuerdo con una interpretación contextual de las normas de nuestro ordenamiento jurídico, son: la administración pública o el administrado<sup>21</sup>, esto último dependerá del tipo de legitimado que hubiese, ya que el procedimiento administrativo se puede promover de oficio o a petición de parte interesada.

En lo referente al verbo rector de la infracción se establecen dos verbos: el intervenir y el actuar, sin que se pueda diferenciar cuál de estos describe la actuación u omisión, por lo que esta descripción es deficiente; estos a su vez configuran tres clases de conductas: (1) dolosas, (2) manifiestamente negligentes y (3) por error inexcusable. Para efectos de este trabajo se analizará puntualmente esta última, sin perjuicio de tener que hacer alusión a las dos primeras, a fin poder complementar el análisis en el presente estudio.

Con relación al objeto material, es evidente que estas infracciones pueden materializarse dentro de una actuación jurisdiccional; mientras que el bien jurídico que se pretende proteger es la eficiente y correcta administración de justicia. Por último, en cuanto al elemento normativo, la descripción de error inexcusable –como se analizará– no tiene una calificación normativa, sino valorativa, es decir, que el juez o funcionario al que le corresponda determinar el error judicial debe realizar una interpretación

---

<sup>21</sup> Ecuador, *Código Orgánico de la Función Judicial*, Art. 113: “Ejercicio De La Acción.- La acción disciplinaria se ejercerá de oficio, o por queja o denuncia. Podrán presentar queja: La Presidenta o el Presidente de la República, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional; la Presidenta o el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; la Contralora o el Contralor General del Estado; la Procuradora o el Procurador General del Estado; la Presidenta o el Presidente y los demás vocales del Consejo de la Judicatura; las primeras autoridades de los órganos autónomos; las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia así como las conjuetas y los conjueces de la misma; y las juezas y jueces de las cortes provinciales, tribunales penales y juzgados de primer nivel; el Comandante General y los jefes de unidades de la Policía Nacional; y, la Auditora o el Auditor Interno. Podrá presentar denuncia escrita, cualquier persona natural o jurídica, grupo de personas, pueblo o nacionalidad, que tenga interés directo en un juicio o servicio solicitado. Presentada la denuncia se reconocerá la firma ante el funcionario encargado de tramitarla. (...)”.

Sobre este tema, véase también lo establecido en el artículo 60 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura expedido mediante resolución 029-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura y publicado en el Registro Oficial, Suplemento 455 del 10 de marzo de 2015 que establece como sujetos activos del procedimiento administrativo a los siguientes: (a) La Directora o Director Provincial del Consejo de la Judicatura; y, (b) el Pleno del Consejo de la Judicatura en caso de apelación.

valorativa de lo que es el error inexcusable, puesto que en la norma no se describen sus características o requisitos.

Conforme se ha señalado, si bien el objeto central del presente estudio versa sobre el error inexcusable, la descripción del artículo en análisis señala tres conductas que pueden ser cometidas por parte de los sujetos activos dentro de sus actuaciones jurisdiccionales, siendo estas el dolo, la manifiesta negligencia o el error inexcusable; elementos que, como se había señalado y a criterio del órgano administrativo de la Función Judicial,<sup>22</sup> si bien son autónomas, pueden coexistir unas con otras.<sup>23</sup>

Sin embargo, cabe señalar que el Dr. Gustavo Jalkh Röben,<sup>24</sup> ha sido manifiesto en separar autónomamente estas tres conductas al afirmar que: luego de dejarse de lado el interés sobre el dolo y la negligencia manifiesta, el error judicial *es el acto contrario a disposición expresa que causa gravamen, y es inexcusable porque nadie con mínima formación jurídica para administrar justicia podría justificar el incumplimiento de (la) norma jurídica*.<sup>25</sup>

A más de ello cabe tener en cuenta que, ante la posible coexistencia en el juzgamiento de causales, el numeral 5 del artículo 76 de la Constitución de la República establece que en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se debe aplicar la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción y que en caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. De modo que, debería aplicarse esta norma constitucional cuando aparentemente coexistan estas tres conductas, más aun considerando la diferencia que existe entre un acto doloso, uno culposo y el error inexcusable.

La legislación ecuatoriana no establece<sup>26</sup> ni determina de forma clara y diáfana lo que es o lo que se debe entender por error inexcusable; ni qué tipo de elementos

---

<sup>22</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente No. MOT-702-UCD-012-MAC, 07 de marzo de 2013.

<sup>23</sup> Luis Pásara, “La independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana”, 53.

<sup>24</sup> Quien ejercía funciones como Presidente del Consejo de la Judicatura.

<sup>25</sup> Ecuador, Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh Röben, Presidente del Consejo de la Judicatura, OFICIO-PRC-AS-2014-351, 31 de enero de 2014, accedido el 02 de octubre de 2016, <http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/jueces/Respuesta%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20a%20Human%20Rights%20Watch.pdf>.

<sup>26</sup> Tampoco es recomendable que se dé una conceptualización en la legislación de la figura del error inexcusable, sin embargo, para efectos de delimitar su campo de acción, creo que sería conveniente establecer los elementos configurativos del mismo, como –en el caso del error judicial– ocurre en la legislación colombiana; véase, por ejemplo, en el caso colombiano el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, publicada en el Diario Oficial, No. 42.725 (15 de marzo



conforman dicha figura jurídica, lo que deja un amplio margen de interpretación, valoración y discrecionalidad al momento de su determinación y aplicación.

Por ello, es necesario delimitar jurídicamente los contornos del error inexcusable partiendo de conceptos básicos para posteriormente realizar un acercamiento conceptual que nos sirva como base para el desarrollo de la presente investigación. El hecho de que dentro de la legislación no existe una delimitación clara de éste concepto, lo que ha ocasionado interpretaciones ambiguas, permitiendo de esta forma se divague mucho sobre este tema.

El error -generalmente- es un concepto equivocado,<sup>27</sup> yerro, incorrección o inexactitud sobre un hecho o como un juicio inexacto o falso, una discordancia entre las ideas y la naturaleza de las cosas, es decir, a fin de cuentas es lo contrario a la verdad, mientras que lo inexcusable es lo carente de excusa o justificación, algo imperdonable.<sup>28</sup>

El error implícitamente va ligado al concepto de equivocación o inexactitud sobre un determinado asunto. La ignorancia puede ser la causa o motivo del error y aquello implica ausencia o escasez de conocimientos que puede conducir a un razonamiento equivocado<sup>29</sup>. El error puede ser excusable o inexcusable; la diferencia entre estos radica en la justificación que se pueda dar entre una u otra situación; así lo inexcusable es aquello que carece de justificación o es imperdonable<sup>30</sup>.

Para determinar y realizar una aproximación al concepto del error inexcusable, tomaré como referentes conceptuales comunes varias resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos referentes de la Corte Nacional de Justicia y varios elementos extraídos de la doctrina que trata sobre el error judicial.

de 1996), en que la que se determina los siguientes presupuesto y presunción de dolo o culpa grave del funcionario judicial: (1) la violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable; (2) el pronunciamiento de una decisión cualquier, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los cosas expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación (3) la negativa arbitraria o incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso de la parte que dejó de interponer.

<sup>27</sup> Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, accedido 02 de octubre de 2016, <http://dle.rae.es/?id=G47B9qL>.

<sup>28</sup> Guillermo Cabanellas, *Diccionario de ciencias jurídicas* (Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 2012), 369; véase también la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente Disciplinario *Of-912-ECD-013-AS*, 14 de octubre de 2014 (Judicatura vs Benjamín Pineda Cordero), 6.

<sup>29</sup> Juan Carlos Hitters, *Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación* (Buenos Aires, Librería Editora Platense S.R.L., 1984), 216

<sup>30</sup> Cabanellas, *Diccionario de ciencias jurídicas*, 483

El Pleno del Consejo de la Judicatura, en varios expedientes disciplinarios ha conceptualizado –en mayor o menor grado- el error inexcusable, bajo los siguientes razonamientos que cito:

Según lo descrito en el Diccionario Jurídico de Cabanellas se entiende como “Error” la “Equivocación, yerro, desacierto. Concepto equivocado. Juicio inexacto o falso. Oposición, disconformidad o discordancia entre nuestras ideas y la naturaleza de las cosas. Lo contrario de la verdad (...) Acción inconveniente, perjudicial o desacertada (...)” y define “Inexcusable” como “Carente de excusa o justificación” Imperdonable. De cumplimiento absolutamente obligatorio”, señalándose que la figura del error inexcusable es el “yerro o desacierto o concepto equivocado que carece de excusa o justificación y que resultaría imperdonable.”<sup>31</sup>

Es preciso indicar que cuando hablamos de “error inexcusable”, nos estamos refiriendo a la notoria ineptitud o descuido, al momento de administrar justicia<sup>32</sup> por parte del servidor judicial<sup>33</sup> (...) es aquel no susceptible de interpretaciones jurídicas aceptables,

---

<sup>31</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. *D-0879-UCD-2013-PM*. Quito, 20 de diciembre de 2013, a las 11h01.

<sup>32</sup> Nótese, por ejemplo, que en esta conceptualización el error inexcusable se concentra única y exclusivamente en la facultad de administrar justicia; permitiendo con ello que el sujeto de la relación jurídico procesal sea reservado exclusivamente al juez, quien tiene dicha potestad.

<sup>33</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. *MOT-142-UCD-012-PM*. Quito, 14 de marzo de 2012, a las 17h36. Accedido 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0142P.pdf>. En este caso trata de una acción de protección propuesta en contra de una resolución administrativa tomada el 30 de abril de 2001 en la que se resolvió separar a un miembro de la Policía Nacional por abandonar su trabajo por más del tiempo que establecía el Reglamento vigente a la época; resolución que fue revocada por haber sido declarada dicha acción constitucional con lugar tanto en primera como en segunda instancia. La *ratio* del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición de fundamentó en que dicha resolución debió –en la época en la que se dictó- ser impugnado por el medio adecuado vigente a dicho tiempo, es decir, mediante una acción contencioso administrativa y no haberse interpuesto la acción constitucional de protección, esto de acuerdo a lo que establece el numeral 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El caso resulta curioso, pues se da inicio al proceso bajo la acusación de haber cometido la infracción disciplinaria establecida en el numeral 8 del artículo 108 del COFJ, esto es, por no haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República y se concluye sancionado por otra infracción, esto es, por error inexcusable.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. *MOT-620-UCD-011-PM*. Portoviejo 27 de marzo de 2012, a las 16h11, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0620P.pdf>.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. *MOT-046-UCD-012-MEP*. Quito, 21 de marzo de 2012, las 13h20, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0046P.pdf>.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. *MOT-146-UCD-012-PM*. Quito, 14 de marzo de 2012, las 17h38, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0146P.pdf>.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. *MOT-179-UCD-012-MEP*. Quito, 21 de marzo de 2012, las 18h05, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0179P.pdf>.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. *MOT-316-UCD-011-PM* (DPRL—014-10-AR). Quito, 26 de agosto de 2011, las 13h55, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0316P.pdf>.

como podría ser el del operador de justicia que se separe de toda interpretación admisible, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la argumentación jurídica (...).<sup>34</sup>

Por otra parte, el error judicial, en sentido estricto se produce exclusivamente cuando éste se comete en un acto formal de la administración de justicia. Este error puede ser de *iure* o de *facto*. El de *iure* se produce cuando el operador de justicia de manera arbitraria se aparta de las reglas que para el efecto se establecen en los ordenamientos jurídicos, o bien, cuando dicta su resolución contraviniendo, de cualquier forma, una o varias normas vigentes (...) cuando no aplicaron (sic) normas jurídicas y precedentes jurisprudenciales obligatorios<sup>35</sup>. El error de *facto* se produce cuando el juzgador cambia equivocadamente los hechos materia de la Litis, o altera cualquier otro hecho relacionado con las actuaciones del juicio.<sup>36</sup>

Por interpretaciones sistemáticas y teleológicas del ordenamiento jurídico realizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, también se han establecido como parámetros para el juzgamiento del error inexcusable la violación del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva<sup>37</sup>. Se ha señalado que:

*“(...) cuando los servidores de la función judicial que sustanciaron causas violando el derecho al debido proceso, caen en manifiesto error inexcusable; y por lo tanto pueden ser sancionados por la infracción gravísima, señalada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial<sup>38</sup>;*

*(...) La actividad de las servidoras y servidores judiciales, particularmente de las juezas y jueces, se encuentra regida por normas, tanto permisivas como imperativas, orientadas a garantizar una recta, transparente y eficiente administración de justicia. En este sentido, el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 129 impone como deberes de todas las juezas y jueces, entre otros, los siguientes: (...) 1. Aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internacionales de derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a*

<sup>34</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM. Quito, 20 de diciembre de 2013, a las 11h01.

<sup>35</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-193-UCD-010-CS (OF-05-2010). Quito, 18 de agosto de 2011, a las 13h08, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2010-0193P.pdf>. Los elementos fácticos del caso se concretaban a la admisión y sentencia emitida dentro de un juicio ordinario por nulidad de dos sentencias emitidas dentro de procesos ejecutivos; hecho que fue revisado por la Sala de la Corte Provincial del Carchi y declarado la nulidad del proceso por la incorrección del trámite y la declaratoria judicial de error inexcusable.

<sup>36</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-515-UCD-011-MAC (001-DPN-CJ011). Quito, 25 de enero de 2012, las 18h20, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0515P.pdf>. En este caso se trató de una acción de protección, sobre cuya resolución negativa fue propuesto un recurso de apelación, el cual fue negado por el juez aduciendo haber sido presentado de forma extemporánea, cuando este fue presentado a tiempo y así como por haber negado el recurso de hecho sobre la negativa de concesión del recurso de apelación.

<sup>37</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-642-UCD-011-PM (DPRL—013-2011-JJ). Quito, 27 de octubre de 2011, las 18h20, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0642P.pdf>.

<sup>38</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. A-556-UCD-011-PM (DG-570-2010-M). Guayaquil, 9 de febrero de 2012, a las 14h25, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0556A.pdf>.

ella; 2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente; 5.1.2- Adicional a los deberes de las juezas y jueces (...) tenemos la Tutela Judicial Efectiva que constituye un “derecho de las personas que el Estado protege, y no un derecho del Estado que la persona protege”<sup>39</sup>, el cual se encuentra consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República (...) 5.1.3- El derecho a la tutela judicial efectiva está constituido por a) el acceso a la administración de justicia; b) la respuesta motivada y justa de ella a través de una resolución oportuna; y, c) la ejecución de ésta en forma integral e inmediata<sup>40</sup>. El Dr. Miguel Hernández Terán al momento de referirse a la Tutela Judicial Efectiva nos dice:

*Si bien la tutela judicial comprende la respuesta sobre la pretensión, no debe pensarse que esa respuesta necesariamente debe ser favorable al derecho o interés legítimo ejercido. El rechazo motivado y justo de lo que se pretendió es también expresión de tutela judicial efectiva. Y habrá violación a dicha tutela: si el juez no decide sobre todo lo que pidió, si no amplía la resolución incompleta, si no aclara la resolución oscura, cuando ante la acción infundada sucumbe dándole la razón. La tutela judicial efectiva exige certeza en la decisión de fondo, por eso el error judicial quiebra esa tutela, y por eso la ignorancia de la Ley es un factor de afectación de la tutela judicial efectiva.*<sup>41</sup>

Algunos de estos criterios, se encuentran contenidos en varias resoluciones, publicitadas en la página web del Consejo de la Judicatura,<sup>42</sup> que en su mayor parte refieren a expedientes tramitados durante el periodo de Transición del Consejo de la Judicatura, sin que se pueda acceder a los actuales procesos tramitados por el Consejo de la Judicatura, pues a pesar de haber requerido información sobre los procedimientos sustanciados por error inexcusable, estos requerimientos fueron negados de acuerdo a la documentación adjunta<sup>43</sup> y que consta en anexos; empero, las resoluciones, al menos de la etapa de transición, que se mantienen en el portal web antes indicado, establecen algunos parámetros que se aplicaron para la sanción del error inexcusable, siendo los siguientes:

- Por actos u omisiones en la tramitación de una causa que fueren capaces de provocar la declaratoria de nulidad de un proceso judicial, lo que constituye una vulneración del derecho al debido proceso, en los términos establecidos en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, por inaplicación de normas

<sup>39</sup> Miguel Hernández Terán, *La tutela judicial efectiva como instrumento esencial de la democracia* (Guayaquil: Offset Graba, 2005), 21.

<sup>40</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. MOT-763-UCD-011-NA (OF-DG-361-2011-M). Quito, 20 de diciembre de 2011, las 18h55, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0763P.pdf>.

<sup>41</sup> Hernández Terán, “La tutela judicial efectiva como instrumento esencial de la democracia” 30.

<sup>42</sup> Ecuador Consejo de la Judicatura, accedido el 10 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/>.

<sup>43</sup> Adjunto en anexo a la presente investigación el oficio CJ-SG-C-2015-466, suscrito en Quito el 30 de abril del 2015 por el Dr. Andrés Segovia Salcedo, quien en referencia a mi oficio No. 0037-CCSC.SC-2015 del 24 de abril de 2015, me comunica la negativa de concesión de los expedientes por error inexcusable que se han seguido en el Consejo de la Judicatura.

que, en razón de su competencia y jerarquía normativa, se presentan como obligatorias.

- Arrogación de funciones que no le son propias a su cargo y a su materia.
- Proceder a la ejecución de un acto judicial que no se encuentra ejecutoriado.<sup>44</sup>
- Las acciones de protección proceden únicamente cuando no existe, en el ordenamiento jurídico, una vía procesal efectiva, ante la justicia ordinaria. Al haber dado un trámite distinto al propio del visto bueno, el juez sumariado vulnera derechos fundamentales relativos al debido proceso.
- El servidor judicial que tramitare una acción de protección y resolviera favorablemente, cuando el tema de fondo corresponda a asuntos de mera legalidad.<sup>45</sup>
- Decisiones adoptadas en contra de norma jurídica expresa, legítima, pertinente o en base de interpretaciones irrazonables.<sup>46</sup>
- Inobservancia de norma adjetiva expresa, cuando existe una norma procesal que le obliga a realizar actos procesales y ésta no es acatada.
- Detención arbitraria, cuando el juez o jueza que, a sabiendas que se habría producido la caducidad de la medida cautelar de prisión preventiva, no lo hiciera y mantuviere al imputado inconstitucionalmente privado de su libertad.
- La autoridad que se pronunciare, más de una vez sobre el asunto de fondo de la causa.
- Toda jueza o juez que se pronunciare o tramitare una causa, cuyo ámbito de competencia corresponda a otra autoridad jurisdiccional.

---

<sup>44</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. *A-557-UCD-11-MAC (DPM-114-2010)*. Quito, 18 de octubre de 2011, 9h45, accedido el 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0557A.pdf>. El caso versa sobre la ejecución de un pago, cuando la providencia que disponía aquello, aún no se encontraba ejecutoriada.

<sup>45</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. *A-320-UCD-011-PM (OF-DG-105-2011-S)*, accedido 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0320A.pdf>. El caso trata sobre una acción de protección respecto de varios contratos suscritos con el Ministerio de Vivienda que se declararon unilateralmente terminados por dicho ente; el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición en su ratio observa que los sumariados no observaron que no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado y que se permitió por los sumariados se resuelva un asunto de mera legalidad en materia constitucional.

<sup>46</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. *MOT 086-UCD-012-MEP*. Portoviejo, 27 de marzo de 2012, las 16h08 accedido 09 de octubre de 2016, <http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0086P.pdf>. El caso consiste en la declaratoria de abandono de un juicio relativo a menores de edad, lo cual, de acuerdo al artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, vigente a la época, se encontraba expresamente prohibido.

- Garantías jurisdiccionales: la autoridad jurisdiccional que admitiese a trámite una acción constitucional, presentada por asuntos de mera legalidad, cuya tutela efectiva corresponda a la justicia ordinaria.
- Garantías jurisdiccionales: incurre en error inexcusable la jueza o juez que, en virtud de una acción de protección ordene la reparación integral de derechos que aún no han sido adquiridos por el accionante, por tratarse de meras expectativas.
- Inaplicación de normas esenciales para la solución del caso: la inaplicación arbitraria de normas que, en razón de su pertinencia y jerarquía normativa, se presentan como esenciales para la solución de la causa.
- Medidas cautelares: la jueza o juez que dentro de una acción constitucional de medidas cautelares se pronunciare sobre el fondo del asunto; la o el juez que dicte medidas cautelares, determinará su tiempo de vigencia y los órganos o personas obligadas a cumplir disposiciones judiciales, so pena de incurrir en un error inexcusable, por cuanto por su propia naturaleza, las medidas cautelares no pueden tener el carácter de permanentes.

En virtud de tales consideraciones, se puede sostener que el Consejo de la Judicatura ha dado acogida a la interpretación de Jaime Marroquín Zaleta<sup>47</sup>, quien -al hablar sobre el error inexcusable- señala que éste implica aludir a una notoria ineptitud o descuido al momento de administrar justicia por parte del servidor judicial<sup>48</sup>.

Sin embargo, como lo sostiene el citado autor<sup>49</sup>, para tener fundamento en la característica de notoria ineptitud tiene que valorarse y tomar en cuenta diferentes particularidades que giran en torno al funcionario sujeto al procedimiento como los antecedentes personales, profesionales y laborales del mismo, su nivel de preparación, honorabilidad, experiencia, antigüedad, carga procesal, entre otros factores, sean internos o externos, que pudiesen llegar a afectar la actividad del funcionario.

Las circunstancias anteriormente señaladas también son recogidas por el Código Orgánico de la Función Judicial, que en su artículo 110, establece las circunstancias constitutivas que se deben calificar en una infracción disciplinaria susceptible de

---

<sup>47</sup> Jaime Marroquín Zaleta, *El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa*, (México D.F.: Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera edición, 2001), accedido el 09 de octubre de 2016, pág.10, <http://www.corteidh.or.cr/tablas/20518.pdf>.

<sup>48</sup> Ecuador, Consejo de la Judicatura. Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario MOT-642-UCD-011-PM (DPLR-013-2011-JJ), Quito, 27 de octubre de 2011, las 18h20.

<sup>49</sup> Marroquín Zaleta, “El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa” 10.

suspensión o destitución (que se entiende son comunes para los comportamientos dolosos o culposos que se sancionan conjuntamente con el error inexcusable), siendo estas: la naturaleza de la falta, el grado de participación, la reiteración o no de la falta, tratarse de acumulación o no de faltas, los resultados dañosos que hubiesen ocasionado, y otros elementos atenuantes o agravantes.

Por otra parte, también se ha señalado que el error inexcusable es aquel que no es susceptible de interpretaciones jurídicas aceptables, de acuerdo a las reglas de la lógica y de la argumentación jurídica.<sup>50</sup>

El Pleno del Consejo de la Judicatura –acogiendo varios criterios sobre el error judicial- ha señalado que por su naturaleza este es atribuible al juzgador más que a cualquier otro servidor judicial y que éste, en sentido estricto, se produce cuando se lo comete en un acto formal de administración de justicia, por lo que es necesario que una norma legítima que contenga una obligación clara, inequívoca y prescriptiva, sea abiertamente contrariada, sin motivar dicho desacato.<sup>51</sup>

En este sentido, las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa del órgano judicial, por una parte, parecerían prescindir de los otros sujetos de la infracción, como son los fiscales y defensores públicos, para aplicarla únicamente con relación a la actividad jurisdiccional del juez. Esto es entendible, pues finalmente el juzgador cumple la función de director del proceso a través del cual controla preponderantemente la actividad de los otros sujetos de la infracción, esto es, tanto del defensor público como del fiscal, empero aquello no implica una exclusión de dichos funcionarios del cumplimiento de sus obligaciones.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en el caso *Apitz Barbera y otros vs. Venezuela*, respecto del error inexcusable, en su párrafo 34 señaló –en referencia a la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela<sup>52</sup>- que, el error inexcusable es aquel que no puede justificarse

---

<sup>50</sup> Ecuador, Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. *D-0879-UCD-2013-PM*, Quito, 20 de diciembre de 2013.

<sup>51</sup> Ecuador, Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. *MOT-086-UCD-012-MEP*. Quito, 27 de marzo de 2012.

<sup>52</sup> Téngase en consideración que el concepto que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el utilizado, usualmente, como *obiter* en las decisiones que sobre el tema ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; es decir, no responde a un criterio generado por parte de la Corte IDH, sino que se toma como parte de los *obiters* generados en la legislación interna en estudio.

por criterios jurídicos razonables y el error es injustificable cuando la magnitud de la gravedad es considerable, como por ejemplo: cuando se embarga una plaza pública.<sup>53</sup>

Ahora bien, dentro de la doctrina y varios estudios y ensayos también encontramos varios conceptos sobre lo que es el error judicial.

El error judicial, doctrinariamente, es concebido como una equivocación cometida culposamente<sup>54</sup>, como una decisión injusta, no maliciosa debido a un insuficiente conocimiento de los hechos o de las normas aplicables, con independencia que el mismo hubiera, técnicamente, de atribuirse a ignorancia excusable, simple imprudencia o caso fortuito<sup>55</sup>, que puede ser provocada por un conocimiento equivocado.<sup>56</sup>

Para Jaime Marroquín Zaleta, el error judicial en su naturaleza resulta ser la oposición o disconformidad entre las ideas propias de una persona con la realidad, siendo a final de cuentas un acto no intencional;<sup>57</sup> mientras que para Valeriano Hernández es la equivocación crasa y palmaria que adquiere firmeza, que no ha sido provocada por el perjudicado y ha causado daños efectivos, evaluables económicamente e individualizados.<sup>58</sup>

Por su parte, Jorge Malem Seña ha señalado que para que exista un error judicial debe haber, según el sistema jurídico de referencia, una o más respuestas correctas respecto de un caso, por ende, la decisión judicial calificada como errónea no ha de poder subsumirse en ninguna de esas posibles respuestas correctas, lo que implica la existencia de la violación de los límites que establece el sistema jurídico mediante un

---

<sup>53</sup> Corte IDH, “Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)”, *Caso Apitz y otros vs. Venezuela*, 5 de agosto de 2008, párr. 34, [http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_182\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf).

<sup>54</sup> Marroquín Zaleta, “*El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa*”, pág. 7, sostiene que el error judicial “*es una equivocación crasa, cometida culposamente por un juez, magistrado o grupo de magistrados, que causa daño significativo*”

<sup>55</sup> Bueno Arus, *La responsabilidad estatal por errores judiciales en Estudios penales y penitenciarios* (Madrid: Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, 1981), 95; quien señala al error judicial como “*la actuación o decisión judicialmente injusta, no maliciosa, debida a un insuficiente conocimiento de los hechos o de las normas aplicables, con independencia que el mismo hubiera, técnicamente, de atribuirse a ignorancia excusable, simple imprudencia o caso fortuito*”.

<sup>56</sup> Vicente Guzmán Fluja, *El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia*, (Valencia, Tirant Lo Blanch, 1994), 152.

<sup>57</sup> Marroquín Zaleta, “*El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa*”, 13.

<sup>58</sup> Valeriano Hernández Martín, *El error judicial, procedimiento para su declaración e indemnización* (Madrid: Civitas, 1994), 81; véase también: Guzmán Fluja, “*El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia*”, 56.



acto arbitrario.<sup>59</sup> Empero, como lo señala Javier Ezquiaga, previo a calificar la existencia del error judicial, primero se debe analizar el caso, partiendo de una distinción entre casos fáciles y difíciles.<sup>60</sup>

Concuerda este último autor con Valeriano Hernández Martín en que, de acuerdo con la jurisprudencia española, el error judicial para que dé lugar a una indemnización debe satisfacer las siguientes condiciones:

a) Debe surgir de una decisión jurisdiccional, en cualquiera de sus formas. No puede circunscribirse, pues, únicamente a las sentencias; b) Los sujetos activos deben ser, en consecuencia, jueces y magistrados, sean titulares o suplentes, o personas que ejerzan sus funciones en virtud de las distintas relaciones de servicio con la Administración de Justicia; c) Los errores han de ser crasos, patentes y manifiestos. Así ocurre respecto de los enunciados fácticos de las decisiones judiciales. Estos errores deben mostrarse como indubitables frente a un simple examen empírico de las actuaciones judiciales. En el caso de los errores de materia de derecho, la decisión judicial ha de conducir a un resultado absurdo e ilógico. Esto supone que las decisiones judiciales simplemente desacertadas no pueden ser consideradas como casos de error judicial indemnizable. Ni la mera revocación o anulación de una resolución judicial implica por sí sola el derecho a indemnización; d) La responsabilidad indemnizatoria a la que da lugar el error judicial es puramente objetiva, no es necesario pues que el juez o magistrado haya actuado con dolo o culpa; e) Sí se requiere, en cambio, que la parte supuestamente afectada por un error judicial no se haya comportado de manera dolosa o culposa. Ya tampoco daría lugar a una indemnización un caso de error judicial debido a fuerza mayor; f) Para que haya derecho a indemnización por causa de error judicial es necesario la acreditación de un daño efectivo, individualizable y económicamente evaluable. Y ha de ser una relación de causalidad entre el error judicial y el daño ocasionado; y, g) Finalmente, en España se exige que la declaración de error judicial la realice mediante sentencie el Tribunal Supremo y que se hubieran agotado previamente todos los recursos existentes para el supuesto damnificado.<sup>61</sup>

Ahora bien, cabe determinar si el error inexcusable es o no un acto intencional, pues para algunos autores como Jaime Marroquín Zaleta, constantemente citado en las resoluciones del pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, este es un acto no intencional, conforme se lo describe en líneas anteriores. Pues bien, en efecto, el error inexcusable necesariamente se concibe como un acto no intencional pues este es atribuible, en esencia, a la falta de conocimientos del funcionario judicial, e incluso a factores externos que lo pueden llevar a cometer dicho error inexcusable; empero,

<sup>59</sup> Jorge Malem Seña, Javier Ezquiaga Ganuzas y Perfecto Andrés Ibañez, *El error judicial. La formación de los jueces* (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009), 12-13.

<sup>60</sup> Javier Ezquiaga Ganuzas, “Aciertos y fallos judiciales”, en *El error judicial. La formación de los jueces* (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009), 61-62.

<sup>61</sup> Jorge Malem Seña, Javier Ezquiaga Ganuzas y Perfecto Andrés Ibañez, *El error judicial. La formación de los jueces* (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009), 14-15.

aquello no excluye la posibilidad que el operador de justicia pueda hacerlo intencionalmente, para aquello cabe la posibilidad, de igual forma, de la sanción administrativo que implica la destitución del funcionario judicial, no obstante de la responsabilidad penal que aquello genere.

En este punto, previo a concluir sobre la naturaleza de la figura en estudio, cabe advertir un punto de inflexión y preguntarse si existe alguna diferencia entre el error judicial con el error inexcusable, puesto que en muchas de las resoluciones adoptadas por el órgano administrativo de la Función Judicial y como hemos visto también en la doctrina, se ha hecho referencia a la noción del error judicial.

Tanto el error judicial como el error inexcusable comparten un mismo principio en el que se sustentan, este es el principio responsabilidad. Vanesa Aguirre Guzmán señala que, ciertamente es difícil definir lo que debería entenderse por error inexcusable, siendo tal que algunos autores lo han calificado como una noción del error judicial de la cual se deriva.<sup>62</sup>

En efecto, si nos acogemos a toda la argumentación que ha sido vertida para el efecto en los sumarios administrativos sustanciados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, ella parte de elementos y nociones que hacen referencia al error judicial y no única o exclusivamente al error inexcusable como causa de responsabilidad administrativa.

En la Constitución de la República se establece, como un título de imputación<sup>63</sup> y de responsabilidad objetiva del Estado al error judicial, mismo que por su naturaleza, no implica generalmente ser inexcusable, sino que, por su propia naturaleza y conforme se ha indicado *ut supra* es concebido como una equivocación culposa, atribuible a ignorancia excusable, un acto no intencional; es decir, un comportamiento negligente o culposo. Empero, verificado objetivamente dicho error, el Estado está obligado a reparar a los ciudadanos afectados por errores judiciales, siendo la responsabilidad objetiva, es decir, sin miramientos a actos cometidos de forma dolosa o culposa.

Según lo señala Vicente Guzmán Fluja, el error judicial es un título de imputación específico y privativo de la responsabilidad estatal derivada de la actividad

---

<sup>62</sup> Vanesa Aguirre Guzmán, *La administración de justicia en Ecuador*, 2012, pág. 19, accedido el 01 de marzo de 2016, <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4108/1/Aguirre,%20V.-La%20administracion.pdf>.

<sup>63</sup> Vicente Guzmán Fluja, *El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia* (Valencia: Tirant lo Blanch, 1994), 133.

de administrar justicia, por cuanto esta actividad implica un desarrollo específico de la Función Judicial, realizado a través de la actividad monopólica del Estado de administrar justicia que recae en dicha función.<sup>64</sup>

De modo que, podría sostenerse que entre estos dos conceptos existe una relación género-especie, siendo el error judicial el género y el error inexcusable la especie. En consecuencia, el error inexcusable contiene determinadas particularidades que le dan una connotación diferente sin excluirlo de la noción lata del error judicial. Es decir, existen varias características entre ambas figuras que son asimilables e igualitarias, compartiendo ciertas características comunes, tales como ser una modalidad de funcionamiento anormal de la administración de justicia,<sup>65</sup> y en consecuencia, se configuran generalmente como una equivocación frente a una determinada realidad; sin embargo, la diferencia entre estas dos radica en el tipo de responsabilidad<sup>66</sup> y en la conducta que se establece en nuestra legislación para cada caso. Para que exista responsabilidad es preciso que la acción u omisión sea antijurídica, aunque ésta consista en el principio general de no causar daño a otro en las relaciones entre particulares.<sup>67</sup>

Por lo que, mientras el error judicial se produce con independencia de una conducta negligente o dolosa y que depende únicamente de la circunstancia de haberse inferido un daño que se reputa antijurídico; el error inexcusable, a pesar de la defectuosa redacción del artículo que contiene su descripción, necesariamente se llega a producir por una conducta negligente o culposa e incluso dolosa por parte del infractor. Empero aquello conllevaría que, independientemente de si se comete error judicial o error inexcusable, de todas maneras el Estado sea responsable objetivamente por dichos actos considerados como tales.

Analizada la norma que contiene la descripción de la causal de responsabilidad por error inexcusable, puede concluirse que se trata de un concepto jurídico indeterminado; la descripción de esta figura se encuentra defectuosamente elaborada y si se realiza una interpretación literal y semántica de dicha norma, nos conduce a un absurdo, pues esta redacción no distingue como elementos integradores de la infracción

---

<sup>64</sup> *Ibíd.*, 35.

<sup>65</sup> *Ibíd.*, 134

<sup>66</sup> Hans Kelsen, *Teoría General del Derecho y del Estado* (México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, trad. Eduardo García Máynez, 1988), 76.

<sup>67</sup> Jaime Santos Briz, *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, título XXIV, artículos 1887 a 1929 del Código civil* (Madrid: Ed. de Derecho Reunidas, Dir. Manuel Albaladejo, 1984), 105.

a la culpa y/o al dolo, sino que por el contrario aparentemente los aparta y los trata como si se tratasen de actuaciones autónomas.

La oración que describe la infracción contempla tres conductas diferentes en un mismo tipo, esto es, el ser cometidas “con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”; esta descripción lejos de encontrarse formada por una expresión copulativa, vinculada a través de la conjunción “y” que demostraría unión entre conductas, contiene una expresión disyuntiva “o” que implica una opción o alternativa diferente, separando de esa forma al dolo y a la manifiesta negligencia del error inexcusable, configurándose entonces esta última figura como independiente de las otras dos conductas.

Si bien el principio de tipicidad no impide que puedan utilizarse conceptos indeterminados o cláusulas valorativas, como lo señala Orlando Álvarez Arias, esto no debe devenir en un amplio margen de interpretación discrecional.<sup>68</sup>

El principio de legalidad es un elemento inherente al Estado de Derechos y de Justicia que implica el sometimiento de los órganos de los poderes públicos a la constitución y la ley, pues, lo que se busca es erradicar la arbitrariedad mediante el establecimiento de parámetros de control de las actividades; uno de los elementos del principio de legalidad lo forma la noción de ley formal o *lex stricta* que tiene dos justificaciones, la primera que implica que la legitimidad del poder procede de la voluntad comunitaria, cuya expresión típica es la ley, y la segunda que implica que toda actuación singular del poder debe estar amparada en una ley previa. Todo ello se traduce en la sumisión de todas las entidades del Estado a reglas jurídicas o normas preestablecidas.<sup>69</sup>

Esta sumisión tiene un enfoque positivo y otro negativo. El enfoque negativo implica que la administración no puede actuar sino conforme a las facultades que le confiere la ley, mientras que el enfoque positivo implica que no puede existir ningún poder jurídico que no sea el desarrollo de una atribución normativa previa, que se funde a partir de la norma fundamental.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Orlando Álvarez Arias, *Responsabilidad disciplinaria de los jueces* (Caracas: Asociación Cooperativa Jurídicos ORFRE, R.L., 2014), 80.

<sup>69</sup> Orlando Álvarez Arias, *Responsabilidad disciplinaria de los jueces* (Caracas: Asociación Cooperativa Jurídicos ORFRE, R.L., 2014), 64-65.

<sup>70</sup> *Ibíd.*, 80.

Existen, por ende, dos elementos que deben ser analizados a la luz del principio de legalidad, el primero: la ley previa o *lex previa* con la que se pretende lograr una seguridad jurídica que permita al ciudadano conocer a qué atenerse frente a una determinada conducta; y, el segundo: la *lex certa* que exige al ordenamiento jurídico preexistente un mayor grado de precisión.<sup>71</sup>

Ahora bien, para efectos del presente estudio, dada la defectuosa definición contenida en nuestra legislación, se comprenderá como error inexcusable aquel configurado inicialmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial (de España)<sup>72</sup> y desarrollado en las resoluciones del Tribunal Supremo Español<sup>73</sup>, por lo que, se entenderá que el error judicial se ha efectuado cuando, aunque sin intención, se hubiese dictado una providencia manifiestamente contraria a la ley o si se hubiera faltado a algún trámite o solemnidad, mandado a ser observado por la misma bajo pena de nulidad.<sup>74</sup>

De ahí que, el Tribunal Supremo Español, respecto del error inexcusable, haya llegado a determinar lo siguiente:

1. La negligencia o ignorancia debe derivarse de una actuación claramente dolosa o culposa del Juez o Magistrado, lo que se dará cuando se haya procedido con infracción manifiesta de una ley sustantiva o procesal, o faltando a algún trámite o solemnidad mandado observar bajo pena de nulidad (STS de 23 septiembre 1994/53).
2. La negligencia o ignorancia ha de ser manifiesta para que sea cohonestarle con la «voluntad negligente o la ignorancia inexcusable», pues de otra suerte solamente podría conceptuarse como simple «error judicial» (STS de 20 enero 1972, 23 diciembre 1988, 23 septiembre 1994 y 9 febrero 1999).
3. Debe haberse producido una infracción de una norma de las denominadas “rígidas” (imperativas) o “no flexibles”. Así pues, para considerar que se ha infringido un precepto ha de establecerse en él en una concreta y determinada forma de actuar -rigidez-, pero cuando su fijación ha de acomodarse a las circunstancias subjetivas y objetivas del procedimiento, ponderadas por el Juez o Magistrado -flexibilidad- el fallo podría constituir, si acaso y todo lo más, un error judicial pero nunca una negligencia o

---

<sup>71</sup> *Ibíd.*, 67-68.

<sup>72</sup> España, Ley 6/1985, Ley Orgánica del Poder Judicial, Jefatura del Estado, No. 157, del 2 de julio de 1985. En su artículo 417 numeral 14 establece que son faltas muy graves, la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.

<sup>73</sup> Entiende por error inexcusable como un desequilibrio patente o indudable con la normativa legal, consistente en aplicar un precepto legal inequívocamente inadecuado o interpretado de forma absolutamente inidónea, como cuando se ha tenido en cuenta normas inexistentes, caducadas o con su integración palmaria y bien expresiva en su sentido contrario o con oposición frontal a la legalidad, llegando a conclusiones y decisiones ilógicas, absurdas y arbitrarias de lo que la recta justicia debe procurar; esto puede verse en las sentencias emitidas por dicho Tribunal Supremo del 5 de diciembre de 2007, 22 de abril de 1996 y 22 de mayo de 1996, 15 de octubre de 1993, y 25 de junio de 2003.

<sup>74</sup> Francisco Oliva Blásquez, *La responsabilidad civil de los jueces y magistrados por ignorancia inexcusable*, (Barcelona: Revista para el análisis de Derecho, 2010), pág. 10, accedido 04 de diciembre de 2016, [http://www.indret.com/pdf/763\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/763_es.pdf).

ignorancia inexcusables aparejadoras de actuación culposa o dolosa de quien interpretó la norma (STS de 23 diciembre 1988).

4. A la hora de determinar la existencia del comportamiento culposos deben tenerse en cuenta ex artículo 1104 CC las diversas circunstancias y condiciones en que se desempeña la función judicial en relación con el sistema jerárquico de recursos, la labor unificadora de la jurisprudencia, el margen de error o desacierto inevitable en una actividad de esta naturaleza (que exige desechar como fundamento de la responsabilidad la divergencia entre la sentencia a la que se impute el daño –aun cuando sea desacertada– y el criterio extraído de las opiniones del demandante o de otras resoluciones judiciales o antecedentes doctrinales de otra naturaleza: STS de 13 septiembre 2000), los remedios reconocidos por el ordenamiento jurídico para enmendar estos desaciertos, la preparación y situación profesional del juez o magistrado y la carga de trabajo a que se encuentra sometido (STS de 20 diciembre 2006).

5. La existencia de un perjuicio económico efectivo, evaluable y susceptible de ser individualizado (STS de 20 diciembre 2006).

6. El daño o perjuicio económico no debe poder ser reparado de otra forma, lo que implica que las reclamaciones formuladas no pueden prosperar sin el agotamiento de los remedios hábiles para revisar la resolución a la que se imputa el perjuicio (STS de 7 febrero 2006 y 20 diciembre 2006).

7. Finalmente, debe probarse la existencia de una relación de causalidad directa e inmediata entre la acción u omisión, productoras del daño o perjuicio y el resultado.<sup>75</sup>

Sin embargo y en conclusión, por todo lo anotado, a pesar de ser evidente la deficiente descripción de la norma que prescribe al error inexcusable en Ecuador, esta figura, comprendida adecuadamente, se configura o se constituye como un desacierto o equivoco injustificable, irrazonable e ilógico de un mandato normativo que tiene una sola interpretación o hecho claro e inconfundible que no es susceptible de subsumirse mediante interpretaciones racionales; por lo tanto, para que exista error inexcusable se deben verificar los siguientes requisitos:

- Debe ser un error craso, extraordinario y patente, que sea totalmente absurdo, ilógico e incompatible con todo raciocinio derivado de un sentimiento de rectitud.
- Debe haberse vulnerado un mandato o hecho claro, expreso e inconfundible, por ende, si es un caso que puede tener una o más respuestas correctas, la decisión no podría subsumirse en cualquiera de esas decisiones o interpretaciones correctas.
- La decisión que contenga el error inexcusable debe encontrarse en firme y ejecutoriada, es decir que no pueda ser modificada o alterada.
- Debe haber provocado daños.
- No debe existir otro mecanismo de reparación o de revisión<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> *Ibíd.*, 15-16.

- Deben considerarse las circunstancias externas e internas que provocaron la actuación, como por ejemplo, la carga procesal, la reincidencia, la experiencia, el sujeto que provoca la actuación<sup>77</sup>, la aptitud de un juez normal de acuerdo con las características propias de la cultura jurídica<sup>78</sup>, los principios y conocimientos básicos del derecho<sup>79</sup>, si se trata de un caso de difícil o fácil solución, entre otros.

El objeto de la sanción por error inexcusable forma parte de la estructura orgánica de la depuración en la administración de justicia de los malos funcionarios que la conforman; y esto es entendible, tal como está estructurado el sistema de la carrera judicial, a diferencia de otros sistemas, por la designación al cargo de un juez, fiscal o defensor público que está sujeto a un procedimiento concursal de méritos y oposición,<sup>80</sup> en el cual, de acuerdo al grado de conocimientos, experiencia y otros factores, el participante pasa, luego de varios filtros, a formar parte de la escuela de la Función Judicial, para posteriormente y en caso de ser meritorio, ser designado como juez, defensor público o fiscal.

En consecuencia, debería señalarse que la naturaleza jurídica del error inexcusable es el error judicial, pero que se distingue de aquel –y en tal medida gana autonomía- por constituir un elemento depurador de los funcionarios deficientes que forman parte de la Función Judicial, debiendo recalcar que esta infracción afecta únicamente a los jueces, fiscales y defensores públicos.

---

<sup>76</sup> Si bien para determinar la existencia de error inexcusable, como causal grave -que implica la destitución- deben determinarse varios requisitos, frente a las constantes equivocaciones que pueden cometer los funcionarios judiciales y el administrador de justicia en el ejercicio de sus funciones, existe la posibilidad que dichos errores excusables y las falencias cometidas, sean remitidas a la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura con el propósito de remediar mediante la constante formación, capacitación e instrucción e incluso dicha información debería servir como referente del personal para futuros procesos de selección de personal o como forma de afectación del desempeño del funcionario.

<sup>77</sup> Jorge Malem Seña, Javier Ezquiaga Ganuzas, Perfecto Andrés Ibañez, *El error judicial. La formación de los jueces* (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009), 39.

<sup>78</sup> Álvarez Arias, “Responsabilidad disciplinaria de los jueces” 95.

<sup>79</sup> Se alude a la especialidad, por cuanto el error inexcusable debe tener tal magnitud que debe comprometer la idoneidad y la capacidad profesional del administrador de justicia pues este no puede abarcar cualquier tipo de conocimientos especializados, sino únicamente de aquellos básicos e indispensables para el ejercicio de cualquier actividad jurisdiccional. Sobre el tema véase: Álvarez Arias, “Responsabilidad disciplinaria de los jueces”, 293.

<sup>80</sup> La aplicación de la figura del error inexcusable me lleva a concluir que el sistema de elección de jueces tiene varias deficiencias, pues el solo hecho del alto grado e índice de la aplicación de esta figura jurídica conllevaría implícitamente la aceptación que se han cometido graves errores y falencias en la elección de dichos funcionarios judiciales.

## ¿EN QUÉ CASOS EXISTE EL ERROR INEXCUSABLE?

Con esta breve distinción entre error judicial y error inexcusable es necesario determinar, cuáles son los casos en los que se puede llegar a concluir que se ha incurrido en dicho error inexcusable.

Existen algunos autores que, con relación a la clasificación del error judicial, han preferido realizar una distinción entre los errores de hecho y los de derecho,<sup>81</sup> dicha distinción ha sido acogida en varios expedientes por parte del Consejo de la Judicatura en los cuales, respecto al error judicial, se ha señalado que éste se comete en un acto formal y materialmente jurisdiccional y que éste a su vez puede ser de *iure* o de *facto*.<sup>82</sup>

El primero de ellos, esto es, el error de *iure* se produce cuando el juzgador se aparta considerablemente de las reglas que para el efecto establece el ordenamiento jurídico o cuando se contravienen normas jurídicas; mientras que el de *facto* se produce cuando se cambian o modifican los hechos materia de la *litis* o se altera cualquier otro hecho relacionado con las actuaciones del juicio.<sup>83</sup>

Sin embargo, resulta apropiado –para realizar un análisis pertinente y ajustado a la figura en análisis- partir de la distinción y división entre los errores de procedimiento (*in procedendo*) y los de juzgamiento<sup>84</sup> (*in iudicando*), pues los errores se circunscriben a todas las actuaciones jurisdiccionales y no únicamente a la sentencia. A más de ello se debe considerar que no solamente el juzgador está sujeto a esta sanción, sino que también toman partida, como sujetos activos, los fiscales y defensores públicos; asimismo es menester abordar el tema desde esta distinción por cuanto el error de *iure* y de *facto* se circunscriben y forman parte del error *in iudicando*, siendo necesario estudiar también los errores *in procedendo*, dado que el error, dentro del presente estudio, ha sido y está siendo considerado como un defecto del acto.<sup>85</sup>

---

<sup>81</sup> Guzmán Fluja, “El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia” 156-162; también véase: Marroquín Zaleta, “El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa”, 17.

<sup>82</sup> Ecuador, Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM, MOT-620-UCD-011-PM.

<sup>83</sup> Ecuador, Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. MOT-620-UCD-011-PM

<sup>84</sup> Entre los cuales, conforme se señalará en líneas posteriores, contiene al error de hecho y de derecho.

<sup>85</sup> El Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro de sus resoluciones de forma tácita acoge esta distinción, pues describe tanto a procedimientos administrativos de juzgamiento de vicios en el procedimiento, como es el caso de los actos que provocan nulidad por violación al trámite y al debido proceso, por arrogación de funciones, por ejecución de actos no ejecutoriados, por inobservancia de la ley procesal, por detención



Estos elementos serán útiles a efectos de analizar los mismos de acuerdo con varias resoluciones que ha tomado el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo facultado para determinar la existencia del error inexcusable.

Ahora bien, más allá de que esta figura jurídica tenga varios sujetos activos que pueden ser imputables (jueces, fiscales y defensores públicos), esta tesis abarcará con mayor amplitud la situación de los jueces, sin menospreciar a los otros sujetos activos que, a través de sus actuaciones, puedan incurrir en el cometimiento de esta causal; pero, de acuerdo con Hernando Devis Echandía, el rol del juez es dirigir el proceso y encargarse de tomar la decisión de los asuntos que son puestos en su conocimiento<sup>86</sup> y por ello son estos –a fin de cuentas– quienes bajo su poder de *imperium* deben resguardar y garantizar la independencia judicial como las actuaciones de los auxiliares de la justicia.

Los jueces, desde el punto de vista técnico, tienen encomendado los siguientes actos: a. los de gobierno procesal que son actos de carácter constitutivo, normativo o extintivo que se ejercitan en el proceso sin referirse al fondo del asunto, como en el caso de la prórroga de un término, y cuya omisión o defecto genera vicios *in procedendo*; y, b. los de composición procesal que sirven para resolver las peticiones o componen el litigio y que regulan el fondo del asunto y cuya omisión o defecto genera un vicio *in iudicando*.

Se dice que existen errores *in procedendo* cuando el juez viola ciertas normas de derecho procesal destinadas a indicarle el modo de regular su conducta en el trámite de un procedimiento judicial, en tanto que un error *in iudicando* hace relación al desacato de reglas de derecho sustancial destinadas a ser aplicadas en la sentencia de fondo.<sup>87</sup>

A pesar que estos dos tipos de errores son negativos en el proceso, existen autores que sostienen que el error *in iudicando* es más perjudicial que el error *in procedendo*, ya que, si bien ambos consisten en la inejecución de la ley, en el vicio *in iudicando* se comete un error de mayor gravedad por cuanto deja declarado eternamente

---

arbitraria en caducidad de prisión preventiva, de los errores de juzgamiento, como es el caso de las acciones de protección que sean propuestas como vía no efectiva, cuando se resuelva el tema de fondo un asunto de mera legalidad, cuando se resuelva en contra de norma expresa, cuando el pronunciamiento le compete a otro tribunal, cuando se inaplica normas esenciales para la resolución, cuando se ordena la reparación integral de meras expectativas o cuando las medidas cautelares constitucionales no tengan temporalidad; estos parámetros nos llevarán a concluir respecto de los límites del error inexcusable frente a la independencia judicial.

<sup>86</sup> Hernando Devis Echandía, *Tratado de Derecho Procesal* (Bogotá: Themis, 1961), 615.

<sup>87</sup> Juan Carlos Hitters, *Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación* (Buenos Aires: Librería Editora Platense S.R.L., 2da edición, 1997), 217.

en la sentencia con fuerza de cosa juzgada como voluntad de la ley, lo que en realidad la ley no ha generado.<sup>88</sup>

## ERRORES DE PROCEDIMIENTO O IN PROCEDENDO

El proceso se constituye por una serie de actos de diversas clases con una finalidad común. Los actos procesales son actos jurídicos con relación al proceso que emanan de la voluntad de su autor y tienden a producir un efecto en la realidad jurídica procesal.<sup>89</sup>

Tradicionalmente, los errores de procedimiento o *in procedendo* son aquellos que nacen de la inejecución de la ley procesal, en cuanto a la no ejecución de lo que la ley le impone o ejecución de lo que la ley prohíbe o se comporta de un modo diverso al que la ley prescribe.<sup>90</sup>

Generalmente cuando se habla de errores de procedimiento, se alude a equivocaciones que se han cometido en la tramitación o sustanciación de un procedimiento<sup>91</sup> como conjunto de actos concatenados, es decir, refiere a la violación de normas y reglas procesales cuya violación, finalmente, produce la nulidad de lo actuado, lo que permite que el acto procesal defectuoso que ha provocado en alguna forma indefensión y vulneración del derecho a la defensa y derechos constitucionales, sea reparado.

En nuestra legislación, la violación de las normas procesales (sustanciales) causa la nulidad de las mismas, debiéndose por dicho hecho reponer el proceso hasta el estado antes de dicha violación.

Según lo señala el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos,<sup>92</sup> que a su vez replica en su totalidad (respetando las diferencias obvias entre ambos sistemas,

---

<sup>88</sup> *Ibíd.*, 218.

<sup>89</sup> Devis Echandía, “Tratado de Derecho Procesal Civil”, 531.

<sup>90</sup> Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-252/01 M.P.”, Carlos Gaviria Díaz A.V. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis, accedido el 09 de octubre de 2016, [http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-998-04.htm#\\_ftn7](http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-998-04.htm#_ftn7).

<sup>91</sup> Autores como Fernando de la Rúa consideran que para aplicar una norma es preciso interpretarla y toda interpretación supone necesariamente un juicio, por tal, cualquier vicio jurídico, concibe dicho autor, es en definitiva un vicio in iudicando, véase sobre el tema: Hitters, “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 228.

<sup>92</sup> Ecuador, *Código Orgánico General de Procesos*, Registro Oficial, Suplemento 506, 22 de mayo de 2015.

el escriturario y el oral) el contenido del derogado artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, para todos los procesos son solemnidades sustanciales, cuya omisión genera la nulidad: la jurisdicción de quien conoce el juicio, la competencia, la legitimidad de personería, la citación del incoado, la falta de notificación a las audiencias y de la sentencia y la indebida conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe. A pesar de ser una enumeración taxativa, aquello no excluye la posibilidad de que, por otros motivos, como podrían ser las nulidades de orden constitucional, se pueda anular el proceso por los vicios que se han generado en la tramitación de la causa (siempre que se respeten al menos los principios de especificidad, convalidación y trascendencia).<sup>93</sup>

Es necesario señalar que la Corte Constitucional determinó que la sola mención de la violación de algunas de las garantías del debido proceso obliga al órgano jurisdiccional a analizar dicha alegación, con el propósito de determinar nulidades implícitas que pueden ser declaradas de oficio, conforme lo siguiente:

Las nulidades implícitas se encuentran entonces inherentemente ligadas al debido proceso, y por tal motivo podrían inclusive ser declaradas de oficio por el órgano judicial a cargo del juicio donde se produce la misma [...] Es decir un pedido de nulidad implícita se vincula a las garantías del debido proceso y como derecho constitucional bastaría la sola mención de su eventual incumplimiento para que se genere un análisis de nulidad por parte del órgano judicial que tramita el asunto, el mismo que debe pronunciarse expresamente [...] En definitiva, la justicia ordinaria no puede desatender los pedidos de nulidad que se presenten en sus despachos, aun cuando hayan emitido sentencia, pues se encuentran prohibidas de desatender un pedido tan gravitante como es uno relativo a la falta de notificación o exclusión del proceso –nulidad-, o dicho en otras palabras, dentro del sistema procesal, los jueces no pueden eludir su función de garantes primarios, en el cual la Corte Constitucional es garante extraordinario, por medio del acción extraordinaria de protección.<sup>94</sup>

Sin embargo, no es objeto de la presente tesis analizar cada uno y detalladamente las causales que pueden dar lugar a la declaratoria de nulidad por vicios en el procedimiento, sino establecer un parámetro general que ayude a comprender la adecuada determinación del error inexcusable; empero cabe indicar que muchas de estas

---

<sup>93</sup> Ejemplo de ello es la garantía contenida en el artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la República, en cuya parte final y pertinente se establece: “[...] Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”.

<sup>94</sup> Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia No. 214-12-SEP-CC”, Registro Oficial, Suplemento 743, 11 de julio de 2012.

causales han servido de fundamento para imponer sanciones por error inexcusable por parte del Consejo de la Judicatura.<sup>95</sup>

Los errores del juez que ocasionan nulidad forman parte del grupo más amplio de los errores *in procedendo*, pero no se confunde con estos, porque no siempre causan nulidad; sin embargo, la causan, en cambio, la incompetencia, la incapacidad en el proceso, la mala representación y la falta de traslado de la demanda o de citaciones forzosas, la violación de la garantía constitucional del derecho a la defensa (fundamento esencial del debido proceso), la ausencia o indebida motivación, la inadecuación del procedimiento cuando ésta vulnere el derecho de defensa o la pretermisión grave de sus formas siempre que en ésta se afecte al derecho de defensa de alguna de las partes procesales.

La nulidad para ser declarada como tal, debe encontrarse configurada –al menos– por dos principios: a) el de especificidad; y, b) el de trascendencia. El primero de ellos implica que dicho vicio debe estar contemplado como tal en una norma y el segundo, refiere a que sea de tanta importancia que el proceso no pueda cumplir su misión, sea porque falten presupuestos procesales o porque coloquen a un sujeto de la relación jurídico procesal en estado de indefensión.<sup>96</sup>

El derecho al debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República, en cuya parte esencial determina: “[...] En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas [...]” La Corte Constitucional ecuatoriana se ha pronunciado en variadas ocasiones sobre la naturaleza del debido proceso, indicando que:

“[...] en relación al debido proceso plasmado en el artículo 76 de la Constitución de la República, se muestra como un conjunto de garantías con las cuales se pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o administrativo se sujeten a reglas mínimas, con el fin de proteger los derechos garantizados por la Carta Suprema, constituyéndose el debido proceso en un límite de la actuación discrecional de los jueces. Por tanto, no es sino aquel proceso que cumple con las garantías básicas

---

<sup>95</sup> Ecuador, Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. 201-UCD-011-MAC (DG-500-2010-M).

<sup>96</sup> Santiago Andrade Ubidia, *La casación civil en el Ecuador* (Quito, Universidad Andina “Simón Bolívar” Ecuador, 2005), 116.

establecidas en la Constitución, y que hace efectivo el derecho de las personas a obtener una resolución de fondo, basada en derecho.”<sup>97</sup>

Por lo dicho, el debido proceso, en términos generales se concibe como la piedra angular del ordenamiento jurídico ecuatoriano y cuya violación genera una afectación a la estructura constitucional y por ende, genera una nulidad que debe ser reparada procesalmente. Se debe tener en consideración que la Constitución de la República establece una serie de principios básicos como medios para la realización de la justicia. Son estos principios básicos, como el debido proceso, los que se encuentran desarrollados en las normas procesales legales, por ende, si vulnera una de éstas, se estaría vulnerando a todos los principios que son base y fundamento del ordenamiento jurídico.

Así, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura de Transición señaló que constituye error inexcusable el acto u omisión en la tramitación de una causa que genere nulidad por vulneración del debido proceso en los términos establecidos en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República.<sup>98</sup> No obstante, este postulado riñe con el artículo 108 numeral 8 del COFJ que establece una pena considerablemente benigna para el mismo caso. Dicha norma señala lo siguiente:

Art. 108.- INFRACCIONES GRAVES.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer una sanción de suspensión, por las siguientes infracciones [...] 8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República.

Teniendo en consideración lo dicho, conforme lo prescribe el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República, es plenamente aplicable la sanción más favorable al infractor, pues si bien, la violación del debido proceso es una causal lo suficientemente gravosa, el COFJ le ha dado una sanción benigna en comparación con la del error inexcusable, por ende, aún ante una declaratoria de nulidad, a diferencia de

<sup>97</sup> Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia No. 0034-09-SEP-CC”, 9 de diciembre de 2009; “Sentencia 0004-13-SEP-CC”, 21 de marzo de 2013, accedido 15 de enero de 2017, <https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/004-13-SEP-CC.pdf>.

<sup>98</sup> Ecuador Consejo de la Judicatura, expediente disciplinario No MOT-193-UCD-010-CD (OF-05-2010); Expediente Disciplinario No. MOT-515-UCD-011-MAC (001-DPN-CJ-011); Expediente Disciplinario No. MOT-620-UCD-011-PM.

lo sostenido por el Consejo de la Judicatura, no necesariamente tal hecho constituiría en sí mismo un error inexcusable.

La falta de competencia, únicamente con relación a la materia, genera la nulidad del proceso, debiendo declararse como tal al proceso; no obstante, la arrogación de funciones que no le son propias a su cargo, podría eventualmente, atendiendo a las circunstancias del caso,<sup>99</sup> constituirse en un ejemplo de causal suficiente para la configuración del error inexcusable. También podría constituir error inexcusable el deliberadamente romper la consecución lógica del procedimiento, como realizar un remate antes de dictar sentencia.

El proceder con la ejecución de un acto judicial que no se encuentra ejecutoriado, no está contemplado como una causa de nulidad en la ley, sin embargo, *prima facie*, por la trascendencia del acto, que podría incumplir mandatos legales, podría configurar una violación del procedimiento, lo que nos llevaría a concluir que esta actuación se podría presentar como un error inexcusable.

En efecto, la ley procesal determina, sea en forma común y general o específica, los términos o plazos que deben transcurrir para que los actos o actuaciones procesales queden firmes y no puedan ser modificados. Ejecutar presurosamente un determinado acto, conllevaría a la violación del mandato legal que contiene dicho precepto y por lo tanto ocasionaría un perjuicio.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido dentro del sumario administrativo No. A-557-UCD-11-MAC (DPM-114-2010) en el cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición llegó a establecer que el administrador de justicia ejecutó un auto sobre el cual se encontraba interpuesto un recurso de revocatoria y que no había sido contestado.

Ahora bien, para la sanción de este tipo de actuaciones se debe tomar en consideración cada una de las circunstancias que motivaron se emita dicho acto, pues en caso que dicha falla sea atribuible a cualquiera de los sujetos procesales, no podría responsabilizarse al administrador de justicia por tratarse de un error inducido; a más de ello, en nuestra legislación tenemos varias lagunas y anomias jurídicas que no apoyan la existencia de certeza en la administración de justicia. Ejemplo de ello es el Código

---

<sup>99</sup> En líneas anteriores me referí que el error inexcusable contiene una serie de características que deben ser observadas en cada caso en particular y atendiendo a las singulares circunstancias que se juzga; por lo tanto, no toda nulidad por falta de competencia genera una sanción como error inexcusable, pues a través de la declaratoria de nulidad se subsana el vicio que se comete, pero adicionalmente se debe tener en consideración que existe otro mecanismo de reparación al afectado.

Orgánico General de Procesos que no contiene un término de ejecutoria de actuaciones jurisdiccionales, dejando aquello a la discrecionalidad del juzgador.

Podría tomarse como otro ejemplo la ejecución de una sentencia o un auto sobre el cual se haya interpuesto algún recurso procesal que suspenda la ejecución o que impida su ejecución, como lo sería una apelación con efecto suspensivo, aclaración, ampliación, revocatoria o reforma, entre otros; claro está, que se debe considerar que este tipo de actos tienen sus excepciones, como es el caso de la ejecución de una sentencia emitida dentro de una acción de protección dictaminada a favor de un administrado en contra de la administración pública, cuya ejecución, pese a encontrarse con cualquier tipo de recurso, es de inmediata ejecución.

La nulidad, finalmente, protege el derecho de defensa de los sujetos procesales, evitando con ello su indefensión; esta indefensión, a más de los actos establecidos taxativamente en la legislación también se puede infligir de varias formas, por ejemplo: cuando el juez inobserva una norma adjetiva expresa que le obliga a realizar determinados actos procesales y no es acatada, como ocurriría dentro de un procedimiento ordinario si se omite convocar a audiencia preliminar y se convoca –de forma directa- a audiencia de juicio o se omitiese evacuar fases dentro de una audiencia (la fase de saneamiento, conciliación, prueba, entre otras).

Finalmente, podría establecerse como un ejemplo de error inexcusable, inaplicar de un modo claro e inequívoco un precepto adjetivo normativo claro, previo y expreso, como mantener a una persona privada de su libertad una vez que ha caducado la prisión preventiva, o si una vez ratificada la inocencia de un procesado, no se dispusiese su inmediata libertad y se dejase que siga privado de aquella.

Si bien todos los actos ejemplificativos descritos podrían generar un grave quebrantamiento de las reglas procesales previamente establecidas y por ende una afcción directa a la seguridad jurídica, siempre deben considerarse las circunstancias internas y externas que rodean al acto y al funcionario que cometió tal desacato procesal, por ello es que la sola vulneración de dichas normas procesales, eventualmente no generaría error inexcusable, por cuanto estas decisiones pueden ser revertidas y subsanadas en otras instancias e incluso en su subsanación, podría ordenarse como forma de reparación, la condena en costas del causante y la consideración correspondiente para futuras evaluaciones; caso contrario, cada vez que se acepte un recurso de apelación o de casación por la causal de vicios al proceso de

nulidad insanable habría la posibilidad de generar dicha sanción y teniendo en consideración aquello, dejar quizá en *default* a la administración de justicia.

## ERROR DE JUZGAMIENTO O IN IUDICANDO

Los errores de juzgamiento o *in iudicando* son aquellos en los que la voluntad concreta de la ley proclamada por el juez en su sentencia, no coincide con la voluntad efectiva de la ley, porque aun habiéndose desarrollado normalmente el proceso, el juez incurre en un error en su actividad intelectual, de modo que el defecto inherente a una de las premisas lógicas haya repercutido necesariamente sobre la conclusión; es decir, se trata de un error en el razonamiento.<sup>100</sup>

Este error quizá es uno de los mayores errores que se pueden cometer, por cuanto podría establecer como cosa juzgada y regla para el caso en concreto un efecto que la ley no le ha dado.<sup>101</sup> Resulta ahora necesario describir las clases de errores judiciales de juzgamiento o *in iudicando*. La doctrina<sup>102</sup> al respecto ha llegado a un común acuerdo y ha señalado que existen dos tipos de errores: los de hecho y los de derecho.

Se entienden por errores de hecho a aquellos que afectan el material fáctico del proceso. Éste, a su vez puede ser de dos clases: aquel que se puede verificar de los elementos fácticos del proceso y aquel que tiene una falta de correspondencia entre la realidad procesal, a la que correctamente se atuvo al juicio, y la realidad externa, es decir, cuando los datos que obran del proceso fueron correctamente apreciados pero sin que coincidan con los hechos reales.

El error de derecho por su parte se origina cuando se aplica equivocadamente la ley y este abarca: los supuestos desconocimientos del derecho, la inaplicación de la norma jurídica que correspondía y la aplicación de una norma jurídica que no correspondía o por una interpretación inadecuada de la norma aplicada.

Se debe tener en consideración que un conflicto jurídico —quizá debido al exceso de abstracción en la norma— puede tener diversas soluciones jurídicas, todas ellas

---

<sup>100</sup> Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-998/04 del 12 de octubre de 2004”, 12 de octubre de 2004, accedido 01 de enero de 2019, [http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-998-04.htm#\\_ftn7](http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-998-04.htm#_ftn7).

<sup>101</sup> Hitters, “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 222.

<sup>102</sup> Guzmán Fluja, “El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia” 158 – 162.



parecidamente justas y adecuadas, sin que optar por una de ellas suponga que las demás son inexactas o erróneas y sin que esa opción signifique que la solución escogida sea inexacta con relación a las restantes elegidas<sup>103</sup>.

No obstante, se debe tener en consideración que, conforme al artículo 115 del COFJ, no se puede admitir a trámite las quejas o denuncias si es que en estas se impugnan criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales, estableciéndose para estos casos enviar, sea la queja o denuncia, a la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura para efectos de evaluación del desempeño.

Esta descripción normativa, en forma literal, deja entrever la exclusión del juzgamiento del error inexcusable sobre los errores *in iudicando* que versan sobre criterios de interpretación de normas jurídicas, es decir, sobre la decisión del administrador de justicia sobre si debe o no aplicar una determinada norma jurídica, si su aplicación fue indebida o si interpretó de forma errónea la norma, pues –como lo señaló la ex Corte Suprema de Justicia- el error en su elección o interpretación se configura como un error en la aplicación del derecho, que debe ser invocado –y resuelto- por medio de los recursos ordinarios que permiten corregir dicho agravio, sin embargo, aquello no atañe a la validez formal de la sentencia, sino a su mayor o menor acierto, pues finalmente la sentencia y lo que en ella se expresa, constituye un acto netamente jurisdiccional por excelencia.<sup>104</sup>

Tampoco se puede revisar la forma de valoración de la prueba, pues aquello atañe a la actividad intelectual propia del juez que se plasma en la sentencia y como lo señaló la ex Corte Suprema de Justicia, es una atribución jurisdiccional soberana y autónoma de los jueces o tribunales de instancia.<sup>105</sup>

Finalmente, no cabe revisión por parte del Consejo de la Judicatura sobre otro tipo de actos netamente jurisdiccionales, siendo la sentencia o resolución el acto jurisdiccional por excelencia. La norma aludida da a entender la exclusión de la valoración de vicios *in iudicando* que tengan que ver con la sentencia, con excepción del error de facto siempre y cuando dicho error sea palmario, es decir, cuando de forma

---

<sup>103</sup> *Ibíd.*, 162.

<sup>104</sup> Ecuador, Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, “Resolución 301”, proceso No. 633-95, del 20 de mayo de 1999. Registro Oficial 225, 16 de agosto de 1999.

<sup>105</sup> Ecuador, Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, “Resolución 568”, proceso No. 109-98 del 08 de noviembre de 1999. Registro Oficial 349, 29 de diciembre de 1999.

intencional se haga constar una realidad totalmente diferente a los hechos que se han alegado por las partes.

## **CÓMO SE DETERMINA SU EXISTENCIA**

La determinación del error inexcusable en nuestro actual ordenamiento jurídico la realiza, con facultad preponderante, el Consejo de la Judicatura, ya que si bien existe una especie de competencia compartida con la administración ordinaria de justicia, esta competencia remite finalmente, para su juzgamiento, al organismo administrativo del poder judicial; así podemos observar que la administración de justicia, a través de la revisión de actuaciones jurisdiccionales que llegan a su conocimiento mediante la interposición de recursos verticales, sean estos ordinarios o extraordinarios (apelación, de casación y revisión en procesos penales), es competente para declarar en sentencias y providencias la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de los servidores judiciales y comunicar de este particular al Consejo de la Judicatura para que éste sustancie el procedimiento administrativo correspondiente. Así lo establece el artículo 131, numeral 3, del COFJ.

Por lo tanto, la competencia que se le otorga a la administración de justicia – respecto del error inexcusable- es una competencia aparentemente incompleta, pues si bien se le faculta para determinar el error inexcusable, la competencia para el juzgamiento de aquel es del Consejo de la Judicatura.

La facultad sancionadora es de competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura, quien a más de las reglas que se encuentran establecidas en el COFJ, se rige procesalmente por las regulaciones del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (de ahora en adelante: Reglamento Disciplinario).<sup>106</sup>

Ahora bien, frente a la determinación del error inexcusable en la vía jurisdiccional carece de un procedimiento especial para tal determinación, pues, éste únicamente se basa en la decisión motivada del tribunal ante quien se ha interpuesto un recurso vertical, siendo tal tribunal, el cual en base de la aplicación del ordenamiento

---

<sup>106</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, *Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura*, Resolución 029-2015, Registro Oficial, Suplemento 455 del 10 de marzo de 2015.

jurídico y de acuerdo a los requisitos establecidos *ut supra*, debe determinar de forma razonada, lógica y de manera motivada sus resoluciones respecto de si cabe o no determinar la configuración de un error inexcusable.

En ese sentido, el tribunal a más de establecer su decisión respecto del caso en concreto, en razón del mandato contemplado en la norma antes citada, debe determinar si el juez que emitió la sentencia en análisis cometió un error calificado como inexcusable. Dicha disposición normativa es impositiva, no facultativa, pues los jueces de alzada la deben cumplir; sin embargo, dicha disposición parece ineficaz, tanto por la ambigüedad del concepto, el supuesto espíritu de cuerpo de la función judicial, lo no vinculante del criterio, como por lo complejo que resulta observar el caso en concreto con la conducta de un tercero.

Ahora bien, tal como se había ya advertido, la competencia para sancionar el error inexcusable la ejerce el Pleno del Consejo de la Judicatura, debiendo por ello remitirnos a lo establecido en el COFJ y en el Reglamento Disciplinario.

Así, el procedimiento administrativo sancionatorio puede iniciar de tres formas: la primera, mediante denuncia formal que debe cumplir con ciertos requisitos; la segunda, mediante queja; y la tercera, mediante investigación de oficio. No obstante, el Reglamento Disciplinario contempla una serie de normas comunes aplicables a todos los procedimientos que en lo medular se refieren a la contestación, para la cual, se tiene un término de cinco días luego de la notificación del sumario; las pruebas y la etapa de prueba, que se apertura por un término común de cinco días; la resolución y su impugnación.

La denuncia debe reunir ciertos requisitos, mismos que se encuentran contemplados en el artículo 113 del COFJ: los nombres completos del denunciante, la identificación del servidor judicial, un resumen de los hechos denunciados, la descripción de la infracción disciplinaria imputada con sus circunstancias, las normas infringidas, los medios de prueba que disponga y la casilla judicial o dirección electrónica.

La queja no requiere reunir los requisitos establecidos para la denuncia, no obstante, puede ser presentada únicamente por el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea, el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Contralor del Estado, el Procurador General del Estado, el Presidente y demás vocales del Consejo de la Judicatura, las primeras autoridades de los órganos

autónomos, Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de Cortes Provinciales, Tribunales Penales y Juzgados de primer nivel, el Comandante General y jefes de unidades de Policía Nacional, y el auditor interno institucional.

Mientras que la investigación de oficio se inicia de manera directa por el Director Provincial del Consejo de la Judicatura o por la unidad que el Consejo de la Judicatura establezca, requiriendo para estos casos la intervención del Coordinador de la Oficina Provincial de Control Disciplinario para que realice una investigación previa y se emita un informe sugiriendo el inicio o no del procedimiento de oficio.

La denuncia o queja, de acuerdo con el artículo 115 del COFJ, puede ser inadmitida por tres razones: a. en caso que los hechos narrados en la denuncia no constituyan infracción disciplinaria; b. la acción disciplinaria haya prescrito; c. si en ella se impugnaren criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales. En este último caso, únicamente se remite un informe a la Unidad de Talento Humano para efectos de evaluación en el desempeño de los administradores de justicia.

Me parece importante, para efectos del presente trabajo investigativo, el resaltar este último requisito de inadmisión pues tiene que ver con el objeto de esta tesis, ya que esta salvedad de la norma excluye de sanción a la actividad jurisdiccional de los administradores de justicia, lo que provocaría, eventualmente, que exista una dicotomía entre el error inexcusable con esta excepción.

Para iniciar el procedimiento sancionador, conforme lo establece el artículo 33 del Reglamento Disciplinario, se emite un acto administrativo que contiene los nombres completos del servidor judicial, la relación de los hechos materia del sumario, la tipificación de la presunta infracción disciplinaria, los medios de prueba que se disponga, así como la solicitud de la práctica de las diligencias ordenadas, la advertencia al sumariado de dar contestación en el término de cinco días para el anuncio y solicitud de práctica de pruebas, el domicilio para notificaciones y por último, la disposición de obtención de copias certificadas de la acción de personal con referencia al cargo que ostenta u ostentó el sumariado, su situación laboral actual y la certificación de sanciones disciplinarias impuestas.

El artículo 36 del Reglamento Disciplinario establece que: “*se admitirán todos los medios de pruebas establecidos en las leyes aplicables a la materia, a excepción de la confesión<sup>107</sup> e inspección*” teniendo para su evacuación un término de cinco días.

Una vez que ha concluido el término de prueba, dependiendo de la sanción, dentro del término de quince días se debe: (1) para el caso de sanciones con amonestación, emitir la resolución debidamente motivada; y (2) para sanciones de suspensión o destitución, remitir un informe motivado que debe contener la identidad del sumariado, los hechos imputados al sumariado, las pruebas aportadas al expediente, la tipificación de la presunta infracción disciplinaria y la recomendación al Pleno del Consejo de la Judicatura –no vinculante- sobre el tipo de sanción que debería imponerse al sumariado.

En conclusión, la determinación del error inexcusable en instancia administrativa debe ser ejecutado respetando el debido proceso, mediante una operación lógica, razonada y de manera motivada por parte del organismo administrativo. En el siguiente capítulo se observará de manera crítica si la potestad atribuida por el COFJ al ente administrativo de la Función Judicial, esto es, al Consejo de la Judicatura, es compatible con la independencia judicial y si la causal de error inexcusable debería constar como causal disciplinaria administrativa; y, por ende, establecer quién debería tener esta atribución y si existe la debida proporcionalidad entre la infracción con su sanción.

---

<sup>107</sup> Tras la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos (Ecuador, Código Orgánico General de Procesos, Registro Oficial, Suplemento 506 del 22 de mayo de 2015) la confesión judicial, como medio de prueba fue sustituida por la declaración de parte.



## CAPÍTULO II

### EL ERROR INEXCUSABLE COMO CAUSA DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA FRENTE A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

#### FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA

Todo acto o hecho jurídico tiene una consecuencia que genera una responsabilidad. Como lo señala Hans Kelsen, la responsabilidad jurídica es un concepto íntimamente relacionado con el deber jurídico de responsabilidad. Que una persona sea legalmente responsable de una determinada conducta o que sobre ella recaiga la responsabilidad jurídica de la misma, significa que está sujeta a una sanción en el caso de un comportamiento contrario.<sup>108</sup>

La responsabilidad se encuentra concebida como un límite al poder. La responsabilidad es un elemento correlativo a la independencia, pues como lo señala Santiago Andrade Ubidia, la independencia judicial no puede ni debe entenderse como un estado de anarquía dentro de la función judicial;<sup>109</sup> tampoco se la puede entender como un privilegio de los jueces, sino cómo parte de un derecho de los ciudadanos,<sup>110</sup> ya que, como lo señala Luz Martínez Alarcón, la independencia judicial y la responsabilidad judicial no son términos antitéticos sino que, complementariamente, aparecen indisolublemente unidos sin tener sentido el uno sin el otro.<sup>111</sup>

En este sentido, Juan Montero Aroca señala que un estado democrático es más que un Estado en el cual se celebran elecciones, es en el cual el titular de cualquier

---

<sup>108</sup> Hans Kelsen, *Teoría General del Derecho y del Estado* (México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, trad. Eduardo García Máynez, 1988), 76.

<sup>109</sup> Andrade Ubidia, “Independencia judicial y estado de derecho” en *Temas de derecho constitucional*, 294. Véase también: Andrade Ubidia, “La Función Judicial en la vigente Constitución de la República”, en *La nueva Constitución del Ecuador: Estado, derechos e instituciones*, 248-249.

<sup>110</sup> Viquez Cerdas, “La independencia judicial y su relación con la responsabilidad disciplinaria y civil del juez”, en *Justicia, libertad y derechos humanos, Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante*, 1181.

<sup>111</sup> María Luz Martínez Alarcón, *La independencia judicial* (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004), 327.

poder acepta ser controlado porque conoce que ese poder no es ilimitado y que todos los roles se asumen con responsabilidades; así se vincula la responsabilidad a uno de los valores democráticos: la rendición de cuentas; de tal modo que el incremento del poder sea correspondido por un aumento de los controles sobre su ejercicio.<sup>112</sup>

Si bien la independencia judicial implica que los jueces deben encontrarse únicamente sometidos a la Constitución, a los tratados internacionales, a la ley, reglamentos y demás normas del ordenamiento jurídico, es la trasgresión de estos la que eventualmente puede llegar a generar responsabilidades en los funcionarios judiciales.

Conforme lo señala María Luz Martínez Alarcón, la responsabilidad jurídica judicial se apoya en dos elementos: la infracción del deber jurídico y la sanción aparejada a esta actuación.<sup>113</sup> La responsabilidad finalmente puede ser civil, penal o administrativa.

El artículo 233 de la CRE es claro en disponer que:

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.”

Al respecto, el artículo 11 numeral 9 de la CRE establece que:

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios [...] 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.

De igual manera, el artículo 172 de la CRE señala lo siguiente:

---

<sup>112</sup> Juan Montero Aroca, *Ensayos de derecho procesal* (Barcelona: Bosch, 1988), 112.

<sup>113</sup> Martínez Alarcón, “La independencia judicial”, 321.



Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán en principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia.

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.

Esta última descripción normativa también la podemos observar en forma similar en el texto del artículo 15 del COFJ que establece lo siguiente:

Art. 15.- PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD.- La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley.

En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma señalada en este Código.

Todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado, así como los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos.

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley, de conformidad con las previsiones de la Constitución y la ley.

Ciertamente la CRE, a través de las normas antes aludidas, establece dos tipos de responsabilidades: **a)** la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado; y, **b)** la responsabilidad individual de los funcionarios del Estado.

La CRE en su artículo 11, numeral 9, deja instituido -a través de las normas antes transcritas- dos elementos que configuran la responsabilidad extracontractual pública que, en términos de Vicente Guzmán Fluja, es directa y objetiva. Es directa por actos propios que son el resultado de la actividad monopolizadora del Estado en la Administración de Justicia, es decir, por arrogarse la exclusividad en la tarea de la administración de justicia, y es objetiva en razón que se da al margen de toda idea de dolo, culpa o negligencia, ya que la razón principal de la responsabilidad pública es el haber causado un daño antijurídico como consecuencia de la actuación de la

administración de justicia.<sup>114</sup> Así, para que proceda este tipo de acción deben concurrir los siguientes requisitos: acción u omisión referible al Estado, títulos de imputación concretos, daño antijurídico y relación de causalidad.<sup>115</sup>

Ahora bien, a más de la responsabilidad extracontractual objetiva que tiene el Estado en las actividades que desempeña, también es necesario aludir a la responsabilidad personal que tienen los funcionarios que laboran en sus dependencias, principalmente en la función judicial.

Así, de la meridiana lectura del artículo 172 de la CRE se llega a determinar, conforme lo manifestado *ut supra* que, en efecto la responsabilidad, sea administrativa, civil o penal, se encuentra plenamente configurada constitucionalmente y que dicha responsabilidad se produce por el quebrantamiento de la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley, ya que el sometimiento al ordenamiento jurídico es la auténtica garantía que le sirve –tanto al ciudadano como a la Administración de Justicia- para cumplir sus fines.<sup>116</sup>

La responsabilidad administrativa se produce cuando el funcionario incumple sus deberes y responsabilidades respecto del ente administrativo ante el cual labora; en el caso de los funcionarios judiciales, las causales administrativas se encuentran establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. El artículo 107 contiene las causales leves cuya sanción puede ser una amonestación verbal, una amonestación escrita o una multa; el artículo 108 contiene las causales graves que implican la eventual suspensión de funciones; y, el artículo 109 contiene las causales gravísimas cuya sanción es la destitución.

En cuanto a la responsabilidad penal que opera cuando las actuaciones u omisiones del funcionario público incurren en una conducta punible que lesiona un bien jurídico protegido, dichas conductas se encuentra previstas previamente en el Código Orgánico Integral Penal<sup>117</sup> (en adelante COIP), y para el caso de los funcionarios judiciales se establecen tipos penales como el prevaricato, el fraude procesal, la revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo o persona protegida, la

---

<sup>114</sup> Guzmán Fluja, “El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia”, 36-37.

<sup>115</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>116</sup> Martínez Alarcón, “La independencia judicial”, 327.

<sup>117</sup> Ecuador, *Código Orgánico Integral Penal*, Registro Oficial, Suplemento 180, 10 de febrero de 2014

omisión de denuncia, la discriminación, el peculado, el enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, entre otros.

Ejemplo práctico de responsabilidad penal que interesa conocer en este estudio es el prevaricato que, como tipo penal previsto en el artículo 268 del COIP, establece que:

Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que les prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan en las que patrocinaron una de las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

En líneas superiores se había dejado establecido que uno de los requisitos de procedencia para verificar la existencia del error inexcusable es la de haberse vulnerado un mandato o hecho claro, expreso e inconfundible

La descripción de la norma antes señalada nos permite observar que aún frente a una posible declaratoria de error inexcusable podría también iniciarse un proceso para la determinación de responsabilidad penal del funcionario judicial.

En cuanto a la responsabilidad civil, son muy variados los hechos que pudiesen llegar a originar una obligación a consecuencia de una responsabilidad civil, todo ello se encuentra plenamente previsto desde el artículo 2214 al 2237 del Código Civil.

Para el caso de la administración de justicia, es el artículo 34 del COFJ el que establece la posibilidad de demandar por responsabilidad civil a los funcionarios judiciales por responsabilidad directa que estos puedan llegar a tener. A saber, dicha norma establece lo siguiente:

Las causas que, por indemnización de daños y perjuicios y por daño moral se propongan contra juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores públicos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 172 de la Constitución y demás leyes aplicables, se sustanciarán ante la jueza o juez de lo civil del domicilio de la parte demandada, por la vía sumaria y la acción prescribirá en cuatro años desde que se consumó el daño

El artículo 172 de la CRE señala lo siguiente:

Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia.

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.

Según las normas antes relatadas, son cuatro los tipos que permiten interponer una demanda por responsabilidad civil y directa en contra de los jueces, fiscales o defensores públicos: el retardo, la negligencia, la denegación de justicia o el quebrantamiento de la ley. En cuanto a estos tipos de responsabilidad, se requiere que exista: 1. daño; 2. culpa o dolo; y, 3. nexo causal entre el daño y la acción.

El quebrantamiento de la ley, como responsabilidad civil, también se vincula con la responsabilidad penal y administrativa, el primero de ellos en cuanto a la posibilidad de cometer el delito de prevaricato y el segundo de ellos que se asemeja a uno de los requisitos de procedencia para la declaratoria de error inexcusable; aunque la causal en el ámbito civil es más laxa que las que corresponden a responsabilidad penal y administrativa.

## **EL ERROR INEXCUSABLE COMO CAUSAL SANCIONATORIA ADMINISTRATIVA**

La Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional, cuando expidió el Código Orgánico de la Función Judicial en uno de los considerandos dijo que: “[L]a carrera judicial y el régimen disciplinario, sean asumidas por un organismo de gobierno único y distinto de los organismos integrantes de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura”.

Como sustento de ello, el artículo 178 de la CRE establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Dicha disposición se encuentra, de igual forma establecida en el COFJ, cuando establece en su artículo 181 que son funciones del Consejo de la Judicatura el dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. En el mismo sentido, el artículo 254 del COFJ establece que: “el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplinar de la Función Judicial que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos”.

El 7 de mayo de 2011 se llevó a cabo el referéndum y consulta popular en la cual el pueblo ecuatoriano, respecto de la pregunta quinta,<sup>118</sup> decidió estar de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial. A través de dicho referéndum y consulta popular se aprobó agregar la palabra Juez en el artículo 109, numeral 7, del COFJ.

Así, el artículo 264 del COFJ establece entre las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, la de imponer las sanciones disciplinarias de destitución a los servidores judiciales con el voto conforme de la mayoría de sus miembros o de absolverles.

Si bien es cierto, el COFJ en su artículo 131 establece como facultad correctiva de los jueces el declarar en las sentencias y providencias la incorrección en la tramitación o el error inexcusable, esta potestad puramente jurisdiccional no constituía un requisito *sine qua non* para el establecimiento del tipo sancionador del error inexcusable en la vía administrativa.

Esto es así, porque si analizamos esta prerrogativa jurisdiccional en confrontación con el debido proceso, el administrador de justicia que podría ser perjudicado ante una decisión emitida por un Tribunal Superior no tendría un debido proceso, por no ser parte procesal y por no instaurarse el procedimiento adecuado para ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Por ende, el pronunciamiento que emita cualquier Tribunal Superior o de Alzada, deviene aparentemente de la obligación común de todo funcionario público de denunciar una actuación u omisión que quebranta el ordenamiento jurídico vigente y cuyo pronunciamiento es un referente no vinculante para el Consejo de la Judicatura, pues para la declaratoria de error inexcusable deben analizarse varios presupuestos que han sido señalados *ut supra*, tales como el grado de participación, la reincidencia, factores internos o externos de afectación, entre otros.

Dentro de un análisis sistemático y teleológico de las normas contenidas en el COFJ, podemos determinar que el segundo inciso del artículo 10 de la norma antes aludida establece que: “La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados. La casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los

---

<sup>118</sup> ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, COMO LO ESTABLECE EL ANEXO 5?. Consejo Nacional Electoral, Resultados del referéndum y consulta popular 2011, Registro Oficial 490 Suplemento 1, de 13 de julio de 2011.

procesos, sino recursos extraordinarios de control de legalidad y del error judicial en los fallos de instancia”; en igual sentido el artículo 15 del COFJ establece que el Estado será responsable en los casos de error judicial

Por su parte, el numeral 7 del artículo 109 del COFJ establece como infracción gravísima cuya consecuencia es la destitución del funcionario judicial el: “Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”.

Mientras que el artículo 115 del COFJ establece, como causal de inadmisibilidad del trámite disciplinario: “[...] la queja o la denuncia si en ella se impugnare criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales. En estos casos la queja o denuncia se enviará a la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura para efectos de la evaluación de desempeño”.

Finalmente, el numeral 3 del artículo 131 del COFJ determina, como obligación coercitiva de los administradores de justicia: “Declarar en las sentencias y providencias respectivas, la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de servidoras o servidores judiciales, y comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones”

De lo anteriormente anotado, a la luz de una interpretación sistemática y teleológica, se puede establecer que el legislador, al momento de redactar el COFJ, incluyó esta diferencia sustancial entre el error judicial y el error inexcusable; que dicho sea de paso, no son lo mismo, sino que se podrían establecer como el género y su especie, en su orden; instituyéndose el primero como un título de imputación objetiva por funcionamiento anormal de la administración de justicia cuyo responsable es el Estado; y, el segundo como responsabilidad subjetiva de los jueces, fiscales y defensores públicos.

Como lo señala Orlando Álvarez Arias, la calificación del error inexcusable, por cualquier Tribunal, no puede constituir un elemento definitivo para el establecimiento de una sanción, ya que se produce dentro del marco de una sentencia en la cual el juez investigado no se considera como parte, por lo que no pueden reducir los lapsos procesales en detrimento del juez investigado.<sup>119</sup>

En Ecuador, el error inexcusable se encuentra establecido como una causal de determinación de índole administrativa, cuya potestad plena corresponde, bajo el debido

---

<sup>119</sup> Álvarez Arias, “Responsabilidad disciplinaria de los jueces”, 304.

procedimiento, al Pleno del Consejo de la Judicatura, quienes tienen potestad para sancionar la destitución de un funcionario judicial.

En España, en igual sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial,<sup>120</sup> en su artículo 417, numeral 14, establece como causal muy grave la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales y, conforme el artículo 412, numeral 1, literal d), *eiusdem*, es prerrogativa exclusiva del Pleno del Consejo General del Poder Judicial imponer la sanción de suspensión, traslado forzoso o separación.

En el caso colombiano, es el artículo 44 parágrafo del Código Disciplinario Único, Ley 734<sup>121</sup> que establece como causal a la ignorancia supina y la establece de la siguiente manera:

Habrà culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona común imprime a sus actuaciones.

Se debe partir de la premisa que para que exista ignorancia supina debe haber una desatención elemental o violación de una regla de obligatorio cumplimiento, robusteciendo con ello el hecho que esta ignorancia supina o, en el caso ecuatoriano, el error inexcusable debe cometerse respecto de preceptos básicos y elementales para el ejercicio de una magistratura.

La sanción que se impone por el cometimiento de esta falta es la destitución o inhabilitación, cuya competencia, conforme el artículo 194 *eiusdem*, corresponde a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Para el caso mexicano, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación<sup>122</sup> la que en su artículo 131, numeral 3, establece como causal de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, el tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. El procedimiento, determinado a partir del artículo 133 *eiusdem*, establece que son

---

<sup>120</sup> España, *Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial*, accedido 30 de marzo de 2018, <https://www.uv.es/ivasp/LOPJ>.

<sup>121</sup> Colombia, *Código Disciplinario Único*, Ley 734, Diario Oficial. Año CXXXVII No. 44.699, 5 de febrero de 2002, accedido 30 de marzo de 2018, <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/2045451/LEY+734+DE+2002+PDF.pdf/c33e734efaf749d180bef370dd827009?jsessionid=62ADAF9833F6D170142B0761CE3DF6C3.worker4?version=12>.

<sup>122</sup> México, *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*, Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 1995, accedido 30 de marzo de 2018, [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5\\_mex\\_ane\\_4.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_mex_ane_4.pdf).

competentes para conocer las quejas, denuncias o investigaciones de oficio: a) la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno, tratándose de faltas de ministros y de las faltas graves cometidas por sus servidores públicos; b) el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores públicos de este órgano, en los casos no comprendidos en el literal anterior; c) el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de magistrados de circuito y jueces de distrito cuando las sanciones aplicables sean las de destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y, d) el órgano colegiado que determine el Consejo de la Judicatura Federal, en los casos no comprendidos en el literal anterior.

En el caso de Costa Rica, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica<sup>123</sup> la que determina, en su artículo 199, que será rechazada de plano toda queja que se refiera exclusivamente a problemas de interpretación de normas jurídicas, sin embargo, establece dicha norma que en los casos de retardo o errores graves e injustificados en la administración de justicia se realizará, a petición del Tribunal de la Inspección Judicial, una investigación que deberá ser puesta en conocimiento de la Corte plena para que se resuelva sobre la permanencia o suspensión del funcionario.

Como vemos, en este último caso, la atribución del establecimiento de la existencia del error grave e injustificado le corresponde al órgano jurisdiccional ordinario del Poder Judicial y no a su órgano administrativo. Para la determinación de este error grave e injustificable se requiere que el Tribunal de Inspección Judicial presente una denuncia, dicho Tribunal es un órgano dependiente del Consejo Superior y ejerce el control regular sobre los servidores del Poder Judicial, vigila el cumplimiento de los deberes, tramita las quejas e informa sobre irregularidades.

Este Consejo Superior es un órgano que se encuentra subordinado a la Corte Suprema de Justicia y se encuentra integrado por cinco miembros, cuatro de ellos del Poder Judicial y un abogado externo, siendo el Presidente de la Corte a su vez, Presidente de dicho Consejo.

Como hemos observado, en otros ordenamientos jurídicos, como el español, colombiano, mexicano, el sistema disciplinario administrativo se asemeja al ecuatoriano

---

<sup>123</sup> Costa Rica, *Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica*, Gaceta No. 124, 1 de julio de 1993, accedido 30 de marzo de 2018, <http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4565/cr-pod-judicial.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

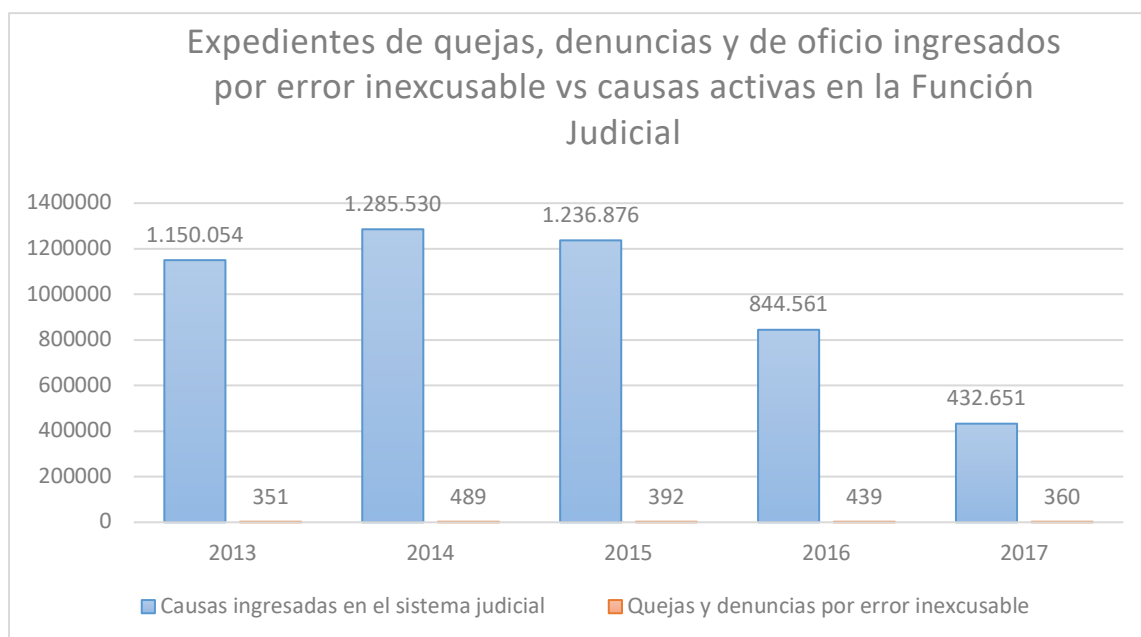


en cuanto al hecho que la rectoría y dirección de los procedimientos disciplinarios son conocidos por el organismo administrativo del poder judicial.

Empero, en ordenamientos jurídicos como el costarricense encontramos una notable modificación de dicho régimen la cual dota de competencia exclusiva al máximo órgano de cierre de la justicia ordinaria, como es la Corte Suprema de Justicia, quienes con intervención del Tribunal de Inspección Judicial y bajo un debido proceso analizan la procedencia o no de la existencia de un error que debe ser grave e injustificado, figura jurídica que se asemeja, en los términos relatados en este estudio, a las características del error inexcusable.

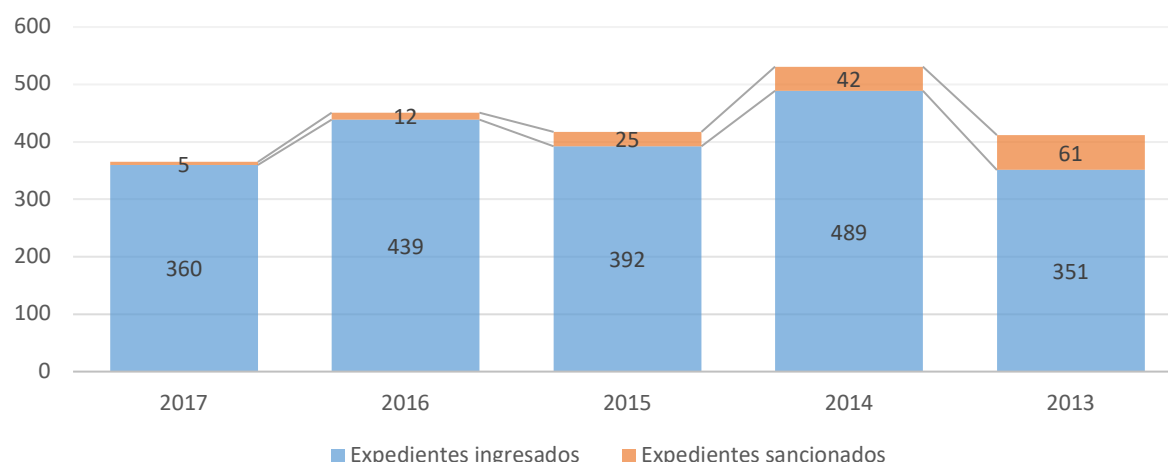
En Ecuador, por disposición expresa del COFJ, es el Pleno del Consejo de la Judicatura el que puede, a través de un procedimiento administrativo, determinar la existencia o no del error inexcusable, no obstante, el COFJ en su artículo 131 numeral 3 concede también una potestad declarativa a los tribunales en virtud de la presentación de los recursos legalmente previstos. Y, las decisiones que se tomen administrativamente en las que se determina o no la existencia de error inexcusable son impugnables en sede judicial, conforme al artículo 119 del COFJ.

De acuerdo a la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura,<sup>124</sup> en el periodo 2013 – 2017, los niveles de quejas, denuncias y oficios ingresados por error inexcusable son los siguientes:



<sup>124</sup> Ecuador, Consejo de la Judicatura, *Cuadro de exposición de la aplicación de la figura disciplinaria del error inexcusable previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial y su beneficio para la ciudadanía*, accedido 31 de marzo de 2018, [https://issuu.com/comisionjusticia/docs/presentaci\\_n\\_jalkh](https://issuu.com/comisionjusticia/docs/presentaci_n_jalkh).

## EXPEDIENTES TERMINADOS CON SANCIÓN DE ERROR INEXCUSABLE VS EXPEDIENTES INGRESADOS 2013 - 2017



Como se puede apreciar de los gráficos que anteceden, las causas de sanción administrativa, con relación a la totalidad de causas a nivel nacional es baja. La relación se fija en un porcentaje del 0,03% para el 2013, del 0,04 % para el 2014, del 0,03 % para el 2015, del 0,05 % para el 2016 y del 0,012 % para el 2017. Respecto a los expedientes disciplinarios administrativos iniciados dentro del mismo periodo con relación a los sancionados, se han obtenido los siguientes resultados: el 17,4 % para el 2013, el 8,6 % para el 2014, el 6,4 % para el 2015, el 2,7% para el 2016 y el 1,4 % para el 2017. Con relación al índice de jueces destituidos por error inexcusable frente al total de jueces a nivel nacional, los resultados son los siguientes: el 3,7 % para el 2013, el 2,4 % para el 2014, el 1,2 % para el 2015, el 0,6 % para el 2016 y el 0,2 % para el 2017.

Si bien el Consejo de la Judicatura procedió a rendir cuentas mostrando cifras correspondientes al error inexcusable, hasta el momento no se ha podido verificar la calidad de las resoluciones que se han adoptado en cada una de ellas para poder realizar, más que un control cuantitativo de los procedimientos administrativos instaurados y resueltos, un control cualitativo de las resoluciones que se han dictado.

Las estadísticas anteriormente señaladas son sustento del presente estudio, entendiendo que el objetivo de la rendición de cuenta del Consejo de la Judicatura solamente se limitó a determinar estadísticamente la aplicación del error inexcusable, careciendo de estudios en cuanto al parámetro cualitativo de las decisiones; esto nos ayuda a entender que, para el órgano administrativo, fue más importante determinar la

cantidad sobre la calidad, siendo pues, este último parámetro fundamental para realizar un análisis del grado de afección de la independencia judicial.

Esto es importante, pues como lo señala Sebastián Linares,<sup>125</sup> existen algunos métodos que sirven para medir la independencia judicial, como la comparación estadística entre resultados y categorías de sujetos, pero adicionalmente a ello también debería considerarse otros métodos que nos permitan medir con mayor precisión, y no en un ámbito general, la afectación que podría ocasionar a la independencia judicial, aplicar la figura del error inexcusable, tales como la comparación del derecho con los argumentos jurídicos, la comparación de los valores del juez con las sentencias, la constatación de violaciones al debido proceso, medición de instituciones, medición de percepciones, entre otras.

El valorar un grado cuantitativo por sobre el cualitativo no nos permite brindar pautas para lograr realizar una medición objetiva y adecuada de cómo se ha venido aplicando administrativamente la figura del error inexcusable, pues como lo ha señalado Gustavo Jalkh Röben,<sup>126</sup> existen ciertos parámetros y principios mínimos que deben ser observados, tales como: la ausencia de interferencias indebidas en la toma de decisiones judiciales, las cuales solo pueden ser revisadas por otra autoridad judicial competente y aquellos parámetros únicamente pueden ser observados atendiendo a la calidad de las resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura para determinar la existencia del error inexcusable.

Entra en el debate si el error inexcusable debería encontrarse establecida como causal sancionatoria administrativa.

En ese sentido, el análisis debe partir de lo que establece el artículo 115 del COFJ que prohíbe la admisión en materia administrativa de las quejas o denuncias en las que se impugnen criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales.

---

<sup>125</sup> Sebastián Linares, *La independencia judicial: conceptualización y medición*, en *Independencia judicial en América Latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?* (Bogotá: Publicaciones ILSA, Germán Burgos Silva ed., 2002), 158.

<sup>126</sup> Gustavo Jalkh Röben, *Intervención sobre la construcción de un estándar regional de independencia judicial y acceso a la justicia*, en *el marco del encuentro de presidentes de Cortes Supremas de Justicia de la región andina*, en *Independencia judicial y acceso a la justicia: Memoras del encuentro de Cortes Supremas de Justicia región andina* (Quito: Projusticia, 2007), 39

En efecto, como señala Vicente Guzmán Fluja,<sup>127</sup> en la función jurisdiccional, con frecuencia, el juzgador puede adoptar varias soluciones a una misma cuestión, todas ellas parecidamente justas y adecuadas al conflicto planteado, sin que la opción por una de ellas suponga inexactitud o error respecto de las demás; por ello es que se encuentra vedado al órgano administrativo aceptar denuncias que refieran a la interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales, los cuales pueden ser revisados únicamente en virtud de los recursos procesales previstos por las leyes tales como el recurso de apelación, de hecho, extraordinario de casación y aún la acción extraordinaria de protección (en errores con afectación de tal naturaleza), para que dichos yerros puedan ser corregidos por el tribunal superior o la Corte Constitucional, según corresponda.

Por ello es que uno de los requisitos necesarios para la configuración del error inexcusable, es que se vulnere un mandato o hecho claro, expreso e inconfundible, por ende, si es un caso que puede tener una o más respuestas correctas, la decisión no podría subsumirse en cualquiera de esas decisiones o interpretaciones correctas.

Ahora bien, también se debe partir señalando que la sentencia es un acto jurisdiccional por excelencia; acto por el cual el administrador de justicia legitima su intervención ante las partes procesales y la sociedad. Este tipo de actuaciones solo pueden ser revisadas en razón de los recursos previstos por la legislación, pues como lo señala Francisco Távara Córdova: “[E]l juez puede equivocarse, pero desde luego, el remedio para esa patología no puede venir por la línea disciplinaria, sino a través de los recursos o de la exigencia de otra forma de responsabilidad, reservando lo disciplinario a su estricto campo”, por ello Piedad González Granda, citada por Francisco Távara Córdova, señala que la potestad disciplinaria no puede expandirse para sancionar las diferencias entre tribunales sobre la interpretación y la aplicación del ordenamiento jurídico”.<sup>128</sup>

Para ello existen organismos, dentro de la misma actividad jurisdiccional, que pueden desarrollar un sistema de control de la actividad jurisdiccional mediante los recursos procesales o a través del control de legalidad ejercido por la Corte Nacional de

---

<sup>127</sup> Guzmán Fluja, “El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia”, 154.

<sup>128</sup> Francisco Távara Córdova, *Intervención sobre el afianzamiento de la independencia interna de la Función Judicial, en el marco del encuentro de presidentes de Cortes Supremas de Justicia de la Región Andina, en Independencia judicial y acceso a la justicia: Memoras del encuentro de Cortes Supremas de Justicia región andina* (Quito: Projusticia, 2007), 87.

Justicia, e inclusive, el control constitucional –y de convencionalidad– ejercido por la Corte Constitucional.

En virtud del mecanismo del sistema de recursos procesales, el artículo 131 numeral 3 del COFJ faculta a los tribunales declarar la incorrección en la tramitación o el error inexcusable, y así debe procederse ya que, como lo indica Cristina Víquez Cerdas, la sola posibilidad de que en vía de régimen disciplinario se pueda valorar el acierto o desacierto de una resolución judicial concreta, invade la esfera jurisdiccional y atenta contra la independencia judicial.<sup>129</sup>

Súmese a ello la carencia de seguridad jurídica que produce la indeterminación legal del error inexcusable lo que permite que la valoración sea aplicada con demasiada discreción por parte del órgano administrativo, quienes desde el periodo de su renovación, luego de la Asamblea Constituyente a la fecha, ha dictaminado varios de los criterios para su determinación; criterios que van desde la aplicación indebida, la falta de aplicación y la errónea interpretación<sup>130</sup> de preceptos jurídicos<sup>131</sup> hasta aquel concepto equivocado de actuar abiertamente en contra de una norma jurídica legítima que contiene una obligación clara, inequívoca y prescriptiva,<sup>132</sup> que concluye en la revisión de criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales.<sup>133</sup>

---

<sup>129</sup> Víquez Cerdas, “La independencia judicial y su relación con la responsabilidad disciplinaria y civil del juez”, en *Justicia, libertad y derechos humanos: ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante*, 1191.

<sup>130</sup> Como se describe en líneas superiores, no cualquier error puede ser considerado como inexcusable, sino que este debe ser palmario, patente, craso, que comprometa a la idoneidad y capacidad profesional del administrador de justicia, es decir, se trata de errores sobre aspectos básicos e indispensables para el ejercicio del cargo, sin los cuales una persona no podría ejercitar una designación frente a la administración de justicia; caso contrario, bajo este criterio, todos los procedimientos que son aceptados mediante el recurso extraordinario de casación, que contiene las mismas causales descritas, caería dentro del ámbito de error inexcusable; con ello se crearía un estado de default de la administración de justicia.

<sup>131</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. *MOT-142-UCD-012-PM* en cuya parte medular del numeral sexto establece: “De los hechos analizados, se concluye que los servidores judiciales sumariados cometieron error inexcusable, al aplicar indebidamente, disposiciones expresas de la Ley Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es (sic) establece la improcedencia de la acción de la Acción de Protección cuando el acto administrativo, presuntamente violatorio de un derecho, puede ser impugnado por la vía judicial”; criterio que analiza el ámbito netamente jurisdiccional de control constitucional, revisa una decisión judicial e impone un criterio desacertado respecto de la naturaleza de la acción de protección.

<sup>132</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. *D-0979-UCD-2013-PM*.

<sup>133</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. *MOT-620-UCD-011-PM*, en el cual se señala en la parte final del numeral sexto: “Consecuentemente, la acción de protección propuesta por el señor Vicente Zumba Cabrera era improcedente, y en este sentido debió declarársela, pues la vía constitucional tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, y no la impugnación de un acto administrativo que pretende la restitución del cargo de un servidor público”, desconociendo de esa forma la soberanía e independencia judicial e incluso la naturaleza jurídica de la acción de protección.

Sobre este tema, la Corte Suprema ha señalado que:

El error judicial no dimana de la simple revocación o anulación de las resoluciones judiciales, debiéndose entender por error judicial toda decisión o resolución, dictada por los órganos de la Administración de Justicia, injusta o equivocada, pero el yerro debe ser palmario, patente, manifiesto, indudable e incontestable, de un modo objetivo y no tan sólo a ojos de quienes fueron parte o se sienten perjudicados, pudiéndose agregar que dicho error puede ser fáctico o jurídico, teniendo indebidamente probados determinados hechos o desconociendo o ignorando los preceptos legales o las normas aplicables o incurriendo en flagrante equivocación al aplicarlas o interpretarlas.<sup>134</sup>

Como lo indica Cristina Víquez, no todas las infracciones a la ley pueden dar lugar a una responsabilidad porque se trata del campo de acción del juez, cuyo producto siempre es una síntesis de la labor de interpretación de los hechos debatidos y de las normas que gobiernan el caso, tanto en su letra, como en su espíritu, de manera que por tratarse de una labor intelectual dirigida a desentrañar sentidos que pueden ser diversos según los parámetros de interpretación de los hechos y de las normas, porque nadie puede reputarse dueño de la verdad absoluta, de ahí la necesidad de reconocer un margen razonable de discrecionalidad.<sup>135</sup>

Jorge Malem Seña indica, adicionalmente, que el juez debe saber que no existe un único concepto de verdad y que en el acervo cultural existen una serie de categorías y conceptos controvertidos cuyo uso dependerá en parte para la decisión que se debe adoptar.<sup>136</sup>

Por lo anteriormente anotado, el error inexcusable si bien debe constar como causal sancionatoria, pues el sistema tiene como objetivo asegurar la eficiencia y corrección de las funciones del Poder Judicial para garantizar una correcta administración de justicia<sup>137</sup>, no debería establecerse mediante un procedimiento administrativo ya que invade la esfera jurisdiccional.

---

<sup>134</sup> Ecuador, Corte Suprema de Justicia, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil, Registro Oficial No. 700 del 8 de noviembre de 2002. Juicio No. 158-2002. Sentencia del 29 de julio de 2002, a las 11h00.

<sup>135</sup> Víquez Cerda, “La independencia judicial y su relación con la responsabilidad disciplinaria y civil del juez”, en *Justicia, libertad y derechos humanos: ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante*, 1201.

<sup>136</sup> Jorge Malem Seña, *Los saberes del juez*, en *El error judicial. La formación de los jueces* (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009), 105.

<sup>137</sup> Víquez Cerda, “La independencia judicial y su relación con la responsabilidad disciplinaria y civil del juez”, en *Justicia, libertad y derechos humanos: ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante*, 1184.

## ¿QUIÉN DEBERÍA ESTABLECER LA EXISTENCIA DEL ERROR INEXCUSABLE?

En líneas anteriores se ha señalado que, legalmente, es potestad del Pleno del Consejo de la Judicatura el determinar la existencia o no del error inexcusable de manera administrativa, previo el debido proceso que se debe seguir; esto por expreso mandato del segundo inciso del artículo 178 de la CRE que establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y que entre las competencias establecidas en los numerales 3 y 5 del artículo 181 de la CRE están los de dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción y el velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.

De igual forma, en los artículo 254 y 264, numeral 14, del COFJ se ratifica nuevamente dichas atribuciones; por lo que, en el presente estudio no está en discusión quién es el órgano legal que está facultado para conocer e imponer las sanciones a los administradores de justicia, sino qué organismo debería tener dichas facultades en razón de los argumentos revisados *ut supra*.

También se ha revisado que existen legislaciones que se asemejan al caso ecuatoriano que dan potestad exclusiva de juzgamiento del error inexcusable al órgano administrativo de la Función Judicial, empero, es necesario plantearnos en el presente estudio a quién debería corresponder el establecimiento de la existencia del error inexcusable, ya que como se ha observado en líneas anteriores, en procedimiento administrativo se han estado revisando actuaciones jurisdiccionales, sobre las cuales el Pleno del Consejo de la Judicatura no tiene competencia.

El órgano administrativo no puede ni debe realizar análisis o revisiones respecto de la actividad jurisdiccional, pues, a más del hecho que aquello debe ser resuelto a través del sistema de recursos de impugnación de las decisiones jurisdiccionales, el órgano administrativo, atendiendo al texto del artículo 180 del CRE, no está formado necesariamente por abogados; lo pueden conformar profesionales de ramas académicas afines a las funciones propias del Consejo.

Ello explica el motivo por el cual algunos de sus miembros ostentan otros títulos distintos al de abogado. Es el caso del Ing. Paulo Rodríguez Noriega quien presidió el Consejo de la Judicatura de transición o del Ing. Alejandro Subía Sandoval, ex Vocal

del Consejo de la Judicatura. Esto es importante, pues si el error inexcusable es un concepto indeterminado de difícil conceptualización y noción, una persona que carece de formación jurídica tendría aún menos elementos de juicio para poder desentrañar, en un caso en concreto, un asunto tan complejo e importante como el error inexcusable.

Creo que, a efectos de solventar la indeterminación del error inexcusable se debe continuar con la línea de desarrollo de los parámetros que actualmente se están revisando por parte de la Asamblea Nacional, en el cual, según el informe de segundo debate, se ha dotado al error inexcusable de un concepto y los elementos que integran su composición, lo cual permite armonizar con la seguridad jurídica, principalmente con la exigencia que el ordenamiento jurídico preexistente tenga un mayor grado de precisión (*lex certa*) a efectos que el administrado pueda proveer su conducta.

Ahora bien, cabe advertir lo que establece el artículo 115<sup>138</sup> del COFJ. Dicha norma establece que no se puede admitir a trámite la queja o denuncia cuando en ella se impugnaren criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales, siendo en estos casos el organismo competente para evaluación del desempeño de la actividad del administrador de justicia, la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura.

Cabe anotar, asimismo, que –de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 numeral 5 de la CRE- si existiese conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes por un mismo hecho, se debe aplicar la menos rigurosa y que en caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. Conforme lo determina el artículo 108 numeral 8 del COFJ, el no haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias y en general el haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la CRE es sancionado con la suspensión del ejercicio de la función de juez; que resulta una sanción menos gravosa (más favorable) para el caso del error inexcusable (al menos para aquellos errores que se produzcan del quebrantamiento de las normas citadas).

---

<sup>138</sup> Art. 115.- DENEGACIÓN DE TRAMITE.- No se admitirá a trámite la queja o denuncia si los hechos materia de ella no constituyeren infracción disciplinaria, o si hubiese prescrito la acción. Asimismo, no se admitirá a trámite la queja o la denuncia si en ella se impugnare criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales. En estos casos la queja o denuncia se enviará a la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura para efectos de la evaluación de desempeño.



También debe recordarse el parámetro establecido por el Pleno del Consejo de la Judicatura respecto del error inexcusable, que determina que: el error inexcusable se comete en un acto formal y materialmente jurisdiccional y que este se produce cuando se actúe de forma abiertamente contraria a una norma jurídica legítima que contiene una obligación clara, inequívoca y prescriptiva, sin motivar el desacato de dicha norma.<sup>139</sup>

Sin embargo, es de observar que el caso referido, así como tantos otros sustanciados tanto por el Consejo de la Judicatura de Transición como el Consejo actual, demuestran la inobservancia e inoperancia que tiene el error inexcusable en sede administrativa; así, podemos detectar varios casos en los cuales la determinación y sanción del error inexcusable cae en la esfera de la revisión de las decisiones jurisdiccionales por parte del órgano administrativo, lo cual lesiona el principio de independencia judicial.

Ejemplo de ello es el expediente disciplinario No. MOT-142-UCD-012-PM en el cual se declara el error inexcusable por causa de lo siguiente: “los servidores judiciales sumariados cometieron error inexcusable, al aplicar indebidamente, disposiciones expresas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional [...] (sic) establece la improcedencia de la Acción de Protección cuando el acto administrativo, presuntamente violatorio de un derecho, puede ser impugnado por la vía judicial”, desconociendo la naturaleza de la acción de protección e incluso el precedente jurisprudencial<sup>140</sup> emitido con efectos *erga omnes* por parte de la Corte Constitucional que en su parte correspondiente señala:

3.3. La Corte Constitucional, tal como lo ha dicho en ocasiones anteriores, determina que los servidores públicos, en este caso particular, juezas y jueces del país, cuando conocen de garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la denominación de juezas y jueces constitucionales, hecho que deviene en que el órgano encargado de sancionar, garantizando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, por deficiencias en la sustanciación de las causas, sea la Corte Constitucional. 3.4. La Corte Constitucional en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República, determina que las juezas y jueces constitucionales que sin fundamento constitucional y legal expidan sentencias dentro de garantías jurisdiccionales, que vuelvan inejecutables las sentencias resueltas previamente, podrán ser destituidos de su cargo por parte de la Corte Constitucional, garantizándoles el derecho al debido proceso.

Precedente Constitucional

La jurisprudencia vinculante desarrollada en esta sentencia constituye precedente constitucional y tiene efectos *erga omnes*.

<sup>139</sup> Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM. Véase también los expedientes disciplinarios No. MOT-086-UCD-012-MPE y MOT-620-UCD-011-PM

<sup>140</sup> Ecuador, Corte Constitucional, Registro Oficial No. 351, Segundo Suplemento, 29 de diciembre de 2010, Sentencia No. 001-10-PJO-CC, caso No. 00999-09-JP.

Cabe resaltar que la sentencia emitida por la Corte Constitucional data del 28 de diciembre de 2010 y que el Consejo de la Judicatura de Transición adoptó la decisión antes señalada el 14 de marzo de 2012, arrogándose –aparentemente– atribuciones que, en virtud del precedente jurisprudencial antes señalado, corresponden a la Corte Constitucional.

Ahora bien, como se había señalado oportunamente, el artículo 131 numeral 3 del COFJ concede la facultad a los tribunales, en razón de los recursos previstos en la legislación, de revisar las actuaciones jurisdiccionales y declarar la incorrección de la tramitación y el error inexcusable; empero, este procedimiento, como se señaló, no parece adecuado en razón de que el pronunciamiento se lo realiza en un procedimiento dentro del cual el funcionario judicial acusado no es parte, por lo que, no puede configurarse un debido proceso que concluya con una sanción, pues no es posible el ejercicio del derecho a la defensa.

Eventualmente, un tribunal de alzada para determinar la existencia de un error inexcusable, además de revisar las actuaciones procesales para resolver el caso en concreto puesto en su conocimiento, también tendrá que dedicarse a resolver si el juez que emitió la decisión se ha constituido como infractor o no del error inexcusable, con todos los requerimientos y tratamientos especiales que supone dicha sanción, es decir, tendrá que analizar si existieron circunstancias externas e internas que provocaron la actuación, como por ejemplo: la carga procesal, la reincidencia, la experiencia, el sujeto que provoca la actuación, la aptitud de un juez normal de acuerdo con las características propias de la cultura jurídica, los principios y conocimientos básicos del derecho, si se trata de un mandato o hecho claro, expreso e inconfundible, en fin, si de la multiplicidad de criterios se concluye la ocurrencia del error inexcusable, considerando además que, de acuerdo con la CRE, el juez dejó de ser un aplicador mecánico de la ley y es un garante activo de los derechos de los ciudadanos,<sup>141</sup> entre otros.

---

<sup>141</sup> Entonces, bajo este esquema un caso podrá tener varias soluciones cuantas formas de argumentación lógica y racionales disponga el interlocutor en la administración de la justicia, pues como lo señala Juan Antonio García Amado: “Ni los principios pesan en sí ni las circunstancias del caso pesan en sí; el respectivo peso lo damos nosotros, al sopesarlos. Y en el peso que les asignamos podemos coincidir o no. En los casos muy evidentes, a tenor de los valores compartidos o del núcleo fundamental de los mismos, coincidiremos; en los casos difíciles y que, por tanto, requerían balanza de más precisión, discreparemos. Juan Antonio García Amado, *Un debate sobre ponderación* (Lima-Bogotá: Palestra, Temis, 2016), 52 y 53.

Deberá tomarse en consideración también que, la finalidad del juez como garante de derechos, según lo señala Carlo Guarnieri,<sup>142</sup> es la de defender los derechos de los individuos frente a posibles abusos de las instituciones político-representativas y que los márgenes de creatividad con las que el juez debe interpretar los valores y principios son amplios y no restrictivos, y aquello conlleva a reconocer la existencia de una discrecionalidad de la actividad judicial;<sup>143</sup> claro está, que dicha discrecionalidad conlleva un control de legitimación a través de la racionalidad de las decisiones que deben, en todo momento encontrarse apegadas a la Constitución y las leyes.

Es criterio de este autor, finalmente, que la facultad de determinación del error inexcusable, dada sus características, debería atribuirse –mediante un cambio en nuestra legislación- a un tribunal colegiado jurisdiccional que debería ser conformado por el más alto órgano de cierre de la justicia ordinaria, en este caso: la Corte Nacional de Justicia, en donde el Consejo de la Judicatura, como órgano de control, sea participe en ejercicio de sus facultades de inspección, es decir, de vigilancia y control, pudiendo, a través de dicho órgano, establecer los medios de control adecuados y necesarios para que, en caso de verificarse el cumplimiento de infracciones por parte de los servidores judiciales que impliquen su destitución, puedan presentar las acusaciones correspondientes como órgano titular de la acción, sin perjuicio de las acusaciones particulares que se presente, para que dicho tribunal colegiado jurisdiccional, determinado por ley, previo el debido proceso, con la votación de la mayoría simple de sus miembros, determine la existencia o no del error inexcusable.

## **¿EXISTE PROPORCIONALIDAD ENTRE LA INFRACCIÓN Y LA SANCIÓN POR ERROR INEXCUSABLE?**

La CRE establece en su artículo 76 numeral 6 que,

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: [...] 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

---

<sup>142</sup> Carlo Guarnieri y Patrizia Pederzoli, *Los jueces y la política: poder judicial y democracia* (España: Taurus, 1999), 70

<sup>143</sup> *Ibid.*, 135.

En sentido amplio, la proporcionalidad exige que exista una debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicable, pudiendo ser revisable, por mandato constitucional, las conductas que no guardan relación con los bienes jurídicos protegidos por la norma sancionadora, ni con la determinación de las sanciones aplicables.<sup>144</sup>

Considerando que, de acuerdo con el artículo 11 numeral 6 de la CRE, todos los principios son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, es decir: no existen derechos absolutos, tanto la ponderación como la proporcionalidad se vuelven herramientas importantes al momento de realizar análisis e interpretaciones de los mismos.

El artículo 76 numeral 6 de la CRE establece, como parte del debido proceso, a la proporcionalidad y establece que:

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: [...] 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

Luigi Ferrajoli explica el principio de proporcionalidad de la siguiente manera:

El hecho de que entre pena y delito no exista ninguna relación natural no excluye que la primera deba ser adecuada al segundo en alguna medida. Al contrario, precisamente el carácter convencional y legal del nexo retributivo que liga la sanción al ilícito penal exige que la elección de la calidad y la cantidad de una se realice por el legislador y por el juez en relación con la naturaleza y la gravedad del otro. El principio de proporcionalidad expresado en la antigua máxima *ponea debet commensurari delicto* es en suma un corolario de los principios de legalidad y de retributividad, que tienen estos su fundamento lógico y axiológico.<sup>145</sup>

El principio de proporcionalidad, según Carlos Bernal Pulido, está provisto de una estructura argumentativa mediante la cual es viable efectuar esta delimitación de la forma más racional posible,<sup>146</sup> sin embargo, esta fórmula lleva un amplio margen de subjetividad en la catalogación del grado de intervención.<sup>147</sup> Existen algunas variantes que se deben tomar en consideración a efectos de poder realizar un análisis de proporcionalidad, que consisten en la interdicción del exceso, la prohibición de

<sup>144</sup> Álvarez Arias, “Responsabilidad disciplinaria de los jueces”, 113.

<sup>145</sup> Luigi Ferrajoli, *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal* (Madrid, Trotta, 2009), 397 y 398.

<sup>146</sup> Carlos Bernal Pulido, *El principio de proporcionalidad de la legislación penal*, en *Argumentación jurídica el juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad* (México D.F., Editorial Porrúa S.A., 2011), 207.

<sup>147</sup> *Ibíd.*, 212.

protección deficiente y el margen de acción legislativo; cuando Bernal Pulido se refiere a la primera de ellas señala que los derechos de defensa, libertad en general y los demás derechos fundamentales prohíben que las medidas que adopte el legislador sean excesivas, la segunda variante se toma desde el punto de vista de la satisfacción de las exigencias impuestas por los derechos de protección y la última que refiere al ejercicio de las competencias del legislador con suma prudencia e imponiéndose una razonable auto-restricción.<sup>148</sup>

Claro está que lo excesivo no puede ser determinado en abstracto, sino que en el caso en concreto.<sup>149</sup> Se trata, entonces, de la comparación de dos intensidades o grados, el de la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental. Empero, como lo señala el autor citado, mientras menos grave sea un delito; menos justificada estará la restricción intensa de la libertad, en razón de ello, sostiene el autor, es inconstitucional la ley que atribuya a un hecho punible menos grave una pena superior que a uno más lesivo.

Son tres los elementos del juicio de proporcionalidad:<sup>150</sup> **1) idoneidad o adecuación**, es decir que ésta sea susceptible de alcanzar el objetivo perseguido con ella: limitar el derecho fundamental como única forma para alcanzar un determinado propósito, el cual debe ser, además constitucionalmente legítimo. La medida debe ser funcionalmente idónea, es decir, debe servir para limitar el derecho por la razón que justifica la existencia del límite; **2) necesidad o intervención mínima** que consiste en una medida limitativa que debe ser necesaria e imprescindible para alcanzar el fin perseguido con el límite, pues no debe existir otro medio menos oneroso para lograrlo, es decir, el medio debe resultar el menos gravoso para alcanzar aquella finalidad;<sup>151</sup> y, **3) proporcionalidad en sentido estricto** que refiere a que debe guardar una relación razonable con el peso e importancia de los argumentos que hablan a favor de una mayor

---

<sup>148</sup>Ibíd., 207 a 217.

<sup>149</sup>Ibíd., 209.

<sup>150</sup> Carlos Bernal Pulido, *El principio de proporcionalidad de la legislación penal*, en *Argumentación jurídica el juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad* (México D.F., Editorial Porrúa S.A., 2011), 210 y 211.

<sup>151</sup> Ignacio Villaverde Menéndez, *La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad*, en *Argumentación jurídica: el juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad* (México D.F., Editorial Porrúa, S.A., 2011), 108 y 109.

y mejor protección del derecho afectado,<sup>152</sup> es decir, el grado de la intervención debe ser por lo menos equivalente al grado de afectación del derecho fundamental.

Ahora, para determinar los presupuestos de control mediante el principio de proporcionalidad respecto de las normas, según lo señala Gloria Lopera Mesa,<sup>153</sup> en primer lugar se debe determinar cuáles son los derechos fundamentales *prima facie* afectados, para luego examinar la legitimidad constitucional del fin perseguido; para ello se debe establecer cuál es el bien jurídico que el legislador busca proteger con su intervención y luego verificar si la protección no está prohibida.

Para ejecutar el examen de idoneidad señala que se debe proceder analizando la idoneidad de la norma de conducta verificando si la acción u omisión descrita en el tipo es susceptible de afectar al bien jurídico cuya tutela se pretende y también se debe determinar la idoneidad de la norma de sanción que exige establecer si la advertencia representa un medio para prevenir la realización de la conducta prohibida.

En cuanto a la necesidad, esta se produce mediante la comparación entre la medida enjuiciada y otros medio alternativos atendiendo a dos parámetros: su idoneidad para promover el fin legislativo y su menor lesividad con relación a los derechos fundamentales afectados por la intervención legislativa, para ello es imperioso determinar la necesidad de la norma de conducta, es decir, acreditar que no existe otra alternativa de tipificación que sea igualmente idónea para proteger el bien jurídico y al mismo tiempo menos lesiva para el derecho fundamental afectado por la prohibición, siendo que aquello puede consistir en la desregularización o plena liberalización de la conducta prohibida, o bien en la búsqueda de alternativas de tipificación que reduzcan el ámbito de lo prohibido. Este juicio debe orientarse a determinar si aquellas modalidades de regulación alternativa son más eficientes a través de mecanismos de merecimiento que refieren a la importancia del bien jurídico y la gravedad del ataque, y mecanismos de importancia que obligan a considerar la frecuencia de afectación del bien jurídico a través de la conducta incriminada. Así también, debe determinarse la necesidad de la norma de sanción a través de la búsqueda de penas alternativas que se configuren a través de dos fases: inicialmente deben buscar la existencia de otros

---

<sup>152</sup> Laura Clérigo, *El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por omisión o defecto en Argumentación jurídica: el juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad* (México D.F., Editorial Porrúa, S.A., 2011), 108 y 109.

<sup>153</sup> Gloria Lopera Mesa, *Principio de proporcionalidad y control constitucional de la leyes penales en Argumentación jurídica: el juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad* (México D.F., Editorial Porrúa, 2011), 159 a 174.

medios suficientemente aptos para proteger al bien jurídico y luego determinar la clase y cuantía de la sanción prevista por el legislador de modo que sea la mínima necesaria para cumplir con la finalidad preventiva.

Finalmente, la citada autora trata el tercer sub-principio: la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en una ponderación en la que toman parte los principios *iusfundamentales* afectados por la definición de la conducta prohibida y su correspondiente pena y, por otro lado, los principios que ordenan la protección de aquellos bienes jurídicos que respaldan la intervención legislativa.

En el tema del presente trabajo, frente a un caso en concreto, podrían llegar a colisionar el principio de independencia judicial que busca proteger que las decisiones judiciales sean tomadas únicamente con base de la Constitución y las leyes, frente al principio de responsabilidad que pretenden proteger la eficiente y correcta administración de justicia.

A lo largo del presente estudio se ha podido verificar que la conducta tipificada en el artículo 109 numeral 7 del COFJ, referente al error inexcusable, corresponde a un tipo de norma indeterminada y su descripción se encuentra indebidamente estructurada. No obstante, la infracción de la conducta correspondiente a una actuación con error inexcusable conlleva que, una vez declarada, la sanción sea la destitución del funcionario judicial.

A criterio de este autor, el error inexcusable, tal cual, como se lo ha venido concibiendo administrativamente por parte del Consejo de la Judicatura, rompe el esquema de la proporcionalidad. La sanción de destitución para un funcionario judicial es una medida drástica y de ultima *ratio* que, antes que referirse al análisis de las actuaciones jurisdiccionales, debería estar contemplada –como en efecto lo determina el artículo 109 del COFJ– para otro tipo de actuaciones u omisiones que sean dolosas como por ejemplo: la retención de procesos, la introducción extemporánea de documentos al expediente, el haber sido sancionado con pena privativa de libertad, el utilizar documentos falsos, entre otros.

El juez no debe más sometimiento que a la Constitución y a las leyes, de allí que, los magistrados y los jueces que se hallan en un nivel jurisdiccional superior no pueden darle instrucciones ni disposiciones acerca de cómo han de resolver las causas que están en su conocimiento salvo que se lo haga por intermedio de una norma legal o a través de resoluciones obligatorias. Santiago Andrade Ubidia señala que las instancias

administrativas pueden dar a los jueces disposiciones en el orden administrativo en asuntos como la utilización de los locales y demás recursos materiales, horarios, control de asistencia, etc., pero en ningún caso y por ningún concepto puede impartirles instrucciones acerca de la forma como han de cumplir con su labor jurisdiccional.<sup>154</sup>

El perseguir con pena de destitución los desaciertos intelectuales que cometa el administrador de justicia no es proporcional con el fin que busca proteger la norma pues, como se ha evidenciado en el presente estudio, dentro de un problema pueden existir varios criterios, todos de igual valía, por lo que, la medida de destitución puede servir como medida de coacción psicológica para imponer una determinada conducta de forma de pensar, lo que cortaría la creatividad del operador de justicia y por ende, la evolución del derecho.

Ahora bien, se debe considerar que la confluencia de sanciones disciplinarias con otro tipo de sanciones puede operar cuando las normas establecen varias sanciones para un mismo hecho, pretendiendo proteger distintos bienes jurídicos, o bien cuando dos normas de distinto género establecen diversas sanciones en protección de un mismo bien jurídico.<sup>155</sup>

Según Ramírez Gómez, no pueden aplicarse conjuntamente normas sancionadoras a una misma conducta cuando se trata de proteger un mismo bien jurídico, ya que esto supone sancionar doblemente, desde una perspectiva de defensa social, los mismos hechos.<sup>156</sup>

Adicionalmente a ello, se observa que existen otros medios adecuados, necesarios e idóneos que permiten al órgano de control proteger la eficiente y correcta administración de justicia a través del principio de responsabilidad; ejemplo de ello, es la prohibición contemplada en el artículo 108 numeral 8 del COFJ que, a más de contener características que engloban la protección de la eficiencia de las decisiones jurisdiccionales –causal que tampoco debería ser conocida por el órgano administrativo de la Función Judicial–, en aplicación del artículo 76 numeral 5 de la CRE, al existir un conflicto de sanciones diferentes por un mismo hecho, debería aplicar la menos rigurosa, estos es, la que contempla la sanción de suspensión, mecanismo que parecería

---

<sup>154</sup> Santiago Andrade Ubidia, “Independencia judicial y estado de derecho” en *Temas de derecho constitucional*, 296.

<sup>155</sup> Álvarez Arias, “Responsabilidad disciplinaria de los jueces”, 117.

<sup>156</sup> Ramírez Gómez, *El principio ne bis in idem* (Madrid: Marcial Pons, 2000), 126.



adecuado para corregir oportunamente los errores que se cometen dentro de las actividades jurisdiccionales.

La protección de la eficiente y correcta administración de justicia concluye –en nuestro sistema– en la determinación administrativa del error inexcusable. No obstante, también se encuentra protegida a través del derecho penal y el sistema de responsabilidad civil directa del funcionario judicial por lo que, existen otras medidas menos drásticas que protegen eficientemente la tutela del principio de responsabilidad y la correcta y eficiente administración de justicia.

### **¿EXISTE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL CUANDO SE SANCIONA EL ERROR INEXCUSABLE?**

El artículo 168 numeral 1 de la CRE, establece como uno de los principales principios de la administración de justicia: el goce de independencia interna y externa, proscribiendo la violación de dicho principio cuya sanción conlleva responsabilidad administrativa, civil y penal, de acuerdo con la ley.

En razón del bloque de constitucionalidad también es necesario señalar que la independencia judicial se encuentra protegida por instrumentos internacionales de derechos humanos; así la garantía de ser escuchado con las debidas garantías por un juez o tribunal independiente, imparcial y competente se encuentran descritas en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos de 1966, en las decisiones adoptadas por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, el artículo 40 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, en el artículo sexto de la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales de 1950, en el artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, entre otras.<sup>157</sup>

La independencia judicial para María Luz Martínez Alarcón, aparece como una categoría funcional que implica la ausencia de subordinación jurídica en el ejercicio de

---

<sup>157</sup> Alirio Abreu Burelli, *Normas internacionales y jurisprudencia sobre independencia judicial en La ciencia del derecho procesal constitucional: estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho* (México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008), 6 a 11.

la función jurisdiccional y, por tanto, la vertiente funcional de la separación de poderes, y el sometimiento del operador jurídico al Derecho y, como consecuencia de ello, la imparcialidad en el ejercicio de dicha función jurisdiccional. La *ratio*, nos señala Martínez Alarcón, de la independencia judicial es la imparcialidad, la cual se mide por el sometimiento del operador de justicia a las pautas jurídicas previamente establecidas para la resolución del caso en concreto o por la desvinculación de determinados factores que pueden asegurar su dependencia.<sup>158</sup>

Este principio es un requisito básico que tiene toda persona y es fundamento esencial de la justicia que debe impartir el Estado. Según Juan Montero Aroca, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones ha señalado que para determinar si un tribunal o juez es independiente se debe atender al modo de designación, duración del mandato de sus miembros y la existencia de medidas de protección en contra de presiones;<sup>159</sup> en cuanto a este último, se resalta que se empieza a ser o no independiente desde el momento mismo del nombramiento atendiendo al sistema de selección y todo el sistema conformado de la carrera judicial, por lo que la existencia de un estatuto o norma que le permita al ser juez independiente no asegura que efectivamente lo sea,<sup>160</sup> pues aquello finalmente dependerá de la carencia de coacciones externas e internas a las funciones del operador de justicia y hasta de la su ética y principios.

La independencia judicial, como lo reseña Enrique Tapia Witting, es el grado en el cual los jueces deciden, de acuerdo con sus propios conceptos y conocimientos, sobre las pruebas del derecho y de la justicia, libres de toda coerción, castigo o amenaza tanto de autoridades políticas como de particulares.<sup>161</sup>

German Burgos Silva entiende que la independencia judicial tiene una connotación fundamentalmente negativa que se traduce en la ausencia de injerencias en la labor de administrar justicia por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, las partes de un proceso, los actores sociales u otros organismos vinculados a la administración de

---

<sup>158</sup> Martínez Alarcón, “La independencia judicial”, 67.

<sup>159</sup> Juan Montero Aroca, *La imparcialidad judicial en el convenio europeo de Derechos Humanos*, en *La ciencia del derecho procesal constitucional: estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho* (México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008), 785.

<sup>160</sup> *Ibíd.*, 793.

<sup>161</sup> Enrique Tapia Witting, *Intervención sobre la carrera judicial como garantía de la independencia judicial, en el marco del encuentro de presidentes de Cortes Supremas de Justicia de la región andina*, en *Independencia judicial y acceso a la justicia: Memorias del encuentro de Cortes Supremas de Justicia región andina* (Quito: Projusticia, 2007), 70.

justicia,<sup>162</sup> en la cual existen dos dimensiones: una personal o subjetiva y la otra institucional.

También señala el mentado autor que, cuando el poder político está controlado por un solo partido o movimiento muy compacto y unido por un periodo prolongado de tiempo, aumenta la capacidad para introducir reformas que conlleven subordinación de los jueces.

Para Owen Fiss, un juez independiente es aquel que no se encuentra bajo la influencia o control de nadie, requiriéndose independencia de las partes en litigio, de la autonomía de la voluntad que concierne a las relaciones entre colegas y la insularidad política que requiere que la judicatura sea independiente de instituciones políticas y del público en general.

Terri Peretti señala que el respeto a la independencia judicial puede implicar que la parte que actualmente controla el gobierno sacrifique algunos de sus objetivos políticos, pero también implica que, cuando esa parte abandone el poder, sus oponentes enfrenten limitaciones similares.<sup>163</sup>

Sebastián Linares nos enseña que una condición de la independencia judicial es que no se ejerza poder sobre el juez por medio de sobornos, amenazas, coacción, uso de la fuerza, lealtades políticas o acciones fuera del marco de la ley. Sin embargo, como lo resalta Orlando Álvarez, el principio de independencia institucional del poder judicial con respecto a los demás poderes políticos no es absoluto ya que siempre existirá un margen de injerencia de los demás poderes en el poder judicial que se justifica por razones de cooperación institucional, por ejemplo, la lucha en contra del cometimiento de delitos, que resulta tolerado siempre y cuando no se desnaturalice ni distorsione la potestad jurisdiccional,<sup>164</sup> pues la justicia se ha convertido en un *partner* de los procesos políticos mediante la facultad de interpretar y criticar la constitucionalidad de las normas,<sup>165</sup> y de esa forma construir parte de la institucionalidad de acuerdo a sus

---

<sup>162</sup> German Burgos Silva, *¿Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos conceptuales*, en *Independencia judicial en América latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?* (Bogotá: Publicaciones ILSA, 2003), 13.

<sup>163</sup> Terri Peretti, *Una evolución normativa del conocimiento científico social sobre la independencia judicial en América latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?* (Bogotá: Publicaciones ILSA, 2003), 99.

<sup>164</sup> Álvarez Arias, "Responsabilidad disciplinaria de los jueces", 40.

<sup>165</sup> Carlo Guarnieri y Patrizia Pederzoli, *Los jueces y la política: poder judicial y democracia* (España: Taurus, 1999), 23.

competencias; esto último aplica siempre y cuando exista una verdadera independencia en sentido amplio y se ejerza plenamente la institucionalidad.

Para Sebastián Linares la independencia también goza de otras cualidades como una adecuada formación que permita al operador de justicia fundar su decisión en el Derecho (ley, jurisprudencia, doctrina, principios generales, etc.) y la ausencia de injerencias indebidas. Para que un juez sea independiente es necesario que esos otros agentes de la realización no ejerzan ciertos tipos de poder sobre el juez como sobornos, amenazas, coacción, manipulación ideológica o lealtades políticas.<sup>166</sup> Por lo que, la independencia es un concepto que se refiere al hecho de que un juez interprete el derecho (dimensión positiva), libre de injerencias de las partes, de otros jueces, del gobierno, de la sociedad civil, entre otros, y sin sesgos subjetivos o lealtades políticas preconcebidas (dimensión negativa).<sup>167</sup>

German Burgos señala que la creación de los Consejos de la Judicatura en sus distintas modalidades no ha tenido el impacto esperado; buena parte de ellos han sido objeto de clientelismo político y judicial que les ha dificultado tener la fortaleza y capacidad técnica para desarrollar sus funciones y los ha sumido en un proceso de burocratización,<sup>168</sup> manifestación que corrobora Margert Popkin quién señala que en la práctica muchas veces los Consejos de la Judicatura han reflejado la misma politización que debían ayudar a reducir, creando nueva burocracia y, en general, sin cumplir con las expectativas.<sup>169</sup>

Si hacemos un examen histórico de los últimos diez años a la fecha de los antecedentes laborales de los miembros del actual Consejo de la Judicatura, vamos a encontrar que casi la totalidad de los miembros han estado vinculados a la política y en especial al gobierno de turno lo que de por sí, genera una gran desconfianza con relación a la independencia judicial.

Margaret Popkin establece como ejemplo la conformación que tiene el Consejo de la Judicatura de El Salvador que se encuentra compuesto por seis miembros, ninguno

---

<sup>166</sup> Sebastián Linares, *La independencia judicial: conceptualización y medición en Independencia judicial en América latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?* (Bogotá: Publicaciones ILSA, 2003), 114.

<sup>167</sup> *Ibíd.*, 129.

<sup>168</sup> German Burgos Silva, *¿Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos conceptuales*, en *Independencia judicial en América latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?* (Bogotá: Publicaciones ILSA, 2003), 26.

<sup>169</sup> Margaret Popkin, *Iniciativas para mejorar la independencia judicial en América Latina: una perspectiva comparativa en Independencia judicial en América latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?* (Bogotá: Publicaciones ILSA, 2003), 173.

de ellos del poder judicial, ni ejecutivo, ni legislativo sino representantes de la sociedad civil, conformado por la comunidad académica y la profesión legal;<sup>170</sup> a ello podríamos incluir otros requisitos como no haber pertenecido a partido o movimiento político, entre otros.

Popkin también indica que muchas veces los sistemas disciplinarios han sido utilizados por razones políticas o para castigar a los jueces independientes que promulgan decisiones contrarias a los puntos de vista de sus jefes en la jerarquía judicial,<sup>171</sup> también señala que los sistemas de selección supuestamente objetivos y basados en el mérito obviamente pueden estar sujetos a la manipulación ya que algunas calificaciones destacadas (como por ejemplo entrevistas) no se pueden medir con facilidad y siempre hay muchas oportunidades para ejercer influencia.<sup>172</sup>

En Ecuador, se ha podido verificar que la calificación del error inexcusable por parte del organismo administrativo, en varios casos, ha llevado a determinar la revisión de las decisiones jurisdiccionales, lo cual innegablemente— invade la esfera del principio de independencia judicial y a través de dichas resoluciones administrativas ha creado un ambiente de coacción a los administradores de justicia ya que, al no coincidir con el criterio del órgano administrativo frente a una determinada actividad jurisdiccional podrían ser destituidos.

Uno de los casos relevantes que se ha tomado para el presente estudio es el sustanciado por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura en contra de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, ex juez y ex conjuez de la Corte Nacional de Justicia, en el cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó la existencia de error inexcusable a causa de resolver un recurso de casación con base a una causal distinta a la propuesta por el recurrente y porque se valoró (presuntamente) la prueba como si se tratase del antiguo recurso de tercera instancia. Sin entrar a analizar a fondo el asunto, los hechos acusados por el Pleno del Consejo de la Judicatura caen en el plano de la revisión de la actuación jurisdiccional pues, señalan como una de las causales para que se haya configurado el error inexcusable la interpretación que dio dicho Tribunal sobre la procedencia o no de una causal de casación, sin considerar, por ejemplo, que existen muchos otros casos en los que la Corte Nacional y la ex Corte Suprema de Justicia, en materia tributaria, fueron mucho más laxos al momento de

---

<sup>170</sup> *Ibíd.*

<sup>171</sup> *Ibíd.*, 187.

<sup>172</sup> *Ibíd.*, 185.

resolver los recursos de casación planteados. Llama la atención de especial forma el modo mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió revisar una actuación jurisdiccional, revisando incluso su motivación, más aun cuando ni siquiera se observa si se trata o no de un criterio de interpretación de normas, tampoco se trata de un error que fue cometido con reincidencia o si existen otras tantas soluciones al planteamiento del problema, entre otros requisitos dispuestos para la configuración del error inexcusable.

También se deben advertir aquellas actuaciones que parece se encuentran fuera de las potestades y competencias del Consejo de la Judicatura. En los expedientes disciplinarios 201-UCD-011-MAC (DG-500-2010-M) y MOT-642-UCD-011-PM (DPLR-013-2011-JJ), el Consejo de la Judicatura dictó medidas cautelares permanentes de carácter constitucional en franca violación de algunos precedentes vinculantes dictados por el máximo órgano constitucional de la República.<sup>173</sup>

También existen casos en los cuales el Consejo de la Judicatura impuso su criterio por sobre el criterio jurisdiccional, afectando de esa forma la independencia judicial. Esto sucedió dentro del expediente disciplinario MOT-142-UCD-012-PM en el que señaló: “De los hechos analizados, se concluye que los servidores judiciales sumariados cometieron un error inexcusable, al aplicar indebidamente, disposiciones expresas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (sic) establece la improcedencia de la Acción de Protección cuando un acto administrativo presuntamente violatorio de un derecho, puede ser impugnado por la vía judicial”, desconociendo así la naturaleza jurídica de la acción de protección y la independencia judicial al ser notorio el criterio que se pretendía imponer mediante dicha decisión, esto es, evitar la admisión y concesión de las acciones de protección que se proponían en contra de las decisiones del Estado. Caso similar fue tratado dentro del expediente disciplinario No. MOT-126-SNCD-2014-AB y A-0661-UCD-012-PRS.

De esa forma, con pretexto de la aplicación del error inexcusable, el Consejo de la Judicatura ha revisado las actuaciones jurisdiccionales de los operadores de justicia, provocando con ello una afectación a la esfera del principio de independencia judicial; adicionalmente a ello, la figura del error inexcusable, en la forma en la que ha venido siendo aplicada por el Consejo de la Judicatura, también ha configurado un mecanismo

---

<sup>173</sup> Ecuador, Corte Constitucional, Registro Oficial No. 351, Segundo Suplemento del 29 de diciembre de 2010, Sentencia No. 001-10-PJO-CC, caso No. 00999-09-JP.

de coacción psicológica a los administradores de justicia, pues frente a una medida tan drástica como la destitución, se pretenden imponer los criterios, no por la vía de precedentes vinculantes, sino por vía administrativa a través de los criterios del órgano administrativo de la Función Judicial, a pesar de que el Consejo de la Judicatura niega enfáticamente aquello;<sup>174</sup> no obstante, en caso de desacato de tales criterios del órgano administrativo lo más probable es que, se sancione al operador de justicia con la destitución por error inexcusable.<sup>175</sup>

Lo más adecuado, a la luz de todo lo analizado en el presente trabajo es que se readequé y restructure la figura del error inexcusable, tanto en cuanto al órgano que debe tener competencia para su sanción, como a sus elementos configurativos. La necesidad de readecuación es tal que el propio Consejo de la Judicatura en su presentación titulada “Aplicación de la figura disciplinaria del error inexcusable previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial y su beneficio para la ciudadanía”<sup>176</sup>, realizó una propuesta de reforma al artículo que regula el error inexcusable y propuso lo siguiente:

Artículo...- Error Inexcusable.- Se entiende por error inexcusable la notoria ineptitud o descuido del servidor judicial, quien al momento de cumplir sus funciones inobserva un mandato legal expreso, separándose de toda interpretación admisible e imposible de justificar, de acuerdo con las reglas de la lógica y la argumentación jurídica.

Actualmente, la Asamblea Nacional se encuentra tramitando el informe para segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial<sup>177</sup>, dentro del cual se ha contemplado algunos cambios a las figuras estudiadas en el presente trabajo, tales como la definición y distinción del error judicial del error

<sup>174</sup> Marieta Campaña, “Jalkh: En el sistema disciplinario el que la hace la paga”, Expreso, 10 de agosto de 2017, accedido 10 de agosto de 2017, [http://www.expreso.ec/actualidad/justicia-jueces-odebrecht-corrupcion-YC1613427#.WYzw\\_Es5rfs.twitter](http://www.expreso.ec/actualidad/justicia-jueces-odebrecht-corrupcion-YC1613427#.WYzw_Es5rfs.twitter).

<sup>175</sup> Esto se comprende aún más a partir del criterio que emite Ramiro García Falconí al señalar que el juez como ser humano también está sujeto a cometer tantos errores susceptibles de influencias internas como externas, y que, debido a sus condiciones, cuida su trabajo por ser su sustento para, en la mayor parte de casos, manejar un estándar de vida adecuado. Véase : Ramiro García Falconí, “Los jueces”, El Universo, 27 de septiembre de 2016, accedido 27 de septiembre de 2016, <https://www.eluniverso.com/opinion/2016/09/27/nota/5824417/jueces>.

<sup>176</sup> Ecuador, Consejo de la Judicatura, *Cuadro de exposición de la aplicación de la figura disciplinaria del error inexcusable previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial y su beneficio para la ciudadanía*, accedido 01 de abril de 2018, [https://issuu.com/comisionjusticia/docs/presentaci\\_n\\_jalkh](https://issuu.com/comisionjusticia/docs/presentaci_n_jalkh)

<sup>177</sup> Ecuador, Asamblea Nacional, Comisión de Justicia y Estructura del Estado, *Informe para segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial* en Oficio 251-CEPJEE-P-2018 de 31 de julio de 2018, accedido 02 de enero de 2019, <http://pplless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c0c58be-c1c9-4cdb-982a-fc837205117b/Informe%20Segundo%20Debate%20Tr.%20336076.pdf>

inexcusable y dentro de éste último, para el caso de los jueces, la necesidad de su declaratoria judicial previa, un procedimiento especial, efectos y, finalmente, la posibilidad de una audiencia para su resolución.

En cuanto al error judicial, el artículo 3 de la mencionada Ley Orgánica Reformatoria contempla el siguiente contenido:

El error judicial se produce por error de hecho o de derecho en la administración de justicia o en el despacho judicial. Las acciones por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso, podrán interponerse, de manera independiente, en cualquier materia.

Referente al error inexcusable se amplía sus características: para el caso de los jueces, se requiere de una declaratoria judicial previa, se establece un procedimiento especial para su determinación, se establece los efectos de su declaratoria y se abre la posibilidad de solicitar audiencia para su determinación; así, los artículos 5, 7, 8 y 9 de la Ley Reformatoria antes señalada, establecen lo siguiente:

Artículo 5.- Sustitúyase el número 7 del artículo 109 por el siguiente texto:

“7. Intervenir en las causas que debe actuar, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Se entiende por error inexcusable, la notoria ineptitud o descuido del servidor judicial, quién al momento de cumplir sus funciones inobserva un mandato legal expreso, cometiendo una equivocación crasa de derecho, al separarse de toda interpretación admisible e imposible de justificar jurídicamente de acuerdo con las reglas de la lógica y la argumentación jurídica”.

Artículo 7.- Agregase al final del artículo 109, los siguientes párrafos:

“En el caso de la infracción de error inexcusable contenida en el numeral 7 de este artículo, únicamente en el caso de jueces, deberá ser declarada previamente y de forma motivada, por un juez superior, a petición de parte o de oficio, dentro de los recursos establecidos en la ley de cada materia, quién remitirá dicha declaración al Consejo de la Judicatura para que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales proceda con el trámite administrativo correspondiente, garantizando los derechos constitucionales de los servidores judiciales. Para el caso de los demás funcionarios judiciales no se requerirá dicha declaración previa.

De manera excepcional, en los procesos en los que no sea posible declarar de manera previa el error inexcusable a través de los recursos correspondientes, el justiciable presentará una solicitud para que sea conocida y resuelta por la o el juez superior en el término de treinta días.

En el caso de las actuaciones y resoluciones de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, lo conocerá y resolverá la o el Presidente de dicha Corte en el término previsto en el inciso anterior.



Artículo 8.- Agregase después del artículo 109, el siguiente artículo:

“Artículo 109.A.- Efectos de la declaración del error inexcusable. – La resolución del Consejo de la Judicatura en la que se declare la existencia de error inexcusable no afecta lo resuelto jurisdiccionalmente, puesto que esta solo involucra la responsabilidad administrativa del servidor judicial”

Artículo 9.- Agregase después del artículo 114, el siguiente artículo:

Artículo 114. A.- Audiencia.– Cuando el sumario se haya iniciado por error inexcusable, por petición de (sic) sumariado se realizará una audiencia pública, en cualquier momento, hasta antes de dictar resolución, en la que el peticionario expondrá sus argumentos.”

Como se observa, precisamente lo que persigue la propuesta de reforma es, en efecto, determinar y enfocar con mayor detalle la figura del error inexcusable, pero también pretende adecuar la norma a los criterios ya vertidos en los sumarios administrativos por parte del Consejo de la Judicatura. Cabe advertir en todo caso que, esta reforma –lamentablemente– no evita la revisión de la actividad jurisdiccional.

Las propuestas de reforma antes indicadas son bienvenidas, pues tienden a dar una mejor comprensión y claridad sobre el tema, al delimitar los elementos del error inexcusable; no obstante, en el fondo no implica un cambio trascendental.

Las posibles reformas no implican un cambio profundo en el análisis, ya que mantiene al error inexcusable como una *equivocación crasa de derecho* que, de acuerdo a lo que se desarrolla dentro del mismo artículo 5 de la Ley Reformativa mencionada, consiste en *separarse de toda interpretación admisible e imposible de justificar jurídicamente de acuerdo con las reglas de la lógica y la argumentación jurídica*, pues conforme se ha señalado en este estudio, se encuentra fuera de la esfera de competencia del órgano administrativo por tratarse de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales, conforme lo establece el artículo 115 del COFJ.

En este caso podría considerarse una salvedad que se constituiría siempre y cuando el error de derecho se lo cometa sobre una norma de la cual no quepa la posibilidad de más de una interpretación, caso contrario se correría el riesgo de imponer criterios.

En el caso de la determinación del error inexcusable para los jueces, la reforma pretende añadir un requisito de procedibilidad: la declaratoria previa de un juez superior. Esto refuerza la tesis en la que solo un juez de alzada o de corte de cierre

puede determinar la existencia del error inexcusable, tal como lo determina el artículo 131 numeral 3 del COFJ. A más de ello, se establece que en caso de no poderse determinar el error inexcusable en virtud de los diversos recursos, el justiciable pueda presentar una solicitud para que el superior pueda resolver si existe o no error inexcusable en el término de treinta días.

Dadas así las cosas, entenderíamos que ahora los tribunales de alzada, a más de dedicarse a resolver los casos concretos –fáciles o difíciles- puestos a su conocimiento, también tendrán la delicada y compleja función de determinar si los jueces, cuyas decisiones han sido recurridas mediante un recurso, han adecuado su conducta a los requisitos necesarios para que se configure el error inexcusable.

A más de eso, se instituye una especie de juez de jueces, desconociendo si las decisiones –falibles- son o no vinculantes para el órgano administrativo de la Función Judicial quien, finalmente terminará sancionado el error inexcusable.

Se indica en la propuesta de reforma que, de manera excepcional y solamente cuando no se pueda determinar de forma previa el error inexcusable mediante los recursos procesales, el justiciable presentará una solicitud para que sea conocida y resuelta por el juez superior dentro del término de treinta días.

Es necesario se precise el objeto de dicha petición excepcional, pues no se establece un tiempo para su presentación; tampoco se establece ante quién debe ser presentada dicha solicitud, ni cómo debería conformarse el Tribunal o el Juez superior; tampoco se determina si se le otorga al acusado la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa o si se resuelve en mérito de los autos y en caso de ser este último supuesto, cómo el Juez superior determina la confluencia de requisitos para determinar el error inexcusable como la carga procesal, si se cometió por primera ocasión o si es una conducta reiterada, si el error incurrido se debe a factores internos o externos, entre otros.

Si bien el artículo 9 de la Ley Reformativa contempla la posibilidad de una audiencia, esta queda limitada únicamente para que lo pueda requerir el sumariado, es decir, dentro del procedimiento administrativo.

Ahora bien, por razones de debido proceso, derecho a la defensa, dedicación exclusiva al caso que deben resolver, requisitos de procedencia del error inexcusable y a causa de la diversidad de criterio, tampoco es conveniente que los tribunales de alzada

sean quienes declaren –en último término– la existencia de error inexcusable para que posteriormente sea juzgado por el órgano administrativo.

Si existiese la posibilidad de reformar esta figura, a fin de evitar una afección al principio de independencia judicial, se debería atribuir la determinación del error inexcusable a un tribunal colegiado jurisdiccional que debería ser designado por el más alto órgano de cierre de la justicia ordinaria, en este caso, la Corte Nacional de Justicia, en donde el Consejo de la Judicatura, como órgano de control, sea participe en ejercicio de sus facultades de inspección pudiendo, a través de dicho órgano, presentarse las acusaciones correspondientes para que dicho tribunal colegiado jurisdiccional, determinado por ley, previo al debido proceso, determine la existencia o no del error inexcusable; sin embargo, aquello implicaría una reforma constitucional. Eventualmente, ante la posibilidad del cometimiento de errores graves por parte de los administradores de justicia, vía reforma legal, se podría tomar una serie de correctivos, como en el caso es que los jueces superiores remitan declaren la incorrección y remitan un informe a la Unidad de Talento Humano para que procedan con la evaluación correspondiente.

Dada la trascendencia de la forma como se ha venido aplicando la figura del error inexcusable, en una eventual reforma, debería analizarse –tal como lo está realizando el actual Consejo de la Judicatura de Transición– la posibilidad de conformar la facultad de revisión de los expedientes y valore la posibilidad de disponer la restitución a los cargos de los funcionarios judiciales destituidos o, en su defecto, la compensación por la ilegal remoción con la consecuente declaratoria de repetición por los daños ocasionados en contra de los funcionarios que provocaron los mismos, aplicando lo que establece el artículo 11, numeral 9, de la CRE.

Además, en aplicación del principio de legalidad, debería configurarse el error inexcusable como un desacierto o equivoco injustificable, irrazonable e ilógico de un mandato normativo que tiene una sola interpretación o hecho claro e inconfundible que no es susceptible de subsumirse mediante interpretaciones racionales; por lo tanto, para que exista error inexcusable se deberían verificar los requisitos contemplados en las páginas 27 y 28 del presente estudio.

En conclusión, el presente estudio se enfoca y sustenta en tres propuestas finales:

La primera que tiene que ver con una reforma normativa, la segunda que tiene relación en cuanto la competencia del órgano para la determinación del error inexcusable y la tercera que tiene que ver con la modificación de la sanción.

En cuanto a la reforma normativa, es cierto que actualmente se encuentra en trámite -con informe para segundo debate- ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que pretende modificar la conceptualización del error inexcusable y darle una mayor precisión, pues como hemos podido observar -a través del presente estudio- el error inexcusable finalmente tiene una calificación valorativa, pretendiendo con la reforma antes enunciada, darle un contenido normativo y precisar su concepto y elementos; así, el mencionado proyecto establece al error inexcusable como *“la notoria ineptitud o descuido del servidor judicial, quién al momento de cumplir sus funciones inobserva un mandato legal expreso, cometiendo una equivocación crasa de derecho, al separarse de toda interpretación admisible e imposible de justificar jurídicamente de acuerdo con las reglas de la lógica y la argumentación jurídica”*

Si bien, este proyecto pretende dar una definición más precisa, existen ciertas puntualizaciones que se deben realizar: nuevamente se hace referencia a una equivocación de derecho, dejando de lado las equivocaciones que se puedan cometer sobre los hechos; ahora bien, al tratarse de errores de derecho, el análisis del órgano administrativo, en cuanto a este tipo de errores se encuentran excluidas por disposición expresa del artículo 115 del COFJ, claro que en el mismo proyecto se prevé la posibilidad que, para el caso de los jueces, estos errores sean declarados previamente por un juez superior, lo cual conlleva otras interrogantes: ¿los jueces superiores se convertirían en juez de jueces?, ¿los jueces superiores son infalibles?, ¿los criterios son vinculantes?, ¿qué recurso se puede interponer ante la decisión que adopte el juez superior?, ¿existen las debidas garantías para que el juez acusado pueda presentar su descargo ante los jueces superiores?.

Estas reformas normativas son positivas, pues introducen conceptos más claros para poder entender de forma más adecuada la concepción del error inexcusable, sus elementos y alcances, e incluso establecen la posibilidad, en lo referente a los jueces, que exista una declaración judicial previa, aun así, estas reformas dejan algunos vacíos en cuanto al debido proceso.

Referente a la competencia del órgano, la ley reformativa anteriormente descrita determina la viabilidad del error inexcusable, para el caso de los jueces, previa

declaración judicial por un juez superior; no obstante, el procedimiento se continúa instituyendo ante el órgano administrativo, pues la declaración judicial previa se lo concibe como un requisito de admisibilidad, ya que la reforma establece que dicho juez superior “remitirá dicha declaración al Consejo de la Judicatura para que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales proceda con el trámite administrativo correspondiente, garantizando los derechos constitucionales de los servidores judiciales”.

En cuanto a la competencia, si bien es loable el trabajo de pretender establecer un requisito previo de admisibilidad, a través de una declaratoria judicial previa, esto no es suficiente a efectos de garantizar el cumplimiento de las mínimas garantías constitucionales, tanto del debido proceso, como el resguardo de la independencia judicial, pues finalmente, quien terminará decidiendo si ha existido o no error inexcusable será el mismo órgano administrativo de la Función Judicial.

A mi criterio, creo necesario re institucionalizar a la administración de justicia vía reforma constitucional, impidiendo el ejercicio de la potestad del órgano administrativo para determinar el error inexcusable e incluso otras figuras que para su aplicación implican la vulneración de la independencia judicial, como en este último caso es la sanción establecida en el artículo 108 numeral 8 del COFJ. La reforma constitucional propuesta consiste en la atribución al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, tal símil sucede en el caso de Costa Rica, para determinar los errores de los demás jueces, en el cual, el Consejo de la Judicatura actúe en un rol de inspección y control con facultad para presentar denuncias de las irregularidades cometidas por los funcionarios (en los casos previstos para el error inexcusable y el haber violado derechos fundamentales establecidos en los artículos 75, 76 y 77 de la CRE) y, a través de un debido proceso, dicho órgano colegiado, integrado por los jueces de la más alta corte de cierre, con las dos terceras partes de sus miembros pueda adoptar la decisión que corresponda.

Si bien, el juez no puede administrar justicia de forma arbitraria y anárquica, existen otros mecanismos para evaluar el desempeño de los funcionarios judiciales: uno de ellos sería a través de la Unidad de Recursos Humanos, pues es evidente que si a un operador de justicia se equivoca constantemente en sus decisiones, mediante los tribunales de alzada se puede detectar dichas falencias, a efectos que se proceda con los correctivos necesarios.

Finalmente, en cuanto a la modificación de la sanción, debe aprovecharse la oportunidad para que, realizando un análisis constitucional, sistemático y contextual de nuestro ordenamiento jurídico se pueda concluir que la sanción de destitución, tal cual como actualmente se encuentra concebida es una medida muy drástica e incluso pugna con lo que establece el artículo 76 numeral 5 de la CRE, en la cual se establece como garantía que: “En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”

Esto, por cuanto es evidente que el COFJ contempla dos tipos de sanciones para conductas que, se podría decir, tienen símiles circunstancias; la primera de ellas es la causal descrita en el numeral 8 del artículo 108 del COFJ y la segunda la contempladas en el numeral 7 del artículo 109 del COFJ, en el primero de ellos se describe, como causal de suspensión, el no haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, mientras que en el segundo artículo antes enunciado, se establece como causal de destitución el intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.

Ahora bien, el actuar con error inexcusable también implica el vulnerar los derechos y garantías contempladas en los artículos 75, 76 y 77 de la CRE, pues las garantías contempladas en dichas normas constitucionales son pilares fundamentales del estado constitucional de derechos y del debido proceso, pues finalmente si concebimos al error inexcusable como un error craso que demuestra ignorancia supina al momento de aplicar una determinada norma expresa, el quebrantamiento de dicha norma implica también el vulnerar las garantías constitucionales anteriormente señaladas.

Como lo señala Cristina Víquez Cerdas<sup>178</sup>, la sola posibilidad que vía régimen disciplinario se puedan revisar actuaciones jurisdiccionales implica una violación a la independencia judicial; más aun cuando si dicha revisión implica la destitución del juez, defensor público o fiscal.

---

<sup>178</sup> Víquez Cerda, “La independencia judicial y su relación con la responsabilidad disciplinaria y civil del juez”, en *Justicia, libertad y derechos humanos: ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante*, 1191.

Es por ello que, ante la posibilidad que el órgano administrativo mediante sus resoluciones pueda, a más de causar mella en la independencia judicial, tratar de imponer sus criterios en la administración de justicia, es necesario plantear la modificación de la sanción que debe ser la de suspensión, lo cual incluso implicará que, las falencias detectadas puedan ser corregidas, mediante un proceso de instrucción de conocimientos.





## CONCLUSIONES

- Los seres humanos somos perfectibles y por más dominio de conocimientos que se tenga, por nuestra naturaleza, somos propensos a producir errores en nuestras actividades, los cuales pueden ser directa o indirectamente causados sobre una situación en concreto. Cicerón consideraba que todos los hombres pueden equivocarse, pero sólo un insensato puede perseverar en el error (*cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare*);<sup>179</sup> en efecto, errar es propio de cualquier persona, dado que no somos ajenos a cometer equivocaciones en cualquier actuación. Este tipo de errores pueden ser palmarios y evidentes, en mayor o menor grado, por causas directas o indirectas, culpables o negligentes.
- Al ser el error inexcusable un concepto normativo indeterminado debería reformarse la norma que lo contempla y dotarlo de características y especificidades para, de esa forma, evitar cualquier interpretación arbitraria.
- La competencia respecto de la determinación del error inexcusable debería asignarse por ley a un tribunal colegiado jurisdiccional que debería ser determinado por el más alto órgano de cierre de la justicia ordinaria, en este caso, la Corte Nacional de Justicia, en donde el Consejo de la Judicatura, como órgano de control, sea partícipe en ejercicio de sus facultades de inspección pudiendo, a través de dicho órgano, presentarse las acusaciones correspondientes para que dicho tribunal colegiado jurisdiccional previo el debido proceso, determine la existencia o no de error inexcusable.
- Para evitar la propensión a cometer errores, debe instruirse a los operadores de justicia con cursos permanentes de formación lógica, conocimiento de la realidad jurídica, conocimiento de lenguaje, capacitación continua, entre otros.

---

<sup>179</sup> Marco Tulio Cicerón, *Filípicas* (Barcelona: Planeta S.A., 1994), 179.

- Debería promoverse un sistema con jueces especializados y evitar los jueces multicompetentes, ya que debido a la amplitud del conocimiento que se requiere, estos últimos tienen mayor propensión a cometer errores.
- Debido a su propia naturaleza, el error, una vez identificado, puede ser corregido. En razón de ello, el legislador ha previsto una serie de mecanismos legales para la corrección de los errores en los que se puede incurrir. Al hablar de la administración de justicia, esta corrección se la realiza mediante los recursos y demás medios de impugnación que ofrece el sistema judicial.
- Si el Consejo de la Judicatura ha configurado al error inexcusable como un acto jurisdiccional que contraría un mandato normativo claro e inequívoco, y si nos referimos a una actividad eminentemente jurisdiccional como es la sentencia, estaríamos frente a una infracción grave, por lo que, en aplicación del principio de favorabilidad contenido en el artículo 76 numeral 5 de la CRE, debe aplicársele la sanción contenida en el artículo 108 numeral 8 del COFJ que es menos gravosa que la destitución.
- El problema de la independencia judicial, más que un problema normativo es un problema práctico y estructural; tenemos normas que prohíben y sancionan la vulneración de la independencia judicial, más aún hemos sido testigos presencial que esta puede ser abiertamente trasgredida si el poder toma el control de todo el Estado (a final de cuentas, la Constitución nace para proteger a los ciudadanos del abuso del poder y no al contrario). Es un problema práctico y estructural porque depende de la moral de los jueces y de la falta de una adecuada institucionalidad, así como de los procedimientos de cooptación y preparación de jueces, y de los diferentes servidores judiciales; si bien el error inexcusable es un óbice para el ejercicio de una adecuada administración de justicia por el temor que esta figura infunde a la administración de justicia en general, tampoco puede concluirse ciegamente que la función judicial es un poder anárquico que puede resolver asuntos relativos a la justicia sin tener responsabilidad por sus actuaciones.

## BIBLIOGRAFÍA

Abreu Burelli, Alirio, Normas internacionales y jurisprudencia sobre independencia judicial en La ciencia del derecho procesal constitucional: estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

Andrade Ubidia, Santiago, La casación civil en el Ecuador. Quito: Universidad Andina “Simón Bolívar” Ecuador, 2005.

—. La Función Judicial en la vigente Constitución de la República, en La nueva Constitución del Ecuador: Estado, derechos e instituciones. Quito: Corporación Editora Nacional & Universidad Andina Simón Bolívar, 2009.

—. La Constitución política y la administración de justicia, en La estructura constitucional del Estado ecuatoriano. Quito: Corporación Editora Nacional, 2004.

—. Independencia judicial y estado de derecho en Temas de derecho constitucional. Quito, Ediciones Legales EDLE S.A., 2003.

Aguirre Guzmán, Vanesa, La administración de justicia en Ecuador, 2012 (<http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4108/1/Aguirre,%20V.La%20administracion.pdf>)

Álvarez Arias, Orlando, Responsabilidad disciplinaria de los jueces. Caracas: Asociación Cooperativa Jurídicos ORFRE, R.L., 2014.

Bernal Pulido, Carlos, El principio de proporcionalidad de la legislación penal, en Argumentación jurídica el juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad. México D.F., Editorial Porrúa S.A., 2011.

Bueno Arus, Francisco, La responsabilidad estatal por errores judiciales en Estudios penales y penitenciarios. Madrid: Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, 1981.

Burgos Silva, German, ¿Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos conceptuales, en *Independencia judicial en América latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?*. Bogotá: Publicaciones ILSA, 2003.

Cabanellas de Torres, Guillermo, *Diccionario jurídico elemental*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 1993.

Campaña, Marieta, “Jalkh: En el sistema disciplinario el que la hace la paga”, *Expreso*, 10 de agosto de 2017, [http://www.expreso.ec/actualidad/justicia-jueces-odebrecht-corrupcion-YC1613427#.WYzw\\_Es5rfs.twitter](http://www.expreso.ec/actualidad/justicia-jueces-odebrecht-corrupcion-YC1613427#.WYzw_Es5rfs.twitter).

Cicerón, Marco Tulio, *Filípicas*. Barcelona: Planeta S.A., 1994.

Clérigo, Laura, *El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por omisión o defecto en Argumentación jurídica: el juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad*. México D.F., Editorial Porrúa, S.A., 2011.

Colombia, *Diario Oficial*. Año CXXXVII No. 44.699 del 5 de febrero de 2002. <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/2045451/LEY+734+DE+2002+PDF.pdf/c33e734efaf749d180bef370dd827009;jsessionid=62ADAF9833F6D170142B0761CE3DF6C3.worker4?version=12>.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-998/04. En [http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-998-04.htm#\\_ftn7](http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-998-04.htm#_ftn7)

Constitución de la República del Ecuador [2008], en *Registro Oficial*, No. 449 (20 octubre de 2008)

Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Apitz y otros vs Venezuela*, Sentencia de fondo, apartado 34.

Costa Rica, *Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica*. Ley Publicada en la *Gaceta* No. 124 del 1 de julio de 1993.

<<http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4565/cr-podjudicial.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>

Devis Echandía, Hernando, Tratado de Derecho Procesal. Bogotá: Themis, 1961.

Diccionario de la Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, (<http://dle.rae.es/?id=G47B9qL>).

Ecuador, Asamblea Nacional, Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Informe para segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial en Oficio 251-CEPJEE-P-2018 de 31 de julio de 2018, (<http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c0c58bec1c9-4cdb982afc837205117b/Informe%20Segundo%20Debate%20Tr.%20336076.pdf>.)

Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial [2009], en Registro Oficial, Suplemento, No. 544 (09 de marzo de 2009).

Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Registro Oficial, Suplemento 544 de 09 de marzo de 2009.

Ecuador, Código Orgánico General de Procesos, Registro Oficial, Suplemento 506 del 22 de mayo de 2015.

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial, Suplemento 180 del 10 de febrero de 2014.

Ecuador Consejo de la Judicatura, ¡Cumplimos! Rendición de cuentas julio 2011 – enero 2013, Quito, 26 de enero de 2013, 11.

Ecuador, Consejo de la Judicatura, cuadro de exposición de la aplicación de la figura disciplinaria del error inexcusable previsto en el Código Orgánico de la Función

Judicial y su beneficio para la ciudadanía. 26 de septiembre de 2017. En [https://issuu.com/comisionjusticia/docs/presentaci\\_\\_n\\_jalkh](https://issuu.com/comisionjusticia/docs/presentaci__n_jalkh).

Ecuador Consejo Nacional Electoral, Resultados del referéndum y consulta popular 2011, Registro Oficial 490 Suplemento 1, de 13 de julio de 2011 <<http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/baselegal/Consulta%20Popular%20y%20Referendum.PDF>>

Ecuador, Corte Constitucional, Sentencia C-252/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz A.V. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis. ([http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-998-04.htm#\\_ftn7](http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-998-04.htm#_ftn7)).

Ecuador, Corte Constitucional. Sentencia No. 0034-09-SEP-CC de 9 de diciembre de 2009; Sentencia 0004-13-SEP-CC de 21 de marzo de 2013. Véase en: (<https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/004-13-SEP-CC.pdf>).

Ecuador, Corte Constitucional, Sentencia No. 214-12-SEP-CC, Registro Oficial, Suplemento 743 de 11 de julio de 2012.

Ecuador, Corte Constitucional, Registro Oficial No. 351, Segundo Suplemento del 29 de diciembre de 2010, Sentencia No. 001-10-PJO-CC, caso No. 00999-09-JP.

Ecuador, Corte Suprema de Justicia, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil, Registro Oficial No. 700 del 8 de noviembre de 2002. Juicio No. 158-2002. Sentencia del 29 de julio de 2002, a las 11h00.

Ecuador, Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, resolución 301, proceso No. 633-95, del 20 de mayo de 1999. R.O. No. 225 del 16 de agosto de 1999.

Ecuador, Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, resolución 568, proceso No. 109-98 del 08 de noviembre de 1999. R.O. No. 349 de 29 de diciembre de 1999.

Ecuador, Corte Suprema de Justicia. Registro Oficial 182 del 02 de Octubre de 2003.

Ecuador, Ley Orgánica de la Función Judicial, Decreto Supremo 891, Registro Oficial 636 del 11 de septiembre de 1974

Ecuador, Ley Reformativa al Código Orgánico de la Función Judicial, Registro Oficial, Suplemento 490 del 13 de julio de 2011.

Ecuador, Ley No. 20 Reformativa a la Constitución Política de la República, Registro Oficial. Suplemento 93 del 21 de diciembre de 1992.

Ecuador, Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, Resolución 029-2015 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura y publicada en el Registro Oficial, Suplemento 455 del 10 de marzo de 2015.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario MOT-642-UCD-011-PM (DPLR-013-2011-JJ), Quito, 27 de octubre de 2011, las 18h20.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente No. MOT-702-UCD-012-MAC del 07 de marzo de 2013).

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente No. MOT-702-UCD-012-MAC del 07 de marzo de 2013).

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM. Quito, 20 de diciembre de 2013, a las 11h01.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-142-UCD-012-PM. Quito, 14 de marzo de 2012, a las 17h36. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0142P.pdf>) Fecha de revisión: 09.10.2016.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-620-UCD-011-PM. Portoviejo 27 de marzo de 2012, a las 16h11. Véase también en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0620P.pdf>) Fecha de revisión: 09.10.2016.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-046-UCD-012-MEP. Quito, 21 de marzo de 2012, las 13h20. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0046P.pdf>). Fecha de revisión: 09.10.2016.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-146-UCD-012-PM. Quito, 14 de marzo de 2012, las 17h38. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0146P.pdf>). Fecha de revisión: 09.10.2016.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-179-UCD-012-MEP. Quito, 21 de marzo de 2012, las 18h05. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0179P.pdf>). Fecha de revisión: 09.10.2016.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-316-UCD—011-PM (DPRL—014-10-AR). Quito, 26 de agosto de 2011, las 13h55. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0316P.pdf>). Fecha de revisión: 09.10.2016.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM. Quito, 20 de diciembre de 2013, a las 11h01.



Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-193-UCD-010-CS (OF-05-2010). Quito, 18 de agosto de 2011, a las 13h08. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2010-0193P.pdf>).

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-515-UCD-011-MAC (001-DPN-CJ011). Quito, 25 de enero de 2012, las 18h20. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0515P.pdf>).

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-642-UCD-011-PM (DPRL—013-2011-JJ). Quito, 27 de octubre de 2011, las 18h20. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0642P.pdf>). Fecha de revisión: 09.10.2016.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. A-556-UCD-011-PM (DG-570-2010-M). Guayaquil, 9 de febrero de 2012, a las 14h25. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0556A.pdf>). Fecha revisión 09.10.2016.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. MOT-763-UCD-011-NA (OF-DG-361-2011-M). Quito, 20 de diciembre de 2011, las 18h55. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0763P.pdf>). Fecha de revisión: 09.10.2016.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. A-557-UCD-11-MAC (DPM-114-2010). Quito, 18 de octubre de 2011, 9h45. Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0557A.pdf>).

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. A-320-UCD-011-PM (OF-DG-105-2011-S). Véase en: (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0320A.pdf>).

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. MOT-086-UCD-012-MEP. Portoviejo, 27 de marzo de 2012, las 16h08. Véase en (<http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0086P.pdf>).

Ecuador, Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM, Quito, 20 de diciembre de 2013.

Ecuador, Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. MOT-086-UCD-012-MEP. Quito, 27 de marzo de 2012.

Ecuador, Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM, MOT-620-UCD-011-PM.

Ecuador, Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. MOT-620-UCD-011-PM.

Ecuador, Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. 201-UCD-011-MAC (DG-500-2010-M).

Ecuador, Consejo de la Judicatura, expediente disciplinario No MOT-193-UCD-O10-CD (OF-05-2010); Expediente Disciplinario No. MOT-515-UCD-011-MAC (001-DPN-CJ-011); Expediente Disciplinario No. MOT-620-UCD-011-PM.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. MOT-142-UCD-012-PM.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. D-0979-UCD-2013-PM.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. MOT-620-UCD-011-PM,

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM. Véase también los expedientes disciplinarios No. MOT-086-UCD-012-MPE y MOT-620-UCD-011-PM.

España, Ley 6/1985, Ley Orgánica del Poder Judicial, Jefatura del Estado, No. 157, del 2 de julio de 1985. <https://www.uv.es/ivasp/LOPJ>.

Ezquiaga Ganuzas, Javier, Aciertos y fallos judiciales en El error judicial. La formación de los jueces. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009.

Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid, Trotta, 2009.

García Amado, Juan Antonio, Un debate sobre ponderación. Lima-Bogotá: Palestra, Temis, 2016.

García Falconí, Ramiro, *Los jueces. El Comercio. 27 de septiembre de 2016. En* <https://www.eluniverso.com/opinion/2016/09/27/nota/5824417/jueces>.

Garzón Baltasar et al., *Informe final de la Veeduría Internacional para la Reforma de la Función Judicial del Ecuador, Quito, 2012* (<http://www.cpccs.gob.ec/docs/estadoveeduría/28-4.pdf>).

Gómez, Ramírez, El principio ne bis in ídem. Madrid: Marcial Pons, 2000.

Guarnieri, Carlo y Pederzoli, Patrizia, Los jueces y la política: poder judicial y democracia. España: Taurus, 1999.

Guzmán Fluja, Vicente, El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1994.

Hernández Terán, Miguel, La tutela judicial efectiva como instrumento esencial de la democracia. Guayaquil: Offset Graba, 2005.

Hernández Martín, Valeriano, El error judicial, procedimiento para su declaración e indemnización. Madrid: Civitas, 1994.

Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación. Buenos Aires: Librería Editora Platense S.R.L., 2da edición, 1997.

Jalhk Röben, Gustavo, Intervención sobre la construcción de un estándar regional de independencia judicial y acceso a la justicia, en el marco del encuentro de presidentes de Cortes Supremas de Justicia de la región andina, en Independencia judicial y acceso a la justicia: Memoras del encuentro de Cortes Supremas de Justicia región andina. Quito: Projusticia, 2007.

Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, trad. Eduardo García Máynez, 1988.

Linares, Sebastián, La independencia judicial: conceptualización y medición, en Independencia judicial en América Latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?. Bogotá: Publicaciones ILSA, Germán Burgos Silva ed., 2002.

Lopera Mesa, Gloria, Principio de proporcionalidad y control constitucional de la leyes penales en Argumentación jurídica: el juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad. México D.F., Editorial Porrúa, 2011.

Malem Seña, Jorge; Ezquiaga Ganuzas, Javier y Ibañez, Andrés Perfecto, El error judicial. La formación de los jueces. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009.

Martínez Alarcón, María Luz, La independencia judicial. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004.

Marroquín Zaleta, Jaime, El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa. México D.F.: Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera edición, 2001. (<http://www.corteidh.or.cr/tablas/20518.pdf>).

México, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995. <  
[http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5\\_mex\\_ane\\_4.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_mex_ane_4.pdf)>.

Montero Aroca, Juan, Ensayos de derecho procesal. Barcelona: Bosch, 1988.

—. La imparcialidad judicial en el convenio europeo de Derechos Humanos, en La ciencia del derecho procesal constitucional: estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

Oliva Blásquez, Francisco, La responsabilidad civil de los jueces y magistrados por ignorancia inexcusable, (Barcelona: Revista para el análisis de Derecho, 2010), 10. Véase en: ([http://www.indret.com/pdf/763\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/763_es.pdf)).

Pásara, Luis, La independencia judicial en la reformar de la justicia ecuatoriana (en: [http://www.dplf.org/sites/default/files/indjud\\_ecuador\\_resumenejecutivo\\_esp.pdf](http://www.dplf.org/sites/default/files/indjud_ecuador_resumenejecutivo_esp.pdf)).

Peretti, Terri, Una evolución normativa del conocimiento científico social sobre la independencia judicial en Independencia judicial en América latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Bogotá: Publicaciones ILSA, 2003.

Popkin, Margaret, Iniciativas para mejorar la independencia judicial en América Latina: una perspectiva comparativa en Independencia judicial en América latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?. Bogotá: Publicaciones ILSA, 2003.

Santos Briz, Jaime, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, título XXIV, artículos 1887 a 1929 del Código civil. Madrid: Ed. de Derecho Reunidas, Dir. Manuel Albaladejo, 1984.

Tapia Witting, Enrique, Intervención sobre la carrera judicial como garantía de la independencia judicial, en el marco del encuentro de presidentes de Cortes Supremas de Justicia de la región andina, en Independencia judicial y acceso a la justicia: Memoras del encuentro de Cortes Supremas de Justicia región andina. Quito: Projusticia, 2007.

Távora Córdova, Francisco, Intervención sobre el afianzamiento de la independencia interna de la Función Judicial, en el marco del encuentro de presidentes de Cortes Supremas de Justicia de la Región Andina, en Independencia judicial y acceso a la justicia: Memoras del encuentro de Cortes Supremas de Justicia región andina. Quito: Projusticia, 2007.

Villaverde Menéndez, Ignacio, La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad, en Argumentación jurídica: el juicio de ponderación y el principio de proporcionalidad. México D.F., Editorial Porrúa, S.A., 2011.

Viquez Cerdas, Cristina, La independencia judicial y su relación con la responsabilidad disciplinaria y civil del juez, en Justicia, libertad y derechos humanos, Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2003.

# ANEXOS

Quito D.M., a 24 de abril del 2015

Of. No. 0037-CCSC.SC-2015



TRÁMITE EXTERNO:  
SOL. CÍVIL  
RACON. SOC. L.  
FECHA DE RECEPCIÓN:  
NÚMERO:  
NÚM. DOCUMENTO:  
SISTEMA DE REGISTRO:

04-007-2015-03190  
04-007-2015-03190-0001  
04  
04-007-2015-03190  
04-007-2015-03190  
04-007-2015-03190  
04-007-2015-03190

Señor Doctor

Gustavo JalkRöben

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA**

Su Despacho.

Asunto: Copia Certificada de Resoluciones

De mi consideración:


Muy comedidamente solicito, se sirva disponer que, a través de funcionario competente a su cargo, se me confieran copias certificadas de todas las resoluciones tomadas por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura en sanción de la causal de "error inexcusable" establecida en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial

Declaro que la documentación requerida será utilizada como sustento académico

Cualquier notificación a la presente solicitud la recibiré en la siguiente dirección de correo electrónico: **sergio@candoabogados.com**.

Del señor Presidente,

Atentamente,

  
Ab. Sergio Cando Shevchukova  
C.C.: 010650407-9



Quito D.M., 30 de abril de 2015


**ASUNTO:** En atención a su requerimiento

Abogado  
Sergio Cando Shevchukova  
Morona Santiago

Señor abogado:

En atención a su Oficio 0037-CCSC.SC-2015, de 24 de abril de 2015, recibido en esta Secretaría General en la misma fecha, me permito comunicar que la información requerida por usted es documentación de terceras personas, conforme la Constitución de la República del Ecuador, artículo 66, numeral 19; Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 6 y 19; Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, artículo 6, en tal virtud su petición no puede ser atendida.

Atentamente,



Dr. Andrés Segovia Salcedo  
Secretario General

Adjunto le remito:

RVC

**OBSERVACIÓN:** Esta Secretaría General del Consejo de la Judicatura no se responsabiliza por la veracidad y estado de los documentos presentados por la certificación por parte de las Unidades que lo custodian, y que poseen información al servicio de la administración, así como tampoco es una garantía de la autenticidad de los documentos presentados.

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN- Quito,  
a 18 de agosto de 2011. Las 13h08.

Expediente Disciplinario No. MOT-193-UCD-O10-CS (OF-05-2010)

Fecha de inicio del sumario administrativo de oficio: 25 de agosto de 2010 (Fs. 7)

Fecha de ingreso a la Unidad de Control Disciplinario: 22 de noviembre de 2010.

## 1.- ANTECEDENTES:

### 1.1. Las partes:

#### 1.1.1 Denunciante/ auto inicial:

La señora Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi, inició de oficio el sumario administrativo en contra del Dr. Marcelo Portilla Revelo, Juez del Juzgado Sexto de lo Civil del Carchi.

#### 1.1.2 Denunciado/ sumariado:

Dr. Marcelo Portilla Revelo, Juez del Juzgado Sexto de lo Civil de Carchi.

### 1.2. Motivo por el que conoce el expediente el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición:

El Pleno avoca conocimiento del expediente, en virtud del Informe motivado emitido por la Dña. Amanda Orbe Arellano, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Carchi, en el que considera que la conducta de el Juez Sumariado podría adscribirse en la infracción descrita en el artículo 108, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, consistente en la violación de una garantía constitucional, contenida en el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador.

## 2.- DENUNCIA

### 2.1. Resumen de la denuncia/ auto inicial.

En base a los oficios números 83 y 84-CPJC, de mayo 18 y 19 de 2010, con los que se han remitido copias certificadas de las sentencias dictadas por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en los juicios ordinarios de nulidad de sentencia números 138-C-2009, seguido por Fanny Carmela Córdova Irua en contra de Edelberto Tapia Grijalva; y, 139-C-2009, seguido por Segundo Prillán Huacanes Masruña y Carmela Córdova Irua en contra de Néilson Edelberto Tapia Grijalva, que en sus partes resolutivas, de conformidad con la facultad del Art. 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, "se declara la incorrección en la tramitación y error inexcusable" del Juez doctor Marcelo Portilla", con

fundamento en el Art. 114 *ibidem*, ha iniciado el presente sumario administrativo de oficio, a efectos de establecer la responsabilidad administrativa que pudieren existir en sus actuaciones.

## 2.2 Tipificación de la falta imputada y sanción que solicita el denunciante.

Al dictar el auto inicial, la señora Directora Provincial, hace relación a la declaración de "incorrección en la tramitación y error inexcusable" de parte del Sumariado, realizada por la Primera Sala de la Corte Provincial del Cuzco.

## 3.- RESUMEN DE LA CONTESTACION DE LA SERVIDORA JUDICIAL SUMARIADO.

### 3.1 Resumen de Contestación.

La Dr. Marcelo Portilla Revelo, en su contestación de fojas 8 a 9, en lo principal, dice:

3.1.1 Que niega simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho del auto inicial;

3.1.2 Que niega haber cometido error inexcusable en las resoluciones dictadas en los juicios ejecutivos números 138C-2009 y 139C-2009, así como el hecho de que las sentencias dictadas en los juicios de nulidad de sentencia ejecutoriada hayan ocasionado daño alguno a las partes.

3.1.3 Que no existe disposición legal que prohíba la aceptación de las acciones de nulidad.

3.1.4 Niega que las resoluciones dictadas en los juicios de nulidad de sentencia ejecutoriada, hayan ocasionado suspensión en la tramitación de los respectivos juicios ejecutivos.

3.1.5 Prescripción de la acción administrativa de conformidad con el Art. 106 del Código Orgánico de la Función Judicial.

## 4.- RESUMEN DE LO RESUELTO POR LA AUTORIDAD A QUO.

La Dra. Aranda Orbe Arellano, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Cuzco, emite informe motivado emitido el 19 de mayo de 2010, en el cual consta lo siguiente:

4.1 El señor juez sumariado acepta a trámite las demandas de nulidad de sentencia ejecutoriada dictadas en juicios ejecutivos, y una vez concluido el trámite ordinario, el Dr. Marcelo Portilla, en su calidad de Juez Sexto de lo Civil de Cuzco, expidió las respectivas sentencias declarando con lugar la demanda de nulidad.

4.2 Las sentencias dictadas dentro de los mencionados juicios ordinarios (supra 3.1.2), fueron recurridas por la parte afectada, y el tribunal de alzada (Jueces de lo Civil de la Primera Sala de la Corte Provincial de Justicia de Carchi) declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, y de conformidad con el artículo 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene las facultades correctivas de los jueces, declaró "la incorrección en la tramitación y el error inexcusable", por contravenir la disposición contenida en el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil y fallar de triple reiteración.

4.3 Finalmente, considera que el Dr. Marcelo Portilla ha incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 8 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial.

## 5.- SUSTENTO LEGAL QUE RESPALDA LA COMPETENCIA POR PARTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES LEGALES.

### 5.1 Competencia

El Consejo de la Judicatura de Transición es competente para conocer el presente sumario disciplinario, de conformidad a lo previsto en el Art. 20 del Régimen de Transición (Anexo 4) del Referéndum y Consulta Popular realizados del 07 de mayo del presente año, cuyos resultados se publicaron en el Registro Oficial No. 499 del 13 de julio del año en curso y que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, conforme el inciso final del Art. 106 de la Constitución de la República del Ecuador.

### 5.2. Cumplimiento de las reglas del debido proceso.

El presente sumario administrativo, ha sido tramitado con estricta observancia de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa del servidor judicial, respetando las reglas del debido proceso, así como de las disposiciones constantes en la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico de la Función Judicial; y, las "Normas para el Ejercicio de Control Disciplinario de la Función Judicial, para el Período de Transición", por lo que no habiéndose incurrido en ninguna violación de solemnidad sustancial que influya o pueda influir en la decisión de la causa, se declara la validez del proceso.

## 6. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.

### 6.1 Por parte de la Dirección Provincial.

6.1.1 Oficios No. 83 y 84-CPIC, de 19 y 18 de mayo de 2010, suscritos por la Dra. Doris Guerrón Champutiz, Secretaria Relatora de la Primera Sala de la Corte Provincial de Carchi, dirigido a la Dra. Amanda Orbe Arellano, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Carchi, a los que se adjuntan copias de las resoluciones dictadas por dicha Sala (fs. 1 a 6).

6.2. Por parte del Sumariado,

## 7. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

7.1 La Primera Sala de Corte Provincial de Justicia del Carchi, en resoluciones dictadas dentro de los juicios Ordinarios de Nulidad de Sentencia números 65 y 66 2008, cuyas copias certificadas obran a fojas 2 a 3 y 5 a 6, en su calidad de Órgano Jurisdiccional de segunda instancia y en ejercicio de la facultad conativa que le confiere la disposición contenida en el Art. 131, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la parte final de cada una de ellas, dispone que se ponga en conocimiento de la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi, que ha declarado “la incorrección en la tramitación” y el “error inexcusable”, en el que habría incurrido el Juez Sumariado en la tramitación y resolución de las mencionadas causas, actuación con la que ha afectado las garantías constitucionales previstas en el Art. 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que reza: “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”, la misma que se encuentra tipificada como infracción disciplinaria grave en el Art. 108, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial.

on



7.4 De un mejor estudio del proceso, se logra establecer que la conducta del sumariado se encuadra, además de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, en lo estipulado en el artículo 109 numeral 7 *ibidem*, disposición que es aplicable también para los jueces, de conformidad con el mandato contenido en el artículo 125 del mismo cuerpo legal.

#### 8. ANTECEDENTES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Dr. Marcelo Portilla Revelo reporta las siguientes sanciones: a) multa de 1 salario básico, dentro del expediente No.02-06DI; y, b) amonestación por escrito, dentro del expediente No. OF-173-06.

#### 9. FUNDAMENTOS EN DERECHO PARA EL PRESENTE FALLO.

9.1 El procedimiento administrativo tiene por objeto determinar si se ha producido una conducta considerada como infracción disciplinaria, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que cometió la responsabilidad administrativa del investigado y la gravedad para imponer la sanción que corresponda, de conformidad con el inciso segundo del artículo 5 de las Normas para el Ejercicio del Control Disciplinario de la Función Judicial para el período de transición.

9.2 Obra en el proceso (fs. 1 a 6), como hecho debidamente demostrado, la actuación atípica del funcionario judicial sumariado, Dr. Marcelo Portilla Revelo, que en su calidad de Juez Sexto de lo Civil de Carchi, expidió dos sentencias –en procesos diferentes– declarando con lugar la demanda de nulidad de sentencia ejecutoriada dictada en juicio ejecutivo, sentencias que fueron revocadas por el tribunal de alzada (Jueces de la Primera Sala de lo Civil de Carchi), y a la vez, declararon la “incorrección en la tramitación” y el “error inexcusable”, cometido por el sumariado, configurando con su conducta una doble infracción disciplinaria. En efecto, el sumariado ha incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, en sus artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7.

9.3 Por su parte, el artículo 108 numeral 8 en su parte pertinente establece: “...en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República”. En el caso en examen, la garantía constitucional vulnerada y que correspondía por mandato expreso –asegurar a las partes, por parte del juzgador sumariado, es la concebida en el artículo 76 numeral 1 de la Constitución, que reza: “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”. El juez sumariado no observó las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil –particularmente el artículo 448– y los precedentes jurisprudenciales ~~obstante que, en el mismo, se indica que la nulidad de sentencia ejecutoriada, no puede ser declarada en un juicio ejecutivo, vulneración que fue declarada por el~~ ejecutoriadas dictadas en juicio ejecutivo, vulneración que fue declarada por el

tribunal *ad quem* (Jueces de la Primera Sala de lo Civil de Carchi), y puesta a conocimiento del Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Carchi.

9.4 Como quedó establecido en párrafos precedentes (*supra* 9.2), la conducta atípica del sumariado configura una doble infracción, como lo son, la referida en líneas anteriores (*supra* 9.3) y la prevista en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que estipula: "Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable". El artículo 125 *ibidem*, ubicando dentro de las disposiciones generales aplicables a jueces y jueces, establece que: "...sin perjuicio de que se pueda también presentar queja en base a lo establecido en el artículo 109 numeral 7 de este Código." Es preciso indicar, que cuando hablamos de "error judicial inexcusable", nos estamos refiriendo a la notoria ineptitud o descuido, al momento de administrar justicia por parte del servidor judicial. El error judicial, por su propia naturaleza, siempre es imputable al juzgador, más que a cualquier otro servidor judicial. Este siempre ha sido el espíritu del instituto del error judicial inexcusable, por tal motivo, el artículo 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, dentro de las facultades correctivas que tienen los jueces, les impone el deber de comunicar y declarar las incorrecciones y el error inexcusable en que incurrir los jueces, a efecto de interponer la sanción que ameritan.

9.5 En la especie, se evidencia el "error judicial inexcusable de iuris", en el cual ha incurrido el sumariado, ya que no aplicaron las normas jurídicas y precedentes jurisprudenciales obligatorios, tal como lo establecieron los Jueces de la Primera Sala de lo Civil de Carchi, quienes de conformidad con el artículo 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, han declarado la existencia del error judicial inexcusable.

#### 10. Concurrencia de faltas.

10.1 Como ha quedado establecido (*supra* 9.2), la conducta del sumariado, Dr. Marcelo Portilla Revelo, se encuadra en dos tipos de infracciones con sanciones diferentes, las prescritas en los artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7, ambas normas del Código Orgánico de la Función Judicial.

10.2 En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde imponer la sanción más grave, esto es, la prevista en el artículo 109 *ibidem* para las infracciones gravísimas.

#### 11. RESOLUCIÓN.

En consecuencia, en mérito de las consideraciones expuestas, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN**, resuelve:

11.1 Destituir al Dr. Marcelo Portilla Revelo, del cargo de Juez del Juzgado Sexto de lo Civil de Carchi;

11.2 Notifíquese a las Direcciones Nacionales de Personal y Financiero, a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Carchi, y a la Unidad de Control Disciplinario, para lo fines pertinentes.

11.3 Notifíquese con el contenido de la presente resolución a las partes interesadas.

11.4 Actúe la secretaria de la Unidad de Control Disciplinario.

  
ING. PAULO RODRIGUEZ MOLINA  
PRESIDENTE  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

  
DRA. TANIA ARIAS VANZANO  
VOCAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

  
AB. MARELLA DAVILA DE VARAS  
VOCAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

  
DR. MAURICIO JARAMILLO VELASTEGUI  
SECRETARIO (E)  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION



**EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN-** Quito,  
a 18 de agosto de 2011. Las 13h08.

Expediente Disciplinario No. MOT-193-UCD-010-CS (OF-05-2010)

Fecha de inicio del sumario administrativo de oficio: 25 de agosto de 2010 (Fs. 7)

Fecha de ingreso a la Unidad de Control Disciplinario: 22 de noviembre de 2010.

#### 1.- ANTECEDENTES:

##### 1.1. Las partes:

###### 1.1.1 Denunciante/ auto inicial:

La señora Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi, inició de oficio el sumario administrativo en contra del Dr. Marcelo Portilla Revelo, Juez del Juzgado Sexto de lo Civil del Carchi.

###### 1.1.2 Denunciado/sumariado:

Dr. Marcelo Portilla Revelo, Juez del Juzgado Sexto de lo Civil de Carchi.

##### 1.2. Motivo por el que conoce el expediente el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición:

El Pleno avoca conocimiento del expediente, en virtud del informe motivado emitido por la Dra. Amanda Orbe Arellano, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Carchi, en el que considera que la conducta de el Juez Sumariado podría adecuarse en la infracción descrita en el artículo 108, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, consistente en la violación de una garantía constitucional, contenida en el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador.

#### 2.- DENUNCIA

##### 2.1. Resumen de la denuncia/ auto inicial.

En base a los oficios números 83 y 84-CPJC, de mayo 18 y 19 de 2010, con los que se han remitido copias certificadas de las sentencias dictadas por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en los juicios ordinarios de nulidad de sentencia números 138.C-2009, seguido por Faany Carmela Córdova Inua en contra de Edelberto Tapia Grijalva; y, 139.C-2009, seguido por Segundo Protán Huacanes Masmita y Carmela Córdova Inua en contra de Nélon Edelberto Tapia Grijalva, que en sus partes resolutivas, de conformidad con la facultad del Art. 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, "se declara la incorrección en la tramitación y error inexcusable" del Juez doctor Marcelo Portilla", con

fundamento en el Art. 114 ibídem, ha iniciado el presente sumario administrativo de oficio, a efectos de establecer la responsabilidad administrativa que pudieren existir en sus actuaciones.

## **2.2 Tipificación de la falta imputada y sanción que solicita el denunciante.**

Al dictar el auto inicial, la señora Directora Provincial, hace relación a la declaración de "incorrección en la tramitación y error inexcusable" de parte del Sumariado, realizada por la Primera Sala de la Corte Provincial del Carchi,

## **3.- RESUMEN DE LA CONTESTACION DE LA SERVIDORA JUDICIAL SUMARIADO.**

### **3.1 Resumen de Contestación.**

La Dr. Marcelo Portilla Revelo, en su contestación de fojas 8 a 9, en lo principal, dice:

**3.1.1** Que niega simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho del auto inicial;

**3.1.2** Que niega haber cometido error inexcusable en las resoluciones dictadas en los juicios ejecutivos números 138C-2009 y 139C-2009, así como el hecho de que las sentencias dictadas en los juicios de nulidad de sentencia ejecutoriada hayan ocasionado daño alguno a las partes.

**3.1.3** Que no existe disposición legal que prohíba la aceptación de las acciones de nulidad.

**3.1.4** Niega que las resoluciones dictadas en los juicios de nulidad de sentencia ejecutoriada, hayan ocasionado suspensión en la tramitación de los respectivos juicios ejecutivos.

**3.1.5** Prescripción de la acción administrativa de conformidad con el Art. 106 del Código Orgánico de la Función Judicial.

## **4.- RESUMEN DE LO RESUELTO POR LA AUTORIDAD A QUO.**

La Dra. Amanda Orbe Arellano, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi, emite informe motivado emitido el 19 de mayo de 2010, en el cual consta lo siguiente:

**4.1** El señor juez sumariado acepta a trámite las demandas de nulidad de sentencia ejecutoriada dictadas en juicios ejecutivos, y una vez concluido el trámite ordinario, el Dr. Marcelo Portilla, en su calidad de Juez Sexto de lo Civil de Carchi, expidió las respectivas sentencias declarando con lugar la demanda de nulidad.

4.2 Las sentencias dictadas dentro de los mencionados juicios ordinarios (*supra* 3.1.2), fueron recurridas por la parte afectada, y el tribunal de alzada (Jueces de la Civil de la Primera Sala de la Corte Provincial de Justicia de Carchi) declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, y de conformidad con el artículo 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, que confiere las facultades correctivas de los jueces, declaró "la incorrección en la tramitación y el error inexcusable", por contravenir la disposición contenida en el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil y fallos de triple reiteración.

4.3 Finalmente, considera que el Dr. Marcelo Portilla ha incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 8 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial.

## 5.- SUSTENTO LEGAL QUE RESPALDA LA COMPETENCIA POR PARTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES LEGALES.

### 5.1 Competencia

El Consejo de la Judicatura de Transición es competente para conocer el presente sumario disciplinario, de conformidad a lo previsto en el Art. 20 del Régimen de Transición (Anexo 4) del Referéndum y Consulta Popular, realizados del 07 de mayo del presente año, cuyos resultados se publicaron en el Registro Oficial No. 490 del 13 de julio del año en curso y que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, conforme el inciso final del Art. 106 de la Constitución de la República del Ecuador.

### 5.2. Cumplimiento de las reglas del debido proceso.

El presente sumario administrativo, ha sido tramitado con estricta observancia de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa del servidor judicial, respetando las reglas del debido proceso, así como de las disposiciones constantes en la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico de la Función Judicial; y, las "Normas para el Ejercicio de Control Disciplinario de la Función Judicial, para el Período de Transición", por lo que no habiéndose incurrido en ninguna violación de solemnidad sustancial que influya o pueda influir en la decisión de la causa, se declara la validez del proceso.

## 6. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.

### 6.1 Por parte de la Dirección Provincial.

6.1.1 Oficios No. 83 y 84-CPIC, de 19 y 18 de mayo de 2010, suscritos por la Dra. Doris Guerrón Champuiz, Secretaria Relatora de la Primera Sala de la Corte Provincial de Carchi, dirigido a la Dra. Armanda Orbe Arellano, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Carchi, a los que se adjuntan copias de las resoluciones dictadas por dicha Sala (fs. 1 a 6).

207

7.4 De un mejor estudio del proceso, se logra establecer que la conducta del sumariado se encuentra, además de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, en lo estipulado en el artículo 109 numeral 7 *ibidem*, disposición que es aplicable también para los jueces, de conformidad con el mandato contenido en el artículo 125 del mismo cuerpo legal.

#### 8. ANTECEDENTES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Dr. Marcelo Portilla Revelo reporta las siguientes sanciones: a) multa de 1 salario básico, dentro del expediente No.02-06DI; y, b) amonestación por escrito, dentro del expediente No. OF-173-05.

#### 9. FUNDAMENTOS EN DERECHO PARA EL PRESENTE FALLO.

9.1 El procedimiento administrativo tiene por objeto determinar si se ha producido una conducta considerada como infracción disciplinaria, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que cometió la responsabilidad administrativa del investigado y la gravedad para imponer la sanción que corresponda, de conformidad con el inciso segundo del artículo 5 de las Normas para el Ejercicio del Control Disciplinario de la Función Judicial para el período de transición.

9.2 Obra en el proceso (fs. 1 a 6), como hecho debidamente demostrado, la actuación alélica del funcionario judicial sumariado, Dr. Marcelo Portilla Revelo, que en su calidad de Juez Sexto de lo Civil de Carchi, expidió dos sentencias en procesos diferentes declarando con lugar la demanda de nulidad de sentencia ejecutoriada dictada en juicio ejecutivo, sentencias que fueron revocadas por el tribunal de alzada (Jueces de la Primera Sala de lo Civil de Carchi), y a la vez, declararon la "incorrección en la tramitación" y el "error inexcusable", cometido por el sumariado, configurando con su conducta una doble infracción disciplinaria. En efecto, el sumariado ha incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, en sus artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7.

9.3 Por su parte, el artículo 108 numeral 8 en su parte pertinente establece: "...o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República". En el caso en examen, la garantía constitucional vulnerada y que correspondía por mandato expreso asegurar a las partes, por parte del juzgador sumariado, es la concebida en el artículo 76 numeral 1 de la Constitución, que reza: "Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes". El juez sumariado no observó las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil -particularmente el artículo 448- y los precedentes jurisprudenciales ~~obstante que el artículo 448 prescribe iniciar una acción de nulidad de sentencia~~ ejecutoriadas dictadas en juicio ejecutivo, vulneración que fue declarada por el



tribunal *ad quem* (Jueces de la Primera Sala de lo Civil de Carchi), y puesta a conocimiento del Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Carchi.

9.4 Como quedó establecido en párrafos precedentes (*supra* 9.2), la conducta atípica del sumariado configura una doble infracción, como lo son, la referida en líneas anteriores (*supra* 9.3) y la prevista en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que estipula: "Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable". El artículo 125 *ibidem*, ubicado dentro de las disposiciones generales aplicables a jueces y juezes, establece que: "...sin perjuicio de que se pueda también presentar queja en base a lo establecido en el artículo 109 numeral 7 de este Código." Es preciso indicar, que cuando hablamos de "error judicial inexcusable", nos estamos refiriendo a la notoria ineptitud o descuido, al momento de administrar justicia por parte del servidor judicial. El error judicial, por su propia naturaleza, siempre es imputable al juzgador, más que a cualquier otro servidor judicial. Esto siempre ha sido el espíritu del instituto del error judicial inexcusable, por tal motivo, el artículo 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, dentro de las facultades correctivas que tienen los jueces, les impone el deber de comunicar y declarar las incorrecciones y el error inexcusable en que incurran los jueces, a efecto de interponer la sanción que ameritan.

9.5 En la especie, se evidencia el "error judicial inexcusable de iuris", en el cual ha incurrido el sumariado, ya que no aplicaron las normas jurídicas y precedentes jurisprudenciales obligatorios, tal como lo establecieron los Jueces de la Primera Sala de lo Civil de Carchi, quienes de conformidad con el artículo 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, han declarado la existencia del error judicial inexcusable.

#### 10. Concurrencia de faltas.

10.1 Como ha quedado establecido (*supra* 9.2), la conducta del sumariado, Dr. Marcelo Portilla Revelo, se encuadra en dos tipos de infracciones con sanciones diferentes, las prescritas en los artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7, ambas normas del Código Orgánico de la Función Judicial.

10.2 En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde imponer la sanción más grave, esto es, la prevista en el artículo 109 *ibidem* para las infracciones gravísimas.

#### 11. RESOLUCIÓN.

En consecuencia, en mérito de las consideraciones expuestas, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN**, resuelve:

11.1 Destituir al Dr. Marcelo Portilla Revelo, del cargo de Juez del Juzgado Sexto de lo Civil de Carchi,

11.2 Notifíquese a las Direcciones Nacionales de Personal y Financiero, a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Carchi y a la Unidad de Control Disciplinario, para los fines pertinentes.

11.3 Notifíquese con el contenido de la presente resolución a las partes interesadas.

11.4 Actúe la secretaria de la Unidad de Control Disciplinario.

  
ING. PAULO RODRIGUEZ MOLINA  
PRESIDENTE  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

  
DRA. TANIA ADIAS MANZANO  
VOCAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

  
AB. MARIELA CAVILA DE VARAS  
VOCAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

  
DR. MAURICIO JARAMILLO VELASTEGUI  
SECRETARIO (E)  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

5.2.6 Que, en la resolución dictada ha evitado que más de seiscientos personas queden desempleadas; por lo tanto, afirma que no ha incurrido en ninguna falta disciplinaria.

### 5.3 HECHOS PROBADOS

6.3.1 Mediante sentencia emitida el 15 de septiembre del 2010, a las 10h00, la servidora judicial sumariada, ordenó el "ARCHIVO Y BAJA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No. 170-JC-DRL", tramitado en la Dirección Regional del Litoral del CONSEP, conforme se desprende de fojas 44 a 45 del expediente.

6.3.2 El 15 de septiembre de 2010, a las 12h55 el Secretario del Juzgado Noveno Adjunto de la Niñez y Adolescencia citó, en persona, al Ab. Alfredo Alvarado, Director Regional del Litoral del Consep, en las instalaciones "ubicadas en Circunvalación Norte 320 y Quinta, Ciudadela Urdesa", de la ciudad de Guayaquil, conforme se desprende de fojas 46 del expediente.

En consecuencia, al Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, le corresponde determinar:

Si la servidora judicial sumariada, al ordenar el archivo y baja del expediente administrativo No. 170-JC-DRL, mediante sentencia de fecha 15 de septiembre del 2010, a las 10h00, incurrió en un error inexcusable y violentó garantías constitucionales.

Si existió la alegada falta de notificación de la sentencia de 15 de septiembre de 2010, a las 12h55.

### 6.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

#### 6.1 Sobre el presunto error incurrido y la eventual violación de garantías constitucionales

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece: *"El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes"*

El Art. 11, numeral 5 de la Constitución de la República de Ecuador, dispone: *"En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia."*

El Art. 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece que la finalidad de las medidas cautelares, es *"evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos"*.

*Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, tales como... la suspensión provisional del acto,..."*

En el presente caso, la jueza sumariada ha dispuesto, mediante sentencia de 15 de septiembre de 2010, a las 10h00, el archivo del expediente administrativo No. 170-JC-DRL-C-2010, de la Dirección Regional del CONSEP, medida que tiene el carácter de permanente, decisión que se contrapone a lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto la finalidad de las



El numeral 3, del Art. 106 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que la acción disciplinaria prescribe: *"Por infracciones susceptibles de destitución, en el plazo de un año, salvo las que estuvieren vinculadas con un delito que prescribieran en cinco años, sin perjuicio del régimen de prescripción del delito o de la acción establecida en la ley."*

*Los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán... en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora."*

*La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente."*

Según se desprende del texto de la denuncia, la presunta falta ha sido cometida el 15 de septiembre de 2010 (fs. 5 y vuelta), instruyéndose el respectivo sumario disciplinario el 17 de noviembre del mismo año (fs.10), por lo tanto, la acción disciplinaria ha sido iniciada dentro del plazo establecido en la disposición legal, por lo que se declara que no ha operado la prescripción de la acción.

Por otra parte se advierte, que desde la fecha de instrucción del sumario, 17 de noviembre de 2010 (fs. 10) hasta la presente fecha, no ha transcurrido el año establecido en la norma, para que opere la prescripción definitiva de la acción disciplinaria.

## 5.- ANÁLISIS DE FONDO.

### 5.1 ARGUMENTOS DEL DENUNCIANTE

5.1.1 Que, la Compañía de Elaborados de café "El Café S.A." ha propuesto en contra del CONSEP una demanda constitucional de suspensión de medidas cautelares, con la que no han sido citados como parte del proceso.

5.1.2 Que el 15 de septiembre de 2010, a las 10h00, la Jueza denunciada, violó el debido proceso por cuanto ha dictado sentencia en la que ha dispuesto dar de baja al proceso, ordenando su archivo.

### 5.2 ARGUMENTOS DE LA SUMARIADA

5.2.1 Que, el 9 de septiembre del 2010, le ha correspondido conocer la Acción de Medidas Cautelares, signada con el No. 09959-20101215, propuesta por la Compañía de "Elaborados de Café", en contra del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

5.2.2 Que, el 15 de septiembre del 2010, *"se RESUELVE y se DICTAN LAS MEDIDAS CAUTELARES que son dadas a conocer a las dos partes"*.

5.2.3 Que, el CONSEP solicitó aclaración de la sentencia, la misma que fue atendida el 23 de septiembre del 2010.

5.2.4 Que, posteriormente, el CONSEP presentó recurso de apelación, el cual no era procedente, *"porque para que revocara las medidas cautelares ellos primero debían haber hecho cesar aquello que ocasionaba el daño inminente y grave..."*

5.2.5 Que, su obligación es hacer cumplir lo dispuesto en los Arts. 424 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador, referentes a que la Constitución es la norma suprema, de directa aplicación.

Consecuentemente, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición es competente para conocer y resolver el presente sumario disciplinario.

### 3.2 Cumplimiento de los Principios del debido proceso.

El Art. 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa que: *"Corresponde a toda autoridad administrativa, o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes."*

En cumplimiento de dicha disposición, se advierte que el auto inicial (fs. 10), ha sido notificado en legal y debida forma a la sumariada, conforme se desprende de la razón sentada por la Secretaría de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, pieza procesal que obra a fojas 13 del expediente. Asimismo, se le ha concedido a la servidora judicial el tiempo suficiente a fin que pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa, las partes han presentado las pruebas de cargo y descargo, y han contado con la oportunidad procesal de contradecirlas; es decir, se han respetado todas y cada una de las garantías del debido proceso, agrupadas en el Art. 76 de la Constitución de la República, bajo el título de derechos de protección; por lo tanto, al no haberse incurrido en violación de solemnidad alguna, se declara su validez procesal.

### 3.3 Legitimación activa.

El Art. 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: *"Los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por la Directora o el Director Provincial, o por la unidad que el Consejo de la Judicatura establezca de manera general, cuando llegare a su conocimiento información confiable de que el servidor de la Función Judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada por este Código..."*

El inciso cuarto del Art. 19 de las Normas para el Ejercicio del Control Disciplinario de la Función Judicial, para el Periodo de Transición, dispone: *"Si de la denuncia apareciere información confiable de la existencia de una infracción disciplinaria, se iniciará de oficio, el correspondiente sumario disciplinario"*.

En el presente caso, el Procurador Judicial del Secretario Ejecutivo del CONSEJ ha presentado denuncia en contra de la Ab. Magaly Izaguirre Mielles, Jueza Novena Adjunta de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil; sin embargo no ha comparecido a reconocer su firma y rúbrica, conforme lo dispuso el Director Provincial del Guayas, en providencia de fecha 29 de octubre de 2010, por lo que el 17 de noviembre de 2010, se ha instruido sumario disciplinario, de oficio, en contra de la dicha servidora judicial.

En consecuencia, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, cuenta con la legitimidad suficiente para activar esta vía procesal.

### 4.- TIPIFICACIÓN DE LA FALTA DISCIPLINARIA.

El Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, en su Informe Motivado (fs. 155 a 158), acusa a la sumariada de haber cometido la infracción disciplinaria tipificada en el Art. 125 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concurrencia con el numeral 2 del Art. 109 *ibidem*, *"Intervenir en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifesta negligencia o error inexcusable;"*

#### 4.1 Oportunidad en el ejercicio de la acción.

1707-2011-UCD-011-MAC 74  
06 500-10-67 51  
20 + 1 1217 ✓

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No.- 201-UCD-011-MAC (DG-500-2010-M)

**EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN.-** Quito, 25 de Octubre del 2011; las 14h35.- **VISTOS:**

**EXPEDIENTE DISCIPLINARIO: MOT-201-UCD-011-MAC (DG-500-2010-M).**

**FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE:** 17 de noviembre del 2010

**FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO:** 30 de marzo del 2011 (fs. 2, cuaderno de instancia).

**1.- PARTES PROCESALES:**

**1.1.-DENUNCIANTE:** Ab. Fausto Gómez Pignataro, Procurador Judicial del Secretario Ejecutivo del CONSEP.

**1.2 SERVIDORA JUDICIAL DENUNCIADA:** Ab. Magaly Izaguirre Mielles, Jueza Constitucional Novena de la Niñez y Adolescencia del Guayas.

**2.- ANTECEDENTES.**

La Abogada Jenny Pizarro Tapia, Secretaria de la Dirección Provincial del Guayas y Galápagos del Consejo de la Judicatura, mediante Memorando No. 0901 DP-GG-CJ-2011-JPT-MSM, de 29 de marzo del 2010, recibido en la Unidad de Control Disciplinario el 30 de los mismos mes y año, ha remitido el expediente No. MO1-201-UCD-011, (DG-500-2010-M), compuesto de 158 folios útiles, seguido en contra de la Ab. Magaly Izaguirre Mielles, Jueza Novena Adjunta de la Niñez y Adolescencia del Guayas, en virtud de lo dispuesto en el Art. 117 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haberse emitido Informe Motivado en el que se recomienda imponer a la sumariada la sanción prevista en el Art. 109, numeral 7 del referido cuerpo legal.

**3.- ANÁLISIS DE FORMA.**

**3.1 Competencia.**

De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 178, inciso segundo; artículo 181 numerales 3 y 5 de la Constitución de la República y Arts. 254 y 264, numerales 4 y 14, y artículo 117 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, correspondiéndole velar por la transparencia y eficiencia de los órganos que la componen. Esta facultad constitucional faculta al Consejo de la Judicatura de Transición a ejercer el control disciplinario de las servidoras y servidores de la Función Judicial, de acuerdo con las reglas y principios establecidos en el capítulo VII, sección II, del título II del Código Orgánico de la Función Judicial.

El Art. 20 del Régimen de Transición (Anexo 4) del Referéndum y Consulta Popular, realizados el 7 de mayo del 2011, cuyos resultados se publicaron en el Registro Oficial No. 490 el 13 de julio del año en curso, y que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, señala: "Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerán sus funciones por un período improrrogable de 18 meses"; en concordancia con el inciso final del Art. 106 de la Constitución de la República del Ecuador.

medidas cautelares es evitar o detener provisionalmente el acto; sin embargo, la jueza sumariada, en desconocimiento de dicha disposición ordenó una medida permanente y definitiva de un expediente administrativo.

Que, pese a existir una disposición jurídica aplicable al caso que se encontraba sustanciando la sumariada; esto es, la establecida en el Art. 26 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no se la aplicó conforme es exigido por la naturaleza de esta institución constitucional, situación intolerable para una persona que ejerce potestad jurisdiccional en esta materia.

El Art. 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial tipifica como falta gravísima de las servidoras y servidores judiciales, *"Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable."*

Por lo tanto, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, declara que la servidora judicial Ab. Magaly Elizabeth Izaguirre Mielles, Jueza Novena Adjunta de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, ha incurrido en la infracción gravísima tipificada en el Art. 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, al *incurrir en error inexcusable por la falta de conocimiento e indebida aplicación de disposiciones constitucionales y legales.*

#### 6.2 Sobre la falta de notificación.

El Art. 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece: *"Una vez que la jueza o juez conozca sobre la petición de medidas cautelares, si verifica por la sola descripción de los hechos que se reúnen los requisitos previstos en esta ley, otorgará inmediatamente las medidas cautelares correspondientes. No se exigirán pruebas para ordenar estas medidas ni tampoco se requiere notificación formal a las personas o instituciones involucradas."*

De la razón constante a fojas 46, suscrita por el Ab. Manuel A. López, Secretario del Juzgado Noveno Adjunto de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, se desprende que dicho funcionario citó el 15 de septiembre del 2010 a las 12h55, *"en persona al Ab. Alfredo Alvarado, Director Regional del Litoral del CONSEP"*, en las instalaciones que dicho organismo tiene en la ciudad de Guayaquil.

Por lo tanto, la sumariada sobre este hecho no ha incurrido en falta disciplinaria susceptible de sanción.

#### 6.3 Sanciones anteriores:

Según se desprende de la certificación otorgada por la Secretaría de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, de fecha 19 de octubre del 2011, la servidora judicial sumariada no registra sanciones disciplinarias en su contra.

#### 7.- PARTE RESOLUTIVA.


Por las razones expuestas, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN, Resuelve:**


7.1 Declarar que la Ab. Magaly Izaguirre Mielles, ha incurrido en la infracción tipificada en el Art. 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en


consecuencia imponer la sanción de destitución del cargo de Jueza Novena Adjunta de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil.


7.2 Comuníquese con el contenido de la presente resolución al Director Nacional de Personal, al Director Nacional Financiero; al Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas; y al Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, para los fines de ley.

7.3 Actúe la Secretaría de la Unidad de Control Disciplinario.- Cúmplase y Notifíquese.

  
PAULO RODRIGUEZ MOLINA  
PRESIDENTE  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

  
TANIA ARIAS MANZANO  
VOCAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

  
FERNANDO YAVAR LIMPIÉRRIZ  
VOCAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION  
(ABSTENCION)

  
GUILLERMO FALCONI AGUIRRE  
SECRETARIO GENERAL  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION



**EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.-** Quito, 25 de enero de 2012.  
Las 18h20.

**Expediente Disciplinario:** MOT-515-UCD-011-MAC (001-DPN-CJ-011).

**Fecha de inicio del Expediente:** 27 de enero de 2011 (fs. 17).

**Fecha de Ingreso a la Unidad de Control Disciplinario:** 22 de agosto de 2011 (fs. 6 CI).

**Accionante:** Sra. Paola Iza Pilataxi.

**Sumariados:** Dr. Marco Merino Garzón y Lic. Jorge Darío Campos, Juez y Secretario del Juzgado Primero de lo Civil de Napo, respectivamente.

## 1.- ANTECEDENTES

Mediante Oficio No. 241-DPN-CJ-11 de 22 de agosto de 2011 (fs. 6 C.I.), recibido en la Unidad de Control Disciplinario, el 23 de agosto de 2011, llegó a conocimiento del Consejo de la Judicatura el informe motivado remitido por el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, según el cual, los servidores judiciales sumariados habrían incurrido en la infracción grave establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial.

## 2.- ANÁLISIS DE FORMA

### 2.1 COMPETENCIA

El inciso segundo, del artículo 178 y numerales 3 y 5, del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 254 y 264, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial determinan, que el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, al que corresponde velar por la transparencia y eficiencia de los órganos que la componen. Esta potestad constitucional y legal, faculta al Consejo de la Judicatura para ejercer el control disciplinario de las servidoras y servidores de la Función Judicial.

Mediante proceso electoral de Referendo y Consulta Popular de 7 de mayo de 2011, cuyos resultados fueron publicados en el Registro Oficial No. 490, de 13 de julio 2011, el pueblo soberano del Ecuador decidió aprobar la propuesta de reforma al artículo 20 del Régimen de Transición, el mismo que actualmente dispone: *"Este Consejo de la Judicatura Transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial y ejercerán sus funciones por un período improrrogable de 18 meses."*

El Art. 117 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que: *"... concluido el trámite, el Director Provincial, dentro del ámbito de su competencia, le impondrá a la servidora o servidor judicial la sanción disciplinaria de amonestación o multa, o ratificará su inocencia. Si no fuere competente para imponer la sanción que*

*corresponda, enviará el expediente del sumario al Pleno del Consejo de la Judicatura.*

En consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura es el órgano competente para conocer y resolver el presente sumario disciplinario.

## 2.2 VALIDEZ PROCESAL

El numeral 1, del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: *"En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas (...) 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes..."*

En cumplimiento a dicha disposición, se observa que el auto inicial fue notificado a los sumariados, en legal y debida forma, según se desprende de la razón de notificación sentada por el Secretario Ad-hoc de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, Ing. Vinicio Zurita, que obra a fojas 17 y 18 del expediente. Asimismo, se ha concedido a los servidores judiciales sumariados el tiempo suficiente para que preparen y ejerzan, su legítimo derecho a la defensa de manera efectiva.

Las partes han tenido la oportunidad de presentar las pruebas de cargo y de descargo de las que se han creído asistidas, y han contado con la oportunidad procesal para contradecirlas; por lo tanto, se declara que, se han respetado todas y cada una de las garantías del debido proceso, agrupadas en el artículo 76 de la Constitución de la República, bajo el título de derechos de protección; en consecuencia, al no haberse incurrido en violación de solemnidad alguna, se declara la validez de todo lo actuado.

## 2.3 LEGITIMACIÓN ACTIVA

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador establece: *"Se reconoce y garantizará a las personas: ...23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas..."*

El inciso segundo, del Art. 113 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: *"Podrá presentar denuncia escrita, cualquier persona natural o jurídica, grupo de personas, pueblo o nacionalidad, que tenga interés directo en un juicio o servidor solicitado..."*

Por lo dicho, la Sra. Paola Iza Pilataxi contó con la legitimación activa suficiente para presentar la denuncia en cuestión, conforme así se la declara.

## 2.4 OPORTUNIDAD EN LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN

El Art. 106 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: *"La Acción disciplinaria prescribe: ...Por infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración en el plazo de sesenta días;..."*; y que *"...Los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en el caso de queja o denuncia desde que se cometió la infracción; y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente".*

La acción disciplinaria ha sido ejercida mediante denuncia presentada el 17 de enero de 2011, en virtud de lo cual se instruyó el presente sumario disciplinario el 27 de enero de 2011 conforme consta del auto inicial (fs. 17). Por lo que, hasta la presente fecha, no ha operado su prescripción.

En consecuencia, el presente sumario ha sido oportunamente instaurado y sustanciado, conforme así, se lo declara.

### 2.5. TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

La infracción disciplinaria que la denunciante atribuye a los servidores judiciales sumariados es la tipificada en el numeral 8, del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es: *"No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 73, 76 y 77 de la Constitución de la República."*

### 3.- ANÁLISIS DE FONDO

#### 3.1. ARGUMENTO DE LA DENUNCIANTE

La Sra. Paola Iza Pilatuxi, en su escrito de comparecencia (fs. 1 a 5), en lo principal manifiesta:

- Que, el 18 de diciembre de 2010, el secretario del Juzgado Primero de lo Civil de Napo se negó a recibir el escrito de apelación, por tratarse de un día sábado.
- Que, el 21 de diciembre de 2010, fue interpuesto recurso de apelación a la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2010 por el Dr. Marco Merino Garzón, Juez del Juzgado Primero de lo Civil de Napo, sentencia que fue notificada el 16 de los mismos mes y año.
- Que, el 23 de diciembre de 2010, el referido juez negó el recurso de apelación interpuesto por considerarlo extemporáneo.
- Que, al habérsele negado el Recurso de Apelación interpuesto, la sentencia se ejecutorió, lo cual le ocasionó un grave daño.
- Que, ante la negativa de admisión del recurso de apelación, interpuso Recurso de Hecho el que también le fue negado.
- Que, se le ha violado el derecho al debido proceso, garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 76, numeral 7, literal m).

#### 3.2 ARGUMENTOS DE LOS SUMARIADOS

El Dr. Marco Merino Garzón, Juez Primero de lo Civil de Napo de fs. 22 y via. en lo principal manifiesta:



- Que, de conformidad con el Art. 86, numeral 2, literal b) de la Constitución de la República "serán hábiles todos los días y horas" por lo que, la accionante no presentó a tiempo su Recurso de Apelación y, en consecuencia, procedió a inadmitirlo.

El Lcdo. Jorge Darío Campos, Secretario del Juzgado Primero de lo Civil de Napo en su escrito de comparecencia (fs. 23 a 24 y vta.) en lo principal manifiesta:

- Que, el Recurso de Apelación interpuesto por la denunciante fue extemporáneo.
- Que, la denunciante debía conocer que los escritos pueden ser presentados en cualquiera de las Secretarías que permanecen de turno en los Juzgados de Garantías Penales y de Tránsito de la Ciudad del Tena por lo que no era necesario acudir a su domicilio, un día sábado 18 de diciembre de 2010 para hacer la entrega del escrito de apelación.

### 3.3 HECHOS PROBADOS

- El 14 de diciembre de 2010, el Dr. Marco Merino Garzón, Juez Primero de lo Civil de Napo, dictó sentencia, dentro de la acción de protección No. 09-2009-I., declarándola improcedente, la misma que fue notificada el 16 de los mismos mes y año (fs. 331 a 334).

El 21 de diciembre de 2010, la accionante interpuso Recurso de Apelación de la sentencia dictada por el Juez Primero de lo Civil de Napo (fs. 335 a 343).

- El 23 de diciembre de 2010, el Dr. Marco Merino Garzón, Juez Primero de lo Civil de Napo, negó el recurso de apelación interpuesto por la accionante por considerar que habría sido presentado fuera de término (fs. 344).

- El 27 de diciembre de 2010, la accionante presentó un escrito solicitando que el actuario del Juzgado sienta una razón dejando constancia que el Juzgado Primero de lo Civil de Napo laboró normalmente durante los días sábado 18 de diciembre y domingo 19 de diciembre de 2010; y, que así mismo se certifique por qué el secretario no quiso recibir el escrito de apelación, cuando los padres de la denunciante fueron a entregarlo en su domicilio el día sábado 18 de diciembre de 2010 (fs. 345 a 346).

En virtud de los hechos expuestos, al Consejo de la Judicatura, le corresponde determinar:

Si la actuación del Juez Primero de lo Civil de Napo al haber negado el Recurso de Apelación interpuesto, constituye error inexcusable.

### 4. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

El literal (a) del numeral 7, del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ...7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes*

garantías: m) *Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos*."

El numeral 2, del Art. 129 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: *"A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y jueces, según corresponda tienen las siguientes facultades y deberes genéricos: 2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente."*

Asimismo, las personas tienen derecho a la Tutela Judicial efectiva, garantizada por el Art. 75 de la Constitución de la República, cuyo tenor literal establece: *"toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos..."*

La tutela judicial efectiva es quebrada por el error judicial. Cuando hablamos de error judicial inexcusable, nos estamos refiriendo a la notoria ineptitud o descuido al momento de administrar justicia, por parte del servidor judicial. El error judicial, por su propia naturaleza, es imputable al juzgador, más que a cualquier otro servidor judicial. Por otra parte, el error judicial, en sentido estricto se produce exclusivamente cuando éste se comete en un acto formal de la administración de justicia. Este error puede ser de iure o de facto. El de iure se produce cuando el operador de justicia de manera arbitraria se aparta de las reglas que para el efecto se establecen en los ordenamientos jurídicos, o bien, cuando dicta su resolución contraviniendo, de cualquier forma, una o varias normas vigentes. El error de facto se produce cuando el juzgador cambia equivocadamente los hechos, materia de la litis, o afecta cualquier otro hecho relacionado con las actuaciones del juicio.

En el caso en examen: el Dr. Marco Merino Garzón, en su calidad de Juez Primero de lo Civil de Napo no aceptó el Recurso de Apelación solicitado por la recurrente a pesar de haber sido interpuesto dentro del término de ley, contraviniendo lo establecido en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que establece: *"Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido notificados por escrito. La apelación será conocida por la Corte Provincial."*

Es decir la sentencia dentro de la Acción de Protección No. 09-2009 fue dictada el 14 de diciembre de 2010 y notificada el 16 de diciembre de 2010, por lo que, la recurrente contaba con tres días hábiles para interponer el recurso de Apelación, esto es, hasta el 21 de diciembre de 2010, fecha en la que presentó su recurso de apelación.

El numeral 2, del Art. 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que: *"En caso de violación al trámite de garantías constitucionales o incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple, de conformidad con las siguientes reglas: 2. En caso de que el incumplimiento sea de parte de servidoras o servidores judiciales o de acciones u omisiones durante el trámite, se considerará como falta gravísima y se comunicará el particular al Consejo de la Judicatura para que proceda de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial."*

El Art. 125 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: *"Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiera lugar, las juezas y jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial que en la substanciación y resolución de las causas, hayan violado los derechos y garantías constitucionales en la forma*

*prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, serán sometidos a procedimiento administrativo, siempre que de oficio o a petición de parte, así lo declare el tribunal que haya conocido la causa vía recurso, o que el perjudicado haya deducido reclamación en la forma prevista en este Código, sin perjuicio de que se pueda también presentar la queja en base a lo establecido en el artículo 109 número 7 de este Código".*

El Pleno del Consejo de la Judicatura al verificar que el juez sumariado actuó contraviniendo la disposición expresa del Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determina que, incurrió en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 7, del Art. 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece: "*A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: 7. Intervenir en las causas que debe de actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable*", de lo cual se lo declara responsable.

De las pruebas obradas en el expediente no se evidencia responsabilidad alguna con la que el Lcdo. Jorge Darío Campos, en su calidad de Secretario del Juzgado Primero de lo Civil de Napo haya incurrido en infracción tipificada en el Código Orgánico de la Función Judicial.

#### 5. ANTECEDENTES DE SANCIONES ANTERIORES

De la certificación otorgada por la Secretaría de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, se establece que los servidores judiciales sumariados, en el período del último año, registran las siguientes sanciones:

El Dr. Marco Merino Garzón, Juez Primero de lo Civil de Napo, el 10 de noviembre de 2011, fue suspendido de su cargo por 30 días sin goce de remuneración, resolución que fue ratificada por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 20 de diciembre de 2011.

El Lcdo. Jorge Darío Campos, Secretario del Juzgado Primero de lo Civil de Napo no registra sanciones.

#### 6. RESOLUCIÓN.

Por las razones expuestas, en uso de sus facultades constitucionales y legales, EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA resuelve:

- Declarar que el servidor judicial sumariado Dr. Marco Merino Garzón, Juez Primero de lo Civil de Napo ha incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 7, del Art. 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.
- Destituir de su calidad de servidor judicial al sumariado.
- Ratificar la inocencia de Jorge Darío Campos, Secretario del Juzgado Primero de lo Civil de Napo.

- Notifíquese con el contenido de esta resolución a los servidores judiciales sumariados, al señor Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, al señor Director Nacional de Personal y al señor Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario.
- Actúe la Secretaría de la Unidad de Control Disciplinario.
- Cúmplase y Notifíquese.

*Paulo Rodríguez Molina*

PAULO RODRIGUEZ MOLINA  
PRESIDENTE

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

*Tania Arias Manzano*

TANIA ARIAS MANZANO  
VOCAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION

*Hernando Yavar Jimenez*

HERNANDO YAVAR JIMENEZ  
VOCAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION



*Guillermo Falcon Aguirre*  
GUILLERMO FALCON AGUIRRE  
SECRETARIO GENERAL  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICION



EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN.- Quito,  
18 de Octubre de 2011. Las 9h45.

Expediente Disciplinario: A-557-UCD-11-MAC (DPM-114-2010).

Fecha de inicio del Expediente: 19 de octubre del 2010 (fs. 30).

Fecha de Ingreso a la Unidad de Control Disciplinario: 8 de septiembre del 2011 (fs. 2 CI).

Denunciante: Ab. Pablo Ignacio Cornejo Zambrano (24 y 25).

Servidor Judicial Sumariado: Ab. Pedro Córdaz Astebacio, en su calidad de Juez Temporal del Juzgado Vigésimo Quinto del Civil de Manabí, con sede en Manta.

## 1. ANTECEDENTES.

Mediante memorando No. 624-S-DPCM-2011 y de 8 de septiembre de 2011, el Jefe de la Unidad de Control Disciplinario, comunicó al denunciante la resolución de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, en la que se desecha la denuncia por considerar que se trata de asuntos jurisdiccionales.

## 2. ANÁLISIS DE FORMA

### 2.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo previsto en los Arts. 175 inciso segundo y 181, numerales 3 y 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde al Consejo de la Judicatura, correspondiéndole velar por la transparencia y eficiencia de los órganos que la componen. Esta facultad constitucional y legal posibilita al Consejo de la Judicatura de Transición ejercer el control disciplinario de las servidoras y servidores de la Función Judicial desarrollado en el capítulo VII, de la sección II, del título II del Código Orgánico de la Función Judicial.

El Art. 119 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que: "Las decisiones del director provincial, serán apelables, dentro del término de tres días desde la notificación, para ante el Pleno del Consejo de la Judicatura. De esta decisión no cabrá recurso alguno."

En el presente sumario, el denunciante señor Pablo Cornejo Zambrano, ha interpuesto recurso de apelación (fs. 494), en contra de la resolución dictada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, consecuentemente, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, es competente para conocer y resolver el presente caso.

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO.

El Art. 76.1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "...I. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes..."

Los artículos 21, 22 y 23 de las Normas para el Ejercicio de Control Disciplinario de la Función Judicial, para el Período de Transición, determinan que admitida a trámite la denuncia se procederá a notificar al servidor judicial, otorgándosele el término de cinco días para que conteste la misma y para que presente las pruebas pertinentes a los hechos denunciados.

En la presente causa disciplinaria, consta que el Ab. Pedro Emiro Cortes Ascaño, fue notificado por el Jefe de la Unidad de Control Disciplinario de la Función Judicial, el 15 de mayo de 2010, con la denuncia de infracción disciplinaria No. 557, que se le ha permitido ejercer su derecho a la defensa, para su defensa, a través de los recursos que se le otorgaron, sin embargo, no ha comparecido a la audiencia, respetando los principios del debido proceso, por lo que no habiéndose incurrido en violación de solemnidad, sustancial que influya o pueda influir en la decisión de la causa, se declara la validez de la misma.

## 2.3. LEGITIMACIÓN ACTIVA.

El Art. 66, numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "...Se reconocerá y garantizará a las personas: (...) 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas..."

Obra de autos a fojas 206 que el señor Pablo Ignacio Cornejo Zambrano ha comparecido al juicio de Expropiación No. 502-2010, en calidad de Tercero Perjudicado, demostrándose así que posee interés directo en el mencionado juicio, por lo que el denunciante cuenta con la legitimación suficiente para activar esta vía procesal, y así se lo declara.

## 2.4. OPORTUNIDAD EN LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN O RECURSO (PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA)

2.4.1. El Art. 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que: "La acción disciplinaria prescribe: (...) 3. Por las infracciones susceptibles de destitución, en el plazo de un año (...) Los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en el caso de queja o denuncia desde que se cometió la infracción; y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente..."

En la denuncia se atribuye al servidor judicial sumariado el cometimiento de una infracción disciplinaria sancionada con destitución, por lo que, de conformidad con el artículo 106.3 del Código Orgánico de la Función Judicial, la prescripción de la acción



operará una vez transcurrido un año, contado a partir de la fecha en la que se hubiere cometido la presunta infracción.

Los hechos materia de la denuncia se produjeron en diferentes fechas, siendo la última, y por ello la referencial, la que se habría cometido el 22 de septiembre de 2010. La denuncia fue presentada el 8 de Octubre de 2010 (fs. 24 a 25); es decir, dentro del plazo legal fijado en el artículo 106 antes citado, por lo que se declara la oportunidad de su interposición.

A fs. 30 del expediente, consta que el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, el 19 de Octubre de 2010, instruye sumario administrativo en contra del Ab. Pedro Emigdio Cortes Ascenio, Juez Temporal del Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de Manabí, en consecuencia, no ha operado la prescripción de la presente acción disciplinaria, y así se lo declara.

2.4.2. El artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que las decisiones de los directores provinciales serán apelables dentro del término de tres días. El 24 de agosto de 2011 el denunciante fue aleccionado (fs. 18) con la resolución expedida por el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, la 24 de agosto de 2011, en la que dicho recurso ha sido presentado dentro del término legal, consecuentemente, se declara oportunamente interpuesto.

### 3. TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

El denunciante expresa que el sumariado ha incurrido en la infracción disciplinaria establecida en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que preceptúa: "...A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones disciplinarias: (...) 7. Intervenir

### 4. ANÁLISIS DE FONDO

#### 4.1. ARGUMENTOS DEL DENUNCIANTE.

El señor Pablo Ignacio Cornejo Zambrano (fs. 24 a 25), manifiesta:

a) Que, el sumariado Pedro Emigdio Cortes Ascenio, antes de asumir la judicatura actuó como patrocinador del señor Ing. Néstor Miguel Zambrano Álava;

b) Que, mediante providencia de 22 de septiembre de 2010, el sumariado ordenó la entrega de USD. 153.023,26 al demandado Ing. Néstor Miguel Zambrano Álava, sin esperar el pronunciamiento de los otros demandados, y sin considerar que el Ing. Néstor Zambrano se opuso a la expropiación y que existía una demanda de reversión que se sustentaba en el INDA; y,

c) Que, ha solicitado la revocatoria de la mencionada providencia, la misma que no ha sido atendida.

#### 4.2. ARGUMENTOS DEL SUMARIADO.

El sumariado Pedro Emigdio Cortes Ascencio, (fs. 217 a 221), manifiesta:

a) Que, los Juicios de Expropiación números 501-2010 y 502-2010 fueron presentados en el mes de Julio de 2010, y que a él se le encargó el Juezado Vigésimo Quinto de lo Civil de Manabí, el 1 de Septiembre de 2009, por lo que no se le puede atribuir que es defensor de una de las partes;

b) Que, entre los hechos detallados en la denuncia, algunos de ellos se refieren a una interpretación jurídica que no tiene que ver con la acción disciplinaria;

sesenta días desde que se calificaron las denuncias de expropiación.

#### 4.3. HECHOS PROBADOS.

4.3.1. En la demanda de Resolución a las adjudicaciones del INDA (fs. 14 a 17),

Judicial Sumariado Ab. Pedro Cortes Ascencio.

4.3.2. La Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Manabí, mediante auto de fecha 24 de mayo del 2011 (fs. 491)

4.3.3. El Sumariado ordenó el pago de USD. 153.023,26, a la compañía KUBICARR S.A, cuyo representante es el Ing. Néstor Miguel Zambrano Alava, mediante providencia de 22 de septiembre de 2010, (fs. 189);

4.3.4. Se ha realizado el pago de USD. 153.023,26, a la compañía KUBICARR S.A, cuyo representante es el Ing. Néstor Miguel Zambrano Alava (fs. 191);

4.3.5. El 24 de septiembre de 2010, el denunciante ha presentado un escrito, en virtud del cual, solicitó la revocatoria de la providencia de 22 de septiembre (fs. 206 a 207) y hasta la fecha de presentada la denuncia, es decir, hasta el 5 de octubre de 2010, este petitorio, no ha sido despachada;

En consecuencia, al Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición le corresponde determinar:

a) Si el sumariado al actuar en las causas Nos. 501-2010 y 502-2010, ha vulnerado algún derecho constitucional.

b) Si los hechos denunciados son asuntos de índole jurisdiccional.



c) Si ha existido un retardo en la prestación del servicio judicial.

## 5. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

5.1. Sobre la intervención del servidor judicial sumariado en los Juicios de Expropiación números 501-2010 y 502-2010, a pesar de haber intervenido como abogado defensor de una de las partes.

El artículo 76, numeral 7, literal k) de la Constitución de la República del Ecuador, ordena que: "... En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las

que una parte o juez se debe separar del conocimiento de una causa

En el presente proceso, los señores abogados litigantes, en virtud de lo establecido en la Corte Provincial de Manabí, en su resolución de fecha 31 de Mayo de 2011, ha expresado que el servidor judicial sumariado no ha incurrido en la causal de excusa por haber intervenido en el juicio, como parte representada legal, separado, defensor, agente del ministerio público, perito o testigo. Por lo que, al existir una resolución de un organismo superior que al dictaminar la competencia entre dos juzgadores ha considerado que el sumariado es el competente para seguir conociendo el juicio de expropiación, por no existir causal que le obligue a separarse del conocimiento de la causa, restableciéndole la competencia, por lo tanto se observa que el servidor judicial

Sobre el pago de yantres depositados por la expropiación judicialista

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que "... el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas propias, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes".

El Art. 76. 7. Ibidem, ordena que: "... El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

- Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.
- Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.
- Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones...

El Art. 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, a la fecha de la actuación del sumariado, en concordancia con lo que dispone el Art. 125 del mismo cuerpo legal, establece que las servidoras y servidores judiciales estaban sometidos a procedimiento administrativo si actuaban en las causas con manifiesta negligencia o error inexcusable.

El Art. 782 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la tramitación del juicio de expropiación sólo tiene por objeto determinar la cantidad que debe pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada.

El Art. 788 Ibidem, dice: "Presentada la demanda, el juez o juez(a) debe llamar a las partes, de conformidad con lo establecido en este Código, para el avilío del fundo (...) En el momento de fijar el término de audiencia, el juez o juez(a) debe presentar su diligencia, la cual no excederá de quince días hábiles, a contar desde el momento del avilío del fundo."

En la causa No. 502-2010, el sumariado dispuso al condenar a USD. 153.023,26, a la compañía KUBICARR S.A, mediante resolución de 12 de septiembre de 2010, sin

pago, ordenó a la entrega de dichos valores, sin esperar que se ejecutorie la

El que se pague el justo precio por el terreno expropiado era un derecho de todos los demandados, no sólo de uno de ellos. El servidor judicial sumariado, en su calidad de juez, estaba obligado a garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes...

constitucional de la ley y que transcurra el término que concede el Código de Procedimiento Civil, a fin de que se ejerza el derecho de impugnación a la providencia dictada, procede a ejecutarla, causando un detrimento en los derechos de las demás partes procesales dentro de la causa No. 502-2010, configurándose violaciones a los derechos y garantías en la forma prevista en los artículos 75 "...Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión...", y 76.1 "...corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes..." de la Constitución de la República del Ecuador; además, de un error inexcusable en la actuación del servidor judicial sumariado, ya que en su calidad de juzgador estaba en la obligación de advertir que no se estaba observando la normativa constitucional y legal.

Por lo expuesto, el servidor judicial sumariado ha incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 108.8 y 109.7 en concordancia con lo que establece el Art. 125 del Código Orgánico de la Función Judicial.

5.3. Sobre el retardo en el despacho de la causa.



El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad..."

El artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: "La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario..."

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley..."

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 109-5, tipifica como infracción disciplinaria el incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio.

En el presente caso, se tiene en cuenta que, atendido el 12 de noviembre de 2010, la demanda fue admitida y se le otorgó un plazo de veinte y cinco días para comparecer, un plazo excesivo para otorgar el servicio, por lo que el sumariado incurriría en la infracción disciplinaria establecida en el Art. 109-5 del Código Orgánico de la Función Judicial.

#### 5.4. Concurrencia de Faltas

El Art. 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que "en caso de concurrir varias faltas, se sancionará con la más grave de ellas".

En el presente caso, se ha comprobado que el servidor judicial sumariado ha incurrido en tres faltas disciplinarias, de las cuales una está sancionada con destitución del cargo y las otras con suspensión en el ejercicio de sus funciones y amonestación escrita o multa, respectivamente, por lo que de conformidad con la disposición antes citada se debe aplicar la sanción disciplinaria por la falta más grave que en el presente caso sería la de destitución.

#### 6. RESOLUCIÓN.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN, Resuelve:

- 6.1. Aceptar el recurso de apelación interpuesto por el demandante señor Pablo Cornejo Zambrano.

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. A-557-UCD-11-MAC (DPM-114-2010)

- 6.2. Revocar la resolución expedida por el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, con la que se desechaba la denuncia presentada por el señor Pablo Cornejo Zambrano.
- 6.3. Destituir del cargo de Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Manabí, al Ab. Pedro Enigdio Cortes Ascenio, por haber incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en los artículos 107.5, 108.8 y 109.7 *-en concordancia con el artículo 125- del Código Orgánico de la Función Judicial.*
- 6.4. Notificar con el contenido de esta resolución a las partes, Direcciones Nacionales de Personal y Función Judicial, al Director Provincial del Consolado Judicial.
- 6.5. Actúe la Secretaría de la Unidad Control Disciplinario.



## EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. MOT-620-UCD-011-PM

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Portoviejo, 27 de marzo de 2012.- Las 16h11.

Expediente Disciplinario: MOT-620-UCD-011-PM

Fecha de Inicio del Expediente: 5 de mayo de 2011 (fs. 55)

Fecha de Ingreso a la Unidad de Control Disciplinario: 5 de octubre de 2011 (fs. 11 CD).

### 1.- PARTES PROCESALES

Denunciante: Lic. Juan Daniel Valverde Guevara en su calidad de Director Nacional de Rehabilitación Social.

Servidor Judicial Sumariado: Dr. Jorge Eduardo Alvarado, en su calidad de Juez Vigésimo Primero de Loja.

### 2.- ANTECEDENTES

Mediante Oficio No. 921-11 CJ-DL de 4 de octubre de 2011, recibido en la Unidad de Control Disciplinario, el 5 de octubre de 2011, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, remitió el expediente signado con el número (MOT-620-UCD-011-PM.) seguido en contra del Dr. Jorge Eduardo Alvarado, en su calidad de Juez Vigésimo Primero de Loja, en virtud de lo dispuesto en el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber emitido informe motivado, según el cual, consideró, haciendo referencia a la denuncia, que el Dr. Jorge Eduardo Alvarado habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada por el artículo 108, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es: *"No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 72, 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador"*.

### 3.- ANÁLISIS DE FORMA

#### 3.1 COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 178, inciso segundo y el artículo 181, numerales 3 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 254 y 264, numeral 14, y el artículo 117, inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, al que corresponde velar por la transparencia y eficacia de los órganos que la componen. Esta prestatá constitucional y legal faculta al Consejo de la Judicatura para ejercer el control disciplinario de los servidores y los servidores de la Función Judicial, de acuerdo con los principios y las reglas establecidas en el capítulo VII, de la sección II, del título II del cuerpo normativo citado.

Mediante proceso electoral de Referendo y Consulta Popular realizado el 7 de mayo de 2011, cuyos resultados fueron publicados en el Registro Oficial No. 490, el 13 de julio de 2011 (anexo 4) el pueblo soberano del Ecuador decidió aprobar la propuesta de

reforma del artículo 20 del Régimen de Transición, el mismo que actualmente dispone: "Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerán sus funciones por un período improrrogable de 18 meses".

### 3.2 VALIDEZ PROCESAL.

El Artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador preceptúa: *"Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes"*.

En cumplimiento de dicha disposición, se advierte que el auto inicial fue notificado al servidor judicial sumariado en legal y debida forma, conforme consta de la razón sentada por el Secretario de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, pieza procesal que obra a fojas 64 del expediente.

Asimismo, se le concedió al servidor judicial procesado el tiempo suficiente a fin de que pueda preparar su defensa y ejercerla de manera efectiva.

Las partes han presentado las pruebas de cargo y de descargo de las que se han erido asistidas y han contado con la oportunidad procesal para contradecirlas; es decir, se han respetado todas y cada una de las garantías del debido proceso, reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, bajo el título de derechos de protección; por lo tanto, al no haberse incurrido en violación de solemnidad alguna, se declara la validez procesal del presente sumario disciplinario.

### 3.3 LEGITIMACIÓN ACTIVA.

De acuerdo con el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial: *"La acción disciplinaria se ejercerá de oficio, o por queja o denuncia (...) podrá presentar denuncia escrita cualquier persona natural o jurídica, grupo de personas, pueblo o nacionalidad, que tenga interés directo en un hecho o servicio solicitado..."*

El denunciante, señor Jean Daniel Valverde Guevara ocupó el cargo de Director Nacional de Rehabilitación Social en virtud de la destitución de la Ab. Alexandra Zúñiga, ordenada por el sumariado mediante acción de protección que se tramitó en el Juzgado Vigésimo Primero de Loja.

De lo indicado, se desprende que el denunciante, como representante de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social tiene un interés directo en la acción de protección que ordenó la destitución de la funcionaria que ocupó dicho cargo previamente; por lo expuesto se declara que el denunciante cuenta con la legitimación suficiente para activar la presente vía procesal, conforme así se lo declara.

### 4. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN MOTIVO DE ESTE SUMARIO.

El informe motivado emitido por el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, no especifica directamente las infracciones en las que habría incurrido el sumariado, sin embargo se refiere a las *"violaciones señaladas por el denunciante"* por lo que se desprende que el servidor judicial sumariado, Ab. Jorge Eduardo Alvarado, en su calidad de Juez Vigésimo Primero de Loja, habría incurrido en la infracción tipificada y sancionada por el artículo 108, numeral 8 del Código Orgánico de la



Función Judicial, el mismo que sanciona a la servidora o servidor judicial por: "(...) 8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República."

#### 4.1 OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN.

El artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que: "La Acción disciplinaria prescribe (...) 3. Por las infracciones susceptibles de destitución, en el plazo de un año."

El inciso segundo, del numeral 3, de la disposición legal citada expresa: "...los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en el caso de queja o denuncia desde que se conoció la infracción (...) La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente".

La denuncia fue presentada el 17 de marzo de 2011 (fs. 36 a 45), en la que consta que el servidor judicial sumariado habría cometido los hechos que se imputan en su contra el 5 de enero de 2011.

El denunciante reconoció su firma y nùbrica el 5 de mayo de 2011 con lo que se inició el correspondiente sumario disciplinario. (fs. 55).

En consecuencia, se declara que la acción disciplinaria ha sido iniciada dentro del plazo establecido en la disposición legal antes transcrita; además, no se ha producido caducado la potestad sancionadora, atribuida por la Constitución y la Ley al Consejo de la Judicatura, por no haber transcurrido el plazo de un año, contado a partir de la fecha en la que se instruyó el presente proceso, conforme lo dispuesto por el Art. 106 del Código Orgánico de la Función Judicial.

### 5.- ANÁLISIS DE FONDO

#### 5.1 ARGUMENTOS DEL DENUNCIANTE:

El denunciante, manifiesta (fs.1 a 9):

- Que, en la providencia dictada por el sumariado, el 5 de enero de 2011 existe un acto violatorio de derechos constitucionales, por cuanto se ordenó la destitución de la Directora Nacional de Rehabilitación Social a la que el sumariado mediante sentencia de 15 de julio de 2010, le había conminado a hacer algo; esto es, restituírle el cargo a un ex-servidor público de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que no tenía la capacidad legal para hacer.
- Que, la Directora Nacional de Rehabilitación Social, en su firme decisión de acatar la sentencia dictada por el sumariado el 15 de julio de 2010 ofreció una alternativa indemnizatoria la cual no fue considerada por el sumariado al momento de ordenar la destitución.
- Que, de haber existido el desuento, al juez sumariado, en garantía del debido proceso, le correspondía ordenar el inicio de un sumario administrativo a la

Directora Nacional de Rehabilitación Social, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7, literal a de la Constitución de la República del Ecuador, para que luego de éste se resuelva sobre la sanción correspondiente.

- d) Que, no se respetaron las garantías del debido proceso de la demandada dentro de la acción de protección No. 443-2010, puesto que su destitución operó *ipso facto*, sin mediar sentencia de acción por incumplimiento o sumario administrativo instaurada por la autoridad competente.

## 5.2 ARGUMENTO DEL SERVIDOR JUDICIAL SUMARIADO

El Dr. Jorge Eduardo Alvarado, argumenta (fs. 90 a 91):

- a) Que, niega los fundamentos de hecho y de derecho en la presente queja.
- b) Que, su actuación se dirigió a una aplicación de los principios y derechos que concede la Constitución de la República del Ecuador.
- c) Que, la sentencia que dictó fue confirmada por la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja.
- d) Que, no se encontraba facultado para buscar soluciones ajenas a la Constitución en la fase de ejecución dentro de una acción de protección.

## 5.3 HECHOS PROBADOS.

- a) El 15 de julio de 2010, el sumariado aceptó la acción de protección propuesta por el señor Vicente Bernavé Zumbá Carrera y dispuso dejar sin efecto la acción de personal No. 3006, a fin de que el accionante, Vicente Zumbá, sea reintegrado a sus labores en la dependencia de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (fs. 12 a 15).
- b) El 3 de septiembre de 2010, la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja confirmó la sentencia dictada por el sumariado. (fs. 17).
- c) El 28 de octubre de 2010, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, basada en la inexistencia de partidas presupuestarias manifestó la imposibilidad de la ejecución de la sentencia proponiendo la alternativa de indemnización económica. (fs. 18).
- d) El 1 de diciembre de 2010, el sumariado después de haber corrido traslado a las partes con la contestación del demandado, a la propuesta alternativa de compensación, estableció que "según el contenido del escrito que se despachara habida receptividad por parte del accionante al escrito que fuera presentado por la Dirección Nacional de rehabilitación (...) siendo la única solución el reintegro al trabajo del accionante" (fs. 20).
- e) El 5 de enero de 2011, el sumariado una vez resuelto el recurso de apelación, ordenó la destitución de Directora Nacional de Rehabilitación Social en la persona de Alexander Zaitarra, o quien haga sus veces, por no haber ejecutado hasta la fecha la sentencia de 15 de Julio de 2010. (fs. 21).

En consecuencia al Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición le corresponde determinar:



1.- Si la actuación del Juez sumariado, al dictar su auto de 5 de enero de 2011, puede ser calificada como un error inexcusable.

2.- Si el sumariado al admitir a trámite la acción de protección incurrió en un error inexcusable.

## 6.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

### 6.1. Sobre el error inexcusable

El artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión...", así mismo, el artículo 169 *Ibidem* prevé: "...El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso...". (El subrayado no pertenece al texto original)

El artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador preceptúa: "Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley." (El subrayado no corresponde al texto original)

El artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial ordena: "...A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y jueces, según correspondencia, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos: (...) 2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente...", así mismo, el artículo 130 *Ibidem* dispone: "...Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: (...) 2. Velar por una eficiente aplicación de los principios procesales...". (El subrayado no corresponde al texto original)

Cuando se habla de error judicial inexcusable, nos referimos a la notoria ineptitud o descuido al momento de administrar justicia por parte de la servidora o servidor judicial. El error judicial, por su propia naturaleza, siempre es imputable al juzgador, más que a cualquier otro servidor judicial.

Por otra parte, es importante señalar que el error judicial, en sentido estricto, se produce exclusivamente cuando el mismo se comete en un acto formal y materialmente jurisdiccional, que a su vez, puede ser de *iure* o de *facto*.

El de *iure* se produce cuando el juzgador se aparta considerablemente de las reglas que para el efecto se establecen en los ordenamientos jurídicos, o bien, cuando dicta una resolución contraviniendo, de cualquier forma, una o varias normas jurídicas vigentes.

En cuanto al error judicial de *facto* se produce cuando el juzgador cambia los hechos materia de la *causa* o altera cualquier otro hecho relacionado con las situaciones del juicio.

En el presente caso, observamos que, el servidor judicial ~~sumariado~~, Dr. Jorge Eduardo Alvarado, Juez Vigésimo Primero de Loja, dispuso ~~la destitución de la Ab. Alejandra Zumarraga~~, del cargo de Directora Nacional de Rehabilitación Social del Ecuador, por considerar que el servidor público no acató las disposiciones contenidas en su sentencia de 15 de julio de 2010 dentro de la acción de protección No. 2010-0443.

Cabe señalar que la referida sentencia ordenaba la reintegración del cargo del señor Vicente Bernave Zumba Cabrera "a su trabajo habitual" en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, disposición imposible de cumplir, por cuanto la vacante fue restituida al señor Stalin Ortiz Palacios, en acatamiento a lo ordenado en sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito el 1 de febrero de 2010.

En el presente caso, mas allá del antecedente de hecho expuesto en el párrafo *in supra*, es necesario recurrir al precedente jurisprudencial, que sobre el tema, emitió la Corte Constitucional, dentro de la Acción Extraordinaria de Protección No. 1114-10-EP, cuya sentencia No. 076-10-SEP-CC fue expedida el 22 de diciembre de 2010, antes de la destitución ordenada por el ~~sumariado~~, la misma que, en su parte pertinente ha considerado y resuelto:

"...En la especie, se debe determinar *los hechos que violan garantías constitucionales pueden declarar directamente el incumplimiento de sentencias constitucionales e imponer sanciones a las autoridades que supuestamente no han dado cumplimiento a su resolución* (A...)

Conforme lo determina la Constitución de la República en sus artículos 93 y numerales 5 y 9 del artículo 436, la Corte Constitucional es la única competente para conocer y resolver las acciones por incumplimiento, así como para iniciar un proceso de destitución; aquello guarda relación con las disposiciones contenidas en el artículo 183 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (...)

De lo antes expuesto se colige que la Jueza no procedió conforme lo determinan los artículos antes citados de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; por ende, con sus actuaciones ha violado el derecho a la seguridad jurídica (...) en supuesta aplicación del artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República, la Jueza procede a destituir de su cargo de rector al legitimado activo, lo cual no es procedente por las circunstancias antes señaladas, por lo que el Juez de instancia ha excedido sus facultades, generando una vulneración a la seguridad jurídica en el país, al no acatar a las disposiciones constitucionales y a las normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano (...)

La Corte Constitucional ya ha manifestado de manera enfática dentro de la causa No. 0483-09-EP que el juez de instancia no puede exceder sus facultades en la fase de cumplimiento de una sentencia, ya que la actividad del juez tiene límites que están dados por el respeto de las disposiciones constitucionales y legales en cuanto a la tramitación de las diversas acciones constitucionales (...)



*Con estos antecedentes se deduce que no ha existido una tutela judicial efectiva por parte de la señora Jueza Segundo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, ya que no ha actuado con diligencia al momento de observar las disposiciones normativas contenidas en la Constitución, al no tener competencia para proceder a la destitución del legitimado activo.* (el subrayado no corresponde al texto original).

El servidor judicial sumariado, al destituir directamente del cargo de Directora Nacional de Rehabilitación Social, a la abogada Alexandra Zumárraga, sin accionar previamente, ante la Corte Constitucional -único órgano competente para hacerlo-, una Acción por Incumplimiento de Sentencia, a más de actuar sin competencia, quebrantó disposiciones constitucionales y legales; concretamente el Art. 436 de la Constitución de la República del Ecuador que establece: La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiere la ley, las siguientes atribuciones: (...) 9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales... y el Art. 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que establece que: "La acción de incumplimiento de sentencias constitucionales tendrá el siguiente trámite: (...) 2. Cuando se trate del incumplimiento de sentencias expedidas dentro de procesos de garantía judiciales de derechos constitucionales la jueza o juez competente, a petición de parte, remitirá el expediente a la Corte Constitucional, al cual acompañará un informe debidamente argumentado sobre las razones del incumplimiento suyo o de la autoridad obligada, para lo cual tendrá un término de cinco días desde el momento en que el interesado hizo la solicitud..." (el subrayado no corresponde al texto original).

Del estudio de las disposiciones constitucionales y legales antes transcritas y, del análisis de los precedentes jurisprudenciales invocados, los mismos que son aplicables al caso en concreto, se llega a establecer que el servidor judicial sumariado, al destituir a la Ab. Alexandra Zumárraga, del cargo de Directora Nacional de Rehabilitación Social no solo contrarió normas constitucionales y legales, sino que desconoció arbitrariamente el procedimiento que la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y sentencia de jurisprudencia vinculante, que regulan el ejercicio de la acción por incumplimiento de sentencias en materia de garantías constitucionales.

Es decir, el servidor judicial sumariado, al arrogarse facultades propias de la Corte Constitucional se apartó del trámite que la ley establece para el ejercicio de la acción de incumplimiento de sentencias constitucionales. Actuación que refleja un exceso en las facultades del juez de instancia y determina violaciones expresas a normas constitucionales y legales.

Cabe señalar que la sentencia de la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, a la que se refiere el sumariado, para reforzar su proceder, jamás ratificó la destitución ordenada por el sumariado, hecho que sustenta el presente sumario, sino que confirmó su sentencia de 15 de julio de 2010, en la que se ordenó la restitución del cargo del señor Vicencio Zumbá en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.

Por lo expuesto, se ha comprobado que, el servidor judicial sumariado ordenó la destitución de una servidora pública dentro de una acción de protección, sin ser competente para hacerlo, puesto que, como queda analizado previamente, solo la Corte

Constitucional, máximo organismo de interpretación y control constitucional, es competente para conocer, tramitar, resolver e imponer las sanciones ~~incluida la destitución~~ por el incumplimiento de sentencias constitucionales.

Es así, que el servidor judicial sumariado, al ~~obrar sin competencia y contrariando normas y procedimiento expreso, dentro de la Acción de Protección No. 2010-0443,~~ incurrió en un error que amerita ser calificado como ~~inexcusable~~.

Ahora bien, la actuación, sin competencia, atenta severamente contra la adecuada Administración de Justicia, y las garantías del debido proceso especialmente las señaladas en los numerales 1 y 3 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador y al principio de seguridad jurídica, e implica un desconocimiento de las normativas por parte de quienes la cometen.

Consecuentemente, el Dr. Jorge Eduardo Alvarado, en su calidad de Juez Vigésimo Primero de Loja, adecuó su conducta a lo previsto en el artículo 125 del Código Orgánico de la Función Judicial, que preceptúa: "...Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar, los jueces y juezes y demás servidoras y servidores de la Función Judicial que en la substanciación y resolución de las causas, hayan violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, serán sometidos a procedimiento administrativo (...) A sti perjuicio de que se pueda también presentar la queja en base a lo establecido en el artículo 109 número 7 de este Código...", norma que nos remite a la aplicación e imposición de la falta disciplinaria constante en el artículo 109, numeral 7 *Idem*, que ordena: "... A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: (...) 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable..." (el subrayado no corresponde al texto original)

No se puede dejar de observar que, la acción de protección No. 2010-0443 versa sobre temas de mera legalidad, que por su naturaleza debieron ser ventilados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ya que se trataba de dejar sin efecto una acción de personal, a través de la cual se dio por terminado el nombramiento provisional de un servidor público, que laboró en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.

Consecuentemente, la acción de protección propuesta por el señor Vicente Zumbra Cabrera era improcedente, y en este sentido debió declarársela, pues la vía constitucional tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, y no la impugnación de un acto administrativo que pretende la restitución del cargo de un servidor público.

## 7.- SANCIONES ANTERIORES

El sumariado, Jorge Eduardo Alvarado, registra una amonestación impuesta mediante resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura de 7 de marzo de 2005.

## 8.- PARTE RESOLUTIVA.

En consecuencia, en mérito de las consideraciones expuestas, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA** resuelve:



8.1 Declarar al servidor judicial sumariado, Dr. Jorge Eduardo Alvarado responsable de la infracción tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 125 *Ibidem*.

8.2 Destituir de su calidad de servidor judicial, al Dr. Jorge Eduardo Alvarado, en su calidad de Juez Vigésimo Primero de Loja.

8.3 Disponer al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja que se instuya sumario disciplinario en contra del Dr. Leonardo Vélez, Dr. Carlos Tandazo y el Dr. Fabián Sánchez, jueces y conjuces respectivamente de la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, así como del Dr. Jorge Eduardo Alvarado, por la posible comisión de irregularidades durante la sustanciación de la acción de protección No. 2010-0443, que no han sido materia del presente sumario.

8.4 Notificar con el contenido de esta resolución a las partes, a la Dirección Nacional de Personal, a la Dirección Nacional Financiera, a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja; y, al Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario, para los fines pertinentes.

8.5 Actúe la Secretaría de la Unidad de Control Disciplinario.

*Notifíquese y Cumplase.-*

f) Pablo Rodríguez Molina, Tania Arias Manzano, Fernando Yavar Umpierrez y Guillermo Falconi Aguirre, Presidente, Vocales y Secretario General del Consejo de la Judicatura.- Lo que comunico para los fines de Ley.-

Dra. Belén Montalvo Bautista  
SECRETARIA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO (E)  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN.-  
Quito, 27 de Octubre de 2011; las 18h20.

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO: MOT-642-UCD-011-PM (DPLR-013-2011-JJ)

FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE: 7 de Septiembre de 2011 (fs. 62)

FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO:  
27 de Octubre de 2011 (fs. 9 del cuadernillo de instancia)

#### 1.- PARTES PROCESALES:

1.1.- El presente sumario disciplinario se inició de oficio, en virtud de lo ordenado por el Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición mediante resolución expedida el 11 de Agosto de 2011 dentro del Trámite de Suspensión Preventiva No. 002-2011 (fs. 24 a 27 vta.).

1.2.- SERVIDOR JUDICIAL DENUNCIADO: El Dr. Agustín Espinel Vélez, en su calidad de Juez del Juzgado del Trabajo de Los Ríos.

#### 2.- ANTECEDENTES:

2.1.- Mediante OFICIO No. 1047-CJDPLR-2011-MF de fecha 26 de Octubre de 2011 (fs. 8 del cuadernillo de instancia), la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos remite, con Informe Motivado, el Proceso Disciplinario seguido con el No. DPLR-013-2011-JJ, a fin de que sea el Pleno del Consejo de la Judicatura quien adopte la correspondiente resolución, ya que las faltas disciplinarias que presuntamente han sido cometidas por el servidor judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, se encuentran sancionadas con destitución.

2.2.- Según consta en el informe motivado que obra de fojas 1 a 7 del cuadernillo de instancia, la falta disciplinaria que se le imputa al ~~servidor~~ judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, es la tipificada en el artículo 109 numeral 7° del Código Orgánico de la Función Judicial; por tal motivo, es competencia del Pleno imponer la sanción que corresponda, según lo establece el artículo 264 numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial.

#### 3.- ANÁLISIS DE FORMA:

##### 3.1.- Competencia:

3.1.1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, inciso segundo, y 181 numerales 3 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 254 y 264, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno,

\*Art. 109. INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones disciplinarias: 7. Intervenir en las causas como juez, fiscal o defensor público, por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable (...)\*

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, correspondiéndole velar por la transparencia y eficiencia de los órganos que la componen.

3.1.2.- Mediante proceso electoral de referéndum y Consulta Popular realizados el 7 de mayo del 2011, cuyos resultados se publicaron en el Registro Oficial No. 490, el 13 de julio del año en curso, en su anexo 4 se reformó el artículo 20 del Régimen de Transición, que dispone: *"Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerán sus funciones por un periodo improrrogable de 18 meses"*. En consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición es competente para conocer el presente sumario disciplinario.

3.1.3.- Por su parte, el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el Consejo de la Judicatura ejercerá sus funciones a través de sus componentes estructurales, entre estos, se encuentra el Pleno, como máximo órgano representativo del Consejo de la Judicatura. Así, el artículo 264 *ibidem*, reza:

*"Art. 264.- Funciones.- Al Pleno le corresponde: (...) 14. Imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los servidores judiciales, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros, o absolvelas si fuere conducirse."* (Lo destacado no pertenece al texto original).

3.1.4.- En el caso en examen, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, dentro de su informe motivado, considera que el Dr. Agustín Alberto Espinol Vélez, Juez del Juzgado Segundo del Trabajo de Los Ríos, incurrió en una falta disciplinaria gravísima (*supra* 2.2) sancionada con destitución. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 264, numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura resolver sobre los hechos materia del presente Proceso Disciplinario.

### 3.2.- Validez Procesal:

3.2.1.- Nuestra Constitución no solo se limita a reconocer el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales (art. 75 CRE) -encargados de administrar justicia-, sino también a que el proceso se desarrolle con las debidas garantías. Así, la Constitución de la República en su artículo 76 consagra el derecho al Debido Proceso que incluye las garantías básicas, vertigracia el derecho al juez natural predeterminado por la ley, la asistencia letrada, el proceso público, la utilización de medios de prueba, entre otros, mismas que deben respetarse en cada una de las etapas del proceso en donde se determinan derechos y obligaciones.

3.2.2.- En la especie, el presente sumario disciplinario ha sido sustanciado en estricto cumplimiento de todas las formalidades que prescribe la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Normas para el Ejercicio del Control Disciplinario de la Función Judicial, y demás normas aplicables a la materia, por lo que no habiéndose incurrido en violación de

solemnidad sustancial alguna que influya o pueda influir en la decisión de la causa, se declara válido el proceso.

### 3.3.- Legitimación activa:

3.3.1.- La acción disciplinaria, según lo establece el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, puede ser ejercida de oficio o por queja o *denuncia*. Adicionalmente, en concordancia con lo anteriormente mencionado, el segundo inciso del artículo 113 del citado cuerpo legal dispone:

*"(...) Podrá presentar denuncia escrita, cualquier persona natural o jurídica, grupo de personas, pueblo o nacionalidad que tenga interés directo en un juicio o servicio solicitado. (...)"* (Lo destacado no pertenece al texto original)

3.3.2.- Obra en el proceso disciplinario (fs. 24 a 27 vta.) la resolución expedida el 11 de Agosto de 2011 por el Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, en la que dispone que se inicie el sumario disciplinario en contra del servidor judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, quien actuó como Juez del Juzgado Segundo de Trabajo de Los Ríos dentro de la Acción Constitucional de Medida Cautelar signada con el No. 01-2011.

3.3.3.- Por su parte, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos le ha dado el correspondiente trámite al sumario disciplinario y una vez concluido el mismo, ha remitido el expediente disciplinario *-a este órgano administrativo-* con informe motivado de conformidad con lo que dispone el segundo inciso del artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial, que reza:

*"(...) Si no fuere competente imponer la sanción que corresponda, enviará el expediente del sumario al Pleno del Consejo de la Judicatura"* (Lo destacado no pertenece al texto original).

3.3.4.- En tal virtud, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, por intermedio de su Director, está legitimado para emitir informe motivado en aquellos asuntos que, de acuerdo a su competencia, no puede imponer la sanción que corresponda.

### 3.4.- Oportunidad para iniciar el sumario disciplinario (Prescripción de la Acción Disciplinaria):

3.4.1.- El Código Orgánico de la Función Judicial ha establecido los *plazos procesales* dentro de los cuales puede ser ejercida la acción disciplinaria (art. 113 COFJ), sea de oficio o a petición de parte *-queja o denuncia-*. En este sentido, el artículo 106 *ibidem*, establece tres plazos distintos dentro de los cuales se puede ejercer la acción, así, las acciones disciplinarias que tengan relación con faltas leves deberán ser ejercidas dentro de los treinta días, las que se refieran a faltas graves deberán ser ejercidas dentro de los sesenta días, y por último, en lo concerniente a las infracciones gravísimas deberán ser ejercidas dentro del plazo de un año, salvo las que estuviesen vinculadas con un delito, pues en ese evento prescribirán en cinco años.



3.4.2.- Ahora bien, todos los plazos de prescripción *-aquí enunciados-*, por expreso mandato del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial se contarán, dependiendo si la acción fue ejercida de oficio o a petición de parte, de la siguiente forma:

*"(...) Los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en el caso de queja o denuncia desde que se cometió la infracción; y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora." (Lo destacado no pertenece al texto original).*

3.4.3.- Conforme lo analizado en acápites anteriores (*supra* 3.3.2), el presente sumario disciplinario se ha iniciado en virtud de lo dispuesto por el Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición mediante resolución expedida el 11 de Agosto de 2011 (fs. 24 a 27 vta.), mediante la cual el Director Provincial de Los Ríos tuvo conocimiento de los hechos materia del presente sumario disciplinario, para luego iniciarlo el 7 de Septiembre de 2011. Por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, no ha operado la prescripción de la acción disciplinaria, y así se lo declara.

#### 4.- ANÁLISIS DE FONDO:

##### 4.1.- Tipificación de la falta disciplinaria:

4.1.1.- El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos dentro de su informe motivado (fs. 1 a 7 del cuadernillo de instancia) ha considerado que el servidor judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, Juez del Juzgado Segundo de Trabajo de Los Ríos, habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109 numeral 7<sup>o</sup> del Código Orgánico de la Función Judicial.

##### 4.2.- ARGUMENTOS DEL DENUNCIANTE:

El señor José Ricardo Serrano Salgado ha manifestado lo siguiente (fs. 14 a 19):

4.2.1.- Que el servidor judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, en su calidad de Juez del Juzgado Segundo de Trabajo de Los Ríos, al momento de resolver no ha tomado en consideración disposiciones constitucionales y legales, existiendo además una evidente confusión de las distintas acciones contempladas en la Carta Magna.

4.2.2.- Que el Dr. Agustín Espinel Vélez, Juez del Juzgado Segundo del Trabajo de Los Ríos, en varias partes de su resolución se refiere a las medidas cautelares como "acción constitucional" situación que es un grave error jurídico, pues se está confundiendo entre los términos acción constitucional y medida cautelar, ya

<sup>7</sup> Art. 109.- INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones disciplinarias: 7. Intervenir en las causas como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error intencional; (...)"

que las dos tienen distintas naturalezas, límite y sobre todo en lo que tiene que ver con su alcance.

4.2.3.- Que la acción constitucional es principal respecto de la medida cautelar, tanto es así que el artículo 87 de la Constitución de la República manifiesta: "*Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independiente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación u amenaza de violación de un derecho*", es decir unas son las acciones constitucionales de protección de derechos (acción de protección, habeas corpus, acción por incumplimiento, entre otras) las cuales resuelven sobre el fondo del asunto presuntamente violatorio y otra cosa distinta son las medidas cautelares, las mismas que en ninguna parte resuelven sobre el fondo de la litis, tanto es así que el artículo 28 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que: "*el otorgamiento de medidas cautelares y su adopción no constituirá prejulgamiento sobre la declaración de la violación ni tendrán valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de derechos*."

4.2.4.- Que resulta necesario manifestar que el juzgador incumple también el artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, toda vez que esta disposición legal ordena a los juzgadores que en caso de ordenar medidas cautelares, el juez entre otros asuntos debe especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, pues de no hacerlo estas medidas pierden su característica preventiva, cautelar y con eso se deforma su génesis.

4.2.6.- Que contrario a las disposiciones constitucionales y legales el servidor judicial en cuestión, resolvió sobre aspectos de fondo, sin modular su resolución en el tiempo, de tal forma que lo dispuesto de ninguna manera responde a la naturaleza jurídica de la medida cautelar.

4.2.7.- Que de la simple lectura de la resolución se evidencia la carencia de motivación, pues de ninguna manera se adecua a lo que ordena el artículo 76, numeral séptimo, literal I), de la Constitución de la República, incurriendo por tanto en una de las faltas graves establecidas en el artículo 108, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que la mencionada resolución, no se apega a las reglas mínimas de motivación de resoluciones judiciales, más aún cuando en los ondebles argumentos utilizados por el servidor judicial en referencial, ni siquiera se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda, así como tampoco se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, en otras palabras es una actitud volitiva del juzgador, misma que raya en lo arbitrario, consecuentemente es inconstitucional.

#### 4.3.- ARGUMENTOS DEL SERVIDOR JUDICIAL DENUNCIADO:

El Dr. Agustín Espinel Vélez, quien actuó como Juez del Juzgado Segundo del Trabajo de Los Ríos, sostiene lo siguiente (fs. 113 a 123):

4.3.1.- Que habiendo recaído en su judicatura, previo el respectivo sorteo legal efectuado el 27 de Septiembre de 2010, la Acción de Garantías Constitucionales y Medida Cautelar Independiente presentada por la Sra. Rina Rumania Rubles Chacha y otros pertenecientes al Sindicato General de Trabajadores de la

Compañía VIÑA CAROLINA VIÑA CAROLI S.A., quienes se ampararon en los artículos 75 y 86 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 6 y 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

4.3.2.- Que mediante resolución dictada el 28 de Septiembre de 2010 y notificada el mismo día a los accionantes mediante oficio No. 09-989-JTQ a los señores Sub-Intendentes de la Provincia del Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Manabí, Tungurahua, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas resolvió sobre la Medida Cautelar Independiente, describiendo en forma clara la motivación de la resolución basándose en el derecho al trabajo y al pleno empleo consagrados en el artículo 33 de la Carta Magna.

4.3.3.- Que con la calidad otorgada a todos los jueces a nivel nacional como jueces constitucionales en razón de no existir jueces especializados en Derecho Constitucional, por lo que en algunos casos le ha correspondido resolver asuntos constitucionales, por tal motivo admitió la medida cautelar independiente propuesta por el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Viña Carolina Viñas Caroli S.A., en base al análisis prolijo de cada una de las resoluciones.

4.3.4.- Que posteriormente, con fecha 15 de Diciembre y 22 de Diciembre de 2010, el Ministerio del Interior y Ministerio de Turismo comparecieron por intermedio de sus representantes legales solicitando la revocatoria de la medida cautelar, es decir, cuando ya había transcurrido en exceso el término que les concede la ley para presentar cualquier recurso de no encontrarse de acuerdo con la resolución, pero muy a pesar de haber sido presentada extemporáneamente por haber transcurrido más de sesenta días, procedió en forma razonada y motivadamente a expedir una providencia con fecha 30 de Diciembre de 2010 en donde negaba la revocatoria solicitada, en razón de no haberse justificado el cese del peligro inminente al derecho al trabajo de los accionantes, por cuanto se continuaban cerrando las salas de juego porque en ese sentido se concedió la medida cautelar.

4.3.5.- Que la resolución fue emitida con anterioridad a la consulta popular del 7 de Mayo de 2011, es decir, cuando aún no había consulta y peor aún se habían publicado los resultados oficiales de la misma.

4.3.6.- Que con fecha 3 de Agosto de 2011, comparecen nuevamente los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Viña Carolina Viña Caroli S.A., manifestando que otra vez el señor Sub-Intendente de Policía les estaba impidiendo el derecho al trabajo, pues se encontraban colocando sellos de clausura en los locales, motivo por el cual dispuso mediante auto de 4 de Agosto de 2011 que se oficie nuevamente a los señores Sub-Intendentes de Policías de las diferentes localidades en donde se encontraban situadas las salas de juego de propiedad de la Compañía Viña Carolina Viña Caroli S.A., para que procedan a retirar los sellos de clausura.

#### 4.4.- HECHOS PROBADOS:

4.4.1.- El servidor judicial, Dr. Agustín Espínel Vélez, sin motivación alguna, mediante resolución expedida el 28 de Septiembre de 2010, decidió admitir la

solicitud de medida cautelar independiente, tal como obra de autos de fojas 2 a 5 del proceso.

4.4.2.- Posteriormente, el servidor judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, mediante providencia de fecha 30 de Diciembre de 2010 (fs. 6 a 10), decidió negar el pedido de revocatoria formulado por el Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, en calidad de Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, así como el presentado por el señor Freddy Ehlers Zurita, en calidad de Ministerio de Turismo.

4.4.3.- Finalmente obra de autos (fs. 78 a 81) que el servidor judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, recién el 26 de Agosto de 2011 revocó la medida cautelar dispuesta dentro del juicio de la referencia.

En consecuencia, al Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición le corresponde determinar:

1.- Si la actuación del Dr. Agustín Espinel Vélez, Juez del Juzgado Segundo del Trabajo de Los Ríos, consistente en haber ordenado la medida cautelar, puede constituir error inexcusable.

## 5.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA:

### 5.1.- Sobre el error inexcusable:

5.1.1.- La actividad de las servidoras y servidores judiciales, particularmente la de las juezas y jueces, se encuentra regida por normas, tanto permisiva como imperativas, orientadas a garantizar una recta, transparente y eficiente administración de justicia. En este sentido, el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 129 impone como deberes de todas las juezas y jueces, entre otros, los siguientes:

*"Art. 129.- Facultades y deberes genéricos de las juezas y jueces.- A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y jueces, según correspondan, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos:*

1. *Aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internacionales de derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ella;*
2. *Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, (...)" (Lo destacado no pertenece al texto original).*

5.1.2.- Adicional a los deberes de las juezas y jueces que le impone el Código Orgánico de la Función Judicial, tenemos la Tutela Judicial Efectiva que constituye un "derecho de las personas que el Estado protege, y no un derecho del Estado que la persona protege"<sup>3</sup>, el cual se encuentra consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República, que establece:

<sup>3</sup> HERNÁNDEZ TERÉN, Miguel. La Tutela Judicial Efectiva como instrumento esencial de la Democracia. pág. 21

*"Art. 75 CRE.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley." (Lo destacado no pertenece al texto original).*

3.1.3.- El derecho a la tutela judicial efectiva está constituido por: a) el acceso a la administración de justicia; b) la respuesta motivada y justa de ella a través de una resolución oportuna; y, c) la ejecución de ésta en forma integral e inmediata. El Dr. Miguel Hernández Terán<sup>4</sup> al momento de referirse a la Tutela Judicial Efectiva nos dice:

*"Si bien la tutela judicial comprende la respuesta motivada sobre la pretensión, no debe pensarse que esa respuesta necesariamente debe ser favorable al derecho o interés legítimo ejercido. El rechazo motivado y justo de lo que se pretendió es también expresión de tutela judicial efectiva. Y habrá violación a dicha tutela si el juez no decide sobre todo lo que pidió, si no amplía la resolución incompleta, si no aclara la resolución oscura; cuando ante la acción infundada sucumbe dándole la razón. La tutela judicial efectiva exige certeza en la decisión de fondo, por eso el error judicial quiebra esa tutela, y por eso la ignorancia de la Ley es un factor de afectación de la tutela judicial efectiva." (Lo destacado no pertenece al texto original).*

014 [ 3.1.4.- Cuando hablamos de error judicial inexcusable, nos estamos refiriendo a la notoria ineptitud o descuido al momento de administrar justicia por parte del servidor judicial. El error judicial, por su propia naturaleza, siempre es imputable al juzgador, más que a cualquier otro servidor judicial. Por otra parte, el error judicial, en sentido estricto, se produce exclusivamente cuando el mismo se comete en un acto formal de la administración de justicia. Este error puede ser de *iuris* o de *facto*. El de *iuris* se produce cuando el operador de justicia se aparta de las reglas que para el efecto se establecen en los ordenamientos jurídicos, o bien, cuando dicta su resolución contraviniendo, de cualquier forma, una o varias normas vigentes. El error de *facto* se produce cuando el juzgador cambia equivocadamente los hechos materia de la litis, o altera cualquier otro hecho relacionado con las actuaciones del juicio.

7 3.1.5.- En el caso en examen, el servidor judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, Juez del Juzgado Segundo de Trabajo de Los Ríos, se pronunció sobre el fondo del asunto dentro de una Acción Cautelar Constitucional, vulnerando flagrantemente el artículo 28 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que prohíbe que el juez que conozca una acción de esta naturaleza se pronuncie sobre el fondo. Tal artículo consagra lo siguiente:

<sup>4</sup> HERNÁNDEZ TERÁN, Miguel. La Tutela Judicial Efectiva como instrumento esencial de la Democracia. (Cg. 80)

*"el otorgamiento de medidas cautelares y su adopción no constituirá un prejuzgamiento sobre la declaración de violación ni tendrán valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de derechos."*

5.1.6.- Adicionalmente, es importante señalar que la sola interposición de una medida cautelar no obliga al juez que conozca de la misma a concederla, ya que siempre debe tenerse en cuenta los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y es cierto que la autoridad judicial, por el hecho de que se solicite una medida cautelar, se encuentra forzado a concederla. El artículo 27 de la referida ley, expresa:

*"Las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho."*

*Se considerará grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación. (...) "*

5.1.8.- Dentro de la Acción Cautelar Constitucional se observa que el servidor judicial sumariado concedió la medida cautelar sin modular el tiempo de la resolución, puesto que se trata de una acción cautelar o preventiva, cuyo tiempo o vigencia tiene que ser definido y no indeterminado, como en efecto lo hizo el servidor judicial en cuestión, es decir, otorgó una medida cautelar sin definir el tiempo de vigencia de dicha medida, afrentando contra la naturaleza de este tipo de medidas, actuando con notorio desmedo al ~~monopato~~ de administrar justicia, conducta que permitió la configuración del error judicial inexcusable.

5.1.9.- Vale indicar que el servidor judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, ~~promovió~~ con dicha actuación, el quebrantamiento de la Tutela Judicial Efectiva, ya que la misma, en palabras del Dr. Miguel Hernández Terán en su obra La Tutela Judicial Efectiva como instrumento esencial de la Democracia, comprende la respuesta motivada sobre la pretensión, y no debe pensarse que esa respuesta necesariamente debe ser favorable al derecho o interés legítimo. El rechazo motivado y justo de los que se pretendió es también expresión de tutela judicial efectiva.

5.1.10.- Por tanto, el servidor judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, incurrió en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial<sup>5</sup>, la cual ha sido desarrollada en los párrafos que precede, misma que es sancionada con destitución.

<sup>5</sup> Art. 109 COFJ.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error manifiesto."

Concediéndose: Art. 123 COFJ.- "... Sin perjuicio de que se pueda también presentar la queja en base a lo establecido en el artículo 109 numeral 7 de este Código"



**6.- RESOLUCIÓN:**

En mérito de lo anteriormente expuesto, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN**, resuelve:


6.1.- Declarar la responsabilidad administrativa del servidor judicial, Dr. Agustín Espinel Vélez, por haber cometido la infracción tipificada en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.


6.2.- Destituir del cargo al Dr. Agustín Espinel Vélez por la falta disciplinaria prevista en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial (*supra* 5.1), misma que ha sido cometida en su calidad de Juez del Juzgado Segundo de Trabajo de Los Ríos.

6.3.- Notificar con el contenido de esta resolución al servidor judicial sancionado (*supra* 1.2), a los Directores Nacionales de Personal y Financiero, a la Dirección Provincial de Los Ríos; y, a la Unidad de Control Disciplinario, para los fines pertinentes.


6.4.- Actúe la secretaría de la Unidad de Control Disciplinario.

6.5.- Cúmplase y notifíquese.


  
FAUSTO RODRIGUEZ MOLINA  
PRESIDENTE  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN

  
TANIA ARIAS MANZANO  
VOCAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN

  
BERNARDO YAVAR UMPIERREZ  
VOCAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN

  
GUILLERMO FALCONI AGUIRRE  
SECRETARIO GENERAL  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Quito, 29 de febrero de 2012.-  
Las 19h26.

Expediente Disciplinario No. MOT 770-UCD-011-MAC (OF-DG-137-2011-S).

**FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE:** 30 de marzo de 2011 (fs. 43).

**FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO:** 19 de diciembre de 2011 (fs. 2 C.I.).

## 1.- PARTES PROCESALES

### 1.1.- ACCIONANTE

- \* Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos. (fjs. 129 a 131 y vuelta).

### 1.2.- SERVIDORES JUDICIALES SUMARIADOS

Ab. Manuel Suárez Capelo, Dr. Juan Ramos Mancheno, y Ab. Narcisca Rosado Bonilla, por sus actuaciones como Jueces y Jueza del Tribunal Sexto de Garantías Penales de Guayas.

## 2.- ANTECEDENTES

Mediante Memorando No. 2902-DPCJ-DG-2011-JPI-I, de 12 de diciembre de 2011, recibido en la Unidad de Control Disciplinario el 19 de diciembre de 2011, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos remitió el expediente número OF-DG-137-2011-S(MOT-770-UCD-011-MAC) seguido en contra de los funcionarios, Ab. Manuel Suárez Capelo, Dr. Juan Ramos Mancheno, y Ab. Narcisca Rosado Bonilla, Jueces y Jueza del Tribunal Sexto de Garantías Penales de Guayas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber emitido informe motivado, según el cual, considera que los sumariados habrían incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas por el artículo 108, numeral 7, que establece: "Dejar caducar la prisión preventiva"; y numeral 8 del mismo artículo que enuncia: "No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la subsanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República.", del Código Orgánico de la Función Judicial (fjs. 123 a 131).

## 3.- ANÁLISIS DE FORMA

### 3.1 COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 178, inciso segundo y el artículo 181, *numerales 3 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador*, en concordancia con los artículos 254 y 264, numeral 14 y el artículo 117, inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, al que corresponde velar por la transparencia y eficacia de los órganos que la componen. Esta potestad constitucional y legal faculta al Consejo de la Judicatura para ejercer el control disciplinario de los servidoras y servidores de la Función Judicial, de acuerdo con los principios y las reglas



establecidas en el capítulo VII, de la sección II, del título II del cuerpo normativo últimamente indicado.

Mediante proceso electoral de Referendo y Consulta Popular realizado el 7 de mayo de 2011, cuyos resultados fueron publicados en el Registro Oficial No. 490, el 13 de julio de 2011 (anexo 4) el pueblo soberano de la República del Ecuador decidió aprobar la reforma al artículo 20 del Régimen de Transición, el mismo que actualmente dispone: *"Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerán sus funciones por un período improrrogable de 18 meses"*.

En consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura es la autoridad competente para conocer y resolver el presente sumario disciplinario.

### 3.2. VALIDEZ PROCESAL

El Artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador preceptúa: *"Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes"*.

En cumplimiento de dicha disposición, se advierte que el auto inicial fue notificado a los sumariados en legal y debida forma, conforme consta de la razón sentada por la Secretaría de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos, pieza procesal que obra a fs. 43 y 45 del expediente.

Asimismo, se le ha concedido a los servidores judiciales el tiempo suficiente a fin de que puedan preparar su defensa y ejercerla de manera efectiva.

Las partes han presentado las pruebas de cargo y de descargo de las que se han creído asistidas y han contado con la oportunidad procesal para contradecirlas; en definitiva, se han respetado todas y cada una de las garantías del debido proceso, reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República, bajo el título de derechos de protección; por lo tanto, al no haberse incurrido en violación de solemnidad alguna, se declara la validez procesal de todo lo actuado.

### 3.3 LEGITIMACIÓN ACTIVA

Código Orgánico de la Función Judicial determina:

Artículo 113, *"La acción disciplinaria se ejercerá de oficio, o por queja o denuncia...."*

Artículo 114, *"Los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por la Directora o el Director Provincial, o por la unidad que el Consejo de la Judicatura establezca de manera general, cuando llegare a su conocimiento información confiable de que el servidor de la Función Judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada por este Código"*.

El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos, en su informe motivado (fs. 129 a 131) atribuyó a los Jueces y la Jueza del Tribunal Ab: Manuel Suárez Capelo y Dr. Juan Ramos Manchano el conocimiento de las infracciones tipificadas y sancionadas por el Art. 108, numeral 7 y 8 del Código Orgánico de la

Función Judicial; esto es, haber dejado caducar la prisión preventiva, dentro de la causa penal No. 0581-2009, y haber violado las garantías constitucionales del procesado contenidas en los artículos 75, 76 y 77; por lo que, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos, instruyó el presente sumario disciplinario de oficio.

Por lo tanto, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos cuenta con la legitimación suficiente para activar la presente acción disciplinaria.

#### **4.- TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN MOTIVO DE ESTE SUMARIO**

Del informe motivado se desprende que los sumariados habrían incurrido en la infracción tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial: "...7. *Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable*", y la infracción contenida en el artículo 108, numeral 8, que establece: "*No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República.*"

##### **4.1 OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN**

El artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que: "*La Acción disciplinaria prescribe: ... 2. Por infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración en el plazo de sesenta días.*"

El inciso segundo, del numeral 3 de la disposición citada expone: "*...los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en el caso de queja o denuncia desde que se cometió la infracción, y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente.*"

La instrucción del presente sumario tiene como antecedente la investigación No. INV-DG-627-2010 (fs. 38 a 42) realizada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos de 21 de marzo de 2011; por lo que el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos, al haber contado con información confiable sobre la existencia de una presunta infracción disciplinaria, instruyó, de oficio, el presente sumario, el 30 de marzo de 2011 (fs. 43).

En consecuencia, se declara que la acción disciplinaria ha sido iniciada dentro del plazo establecido en la disposición legal transcrita; además, no ha caducado la potestad sancionadora atribuida por la Constitución y la Ley al Consejo de la Judicatura, por no haber transcurrido el plazo de un año, contado a partir de la fecha en la que se instruyó el presente proceso, conforme así lo dispone el Art. 106 del Código Orgánico de la Función Judicial.

#### **5.- ANÁLISIS DE FONDO**

##### **5.1 ARGUMENTOS DEL ACCIONANTE**



## EXPEDIENTE DISCIPLINARIO N.º MOT-770-UCD-011-MAC

El informe motivado del Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos (fojas 129 a 131), se fundamenta en:

Que, los funcionarios judiciales sumariados al avocar conocimiento del proceso penal No. 654-2009 en los diferentes momentos procesales que les tocó sustanciar, debieron darse cuenta de que el imputado estaba acusado de un delito sancionado con prisión, en consecuencia, la caducidad de la medida de prisión preventiva, por mandato Constitucional (art. 77, numeral 9) se produce a los seis meses luego de haberse procedido a la aprehensión; de ahí que, transcurrido este tiempo, sin consideración alguna, los sumariados estaban en la obligación de disponer la libertad del procesado y no esperar que tal hecho lo dispongan los Jueces de la Primera Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, al resolver una acción de Habeas Corpus.

Que, se aprecia que los jueces sumariados, cuando conocieron el proceso materia de la presente investigación, ya se había producido la caducidad de la prisión preventiva existente en contra del procesado, sin embargo no proceden conforme lo señala el Art. 77 de la Constitución, y el art. 169 del Código de Procedimiento Penal, es decir, debían poner en libertad al detenido, y al no actuar conforme lo estipulan las normas invocadas en el momento procesal que conocieron la causa, por lo que su conducta constituye falta disciplinaria sancionada en el régimen disciplinario del Código Orgánico de la Función Judicial.

### 5.2 ARGUMENTOS DE LOS SERVIDORES JUDICIALES SUMARIADOS

La Dra. Narcisca Rosado Bonilla (ffs. 69, 70 y vuelta) expresa:

Que, el 29 de diciembre de 2009, el actuario del Juzgado Sexto del Tribunal de Garantías Penales recibió el expediente y que para esta fecha, ya se había producido la caducidad de la medida cautelar de prisión preventiva.

El Doctor Manuel Eduardo Suarez Capelo, en su escrito de comparecencia (ffs. 90 y vuelta) expresa:

Que, consta que el procesado fue detenido el 26 de junio de 2009, y que el expediente fue recibido el 29 de diciembre de 2009, cuando habían transcurrido 6 meses y tres días desde su detención, por lo que, por corresponder a un delito de prisión, ya se había producido la caducidad de la prisión preventiva.

El Dr. Juan Ramos Mancheno (110 y vuelta) expresa:

Que, el expediente fue recibido en este Tribunal, el 29 de diciembre de 2009, cuando habían transcurrido seis meses desde su detención, y como se trata de un delito reprimido con prisión la caducidad de la medida cautelar de prisión preventiva ya había operado.

Que, a pesar de lo indicado, en un esmero para que no sea puesto en libertad el procesado, sin recibir la correspondiente sentencia, convocaron en cuatro ocasiones para la realización de la audiencia de juzgamiento, sin que esta se haya podido realizar por causas no atribuibles al Tribunal.

### 5.3 HECHOS PROBADOS

- El 29 de junio de 2009, Carlos Julio Moreno Jarrín ingresó al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil (fs. 59).

El 28 de julio de 2009, el Presidente del Tribunal Quinto de Garantías Penales, Ab. Jorge Durán Díaz, avocó conocimiento del proceso seguido en contra de Carlos Julio Moreno Jarrín.

- El 5 de enero de 2010, el Dr. Juan Ramos Mancheno, Presidente del Tribunal Sexto de Garantías Penales de Guayas, avocó conocimiento del proceso No. 654-2009 y dispuso que se ponga en conocimiento de los demás Jueces del Tribunal la recepción del proceso (fs. 79).

El 8 de enero de 2010, el Presidente del Sexto Tribunal de Garantías Penales de Guayas, mediante providencia convocó a audiencia pública de juzgamiento, para el 18 de enero de 2010; y dispuso que se notifique a los otros jueces del Tribunal. (fs. 80).

- El 19 de enero de 2010, el Presidente del Sexto Tribunal de Garantías Penales de Guayas, mediante providencia convocó a audiencia pública de juzgamiento para el 1 de febrero de 2010; y dispuso que se notifique a los otros jueces del Tribunal. (fs. 81).

El 1 de febrero, la secretario Ab. Ramón Cabrera Mejía, sentó la razón certificando que la audiencia no se pudo realizar por falta del abogado defensor particular.

El 2 de febrero de 2010, el Presidente del Sexto Tribunal de Garantías Penales de Guayas, mediante providencia convocó a audiencia pública de juzgamiento para el 9 de febrero de 2010. (fs. 82).

- El 9 de febrero de 2010, el secretario Ab. Ramón Cabrera, sentó la razón certificando que no se pudo realizar la audiencia por cuanto el Fiscal se inhibe por haber sido parte procesal.

El 11 de febrero de 2010, por licencia del Dr. Juan Ramos Mancheno asumió la presidencia el Ab. Ramón Cabrera Mejía y mediante providencia, convocó por esta vez a audiencia pública de juzgamiento para el 1 de marzo de 2010 y dispuso que se notifique a los otros jueces del Tribunal. (fs. 83).

- El 8 de marzo de 2010, el secretario Ab. Ramón Cabrera, sentó la razón certificando que no se pudo realizar la audiencia por cuanto el proceso se encuentra en la Sala de lo Penal por haberse planteado la acción de habeas corpus.

El 23 de febrero de 2010, la Primera Sala de lo Penal y de Tránsito declara con lugar la acción de habeas Corpus, planteada por Carlos Julio Moreno Jarrín.

El 1 de marzo de 2010, el Juez Presidente de la Primera Sala de lo Penal y Tránsito, mediante oficio No. 0138-PSPCT-CPG-10 dirigido a Director del Centro de Rehabilitación Social de Valores, ordena la inmediata libertad de Carlos Julio Moreno Jarrín.

**En consecuencia, le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura determinar:**

Si los sumariados al no haber declarado la caducidad de la prisión preventiva y la libertad del procesado han violado los derechos y garantías previstos en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución, en perjuicio del procesado.



## 6.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

### Sobre la Caducidad de la Prisión Preventiva

El artículo 77, numeral 9 del Constitución dispone: *"Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el procedimiento, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto."*

El artículo 169 del Código de Procedimiento Penal enuncia: *"Caducidad de la prisión preventiva.- La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. En ambos casos, el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectivo el auto de prisión preventiva. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez de garantías penales que conoce la causa..."*

Se ha demostrado documentadamente que el Tribunal Sexto de Garantías Penales recibió el expediente signado con el número 654-2009 (en contra de Moreno Jarrín Carlos Julio) el 29 de diciembre de 2009, es decir, cuando ya había transcurrido el tiempo establecido en los artículos anteriores para la caducidad de la prisión preventiva, por lo que no se puede responsabilizar y sancionar al Tribunal Sexto de Garantías Penales de Guayas con la infracción contenida en el artículo 108, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece la siguiente infracción: "Dejar caducar la prisión preventiva".

### Actuación del Tribunal Quinto de Garantías Penales de Guayas

Documentalmente se ha demostrado que el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Guayas avocó conocimiento del juicio No. 320-2009 (en contra de Carlos Julio Moreno Jarrín) el 28 de julio de 2009, y el 11 de diciembre de 2009 mediante oficio No. 5689-VTP-G envía este proceso a la sala de sorteos para que sea resorteado este proceso por ser un juicio rezagado del sorteo anterior, siendo resorteado el 28 de diciembre de 2009, correspondiendo para su conocimiento al Tribunal Sexto de Garantías Penales de Guayas. Estos hechos demuestran que el Tribunal Quinto de Garantías Penales fue competente por 5 meses respecto del proceso materia del presente sumario, sin convocar a audiencia de juzgamiento.

Por estos antecedentes se presume juicio de responsabilidad de Jorge Dorán Díaz, Gabriel Noboa Icaza y Edwin Logrón por sus actuaciones como Jueces del Quinto Tribunal de Garantías Penales de Guayas, por presuntamente haber permitido la caducidad de la prisión preventiva ordenada en contra de Carlos Julio Moreno Jarrín.

### Sobre la violación de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 75, 76 y 77

El artículo 3, numeral 1 de la Constitución establece: *"Son deberes primordiales del Estado: 1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales..."*

El artículo 11, numeral 3 de la Constitución establece: *"Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte."*

El tercer párrafo del artículo 426 de la Constitución establece: *"Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos."*

El artículo 76 numeral 1, de la Constitución establece: *"Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes."*

El artículo 77, numeral 9 del Constitución dispone: *"Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el procedimiento, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en los casos por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto."*

Obra de autos a foja 59, la constancia que el procesado ingresó al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, el 29 de junio de 2009; y el 5 de enero de 2010, el Dr. Juan Ramos Mancheno, Presidente del Tribunal Sexto de Garantías Penales de Guayas, (foja 79) avocó conocimiento del proceso, es decir cuando ya habían transcurrido más de 6 meses contados desde la fecha en que el detenido fue privado de su libertad.

Los sumariados tuvieron conocimiento de la caducidad de la prisión preventiva, según se puede observar en los escritos presentados por el Dr. Manuel Eduardo Suárez Capelo y por el Doctor Juan Ramos Mancheno, el 8 de abril de 2011, en dando, en lo principal exponen: *"... como se trata de un delito reprimido con prisión en los que la caducidad opera a los seis meses, esta ya se había producido cuando recibimos el expediente. A pesar de lo indicado, en un esfuerzo para que no sea puesto en libertad el procesado sin recibir la correspondiente sentencia, lo convocamos en cuatro ocasiones para la realización de la audiencia de juzgamiento sin que esta se haya podido realizar por razones que no se nos puede atribuir..."*, es así que convocaron para el 18 de enero de 2010, 1 de febrero de 2010, 9 de febrero de 2010 y 1 de marzo de 2010 a fin de efectuar la correspondiente audiencia de juzgamiento, mediante providencias de 8 de enero, 19 de enero, 2 de febrero, 11 de febrero de 2010, respectivamente.

Los sumariados, teniendo conocimiento que se había producido la caducidad de la prisión preventiva, ordenada en el proceso penal No. 654-2009, según lo dispuesto en el artículo 77, numeral 9, de la Constitución tenían la obligación de declarar caducada la medida cautelar de prisión preventiva, a favor del procesado y disponer su inmediata libertad, toda vez que, por tratarse de un delito sancionado con prisión dicha caducidad se produce en 6 meses, sin que sea jurídicamente aceptable tener al detenido más tiempo, bajo la responsabilidad de la jueza o juez que lo permita.



Para ser puesto en libertad, el procesado fue obligado a interponer acción de Habeas Corpus; la Primera Sala de lo Penal y de Tránsito declaró con lugar la acción planteada, lo que implica que el Carlos Julio Moreno Jarrín estuvo arbitrariamente detenido y que la autoridad que conocía de este hecho y tenía la potestad de revocar esta situación antijurídica no lo hizo, esta fue el Tribunal Sexto de Garantías Penales.

Que, los jueces del Tribunal Sexto de Garantías Penales, conociendo que se había producido la caducidad de la prisión preventiva ordenada en contra de Carlos Julio Moreno Jarrín por el solo paso del tiempo, no procedieron a declarar y ordenar la inmediata libertad del detenido, en consecuencia obligaron a que el procesado permanezca arbitrariamente privado de su libertad, lo que deviene en una violación del derecho fundamental a la libertad personal en la forma establecida en el artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República en cuanto al derecho de toda persona a que la privación de la libertad proceda: *"La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrito de juez o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La juez o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva"*; lo que nos lleva a concluir que los sumariados incurrieron en la infracción disciplinaria tipificada en el Art. 108, 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece: *"8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de los casos, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República."*

#### 7.- Antecedentes disciplinarios

La Secretaría Encargada de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, certificó que los sumariados no registran sanciones impuestas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en contra de MANUEL SUÁREZ CAPELO, JUAN RAMOS MANCHENO y NARCISA ROSADO BONILLA, en sus calidades de JUECES Y JUEZA DEL TRIBUNAL SEXTO DE GARANTÍAS PENALES DEL GUAYAS.

#### 8.- PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, en mérito de las consideraciones expuestas, EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA resuelve;

1 Declarar a los servidores judiciales Manuel Suárez Capelo, Juan Ramos Mancheno y Narcisca Rosado Bonilla responsables del cometimiento de la infracción disciplinaria determinada en el numeral 8, del Art. 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, por sus actuaciones como Jueces y Jueza del Tribunal Sexto de Garantías Penales de Guayas.

2 Por lo antes indicado se impone la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones, por el plazo de treinta días, sin goce de remuneración, a los servidores judiciales Manuel Suárez Capelo, Juan Ramos Mancheno y Narcisca Rosado Bonilla,

por sus actuaciones como Jueces y Jueza del Tribunal Sexto de Garantías Penales de Guayas.

3 Por existir indicios sobre la responsabilidad de la caducidad de la prisión preventiva ordenada en contra de Carlos Julio Moreno Jarrín, se dispone se inicie sumario administrativo en contra de los Jueces del Quinto Tribunal de Garantías Penales, Jorge Durán Díaz, Gabriel Noboa Icaza y Edwin Lagroño.

4 Notificar con el contenido de esta resolución a los servidores judiciales sumariados, a la Dirección Nacional de Personal, a la Dirección Nacional de Finanzas, a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas y Galápagos; y, al Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario, para los fines pertinentes.

5 Actúe la Secretaría de la Unidad de Control Disciplinario.

6 *Notifíquese y Cúmplase.-*

f) Paulo Rodríguez Molina, Tania Arias Manzano, Fernando Yávar Umpiérrez (ABSTENCION) y Guillermo Falconí Aguirre, Presidente, Vocales y Secretario General del Consejo de la Judicatura de Transición.-

Lo que comunico para los fines de Ley.-

Dra. Belén Montalvo Baulista  
SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO (E)  
CONSEJO DE LA JUDICATURA



THE JOURNAL OF THE

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

PUBLISHED WEEKLY

VOLUME 10, NUMBER 1

JANUARY 1, 1917

CHICAGO, ILL.

Subscription price, \$5.00 per annum in advance

Single copies, 15 cents

Entered as second-class matter, July 16, 1891

Postpaid

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917

Authorizes sale at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917

Postmaster: This publication is published weekly except on Sundays and holidays

Copyright, 1917, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Second-class postage paid at Chicago, Ill.

Postpaid

Subscription price, \$5.00 per annum in advance

Single copies, 15 cents

Entered as second-class matter, July 16, 1891

Postpaid

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917

Authorizes sale at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917

Postmaster: This publication is published weekly except on Sundays and holidays

Copyright, 1917, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Second-class postage paid at Chicago, Ill.

Postpaid

Subscription price, \$5.00 per annum in advance

Single copies, 15 cents

Entered as second-class matter, July 16, 1891

Postpaid

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917

Authorizes sale at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917

Postmaster: This publication is published weekly except on Sundays and holidays

Copyright, 1917, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Second-class postage paid at Chicago, Ill.

Postpaid

Subscription price, \$5.00 per annum in advance

Single copies, 15 cents

Entered as second-class matter, July 16, 1891

Postpaid

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917

Authorizes sale at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917

Postmaster: This publication is published weekly except on Sundays and holidays

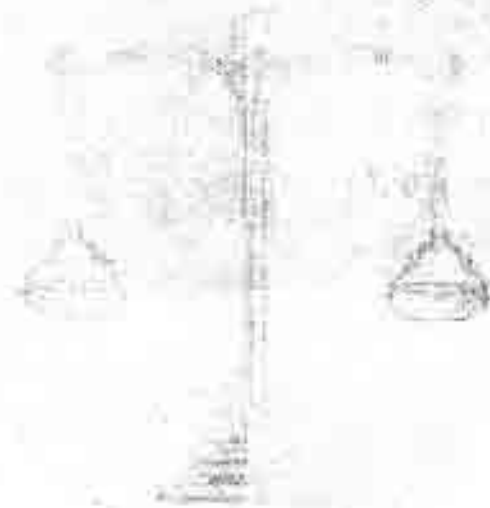
Copyright, 1917, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Second-class postage paid at Chicago, Ill.

Postpaid

Subscription price, \$5.00 per annum in advance



## EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. MOT-142-UCD-012-PM

**EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.-** Quito, a 14 de marzo de 2012;  
las 17h36.

**VISTOS:**

**EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. MOT-142-UCD-012-PM**

**FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE:** 18 de agosto del 2011

**FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO:** 7 de febrero de 2012

**1.- PARTES PROCESALES:****1.1 ACCIONANTE:**

Coronel de Policía Galo Alfredo Carrera Vizcete, Comandante Provincial de la Policía Nacional de Esmeraldas.

**1.2 SERVIDORES JUDICIALES SUMARIADOS**

Abogados, Mario Guevara Fariás, Milton Quiñones y Jacinto Rivera, Conjuces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas.

**2.- ANTECEDENTES**

Mediante Oficio No. 010-OPCDE-CJT-2011, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas, remitió a la Unidad de Control Disciplinario el presente expediente, con el respectivo informe motivado (Fjs. 43-50 via.) en virtud del cual, la autoridad provincial concluye que los servidores judiciales, Mario Guevara Fariás, Milton Quiñones y Jacinto Rivera, Conjuces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, habrían incurrido en la infracción disciplinaria, sancionada y tipificada en el artículo 198, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial; esto es; *"No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda o en general en la subestanciación y resolución de las causas o haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución"*, al declarar con lugar la acción de protección por asuntos de mera legalidad, en consecuencia no se actuó conforme a la ley.

**3.- ANÁLISIS DE FORMA****3.1 Competencia**

De conformidad con el artículo 178, inciso segundo y el artículo 181, numerales 2 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 254 y 264, numeral 14, y el artículo 117, inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, al que corresponde velar por la transparencia y eficacia de los órganos que la componen. Esta potestad constitucional y legal faculta al Consejo de la Judicatura para ejercer el control disciplinario de la servidoras y de los servidores de la Función Judicial, de acuerdo con los principios y las

Mediante proceso electoral de Referendo y Consulta Popular realizado el 7 de mayo de 2011, cuyos resultados fueron publicados en el Registro Oficial No. 490, el 13 de julio de 2011, el pueblo soberano del Ecuador aprobó la propuesta de reforma al artículo 20 del Régimen de Transición, el mismo que actualmente dispone: *"Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerán sus funciones por un periodo improrrogable de 18 meses"*.

Por lo tanto, el Pleno del Consejo de la Judicatura, es la autoridad competente para conocer y resolver sobre el recurso interpuesto.

### 3.2 Validez Procesal

El Artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador preceptúa: *"Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes"*.

En cumplimiento de dicha disposición, se advierte que el auto inicial fue notificado a los sumariados, en legal y debida forma, conforme consta de la razón sancionada por la Secretaría de la Dirección Provincial del Consejo de Judicatura de Esmeraldas (Fjs 19-21).

Asimismo, se ha concedido a los sumariados el tiempo suficiente a fin de que pueda preparar su defensa y ejercerla de manera efectiva.

Las partes han presentado las pruebas de cargo y de descargo, de los que se han creído asistidos y han contado con la oportunidad procesal de contradecirse; es decir, se han respetado todas y cada una de las garantías del debido proceso, reconocidos en el artículo 76 de la Constitución de la República, bajo el título de derechos de protección por lo tanto, al no haberse incurrido en violación de solemnidad alguna, se declara la validez procesal del presente sumario administrativo.

### 3.3 Legitimación activa

El Código Orgánico de la Función Judicial determina:

Artículo 113, *"La acción disciplinaria se ejercerá de oficio o por queja o denuncia..."*.

Artículo 114, *"Los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por la Directora o el Director Provincial, o por la unidad que el Consejo de la Judicatura establezca de manera general, cuando llegare a su conocimiento información confiable de que el servidor de la Función Judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada por este Código"*.

En mérito del oficio presentado por el Coronel de Policía Galo Carrera Vizueta, Comandante Provincial de la Policía Nacional de Esmeraldas, el 11 de agosto del 2011, la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Esmeraldas, dispuso el inicio del sumario administrativo en contra de Mario Guevara Fariás, Milton Quinones y Jacinto Rivera, Conjueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas (fjs. 11) conforme lo dispuesto en el artículo 17 y 19 de las Normas para el Ejercicio del Carácter Disciplinario de la Función Judicial para el periodo de Transición, vigente a la fecha de instrucción del presente sumario disciplinario.



Por lo tanto, la Dirección Provincial Temporal del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas, cuenta con la legitimación suficiente para ejercer la presente acción disciplinaria, conforme así se lo declara.

#### 4.- TIPIFICACIÓN DE LA FALTA DISCIPLINARIA

En el Informe Motivado, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Esmeraldas, (fs. 74 -84) considera que los servidores judiciales sumariados habrían incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 8, Art. 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es: *"No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la sustanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República"*

##### 4.1 Oportunidad en el ejercicio de la acción

El artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: *"La acción disciplinaria prescribe: ...2 Por las infracciones susceptibles de destitución, en el plazo de un año, salvo las que estuvieren vinculadas con un delito que prescribiere en cinco años, sin perjuicio del régimen de prescripción del delito, y de la acción establecida en la ley."...* *"Los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en caso de de queja o denuncia desde que se cometió la infracción, y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha en que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente."*

La presente infracción se conoció mediante la denuncia presentada por el Comandante Provincial de la Policía Nacional de Esmeraldas, Coronel de Policía, Galo Alfredo Carrero Vizuete, el 11 de agosto de 2011 y el Sumario Administrativo fue iniciado de oficio, el 18 de agosto de 2011; trámite que por haberse remitido el informe motivado debe continuar su sustanciación ante el plenario del Consejo de la Judicatura.

Sobre el cálculo del plazo de inicio del ejercicio de la acción y la prescripción se debe tomar en cuenta que la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas, tomó conocimiento de la presunta infracción, el 11 de agosto de 2011; mediante la denuncia presentada por el Comandante Provincial de la Policía Nacional de Esmeraldas.

Conforme lo dispuesto en el penúltimo inciso del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial *"Los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán... en el caso de acciones de oficio, desde la fecha en que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora."*

En definitiva, se constata que la acción disciplinaria y la sustanciación del proceso han sido oportunamente impulsadas, conforme así se lo declara.

En tal virtud, el órgano sancionador se encuentra dentro de los plazos previstos por la ley para ejercer la potestad sancionadora.

#### 5.- ANÁLISIS DE FONDO

##### 5.1.- ARGUMENTOS DEL INFORME MOTIVADO

El informe presentado por la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas, se sustenta en los siguientes argumentos:

Que, el 13 de julio del 2011, los Abogados, Mario Guevara Farías, Milton Quiñonez y Jacinto Rivera, Conjueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, han desechado el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional y confirmaron la sentencia de primera instancia, en la que se ordenó el reintegro del Ex Cabo de Policía, Edison Guillermo Cisneros Campaña, por considerar que se vulneró en su contra, las garantías básicas del debido proceso, en el procedimiento administrativo y en la resolución No. 2001-340-CG-B de 30 de abril de 2011, emitida por el Consejo de Clases y Policías de la Policía Nacional, a través de la cual, se resolvió dar de baja al mencionado agente, por abandono de sus labores, por más de once días.

El quejoso sostiene que no se ha tomado en cuenta lo dispuesto por la Ley de Personal de la Policía Nacional que estipula, como una de las causales para dar de baja al personal policial, la ausencia ilegal, por más de once días, sin acción penal. Por otra parte, manifiesta que tampoco se ha tomado en cuenta la competencia que tienen los Consejos de la Policía Nacional, para resolver la situación profesional de sus miembros policiales que han abandonado la institución, sin mediar motivo alguno.

También se argumenta que, los Jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas actuaron sin competencia, porque la resolución de la baja del cabo Edison Guillermo Cisneros Campaña, se expidió en la ciudad de Quito y sus efectos se dieron en el Comando Provincial de Pichincha, donde pertenecía el referido agente; además que no estos casos deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Por otro lado, habría una falta de inmediatez e inminencia del daño alegado, porque el accionante presentó la acción de protección después, haber transcurrido 10 años desde que se cometió el supuesto acto ilegal.

Por los antecedentes expuestos, la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas, consideró en su informe motivado, que los sumariados han incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 8, Art. 108 del Código Orgánico de la Función Judicial.

### 5.2 Argumentos del sumariado Milton Quiñonez Quiñonez, conjuez de la Corte Provincial de Esmeraldas

En su escrito de comparecencia (Fjs. 30), el Abogado Milton Quiñonez señala lo siguiente:

• Que, la acción de protección, llegó en apelación primero a los jueces principales y posteriormente a la Sala de Conjueces donde se dictó la resolución el 13 de julio de 2011, para lo cual, se realizó las violaciones a las normas del debido proceso y a las disposiciones legales y normas fundamentales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.

• Que el quejoso no fue parte procesal, dentro de la acción de protección, por lo que no puede intervenir en la administración de justicia.



Que, sobre los hechos materia de la queja, no le compete pronunciarse a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura ya que en caso de fallos constitucionales le corresponde a la Corte Constitucional.

Que, los hechos que se denuncian como posibles irregularidades son asuntos de carácter jurisdiccional a los que se refiere el Art. 115 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo tanto, no constituye infracción disciplinaria.

Que, se tome como prueba a su favor la Resolución de la Comisión de Recursos Humanos del anterior Consejo de la Judicatura, en el que, en un caso similar se inhibió de conocer y resolver el caso en mención.

### **5.3.- Argumentos presentados por Mario Guevara Fariás, conjuer de la Corte Provincial de Esmeraldas.**

El Abg. Mario Guevara, en su escrito de comparecencia (Fjs. 39-41 vta), en lo principal manifiesta:

Que, la sentencia dictada por la Sala de Conjueros es el resultado de un análisis exhaustivo de todo el expediente y de las piezas procesales que llegaron primero a la sala principal de los jueces provinciales y, en aplicación del Art. 149 del Código Orgánico de la Función Judicial, llegaron a su conocimiento para su resolución.

Que, en la parte resolutive de la sentencia, se detalla los derechos y garantías jurisdiccionales vulnerados dentro del procedimiento administrativo.

Que, los jueces tienen que cumplir con lo previsto en el Art. 426 de la Constitución, que manda a aplicar directamente las normas constitucionales, así como las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, aunque las partes no las invoque expresamente, por lo tanto estas normas son de directa aplicación.

Que, los hechos que se detallan en la queja como posibles irregularidades, son asuntos de carácter jurisdiccional a los que se refiere el Art. 115 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que no constituye infracción disciplinaria.

Alega además, falta de derecho y representación legal del quejoso para presentar la denuncia, por no ostentar la representación legal de la institución, ni ser legítimo pasivo en la Acción de Protección.

### **5.4. Argumentos Jacinto Rivera Jiménez, conjuer de la Corte Provincial de Esmeraldas**

Que, A los jueces de primera instancia les correspondió tramitar la Acción de Protección, por lo tanto, ellos son los jueces constitucionales, por lo que, cuando declaran con lugar la Acción de Protección, revivifican los derechos constitucionales vulnerados y llegan incluso a ordenar el reintegro y el reconocimiento de derechos vulnerados.

Que, si el accionante se encuentra inconforme con la sentencia dictada, puede interponer el recurso de Apelación ante la Corte Provincial, por lo tanto la Corte solamente se limita a resolver el recurso interpuesto.

Que, en el presente caso los conjueces no han actuado en la calidad de jueces constitucionales, por lo que deben resolver de acuerdo al Código de Procedimiento Civil y no de acuerdo a la Constitución.

Que, el trámite constitucional culmina en la Corte Constitucional, por el derecho que tienen las partes a recurrir en última instancia a través de la Acción Extraordinaria de Protección.

Que, los conjueces no reivindican derechos vulnerados, únicamente ratifican la decisión del Juez Constitucional sin otorgar ningún beneficio.

Que, la denuncia va dirigida a la sentencia de primer nivel y en ningún caso a las actuaciones de los conjueces.

### 5.5. Hechos probados

En el proceso sumario disciplinario encontramos:

- El Señor **Edison Guillermo Cisneros Campaña** presentó una Acción de Protección en contra de esa Institución, recayendo su conocimiento en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas (Fjs. 18-22).

- En la Acción de Protección, el accionante pidió que se deje sin efecto la Resolución 2001-340-CG-B de 30 de abril de 2001, dictada por el Comandante General de la Policía Nacional, en la que se le dio de baja de las filas policiales, resolución publicada en la Orden General No. 093 de 16 de mayo de 2001 y en consecuencia, también se deje sin efecto la Resolución No. 2001-259-CCP de 3 de abril de 2001, dictada por el Consejo de Clases y Policías, en la que se resolvió solicitar al Comandante General de la Policía, a que proceda a dar de baja al accionante.

El 1 de octubre de 2010, el Juez Temporal del Juzgado Primero de lo Civil de Esmeraldas, **Juan Rivera Quiñones**, dictó la sentencia en la que resolvió aceptar la acción de protección y, en consecuencia, dejó sin efecto los actos administrativos antes mencionados y dispuso además, el reintegro del accionante a la institución policial. (Fjs. 1-2 vta.).

- Posteriormente, la Sala de Conjuces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, conoció el recurso de apelación presentado por los accionados y el 13 de julio de 2011, confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Primero de lo Civil de Esmeraldas.

En consecuencia, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde determinar:

Si los funcionarios sumariados, aplicaron indebidamente normas legales expresas, causando un error inexcusable, en la Acción de Protección presentada por Edison Cisneros Campaña.

## 6.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

### 6.1.- Sobre la competencia del Consejo de la Judicatura en las actuaciones de los jueces constitucionales

Los sumariados han argumentado en su defensa, la falta de competencia del Consejo de la Judicatura, para sancionar, por cuanto los hechos materia del presente sumario,



responden a una acción constitucional, por lo que le correspondería su conocimiento a la Corte Constitucional, de acuerdo a lo establecido mediante sentencia No. 001-10-PJO-CC dictada por este órgano de control constitucional.

De acuerdo con el Art. 236 de la Constitución de la República, una de las atribuciones que tiene la Corte Constitucional es el conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.

Es por ello que, mediante Resolución No. 007-11-AD-CC, la Corte Constitucional emitió el informe sobre los expedientes de queja remitidos por la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, en la que aclaró el modo de aplicación de las reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia No. 001-10-PJO-CC, por lo tanto, su competencia para sancionar se encuentra solamente en aquellos caso que existan problemas de antinomias jurisdiccionales.

Esto quiere decir que, cuando la Corte Constitucional resuelve procesos de incumplimiento de sentencias o dictámenes constitucionales, en el caso de contradicciones jurisdiccionales, puede sancionar a los jueces que, sin fundamento constitucional o legal expidan sentencias que vuelvan inejecutables las sentencias previamente resueltas. En los demás casos, le corresponde al Consejo de la Judicatura, sustanciar y aplicar las sanciones disciplinarias como órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Por lo expuesto, el Consejo de la Judicatura, es la autoridad competente para sustanciar y resolver el presente expediente administrativo, de conformidad con la competencia que le otorga el Código Orgánico de la Función Judicial.

## 6.2 Objeto de la Acción de Protección

La ***Acción de Protección*** se encuentra establecida en el artículo 88 de la Constitución Ecuatoriana de 2008 y tiene por objeto el amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos en esta norma constitucional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que podrá interponerse cuando uno de estos derechos hayan sido vulnerados.

Concordantemente, el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que la acción de protección tendrá por objeto, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones constitucionales. Procede contra actos u omisiones de autoridad pública que haya violado derechos o disminuya su goce y ejercicio.

Sin embargo, la misma ley establece excepciones, en cuanto a su procedencia por lo que no procede la Acción de Protección, el Art. 42 establece que: "*La acción de protección de derechos no procede.*"

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz" (Lo subrayado es mío)

De la documentación que gira en el proceso, se advierte que, la Acción de Protección interpuesta por Edison Cisneros Campaña, buscó que el Juez deje sin efecto todos los



actos administrativos, a través de los cuales, se dispuso la baja de las filas policiales, toda vez que considera la autoridad policial incumplió el Art. 87 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y que quebrantó el debido proceso en el trámite administrativo que concluyó con la separación de la institución policial.

Está claro entonces, que el objeto de la referida Acción de Protección, está relacionado con aspectos de mera legalidad; por lo tanto, no admitírselo a trámite, ya que son aspectos que deben ser conocidos y analizados ante las instancias jurisdiccionales competentes que establece la ley.

Para mayor profundidad, debemos decir que es la propia Constitución (Art. 173), la que estipula que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.

El recurrente, al momento de haber sido notificado con la baja de las filas policiales, es decir, en el año 2001, pudo haber impugnado el acto administrativo, dentro de los términos oportunos, en la vía judicial que corresponde; esto es, ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 14a Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dice:

*"Art. 1.- El recurso contencioso - administrativo puede interponerse por las personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas que causen estado, y vulneren un derecho o interés directo del demandante."*

Por lo dicho, no se explica que el recurrente haya esperado diez años, para reclamar la reparación de sus derechos, cuando tuvo la vía judicial competente para impugnar el incumplimiento de disposiciones legales expresas en el proceso disciplinario.

Si bien es cierto, que la sentencia fue dictada por el Juez Primero de lo Civil y Mercantil, lo cual también debe ser objeto de investigación por parte de la autoridad competente, era deber de la Corte Provincial de Justicia el enmendar la incorrecta aplicación de la acción constitucional, en un hecho que debió resolverse por las vías judiciales ordinarias, en consecuencia, la Corte Provincial, al ratificar la sentencia de primera instancia, repitió en el mismo error judicial del juez de primera instancia.

El Art. 109 del Código Orgánico de la Función Judicial determina como falta gravísima el *"Intervenir en los casos que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifesta negligencia o error inexcusable"* (lo subrayado es mío)

Cuando hablamos de error judicial inexcusable, nos referimos a la notoria ineptitud o descuido al momento de administrar justicia por parte del servidor judicial y se produce exclusivamente cuando el mismo se comete en un acto formal de la administración de justicia. El error de derecho se produce cuando el juez se aparta arbitrariamente de las reglas que para el efecto se establecen en los ordenamientos jurídicos, o bien, cuando dicta su resolución contraviniendo, de cualquier forma, una o varias normas vigentes.

En este sentido, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 129 impone, como deberes comunes todas las juezas y jueces, entre otros, los siguientes: "Art. 129.-

Facultades y deberes genéricos de las juezas y jueces: 2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente. " (Lo subrayado es mío)

De los hechos analizados, se concluye que los servidores judiciales sumariados cometieron un error inexcusable, al aplicar indebidamente, disposiciones expresas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es establece la improcedencia de la Acción de Protección cuando el acto administrativo, presuntamente violatorio de un derecho, puede ser impugnado por la vía judicial.

Además tanto el juez de primera instancia como los jueces de la Corte Provincial, debieron declararse incompetentes de conocer y resolver la Acción de Protección, materia de análisis del presente sumario disciplinario, en razón de que el acto impugnado se dictó en la ciudad de Quito y de acuerdo a lo informado por el Comandante Provincial de Policía, los hechos se produjeron en el Comando Provincial de Pichincha No. 1, donde pertenecía el accionante, dato que se omite mencionar en la demanda presentada.

El Art. 86, establece las reglas comunes para el ejercicio de las garantías jurisdiccionales y se señala en el numeral 2, que será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos.

Esta disposición constitucional, es recogida en el Art. 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, norma en la que además se estipula que el juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, admitirá la acción en su primera providencia, lo cual no hay sido acatado por los jueces que conocieron la Acción de Protección analizada en este expediente.

### 6.3 Sanciones anteriores

Del certificado expedido por la Secretaría de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, se desprende que:

- a) Ab. Jacinto Jiménez Rivera no registra sanciones en el año que antecede.
- b) Mario Guevara Fariás no registra sanciones
- c) Ab. Milton Quiñonez Quiñonez no registran sanción alguna.

### 7.- PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, en mérito de las consideraciones expuestas, El PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, resuelve:

- 7.1 Acoger parcialmente el informe motivado suscrito por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas.
- 7.2 Declarar a Mario Guevara Fariás, Milton Quiñones y Jacinto Rivera, Conjueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, responsables de la infracción tipificada en el Art. 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es: "Intervenir en las causas que debe actuar como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable"
- 7.3 Sancionar con la destitución de los mencionados servidores.

7.4 Disponer a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas, el inicio del correspondiente sumario administrativo al Ab. Juan Rivera Quiñones, Juez Temporal de Esmeraldas.

7.5 Notificar con el contenido de esta resolución a las partes, a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas, al Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario, al Director Nacional Financiero y al Director Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura.

7.6 Actúe la Secretaría de la Unidad de Control Disciplinario.

Notifíquese y cúmplase.

f) Tania Arias Manzano (E) Fernando Yavar Umpierrez y Guillermo Falconi Aguirre, Presidenta (E), Vocal y Secretario General del Consejo de la Judicatura.- Lo que comunico para los fines de Ley.-

Dra. Belén Montalvo Bautista  
SECRETARIA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO (E)  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TRANSICIÓN





## Consejo de la Judicatura

de justicia<sup>2</sup>; estos dos presupuestos han sido reconocidos tradicionalmente como responsabilidad *in iudicando* e *in procedendo* respectivamente.

Esta división está orientada a diferenciar aquellos casos en los que el daño es consecuencia directa del ejercicio de la potestad jurisdiccional, valga decir, en los fallos o decisiones trascendentales cuyo alcance llega a afectar los derechos de las partes en un proceso judicial, de aquellos en los que el perjuicio deriva de hechos, actos u omisiones que se presentan durante el proceso, es decir, cuando el daño se produce a partir del quebrantamiento de situaciones formales que pese a la afectación ocasionada, no reputan una grave lesión. En suma y siguiendo el criterio del eminente autor Francesco Carnelutti<sup>3</sup> habrá error judicial cuando el daño emane de una resolución judicial a propósito del ejercicio de la potestad juzgadora, y existirá mal funcionamiento [anormalidad o irregularidad] de la administración de justicia cuando el perjuicio provenga de sucesos anómalos acaecidos en el direccionamiento del proceso.

Es importante señalar además, que para la configuración efectiva del error judicial o la inadecuada [anormal o irregular] administración de justicia, debe existir una relación de causa y efecto entre el error o la anomalía y el daño indemnizable, no siendo suficiente la mera invocación del daño sufrido para justificar la responsabilidad estatal como pretende el actor en su demanda; por el contrario, es obligación del demandante justificar la existencia efectiva del presupuesto de responsabilidad que alega y su conexión con el daño o perjuicio que supuestamente ha sufrido.

*hayan obtenido firmeza, cuando abiertamente, fuera de los cauces legales, se omiten o se parte de hechos distintos a los enjuiciados y sobre los que el Juzgado ha tenido un conocimiento equivocado por causas extraprocesales, incurriendo no en una interpretación errónea, tanto fáctica como jurídica, sino más bien y desde la óptica de la más pura objetividad, claramente arbitraria, de introversia o desaplicación y decisiones lógicas o absurdas contrarias a la normalidad del proceso, que de esta manera se desvía de su orden de libertad y garantías a los derechos de los que los integran como parte'. 'd) El error judicial no dimana de la simple revocación o anulación de las resoluciones judiciales, debiéndose entender por 'error judicial' toda decisión o resolución, dictada por los órganos de la Administración de Justicia, injusta o equivocada, pero el error debe ser palmario, patente, manifiesto, indudable e incontestable, de un modo objetivo y no tan sólo a ojos de quienes fueron parte o se sienten perjudicados, pudiéndose agregar que dicho error puede ser fáctico o jurídico, teniendo indebidamente por probados determinados hechos o desconociendo o ignorando los preceptos legales o las normas aplicables o incurriendo en flagrante equivocación al aplicarlos o interpretarlos'; Tercera Sala de lo Civil y Mercantil, Resolución No. 158-2002, Registro Oficial No. 700 del 8 de noviembre del 2002.*

<sup>2</sup> JULIO R. COMADIRA, *La responsabilidad del Estado por su actividad lícita o legítima*, Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas, 2004, p. 297 y siguientes.

<sup>3</sup> FRANCESCO CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, Roma, 1963, p. 132 y siguientes.

*(Por una justicia oportuna y transparente)*

Atencin Imbarquing

Isidro Arce  
C. R. Z. Vargas

Andrade Hernandez



C.  
1730

REPÚBLICA DEL ECUADOR

AÑO

2014

Nro.

0463

EXPE. ADM. (3 CARPETAS NEGRAS)

SALA

MSL TRAMITA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO  
DISTRITO DE QUITO

ACTOR: D. To D. Diana Elena Lopez y otros

CASILLERO JUDICIAL: 3214

DEMANDADOS: Procurador del Consejo de la Judicatura

Procurador General del Consejo de la  
Judicatura

Procurador General del Estado 1200

ASUNTO: D. D. D. D.

INICIADO: 14/03/14 FECHA: 28/03/14 HORA: 13H46

**MEMORANDO No. DNJ-SNCD-5105-2013**

**PARA:** Doctor Gustavo Durango Vela  
**CONJUEZ DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO  
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA**

**DE:** Doctora María Aurora Coyago  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA UNIDAD CONTROL  
DISCIPLINARIO**

**ASUNTO:** NOTIFICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR

**FECHA:** 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la Resolución expedida por el doctor Gustavo Jalkh Röben, Presidente del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente No. S-085-UCD-2013-PM.

Muy atentamente,

  
Dra. María Aurora Coyago,  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA UNIDAD CONTROL DISCIPLINARIO  
MAC/PM.**

*Recibido 25 IX-13*



NOTARIA PRIMERASIMA DE QUITO  
De acuerdo con el numerario del año  
diecho de la presente, doy fe que a continuación  
se publica en el día de hoy en documento  
presentado por el Sr. [Nombre] [Apellido]  
Gust. N. 13 FEB 2014

  
M. de [Nombre] [Apellido]  
NOTARIO PRIMERASIMA



Trámite de suspensión provisional No. S-0085-UCD-013-ACS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Quito, 23 de septiembre de 2013, las 16h10.

VISTOS:

**1.- ANTECEDENTES.**

En mi calidad de Presidente del Consejo de la Judicatura, de conformidad a las facultades que me otorgan el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 11 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, conozco el presente expediente disciplinario para resolver sobre la medida de suspensión preventiva solicitada en contra de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, el mismo que se lo resuelve al tenor de los siguientes antecedentes:

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO DOCTORES JOSÉ SUING NAGUA Y GUSTAVO DURANGO VELA

El expediente disciplinario No. D-0879-UCD-013-ACS fue iniciado mediante providencia de 23 de septiembre de 2013, suscrita por el Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario (e) del Consejo de la Judicatura, en base a la denuncia presentada por el Director General del Servicio de Rentas Internas, economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, en la que se menciona que en el recurso de casación 497-2010 interpuesto por Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A., el fallo de mayoría, de manera inmotivada, se ha apartado de antecedentes jurisprudenciales emitidos por la propia Corte Nacional en casos similares, incurriendo presumiblemente en falta de motivación y error inexcusable, faltas disciplinarias tipificadas en el numeral 8 del artículo 108 y numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

**2.- COMPETENCIA**

El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y ejerce sus funciones a través del Pleno, la Presidencia, la



Dirección General y demás órganos administrativos, según lo establecido en el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Según dispone el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, es atribución del Presidente del Consejo de la Judicatura suspender en el ejercicio de sus funciones, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y servidores de la Función Judicial, en casos graves y urgentes, por el máximo de noventa días.

El inciso segundo del artículo 11 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura establece que la suspensión preventiva podrá ser ordenada, de oficio o a petición de parte, cuando el Presidente del Consejo de la Judicatura considere que existen hechos graves y urgentes que hagan presumir la existencia de la comisión de infracciones disciplinarias o a fin de evitar que las acciones u omisiones de una servidora o servidor judicial, llegaren a producir o sigan produciendo daños a la prestación del servicio al que está llamado o a la vulneración de derechos de terceros.

En consecuencia, es competencia del Presidente del Consejo de la Judicatura dictar la medida cautelar de suspensión de la servidora o servidor de la Función Judicial cuando, a criterio del Presidente del Consejo la Judicatura, se produzcan las circunstancias antes mencionadas.

### **3.- LEGITIMACIÓN ACTIVA**

El numeral dos del artículo 12 del Reglamento para el Ejercicio para la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura señala que la suspensión preventiva podrá ser solicitada por la persona que al momento de interponer la denuncia así lo solicite.

En el caso que nos ocupa, el Director General del Servicio de Rentas Internas, en el numeral VIII de su denuncia expresamente solicitó la medida de suspensión preventiva de los doctores José Suñig Nagua y Gustavo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, y por lo tanto el denunciante contó con la legitimación suficiente para solicitar la presente medida de suspensión preventiva, conforme así se lo declara.

#### 4.- SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL

El numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial ha consagrado la facultad del Presidente del Consejo de la Judicatura de ordenar preventivamente la suspensión de funciones de la servidora o servidor judicial que se encuentre inmerso en hechos denunciados como graves y urgentes.

En esencia, la suspensión provisional busca evitar el desarrollo de una situación de peligro causada por la presunta comisión de infracciones graves o gravísimas. A dichos actos la doctrina los denomina actos preparatorios o de trámite, pues en nada influyen o afectan en la decisión final en la resolución del proceso disciplinario.

La suspensión provisional como acto preparatorio constituye una medida de carácter preventiva y como tal tiene los mismos fundamentos y finalidad de toda medida cautelar pero con dos elementos adicionales que son: la **urgencia y gravedad** de los hechos que se denuncian. En este sentido, para determinar la procedencia de la suspensión provisional de los servidores sumariados es necesario analizar si las faltas por las cuales va a ser adoptada una medida cautelar son graves o gravísimas, que en tales actos existe una situación susceptible de causar daño a terceros, que pueda vulnerar sus derechos o que se trate de beneficiar a un tercero por una acción u omisión de sus obligaciones (gravedad) y que por tales circunstancias se torne ineludible repelerla inmediatamente para evitar que se produzcan mayores daños o se sigan produciendo los existentes (urgencia).

Por otro lado, la doctrina ha recogido varios presupuestos jurídicos que es necesario considerar como requisitos previos para declarar procedente una medida de suspensión provisional. Estos requisitos son: 1) que exista cierto grado de verosimilitud, "el *fumus boni iuris*" (apariencia de buen derecho); 2) que los hechos denunciados sean graves y urgentes, la concurrencia de "*periculum in mora*" (peligro por la mora procesal) y, 3) la ponderación de los intereses afectados.<sup>1</sup>

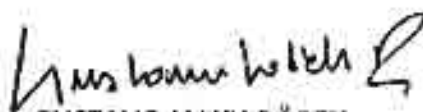
<sup>1</sup> COUTURE, J. Eduardo, CALAMANDREI, Piero. Las medidas cautelares. Librería El Foro, Madrid, 1995.

Del contenido del expediente que he llegado a tener conocimiento se desprenden hechos que esta autoridad considera se enmarcan en los presupuestos legales y doctrinarios de urgencia y gravedad estipulados en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el artículo 11 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura.

#### 5. DECISIÓN,

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, el **PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA** resuelve:

1. Disponer la medida provisional de suspensión en el ejercicio de sus funciones, sin pérdida de remuneración, hasta por noventa días, a los doctores José Suñig Nagua y Gustavo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente.
2. Notifíquese y cúmplase.

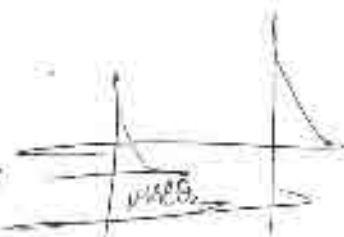


GUSTAVO JALKH RÖBEN

PRESIDENTE

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Lo que comunico para los fines de Ley



Dra. María Aurora Coyago

**SECRETARIA AD-HOC DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO  
CONSEJO DE LA JUDICATURA**

NOTARIA TRIGESIMOPRIMERA  
13 FEB 2013  




EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Quito, a 20 de diciembre de 2013; a las 11h01.- VISTOS:

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. D-0879-UCD-2013-PM.

FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE: 23 de septiembre de 2013 (Is.8).

## 1. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

### 1.1 Accionante:

Carlos Marx Carrasco, en calidad de Director General del Servicio de Rentas Internas.

### 1.2 Servidores judiciales sumariados:

Doctor José Dionicio Suñig Nagua, Juez Nacional de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia; y, doctor Gustavo Adolfo Durango Vela, Conjuez Nacional de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.

### 1.3 Situación actual de los sumariados:

Mediante acción de personal No. 311-DNP de 26 de enero de 2012, se nombró Juez de la Corte Nacional de Justicia al doctor José Dionicio Suñig Nagua.

Mediante acción de personal No. 317-DNP de 01 de marzo de 2012, se nombró Conjuez de la Corte Nacional de Justicia al doctor Gustavo Adolfo Durango Vela.

El 23 de septiembre de 2013, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Presidente del Consejo de la Judicatura suspendió en sus funciones a los servidores judiciales sumariados, sin pérdida de remuneración, hasta por 90 días.

## 2. ANTECEDENTES

Mediante oficio No. 0027802 de 19 de septiembre de 2013, el Servicio de Rentas Internas, a través de su Director General, Carlos Marx Carrasco, presentó una queja relacionada con la actuación de los doctores José Dionicio Suñig Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez Nacional de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente. En la queja presentada se manifestó que en la resolución del recurso de casación N° 497-2010, propuesto dentro del juicio de impugnación N° 26247-308-09-VJ, seguido por Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP) en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas y del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, los sumariados habrían incurrido en falta de motivación y error inexcusable, infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el numeral 8 del artículo 108 y el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en su orden. La argumentación de la queja se analiza en los numerales octavo y noveno de esta resolución.

## 3. COMPETENCIA

Por mandato del artículo 178, segundo inciso, de la Constitución de la República, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Entre las competencias del Consejo de la Judicatura están las consignadas en los numerales 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, que dicen: "...3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas.", "...5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial". Asimismo, en los artículos

254 y 254, numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ratifica que el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; y que el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene atribución para imponer las sanciones disciplinarias a los servidores o los servidores judiciales, o absolverles si fuere conducente.

Por lo tanto, el Pleno del Consejo de la Judicatura es competente para conocer y resolver el presente sumario disciplinario.

#### **4. VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso..."*

De la revisión del expediente se desprende el cumplimiento del mandato constitucional referido. Se advierte que con el auto inicial fueron debidamente citados los servidores sumariados, conforme se desprende de las razones de citación que obran a fojas 82 y 84 del expediente. De igual manera se ha constatado que los sumariados han ejercido plenamente su derecho a la defensa, presentando las pruebas de descargo a las que esta resolución se refiere en el numeral 8.3.

Al no haberse incurrido en violación de solemnidad alguna, se declara la validez del procedimiento disciplinario.

#### **5. LEGITIMACIÓN ACTIVA**

El artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que la acción disciplinaria puede ser ejercida de oficio, por queja o denuncia.

En el presente caso, el Director General del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, presentó queja en contra de los doctores José Dionicio Suing Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez Nacional de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente. De la revisión del expediente se aprecia que el Director General del Servicio de Rentas Internas fue parte procesal en el recurso de casación No. 497-2010, materia primigenia del presente sumario disciplinario, por lo que tiene interés directo en dicho proceso.

En consecuencia, el Director General del Servicio de Rentas Internas cuenta con legitimación activa para presentar la queja materia de análisis del presente sumario disciplinario.

#### **6. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN MOTIVO DE ESTE SUMARIO**

En el auto de apertura del presente sumario se consideró que los servidores judiciales sumariados son presumiblemente responsables de las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 8 del artículo 108 y, en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

#### **7. OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA**

De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial y vista la fecha de presentación de la queja y de inicio del sumario, se colige que no ha operado la prescripción de la acción disciplinaria.

En consecuencia, el accionante ha interpuesto la queja oportunamente, conforme así se declara.



## 8. FUNDAMENTOS PARA RESOLVER

### 8.1 Argumentos de la queja

En la queja propuesta en contra de los servidores judiciales sumariados, el Director General del Servicio de Rentas Internas señala:

- a) Que los sumariados conocieron el recurso de casación No. 497-2010, presentado por parte de la Compañía Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP), en contra del Director General y del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, apartándose en su resolución del criterio jurisprudencial vertido en tres fallos anteriores, en específico dentro de los procesos Nos. 271-2010 del 1 de agosto de 2012, seguido por Andes Petroleum Ecuador LTD. en contra del Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas; 442-2010 del 14 de septiembre de 2012, seguido por Andes Petroleum Ecuador LTD en contra del Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas; y, 357-2011 del 21 de diciembre de 2012, seguido por Occidental Exploration and Production Company en contra del Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas. En criterio del Servicio de Rentas Internas, en todos esos procesos se consideró como subcapitalización un préstamo concedido por la matriz a su subsidiaria con intereses más altos que los máximos permitidos, ya que se entendió en dichos casos que la finalidad del préstamo era disminuir el impuesto a la renta que debían pagar en el Ecuador;
- b) Que los servidores judiciales sumariados, contradiciendo su propio criterio, vertido en anteriores sentencias que en copias certificadas incorporó al expediente y que constan a fojas 25 a 34; 35 a 40; y, 44 a 51 decidieron, sin ningún fundamento, desvanecer la glosa proveniente de la subcapitalización, obviando considerar que existieron elementos iguales tales como la vinculación entre empresas y un crédito que no correspondía a las condiciones normales del negocio;
- c) Que cuando el Servicio de Rentas Internas requirió a la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia que se aclare y amplíe la sentencia de 18 de julio de 2013, en auto de 12 de septiembre de 2013 se pronunció señalando: *"...la falta de trascendencia de que el préstamo sea con una entidad vinculada"*, añadiendo que: *"en el que el fallo de mayoría señala que no existe subcapitalización y desvanece la glosa, no tienen ninguna diferencia con la casística de los otros procesos en los que se confirmaron las glosas levantadas por concepto de subcapitalización, por lo que la conclusión en la sentencia debió haber sido exactamente la misma."*;
- d) Que existe *"...flagrante y clara violación al artículo 17 del Código Tributario"*, principal fundamento de las glosas establecidas por el Servicio de Rentas Internas y de los fallos precitados, que sentaron el criterio de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia;
- e) En el anuncio de la prueba el Servicio de Rentas Internas incorporó copia certificada de la sentencia expedida por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N° 544-2010 de 29 de junio de 2012, propuesto por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur, en contra de la sentencia dictada el 01 de octubre de 2010 por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital Fiscal N° 2, con sede en Guayaquil, dentro de la impugnación propuesta por la compañía Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico S.A., que consta a fojas 41 a 43; y,



- 2) El Director General del Servicio de Rentas Internas manifestó que en la resolución expedida por los jueces sumariados, habrían incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, por falta de motivación y error inexcusable, respectivamente.

## 8.2 Argumentos del auto de inicio

De conformidad con el artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial y con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, el 23 de septiembre de 2013 se dispuso la apertura del presente sumario disciplinario en contra de los doctores José Dionicio Suñig Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez Nacional de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en su orden, por presumirse que habrían incurrido en falta de motivación y error inexcusable, infracciones disciplinarias tipificadas en el numeral 8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

## 8.3 Descargos de los servidores judiciales sumariados:

### 8.3.1 Contestación del Juez de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Dionicio Suñig Nagua (fojas 210 a 222):

Que no existe ningún hecho, menos aún grave y urgente, ni que haya producido o pueda producir daños a la prestación del servicio pues, según el sumariado, lo que cuestiona el Director General del Servicio de Rentas Internas es la decisión judicial de mayoría, contenida en una sentencia. En tal sentido sostiene que no procede la medida de suspensión provisional dispuesta, considerando el tiempo transcurrido desde la notificación del auto por el cual se atendieron los recursos de aclaración y ampliación, con fecha 12 de septiembre de 2013.

Que la queja presentada ha inducido a engaño al Presidente del Consejo de la Judicatura.

Que no se ha cumplido con la obligación de justificar la gravedad y urgencia de los hechos por los cuales se solicita la medida cautelar, justificación que no consta en el expediente.

Que la medida cautelar adoptada, de suspensión provisional sin pérdida de remuneración, es prematura y atenta contra la independencia interna y externa de los jueces, reconocida y garantizada en la Constitución de la República.

Que respecto a la acusación de falta de motivación y violación de derechos constitucionales señala que se debe tener en cuenta que la motivación es la *"necesaria confrontación de los hechos en disputa, con las normas de derecho aplicables"*. Agrega que la sentencia sobre el punto de la subcapitalización está debidamente motivada. Sostiene que en este caso específico no aplica lo señalado por el Servicio de Rentas Internas, ya que no son casos iguales, existiendo la adecuada ponderación de los hechos confrontados con el derecho, por lo que al tratarse solamente de un punto de la sentencia de los cinco que contiene, no puede existir falta de motivación.

Que la divergencia entre la sentencia materia de análisis con las anteriores sentencias, es la diferencia en el capital, obedeciendo el crédito subordinado a una cláusula contractual.

Que sólo la Corte Constitucional puede establecer que hubo falta de motivación, sin que un órgano administrativo lo pueda hacer sin resentir el principio de independencia de la Función Judicial.

Que justificadamente pueden apartarse de líneas jurisprudenciales e incluso de criterios jurisprudenciales obligatorios por la diversa casuística que se presenta, sin que en ese caso exista un precedente jurisprudencial obligatorio.

El sumariado solicita que se deseché la queja, calificándola de maliciosa y temeraria, dejando sin efecto la medida de suspensión provisional.

En el anuncio de prueba el sumariado solicitó varias diligencias, las mismas que fueron debidamente dispuestas y practicadas.

### **8.3.2 Contestación del Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, doctor Gustavo Adolfo Durango Vela (fojas 250 a 258):**

Que el tiempo transcurrido entre la fecha de expedición de la sentencia materia de acálisis y de la providencia de apertura del presente sumario disciplinario denota que no hay hechos graves o urgentes que den lugar a la medida de suspensión provisional expedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura.

Que en la resolución tomada por ellos no existe error alguno y menos aún falta de motivación, ya que lo único que se impugnó por parte del Director General del Servicio de Rentas Internas es un punto de la misma, esto es, la subcapitalización, y no los cinco puntos que se resolvió, estando suficientemente explicadas las razones por las cuales se apartaron del criterio que en fallos anteriores dictaron, ya que los casos no eran iguales.

Que se puede recurrir ante la Corte Constitucional para verificar si efectivamente hay falta de motivación de la sentencia.

Que la decisión tomada en el recurso de casación No. 497-2010 es totalmente jurídica y que la sanción de suspensión provisional es absurda.

Solicita que se deseché lo propuesto por el Director General del Servicio de Rentas Internas y se califique la queja de temeraria y maliciosa, dejando sin efecto la medida de suspensión provisional.

En el anuncio de las pruebas, el sumariado solicitó varias diligencias, las mismas que fueron debidamente dispuestas y practicadas.

## **9. CRITERIOS A CONSIDERARSE**

### **9.1 Hechos probados**

Dentro del presente sumario administrativo, se han demostrado los siguientes hechos:

A fojas 91 del expediente consta la sentencia de 18 de julio de 2013 expedida por los sumariados, en voto de mayoría, de la que se desprende que: a) Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP), fundamentó su recurso de casación en las causales contempladas en los numerales primero, segundo y cuarto del artículo 3 de la Ley de Casación; y, b) que los sumariados aceptaron parcialmente el recurso de casación propuesto por el representante legal del Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP), en la forma y consideraciones que constan en el numeral cuarto de esta sentencia.

### **9.2 Sobre la falta de motivación**

El literal 1) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República dispone que: *"Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian los normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados."*



El numeral 4 del artículo 150 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que es facultad esencial de las juezas y jueces: *"Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos."*

Del análisis de las piezas procesales que constan en el expediente administrativo, a fojas 25 a 61, que corresponden a las sentencias expedidas por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, suscritas por los sumariados, se desprenden casos similares, no idénticos, pues por obvias razones, las acciones judiciales no se proponen sobre hechos y partes exactos.

En cada una de las sentencias mencionadas, agregadas al expediente disciplinario, existe motivación pertinente y suficiente, que concuerda con el análisis del juzgador, concluyendo en resoluciones coherentes con las consideraciones previas. Sin embargo, en el caso propuesto, materia del presente expediente, los sumariados no motivaron con suficiencia los criterios por los cuales se apartaron de los fallos que ellos mismos dictaron anteriormente, en casos similares.

En tal sentido, la motivación no debe comprenderse como el simple agregado de consideraciones en un acto jurídico, sino que evidentemente, ese conjunto de razonamientos debe guardar congruencia con los criterios emitidos en las resoluciones adoptadas en el pasado y en el caso que se resuelve por los mismos juzgadores.

Es preciso destacar que el juez debe decidir de acuerdo a lo resuelto en el pasado, y no hacer lo contrario de lo decidido anteriormente, sin un motivo determinante, suficientemente explicado y razonado, lo que concuerda con el principio *"stare decisis"*. Lo contrario significaría ocasionar inseguridad jurídica en detrimento de las relaciones institucionales, y las actuaciones societarias e interpersonales que se producen cotidianamente.

Por lo expuesto, en el presente caso se ha demostrado que los sumariados no motivaron suficiente y congruentemente su criterio por el cual se separaron de sus resoluciones y sentencias dictadas anteriormente en juicios similares, evidentemente no idénticos.

### 9.3 Sobre el error inexcusable

El numeral 1 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial impone como deber de las servidoras y servidores de la Función Judicial: *"Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución ..., y la ley"*.

El numeral 2 del artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial impone como deber de las juezas y jueces *"Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente."*

En lo que corresponde al error inexcusable, tipificado en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, se debe considerar que para que un error de derecho pueda ser calificado como inexcusable, es condición tanto suficiente como necesaria que exista un precepto jurídico que siendo legítimo y estando vigente, contenga un mandato positivo o negativo que fuese claramente identificable, preciso y unívoco.

El error inexcusable es aquel no susceptible de interpretaciones jurídicas aceptables, como podría ser el del operador de justicia que se separe de toda interpretación admisible, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la argumentación jurídica.

Según lo descrito en el Diccionario Jurídico de Cabanellas se entiende como *"Error"* la *"Equivocación, yerro, desacierto. Concepto equivocado. Juicio inexacto o falso. Oposición, disconformidad o discordancia entre nuestras ideas y la naturaleza de las cosas. Lo contrario de la verdad. (...) Acción inconveniente, perjudicial o desacertada (...)"* y define *"Inexcusable"* como *"Carente de excusa o justificación. Imperdonable. De cumplimiento absolutamente obligatorio"*.



señalándose que la figura de error inexcusable es el "error o desacierto o concepto equivocado que carece de excusa o justificación y que resultaría imperdonable".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, dentro de la sentencia del 05 de agosto del 2008 manifestó: "(...) el error judicial inexcusable ha sido entendido como aquel que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables, lo cual le confiere del carácter de falta grave que amerita la máxima sanción disciplinaria, esto es, la destitución." Señala además, que: "...se trata de un concepto jurídico indeterminado o indefinido, por lo cual se requiere en cada asunto particular ponderar la actitud de un juez normal y de acuerdo a ello y a las características propias de la cultura jurídica del país, establecer el carácter de inexcusable de actuación del funcionario judicial (...)"

Asimismo, se considera lo resuelto en el expediente MOT-086-UCD-012-MEP en el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó: "El error judicial, por su propia naturaleza, es atribuible al juzgador más que a cualquier otro servidor judicial. Por otra parte, el error judicial, en sentido estricto se produce exclusivamente cuando se lo comete en un acto formal de la administración de justicia. Para que se configure el error inexcusable, es necesario que una norma jurídica legítima que a su vez, contenga una obligación clara, inequívoca y prescriptiva y que el juzgador conociéndola o teniendo la obligación jurídica de conocerla, actúa de forma abiertamente contraria, sin motivar satisfactoriamente dicho desacato."

Lo anterior concuerda con lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente disciplinario No. MOT-620-UCD-011-PM, en el cual se consideró lo siguiente: "Es importante señalar que el error judicial, en sentido estricto, se produce exclusivamente cuando el mismo se comete en un acto formal y materialmente jurisdiccional, que a su vez, puede ser de iure o de facto. El de iure se produce cuando el juzgador se aparta considerablemente de las reglas que para el efecto se establecen en las ordenamientos jurídicos, o bien, cuando dicta una resolución contraviniendo, de cualquier forma, una o varias normas jurídicas vigentes. En cuanto al error judicial de facto se produce cuando el juzgador cambia los hechos materia de la litis, o altera cualquier otro hecho relacionado con las actuaciones del juicio."

El artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial consagra el principio dispositivo, en virtud del cual todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y los jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley, lo cual concuerda con lo dispuesto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis.

Por otra parte, el segundo inciso del artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que los jueces no podrán ir más allá del peticorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

La Corte Suprema de Justicia, mediante resolución No. 466-98, publicada en el Registro Oficial No. 45 de 13 de octubre de 1998, señaló: "TERCERO.- El artículo 277 (273) del Código de Procedimiento Civil dispone: 'La sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis y los incidentes que, originados durante el juicio, hubieren podido reservarse sin causar gravamen a las partes, para resolverlos en ella. Esta disposición impone al Juez el deber de estudiar en su sentencia tanto las pretensiones deducidas en la demanda como las contrapretensiones expuestas en la contestación o ella, siguiendo un orden lógico...'"

En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación dictada el 25 de enero de 2007 por la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil, publicada en la Gaceta Judicial Año CVIII, Serie XVII, No. 3, página 884, señaló: "...que el principio de congruencia o armonía del fallo se contrae a la necesidad de que se encuentre en consonancia con las pretensiones deducidas por el demandante en la demanda, o en las oportunidades que la ley le ofrece para proponerlas; y con las



*excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido invocadas por el demandado, si no se autoriza su declaración oficiosa. O sea que el juez en su sentencia tiene que pronunciarse sobre todo lo que se ha pedido por los litigantes y solamente sobre lo demandado; pero, además, su decisión no puede fundarla sobre hechos que no están en debate...".*

Murcia Bullén es citado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en sentencia que corresponde al proceso No. 549.2010, publicada en la Gaceta Judicial Serie XVIII, No. 11, página 4207, en la cual se señala: "... por virtud del carácter extraordinario de la casación, no puede revisar la sentencia por aspectos que el recurrente no señale, ni por cargos ni infracciones que este no denuncie, a ella (a la Corte) no le es permitido aniquilar el fallo oficiosamente cuando este resulte violatorio de normas sustanciales, las cuales sin embargo no se han citado como quebrantadas en la sentencia."

En el presente caso, el recurso de casación planteado por Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A., se fundamentó en las causales primera, segunda y cuarta del artículo 3 de la Codificación de la Ley de Casación, sin embargo, los servidores sumariados en el literal a) del considerando cuarto de la sentencia de 18 de julio de 2013, (fs. 93 vta.) manifestaron: "...erróneamente lo fundamenta en el numeral 1ro. del Art. 3 de la Ley de Casación, por cuanto estaría más encasillada en la causal 5ta. del referido artículo, pero que esta Sala ha sido laxa en aceptar dicha equivocación y en casos iguales ha procedido a conocer sobre el fondo de la impugnación..."

De lo anterior se concluye que los sumariados procedieron contraviniendo lo dispuesto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, conducta que se agudiza considerando que la casación no es una instancia, sino un recurso extraordinario que procede contra las sentencias o autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo, es decir, que no admite que el examen del recurso sea por causal distinta a la propuesta por el recurrente.

Aún más, la observación antes expuesta comporta más atención tratándose de servidores judiciales de la Corte Nacional de Justicia, el más elevado Tribunal de Justicia del país, que actúa como Corte de Casación, cuyas ejecutorias deben estar investidas de la mayor rigurosidad ante el mandato de la ley, resultando inaceptable la afirmación de los sumariados, en el numeral cuarto de los considerandos de la sentencia: "...A) En relación a la causa esgrimida como "falta de motivación", por no resolver todos los puntos de la litis y no pronunciarse sobre las pruebas, como lo exige el literal b) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República (Arts. 24 numeral 13 de la Constitución Política de 1998, aplicable al año del litigio), en concordancia con el Art. 273 del Código Tributario y 139 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual por sus efectos de nulidad debe ser afrontado en primer término y que erróneamente lo fundamenta en el numeral 1ro. del Art. 3 de la Ley de Casación, por cuanto estaría más encasillada en la causal 5ta. del referido artículo, pero que esta Sala ha sido laxa en aceptar dicha equivocación y en casos iguales ha procedido a conocer sobre el fondo de la impugnación." (La negrilla es nuestra).

Los sumariados de manera oficiosa resolvieron el recurso de casación fundamentándose en causales distintas a las alegadas por Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A., lo que a todas luces constituye un proceder abiertamente contrario a lo dispuesto en los artículos 19 y 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil.

#### 9.4 Sobre la valoración de pruebas

El carácter extraordinario del recurso de casación determina que únicamente el juez a quo puede valorar la prueba y los jueces que ejercen el control de legalidad están obligados a atenerse a dicha apreciación. El artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que la casación no constituye instancia ni grado de los procesos, sino recurso extraordinario de control de la legalidad.

A lo antes expuesto se agrega el hecho de que los jueces sumariados se excedieron en sus competencias, previstas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Codificación de la Ley de Casación, al haber valorado prueba, cuando en el considerando cuarto de la sentencia de mayoría, establecieron lo siguiente:

*"C) De la revisión exhaustiva de la sentencia, se puede colegir que, efectivamente no se ha hecho un pronunciamiento expreso sobre algunas de las Glosas, por cuanto el criterio vertido por las anteriormente señaladas, es el que utiliza la sentencia recurrida para desechar la impugnación de todas las demás". En base a dicho criterio, en el literal D) del mismo considerando de la sentencia, los jueces sumariados manifestaron: "Sobre la Glosa III.2.7 'Intereses y comisiones del exterior', sobre lo cual tampoco hay pronunciamiento expreso de la Sala A que, resulta obvio, porque así lo requería la Ley de Contratación Pública, que la contratista con el Estado debía rendir las garantías en ella prevista lo cual tiene un costo, habiendo demostrado con la documentación pertinente que, la fórmula de cálculo para el pago de comisiones debía realizarse neto de impuestos, por lo que debió realizar un doble cálculo, lo cual no perjudica los intereses del Estado, por lo que procede dar de baja la mentada glosa."*

De conformidad con la amplia jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, la formación de la convicción sobre los hechos objeto del debate procesal está atribuida al órgano jurisdiccional que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido el ejercicio de dicha facultad, puesto que la errónea valoración de la prueba ha sido excluida del recurso de casación. Es por esta razón que la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación determina, de forma restrictiva, que el recurso de casación sólo podrá fundarse en la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación exclusivamente de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.

Precisamente en relación a lo anterior, conforme fallo que corresponde al proceso de casación No. 668, publicado en el Registro Oficial No. 70 de 28 de abril de 2013, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia señaló: *"QUINTO.- ... Por la naturaleza del recurso no corresponde a la Sala de Casación efectuar nuevo examen del proceso, en los hechos y en el derecho, sino únicamente efectuar una comparación de la sentencia con la norma que se dice ha sido violada, a fin de determinar si el precepto legal ha sido acertadamente aplicado. No puede hacerse nueva valoración de la prueba, como tampoco juzgar los medios intelectivos que condujeron a la formación de la convicción del Tribunal juzgador."*

Los servidores judiciales sumariados valoraron la prueba como si se tratase del antiguo recurso de tercera instancia, aún cuando para el caso y en virtud de la causal cuarta alegada, no correspondía, conforme fallo de la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil ya citado, en el cual se menciona: *"Solo las causales segunda y tercera permiten restrictivamente (sic) entrar a analizar la prueba. Es la casación indirecta"*.

En consecuencia, al haber resuelto sobre una causal distinta a la propuesta en el recurso de casación, los servidores judiciales sumariados desnaturalizaron la esencia del recurso de casación, y a la vez, asumieron indebidamente la atribución de valorar prueba, facultad que no tenían en virtud de que la causal tercera del artículo 3 de la Codificación de la Ley de Casación no fue invocada por la parte recurrente ni analizada por los jueces sumariados.

## 10. PARTE RESOLUTIVA

En mérito a las consideraciones expuestas, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR UNANIMIDAD** resuelve:

10.1 Declarar al doctor José Dionicio Suing Nagua, Juez de la Corte Nacional de Justicia, responsable de las infracciones de falta de motivación y error inexcusable, tipificadas en el numeral



8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, respectivamente.

10.2 Declarar al doctor Gustavo Adolfo Durango Vela, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, responsable de las infracciones de falta de motivación y error inexcusable, tipificadas en el numeral 8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, respectivamente.


10.3 De conformidad con el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, por existir concurrencia de infracciones, imponer al doctor José Dionicio Suñig Nagua la sanción de destitución de su cargo de Juez Nacional de la Corte Nacional de Justicia.

10.4 De conformidad con el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, por existir concurrencia de infracciones, imponer al doctor Gustavo Adolfo Durango Vela la sanción de destitución de su cargo de Conjuez Nacional de la Corte Nacional de Justicia.


10.5 Actúe la Secretaría de la Unidad de Control Disciplinario.

10.6 Notifíquese y cúmplase.

**CERTIFICO.-** Que en sesión de 20 de diciembre de 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura por unanimidad aprobó la presente resolución.

  
DR. ANDRÉS SEGOVIA SALCEDO  
SECRETARIO GENERAL  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Lo que comunico para los fines de Ley

  
Dra. María Aurora Coyago  
SECRETARIA AD-HOC DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO  
CONSEJO DE LA JUDICATURA

NOTARIA TRIGESIMA DE QUITO

13 FEB 2014



**SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1, QUITO:**

**NOSOTROS, Doctor**

**JOSE DIONICIO SUING NAGUA** ciudadano ecuatoriano, de cincuenta años de edad, casado, Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, domiciliado en esta ciudad de Quito; y, **Doctor GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA**, ciudadano ecuatoriano, de 60 años de edad, viudo, Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, domiciliado en esta ciudad de Quito; por nuestros propios personales y respectivos derechos; con toda consideración ante ustedes nos presentamos para deducir la siguiente **ACCION SUBJETIVA O DE PLENA JURISDICCION** contra la Resolución expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el 20 de diciembre de 2013, notificada el 23 de diciembre de 2013, en los términos que exponemos a continuación:

**PRIMERO: GENERALES DE LEY.-** Nuestros nombres, apellidos, el derecho por el que comparecemos y más generales de ley son los que dejamos expuestos en el párrafo introductorio.

**SEGUNDO: DEMANDADOS.-** 1) Proponemos la presente **acción subjetiva o de plena jurisdicción** en contra del **CONSEJO DE LA JUDICATURA**, órgano colegiado del organismo del mismo nombre, representado por su Presidente y representante legal, en los términos del art. 269.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, cargo actualmente desempeñado por el **DR. GUSTAVO JALKH ROBEN**; en razón que de conformidad con lo preceptuado en el art. 280.2 del mismo cuerpo legal, la representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo de la Judicatura, le

corresponde ejercer al Director o Directora General, se citará también a la Directora General, Abogada Doris Gallardo Cevallos, o a quien ejerza tal función; a los demandados se les citará en su despacho, en el edificio del Consejo de la Judicatura ubicado en la calle Jorge Washington E4-157 y Ave. Amazonas de esta ciudad de Quito, conocidas por el funcionario citador; y, 2) De acuerdo a lo previsto en el art. 6 de la Ley de la Procuraduría General del Estado, deberá también contarse con el doctor **DIEGO GARCIA CARRIÓN**, Procurador General del Estado, a quien se le citará en sus oficinas, ubicadas en la Avenida Amazonas N39-123 y Arízaga de esta misma ciudad de Quito, también conocida por el señor actuario.

**TERCERO: ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.-** Es la Resolución adoptada por unanimidad por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 20 de diciembre de 2013, dentro del Expediente Disciplinario N° D-0879-UCD-2013-ACS, notificada el 23 de diciembre de 2013, en el trámite del sumario administrativo instaurado en nuestra contra, por la que nos destituyen de los cargos de Juez titular y Conjuez titular, respectivamente, de la Corte Nacional de Justicia.

**CUARTO: ANTECEDENTES PERSONALES.-** Es necesario señores Jueces hacer una breve referencia de nuestros antecedentes profesionales y judiciales: **1. Doctor José Suñig Nagua:** soy profesional del Derecho desde enero de 1991, año en que obtuve el título profesional de Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de la República en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiempo desde el cual he desempeñado varias funciones públicas y privadas con probidad, honradez y profesionalismo; me vinculé a la Corte Nacional de Justicia desde el mes de abril de 2009, en calidad de Conjuez, titularizado en julio de 2009 por



renuncia del Dr. Genaro Eguiguren Valdivieso, Juez titular en aquel entonces. Participé en el Concurso de Oposición y Merecimientos convocado por el Consejo de la Judicatura de Transición para integrar la Corte Nacional de Justicia, habiendo alcanzado una de las más altas calificaciones, obteniendo la designación de Juez Nacional, posesionado del cargo el 26 enero del 2012, para un periodo de nueve años, en los términos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial. Durante ese tiempo desempeñé las funciones de Juez de la Sala Contencioso Administrativo y de la Sala Contencioso Tributaria, de las cuales fui su presidente en los años 2013 y 2012, en ese orden, habiendo despachado no menos de 300 sentencias, solo en el periodo 2012 y 2013. Soy profesor universitario desde 1995 y actualmente docente de post grado en la Universidad Andina Simón Bolívar, desde el año 2006, como docente contratado, además de docente invitado en otras universidades del país, desde hace varios años. Autor de varias obras y artículos académicos en materia de derecho tributario y administrativo. En 22 años de ejercicio profesional y en mis actos públicos y privados he demostrado total responsabilidad, absoluta honradez y apego a la ley; jamás en mi desempeño profesional he sido ni siquiera llamado la atención por actuación alguna, por el contrario he recibido el aprecio y reconocimiento en todos los estamentos en los que me ha correspondido desenvolverme; 2.

**Doctor Gustavo Durango Vela:** Desde que fui estudiante de Derecho en la Universidad Central, me vinculé con la Administración de justicia, pues fui designado Ayudante de Abogacía en la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo en 1975, fui ascendiendo hasta Secretario Relator. Mi tesis doctoral se tituló "El procedimiento Contencioso Administrativo en el Ecuador" (el Tribunal calificador sugirió su publicación en Anales de la Universidad). Fui nombrado Conjuez de ese Tribunal desde que salí en 1985 hasta que me vinculé a la Corte Suprema de Justicia, como

Conjuez del Magistrado Alfredo Contreras en el año 2004, luego como Asesor del Presidente de la Corte Nacional Dr. José Vicente Troya. Gracias a un concurso público, ejercí como Vocal Suplente del Consejo de la Judicatura, y Conjuez de la Corte Nacional desde el 2008. Participé en el Concurso de Oposición y Merecimientos para la Elección de jueces nacionales, alcanzando el puesto 21 (pese a la calificación de 3/10 en la entrevista personal, observado por el Dr. Baltasar Garzón), sin embargo y por el tema de “género” fui desplazado a primer conjuez. Por excusa de integrar la Sala del Presidente de la Corte, fui titularizado en el Despacho de todas las causas en la Sala Contencioso Tributaria desde el 1 de marzo de 2012. Adicionalmente, he sido por 32 años profesor de “Derecho Tributario” en la Universidad Central del Ecuador, profesor de “Derecho Material Tributario” en post grado de la Universidad Andina Simón Bolívar. He publicado dos obras sobre la materia: “Legislación Sustantiva Tributaria Ecuatoriana” y “El Recurso de Casación en Materia Tributaria Ecuatoriana”. Últimamente fui escogido por la Escuela Judicial, para impartir conocimientos sobre tributación a los postulantes a notarios en Quito, Guayaquil y Cuenca (9,5 en la evaluación hecha por ellos). En estos 34 años de ejercicio profesional y en mis actos públicos y privados he demostrado total responsabilidad, absoluta honradez y apego a la ley; jamás en mi desempeño profesional en la cátedra universitaria o como funcionario judicial he sido ni siquiera llamado la atención por actuación alguna, por el contrario he recibido el aprecio y reconocimiento en todos los estamentos en los que me ha correspondido desenvolverme.

**QUINTO: RELACION DE LOS HECHOS.-** La relación circunstanciada de los hechos es como sigue:



**5.1. Expedición del fallo cuya glosa se cuestiona:** Observando el proceso interno de sorteo de causas en las Salas de la Corte Nacional de Justicia, la N° 497-2010, seguida por la empresa Oleoductos de Crudos Pesados del Ecuador S.A., contra el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, le correspondió al compareciente Doctor Gustavo Durango Vela preparar el proyecto de sentencia, como Juez ponente; luego de más de ocho meses de estudio, discusiones continuas entre los integrantes de la Sala y el análisis de más de siete mil fojas del expediente de instancia y de casación, con voto salvado de la Dra. Tatiana Pérez, también integrante de la Sala, el 18 de julio de 2013 se emitió sentencia de mayoría, y la aclaración a la misma el 12 de septiembre de 2013. Dentro del trámite interno de discusión y elaboración del pronunciamiento, el proyecto tuvo una primera versión en el mes de octubre del 2012; luego, ante las dudas que suscitaba la temática relacionada con la glosa por subcapitalización levantada por la Administración Tributaria, uno de los temas en discusión del caso, el Ponente del proyecto, lo presenta reformulado el 17 de febrero de 2013, proyecto al que el compareciente Doctor José Suing Nagua se adhiere el 23 de febrero de 2013; posteriormente lo hace la tercera integrante de la Sala la Dra. Pérez, el 18 de marzo de 2013, sin observaciones ni objeciones, con lo cual existe ya un proyecto, en este caso de consenso, **UNÁNIME**, fecha a partir de la cual, conforme al procedimiento interno de la Sala, el proyecto se pasa a limpio y la Secretaria de la Sala procede a receptar las firmas, hecho así ocurrido, lo cual se puede cotejar con el registro de dicho proceso interno que se agregó al expediente del sumario administrativo, por lo que para los primeros días del mes de abril, ya existía sentencia, la cual debía ser notificada, gestión interna que escapa al control individual de cada juez, dada la elevada carga procesal de cada despacho; sin embargo ello no había ocurrido y recién fue notificada en la fecha antes indicada, pero con el voto salvado de la tercera integrante,



quién luego de suscribir su conformidad con el proyecto, se apartó del criterio de mayoría y emitió VOTO SALVADO.

**5.2. Inexistencia de precedente jurisprudencial obligatorio y la jurisprudencia obligatoria:** Mientras se encuentra en circulación el proyecto de sentencia, la presidenta de la Sala, Dra. Pérez, el 25 de febrero de 2013, presenta al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, informe encaminado a elevar a precedente jurisprudencial obligatorio por la reiteración de fallos, el tema de la subcapitalización, en base a pronunciamientos que se habían expedido al respecto. Tal informe es conocido por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de seis de marzo de 2013, en la que luego de las deliberaciones del caso, se solicita a la Presidenta de la Sala, reformular el informe, previo acuerdo con los integrantes de la Sala, hecho que no se había dado en la preparación del primer informe; el segundo informe es nuevamente tratado por el Pleno de la Corte en sesión de cinco de junio de 2013, sesión en la que la Presidenta de la Sala decide retirar el informe por falta de acuerdo entre los integrantes de la misma. Consiguientemente, a la fecha en la que se expide la sentencia del caso en cuestión, causa 497-2010, no existe precedente obligatorio en los términos previstos en el art. 185 de la Constitución de la República, cuyo texto expresamente señala: *“Art. 185.- Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que esta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria. La jueza o juez ponente para cada sentencia será designado mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para cambiar*

*el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la sala.*", salvo claro está, los fallos reiterados sobre el tema, que a la luz del art. 19 de la Ley de Casación, puede considerarse jurisprudencia obligatoria para los juzgadores de instancia, pero que de manera expresa, por disposición de dicha norma, no aplica para la Corte Nacional de Justicia.

**5.3. Denuncia del Director del SRI, suspensión e inicio del sumario:** El Director del Servicio de Rentas Internas, el 19 de septiembre de 2013, en rueda de prensa que es reseñada el 20 de septiembre de 2013 de diversas maneras por medios de comunicación escritos y televisivos, denuncia un posible perjuicio al Estado por la emisión de la sentencia de mayoría en la causa 497-2010; en la misma rueda de prensa anuncia que presentará una queja en nuestra contra como autores del fallo de mayoría, que interpondrá una acción extraordinaria de protección en contra del fallo para ante la Corte Constitucional, y que estudia la posibilidad de plantear acciones penales también en nuestra contra. El 23 de septiembre de 2013, el Presidente del Consejo de la Judicatura, en base a la **denuncia** presentada por el Director del SRI, instaura el trámite de suspensión provisional No. S-0085-UCD-013-ACS, por el cual, en efecto nos suspende en forma provisional del ejercicio de la judicatura con derecho a remuneración, en base a lo previsto en el art. 269.5 del Código Orgánico de la Función Judicial y 11 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, suspensión que nos es notificada el 24 de septiembre de 2013, fecha desde la que dejamos de ejercer funciones jurisdiccionales. Frente a la fulminante suspensión de la que fuimos objeto, fundada únicamente en la denuncia presentada por UNA parte del litigio, sin justificación ni prueba, salvo sus



aseveraciones, en nuestras contestaciones al sumario expusimos nuestros argumentos que refutan la decisión del Presidente del Consejo, en conocimiento de que de dicha decisión, no cabe recurso alguno, en los términos expuestos en el aludido Reglamento disciplinario. Con la misma fecha, 23 de septiembre de 2013, el Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, en base a la “**denuncia**” (hacemos notar que según los antecedentes de la resolución por la que nos destituye el Consejo de la Judicatura, que por esta acción cuestionamos su legalidad y legitimidad, lo que presentó el Director del Servicio de Rentas Internas fue una “**queja**”, no refiere a la “**denuncia**” que en cambio se menciona tanto en la resolución de suspensión como en la de inicio del sumario instaurado en nuestra contra, copia de la cual se acompañó a la notificación con el inicio del sumario) presentada por el Director General del Servicio de Rentas Internas, señor Carlos Marx Carrasco Vicuña, inicia el expediente disciplinario en nuestra contra, signado con el No. 0879 –UDC-013-ACS. Los argumentos esgrimidos por el Director del Servicio de Rentas Internas, en resumen, son que en el recurso de casación No. 497-2010, en el fallo de mayoría suscrito por nosotros, “inmotivadamente” nos hemos apartado de “antecedentes jurisprudenciales” emitidos por la Sala Especializada de la Corte Nacional en **casos similares**, incurriendo, según el Director del SRI, en **falta de motivación y error inexcusable**, faltas disciplinarias grave y gravísima, tipificadas en los artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, al no haber aplicado el mencionado antecedente, con lo que habríamos vulnerado el art. 17 del Código Tributario y 19 de la Ley de Casación; nos acusa además de haber **violado derechos constitucionales del Servicio de Rentas Internas como es la seguridad jurídica y el debido proceso**; solicita nuestra suspensión inmediata y nuestra destitución, alegando que con la sentencia supuestamente causamos un

perjuicio a la recaudación estatal por más de 252 millones de dólares. El Director del Servicio de Rentas Internas, luego de conocer de nuestra destitución, en pronunciamiento público reseñado en la prensa, vuelve a insinuar la posibilidad de un enjuiciamiento penal, dejando entrever que existen “irregularidades en la emisión del fallo”, las cuales negamos enfáticamente que existan, ya que se trata de una sentencia emitida conforme a derecho, excepto para quien no tiene razón, como lo sostiene el Doctor Jorge Zavala Egas, en su editorial del Diario El Comercio de 16-I-2014, *“No es verosímil que exista una opinión, académicamente calificada, que no coincida en que el fallo judicial fue jurídico y, por tanto, nula la resolución ilegal.”*

**5.4. Tramitación del sumario y resolución del Consejo:** En la sustanciación del sumario, a cargo del Coordinador (e) de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, dicho funcionario, en providencia de 8 de octubre de 2013, las 11h01, provee las pruebas que fueron enunciadas en nuestras respectivas contestaciones a la denuncia, rechazando la reproducción del auto y demás providencias expedidas por nosotros conjuntamente con el doctor Javier Cordero Ordóñez en la causa No 608-2010, seguido por Exportadora Bananera Noboa contra el Servicio de Rentas Internas, que tenía como único propósito evidenciar la probidad e idoneidad de nuestras actuaciones como Jueces Nacionales, las cuales fueron públicamente reconocidas por el propio Econ. Carlos Marx Carrasco como se expuso en la contestación al sumario, petición que fue negada; el pedido de revocatoria también se la niega con el argumento de que *“De conformidad a lo que disponen los incisos tercero y quinto del artículo 28 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, la autoridad tiene la potestad de calificar la pertinencia de la prueba... las*



*sentencias (SIC) que se han dictado en el proceso No. 608-2010 no guardan relación con este sumario disciplinario...”; hacemos notar que no se había solicitado la reproducción de “sentencias”, pues ni siquiera hubo sentencia en dicho recurso, sino un auto que negó a trámite el recurso de casación, sin embargo el hecho evidencia, la ligereza de la actuación del funcionario sustanciador que como tal no tiene atribución para “calificar la pertinencia de la prueba”, pues tal calificación corresponde al órgano con facultad resolutoria, es decir al Consejo de la Judicatura. Pero además, con fundamento en el artículo 76.7, c) de la Constitución de la República, también por petición separada, solicitamos ser escuchados en el seno del Consejo de la Judicatura, a efectos de exponer verbalmente nuestra defensa y las razones para haber expedido el fallo en los términos en los que se hizo, una de cuyas glosas fue objeto del cuestionamiento del Director General del Servicio de Rentas Internas, pero el Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, en providencia de 31 de octubre de 2013, a las 15h059 niega tal petición con el argumento de que “...el presente expediente tiene el carácter de sumario administrativo y se lo realiza en base a la normativa prevista tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial, así como en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, previamente establecidas para este tipo de trámites, en las que no se encuentra contemplada la figura jurídica denominada “audiencia de estrados””; luego los pedidos de revocatoria los niega en función de que “...el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura no contempla la posibilidad de que los sujetos del procedimiento administrativo recurran de las providencias que no ponen fin al sumario administrativo” (providencia de 14 de noviembre de 2013, las 14h20); esta actuación del Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario es ilegal en tanto, primero, jamás solicitamos “audiencia de*

estrados" sino el ejercicio de nuestro derecho constitucional a ser escuchados previsto en el art. 76.7,c), cuyo texto expresamente señala: "Art. 76.- *En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.*", norma que por la aplicación directa de la Constitución es de obligatorio cumplimiento por parte de cualquier autoridad administrativa o judicial, en cualquier clase de proceso; y segundo, porque en providencia anterior, de 29 de octubre de 2013, las 16h00, el propio Coordinador dispone la remisión del expediente para su correspondiente resolución al Pleno del Consejo, por lo que la negativa a los pedidos de ser escuchados por el Pleno del Consejo y la negativa de su revocatoria, la expidió el funcionario sustanciador, sin competencia, que ya la había perdido al agotarse la sustanciación del sumario, porque además, las peticiones de ser escuchados fueron dirigidas al Presidente y a los miembros del Consejo de la Judicatura quienes tienen la facultad INDELEGABLE de resolver, no al funcionario sustanciador; con tales actuaciones el funcionario sustanciador vulnera el PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, por volver a actuar, sin competencia para ello, pues ya había agotado el trámite de sustanciación del expediente sumario. Finalmente, el 20 de diciembre de 2013, las 11h01, el Consejo de la Judicatura, sin habernos dado la oportunidad de ser escuchados, en flagrante vulneración de nuestro derecho de defensa, expide la resolución por la que nos impone la sanción de destitución de los cargos de Juez Nacional y Conjuez Nacional que legítimamente ostentábamos.

5.5. Como consecuencia de los hechos relatados, de manera abrupta e ilegal nos encontramos sin trabajo, único medio de sustento personal y familiar;



afectaron nuestra dignidad personal y familiar, al poner en entredicho nuestro accionar como jueces, con simples declaraciones y afirmaciones de un funcionario que es PARTE PROCESAL, sin pruebas que lo sustenten; ello provocó afectación familiar, fruto de las declaraciones públicas de las autoridades del SRI y del Consejo de la Judicatura, luego de la resolución de destitución adoptada. Consiguientemente, por estas actuaciones del órgano de administración y gobierno de la Función judicial también se afectó nuestro buen nombre que queda en entredicho, pese a que la denuncia y el sumario no hacen relación a ninguna conducta que esté reñida con la ética, salvo la supuesta falta de motivación y el presunto error inexcusable que ha sido determinado por el Consejo en los términos que dejamos expuestos.

**SEXTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO.-** El Ecuador es definido por el art. 1 de la Constitución de la República, como un “*Estado constitucional de derechos y justicia*”, lo cual implica que todo acto o norma debe fundamentarse absolutamente en los principios y garantías señalados en ella. Así mismo, la propia Constitución prevé que el principal deber del Estado es el de respetar y hacer respetar las normas constitucionales y demás normas jurídicas que protegen los derechos de sus ciudadanos, principios que deben cumplir todos los órganos del poder público; ello se desprende de lo previsto en los arts. 3, 11, 75, 76 y otros de la Constitución que reiteran que el Estado garantizará a todos sus habitantes sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y goce de sus derechos y que adoptará medidas para el efectivo goce de los mismos; igualmente, contempla la aplicación directa de sus disposiciones, con lo que remarca su fuerza normativa.

Un acto de autoridad pública es ilegítimo – dice la Resolución Obligatoria de la Corte Suprema de Justicia, (Registro Oficial No 559 de 19 de abril de

2002) -, cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o sin observar los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico o cuando su contenido es contrario a dicho ordenamiento, o ha sido dictado arbitrariamente, esto es, sin fundamento o suficiente motivación, y sin duda ello ha ocurrido al dictarse la Resolución S/N del Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 20 de diciembre de 2013, violaciones que nos causan evidente e irreparable daño.

**SÉPTIMO: NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE DESTITUCIÓN.-** Conforme lo señalado en el art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dos son las causas de nulidad de una resolución administrativa, la falta de competencia de la autoridad que lo dictó y la omisión de solemnidades sustanciales que rigen su emisión, y la Constitución del 2008, específicamente el numeral 7 del literal d del Art. 76, ha agregado como causa de nulidad la "falta de motivación" del acto impugnado. En el presente caso, señores jueces, se han dado las 3 causas de nulidad previstas en las normas referidas, vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que el Consejo de la Judicatura con la resolución de destitución, ha violentado ese ordenamiento jurídico, al vulnerar nuestros derechos fundamentales como el derecho subjetivo a la independencia judicial, máxima obligación que el Estado debe respetar, así como nuestro derecho al trabajo y a la honra también reconocidos de manera expresa por la Constitución; existe incompetencia del Consejo de la Judicatura para interpretar una decisión judicial, lo cual le está expresamente prohibido hacerlo; vicia de nulidad el sumario al no disponer el reconocimiento de la denuncia por parte del denunciante; vulnera nuestro derecho de defensa al no observar el debido proceso dejándonos en la indefensión; al no dar paso a pruebas sustanciales; luego, con la ilegal negativa a nuestro derecho



constitucional de ser escuchados por los integrantes del Consejo de la Judicatura y finalmente con la resolución de destitución, contradictoria e inmotivada en su contenido, como lo pasamos a demostrar:

**7.1. Vulneración del derecho a la independencia judicial y la incompetencia del Pleno del Consejo de la Judicatura para imponer una sanción como consecuencia de un fallo judicial:** El Consejo de la Judicatura con la resolución de destitución y el Presidente del Consejo con la decisión de suspensión provisional, han afectado gravemente los derechos de independencia interna y externa de los jueces consagrado en el artículo 168 de la Constitución de la República cuyo numeral 1, de manera clara consagra: *“La administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación de este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.”* (El subrayado nos pertenece). El Pleno del Consejo de la Judicatura ha violentado el principio de independencia judicial, por el cual los jueces de todo nivel, incluidos los del máximo órgano de la justicia ordinaria, la Corte Nacional de Justicia, deben resolver los asuntos sometidos a su decisión, sin ninguna presión, intromisión y menos amenazas de ninguna parte procesal, aunque una de ellas sea el propio Estado; tampoco cabe que un organismo administrativo y financiero como lo es el Consejo de la Judicatura, califique de “falta de motivación” y de “error inexcusable” al contenido de una sentencia expedida por un órgano judicial, basada en la interpretación de normas de derecho, que analizada en foros académicos, ha sido considerada total y absolutamente ajustada a la normativa legal.

Dar paso a una denuncia, sin que existan elementos que demuestren lo afirmado en ella, salvo el argumento de presuntamente habernos apartado de una línea jurisprudencial, que por lo demás, de modo expreso, se deja consignado en el fallo cuestionado por qué se lo hace, deja en evidencia la interferencia en la administración de justicia que pretendió y consiguió el Director del SRI, PARTE PROCESAL en el juicio en cuestión, que dio origen al Expediente Disciplinario y se lo materializa con la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, que concluye con la presunta identificación de conductas presuntamente reprochables, fruto de un análisis judicial, que le está vedado al órgano administrativo, por más órgano de gobierno y disciplinario que sea, ya que de lo contrario, equivaldría a establecer, al margen de la ley, un mecanismo administrativo de revisión de los fallos de jueces y tribunales, que no está previsto en ninguna disposición del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por el contrario, sobre este punto, el art. 115 inciso segundo del COFJ a la letra dispone que "*Asimismo, no se admitirá a trámite la queja o la denuncia si en ella se impugnan criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales.*" (El resaltado nos pertenece). Y es precisamente eso lo que hace el denunciante, impugnar criterios de interpretación jurídica. Haciendo caso omiso de esta expresa disposición legal, el Presidente del Consejo de la Judicatura dio paso a la denuncia, (queja, según los antecedentes de la resolución) nos suspendió en el ejercicio de nuestras funciones, dispuso la sustanciación del sumario y el Pleno del Consejo emitió la resolución de destitución que ahora impugnamos.

Los pronunciamientos que se materializan en las decisiones, primero del Presidente del Consejo, al suspenderos de las funciones que legítimamente desempeñábamos, sin que exista de por medio ninguna prueba de los



presuntos **hechos graves y urgentes** que lo justifiquen, pues acoge sin más los motivos que esgrimió el Director del SRI, sin prueba alguna; y, la Resolución del Consejo en Pleno por la que nos destituye, en base a análisis jurídicos del contenido de la sentencia, NO DE HECHOS, lo que es prohibido a un órgano administrativo, producto de lo cual encuentran que existe “falta de motivación” en el fallo por una supuesta contradicción entre los antecedentes y la decisión final, sin entender que en los antecedentes se menciona el concepto vertido por la Sala en casos sobre subcapitalización como un mecanismo de clarificación de qué es lo que se discute y por qué, en el caso, no aplica, mencionando de modo expreso las razones de por qué no se lo hace, dónde está entonces, la supuesta contradicción que permite aseverar la supuesta falta de motivación del fallo?. El Consejo encuentra también incongruencia entre la causal esgrimida por la OCP (otra de las partes del Recurso de Casación N° 497-2010) al proponer el recurso de casación y la utilizada por la sentencia dictada por el Tribunal de Casación, lo que evidencia que lo que hace el órgano administrativo es analizar el contenido de una decisión judicial, lo cual, reitero, le está expresamente prohibido, por no tener jurisdicción y menos COMPETENCIA para ello, y porque no existe esta suerte de recurso administrativo que ha conseguido el Director del SRI, puesto que, de aceptar como válida la decisión de destitución, estaría consagrándose en la práctica, el actuar flagrantemente ilegal del órgano de administración y gobierno de la Función Judicial como es el Consejo de la Judicatura y el atropello a la independencia externa (al aceptar como válida sin prueba que lo demuestre lo afirmado por una de las partes en litigio, el SRI) e interna de los jueces (con el análisis jurídico de la decisión judicial por parte del órgano administrativo), que prevé la Constitución.



Es necesario recalcar que resulta contradictorio el análisis realizado por el Consejo de la Judicatura en su resolución, ya que para destituírnos no utiliza los argumentos esgrimidos por el Director del SRI en su denuncia (queja?), incurriendo en manifiesta contradicción, que aunque los menciona en los antecedentes de la resolución, nada dice en la parte considerativa por ejemplo, que el Director del SRI nos acusa de error inexcusable por supuestamente no aplicar el art. 17 del Código Tributario y no observar la línea jurisprudencial que sobre subcapitalización habíamos sostenido en otros fallos en los que se dio la razón a la Administración Tributaria, lo que habría producido la violación del art. 19 de la Ley de Casación que no aplica para los Jueces de la Corte Nacional; el SRI no nos acusa de aplicar una causal no esgrimida por el recurrente que es el fundamento del CONSEJO DE LA JUDICATURA en su resolución de destitución. Además, negamos rotundamente que ello haya ocurrido; ni siquiera la Corte Constitucional lo establece en la sentencia que deja sin efecto la dictada por nosotros en la causa 497-2010, sentencia de la Corte Constitucional que fue emitida con fecha posterior a la resolución de destitución adoptada por el Consejo de la Judicatura (26 de diciembre de 2013), por lo que mal pudo servir de antecedente para la decisión del Consejo, (la deja sin efecto por una supuesta falta de motivación que, conforme el art. 108.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, es falta grave sancionada con suspensión, siempre que dicha conducta haya sido reiterada y de ello no se nos acusa por parte del Director del SRI, en los términos requeridos por la norma legal referida. Nada dice la Corte Constitucional del error inexcusable que si encuentra el Consejo de la Judicatura), sin embargo el órgano administrativo y de control disciplinario, haciendo un análisis jurídico de una parte de la sentencia, LA GLOSA POR SUBCAPITALIZACIÓN (tema ni disciplinario ni de conducta, sino estrictamente jurídico, de interpretación de normas de derecho) encuentra las

presuntas deficiencias, lo califica de error inexcusable y por ello nos sanciona con la destitución, en una flagrante vulneración de nuestro derecho subjetivo a la independencia judicial, por nuestra calidad de Jueces que legítimamente ostentábamos, sentando un precedente negativo en la administración de justicia ecuatoriana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en múltiples fallos, resalta la necesidad de la división de poderes, en la que sobresale la independencia judicial. Así en la sentencia del caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana, Cocello y otros) vs. Ecuador, sentencia de 23 de agosto de 2013, al tratar de los estándares generales sobre independencia judicial señala “144. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. En el caso *Reverón Trujillo vs Venezuela*, la Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del poder judicial, lo cual, la Corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial”. El Tribunal reiteró que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de judicatura (en Adelante “Principios



Básicos”), las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo, y la garantía contra las presiones externas. 145. Entre los alcances de la inamovilidad relevantes para el presente caso, los Principios Básicos establecen que “la ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos” y que “se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que se cumpla la edad para la jubilación forzosa o expire el periodo para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto”. Además, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los jueces solo pueden ser removidos por faltas disciplinarias graves o incompetencia y acorde a procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley. Este Tribunal ha acogido los principios y ha afirmado que la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse independiente e imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. Ello es así toda vez que la libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias. 146. Respecto a la garantía contra presiones externas los Principios Básicos disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan “basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Así mismo dichos Principios establecen que “no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial”. 147. Ahora bien la garantía de estabilidad de los jueces en el cargo no es absoluta. El derecho internacional de los derechos humanos admite que los jueces sean destituidos por

conductas claramente reprochables. En su Observación General No. 32, el Comité de Derechos Humanos estableció que los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia. Así mismo, los Principios Básicos precisan lo siguiente sobre medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo: "17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. 18. Los jueces solo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando funciones". 148. Por otro lado, otros estándares diferencian entre las sanciones aplicables. Se insiste en que la garantía de inamovilidad implica que la destitución obedezca a conductas bastante graves, mientras que otras sanciones pueden contemplarse ante eventos como negligencia o impericia"<sup>1</sup>. Más adelante en el mismo fallo señala "Finalmente, la Corte ha señalado que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad. Así mismo, existe una relación directa entre la dimensión objetiva de la independencia judicial y el derecho de los jueces a acceder y

<sup>1</sup> Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Quintana Coello VS. Ecuador, págs. 45 y 46



*permanecer en sus cargos en condiciones generales de igualdad, como expresión de su garantía de estabilidad.”<sup>2</sup>* (Los resaltados nos pertenecen). Por todo lo expuesto, es absurdo, inconstitucional e ilegal, fuera de toda lógica, que el Consejo de la Judicatura sancione a un Juez por un criterio jurídico sobre un tema específico vertido en un fallo, por más que el “perjudicado” sea el Estado, todo lo cual hace concluir que dicho órgano administrativo y de gobierno de la Función Judicial NO ES COMPETENTE para sancionarnos por una decisión judicial, por lo que la resolución deviene en nula, de nulidad absoluta, máxime que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 de la Constitución de la República. “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”.

**7.2. Vulneración del debido proceso:** El debido proceso lo vulnera tanto el funcionario sustanciador, delegado por norma reglamentaria para sustanciar el sumario, lo cual ya es discutible pues la norma del art. 114 inciso final señala que en caso de denuncias en contra de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia, “...será el Pleno del Consejo de la Judicatura quien tramite los sumarios e imponga las sanciones correspondientes” (el resaltado nos corresponde), atribución respecto de la cual la norma no prevé delegación; también lo vulnera el propio Consejo de la Judicatura, al no dar paso al ejercicio pleno de nuestro derecho de defensa. El funcionario sustanciador, al negar nuestras pertinentes solicitudes de pruebas, encaminadas a demostrar nuestra absoluta probidad e idoneidad para el ejercicio de la judicatura, pues según la doctrina es esta probidad e idoneidad



lo que se cuestiona en el error inexcusable de un juez. Al respecto el Director del Servicio de Rentas Internas, reconoció públicamente nuestra probidad e idoneidad que se desprenden además de las resoluciones que el funcionario sustanciador ilegalmente impidió que se agreguen al expediente al negarnos la prueba, pese al pedido de revocatoria.

Por otra parte, tanto la decisión de suspensión, como la del inicio del sumario, se fundamentan en la “denuncia presentada por el Director del Servicio de Rentas Internas”; sin embargo, en la resolución de destitución del Consejo, en los antecedentes señalan “*Mediante oficio No. 0027802 de 19 de septiembre de 2013, el Servicio de Rentas Internas, a través de su Director General, Carlos Marx Carrasco, presentó una queja relacionada con la actuación de los doctores...*” (el resaltado nos corresponde); de lo relatado se evidencia, que tanto la suspensión como el sumario, se fundamentan en la **denuncia** que presenta el Director del SRI, la cual no cumplió con el mandato legal expreso de ser reconocida ante el funcionario encargado de tramitarla; el art. 113, inciso tercero del COFR, señala: “*Podrá presentar denuncia escrita, cualquier persona natural o jurídica, grupo de personas, pueblo o nacionalidad, que tenga interés directo en un juicio o servicio solicitado, Presentada la denuncia se reconocerá la firma ante el funcionario encargado de tramitarla.*” (el resaltado nos corresponde) ; sin embargo, del contenido de la resolución, transcrita en su parte pertinente, resulta que lo que el indicado funcionario ha presentado es una **queja**, figuras distintas que expresamente reconoce el COFI en el art. 113, ya referido, con tratamiento, contenido sustancialmente distintos (por ejemplo, para la queja la ley no prevé requisitos que sí lo hace para la denuncia); de expuesto, se colige que fuimos suspendidos y sumariados con base en una **denuncia**, que no cumple con los

---

<sup>2</sup> CIDH, caso referido, pág. 48

requisitos de ley ni fue reconocida, lo cual nulita el sumario, pero además, fuimos destituidos en base a una **queja**, por lo que, al no haber tenido acceso a la queja ni conocer el contenido de la misma, se vulneró nuestro derecho de defensa y el debido proceso, ya que durante todo el sumario desconocimos las razones de la queja a la que hace alusión expresa el antecedente de la resolución de destitución, como queda evidenciado. Adicionalmente, la resolución en ninguna parte hace referencia, en cambio a la denuncia que motivó tanto la suspensión, como el inicio del sumario, copias de la cual se nos acompañó junto con la notificación de inicio del sumario y en base a la cual formulamos nuestras contestaciones.

**7.3. Ilegal, contradictoria e inmotivada resolución de destitución:** De la lectura de la Resolución que impugnamos por ilegal, Apartado "9. CRITERIOS A CONSIDERARSE" se desprenden varios elementos a resaltar: a) Sobre la presunta falta de motivación sostiene: *"En cada una de las sentencias mencionadas, [las referidas por el Director General del SRI en su denuncia] agregadas al expediente disciplinario, existe motivación pertinente y suficiente, que concuerda con el análisis del juzgador, concluyendo en resoluciones coherentes con las consideraciones previas. Sin embargo, en el caso propuesto, [el 497-2010, objeto de la denuncia] materia del presente expediente, los sumariados no motivaron con suficiencia los criterios por los cuales se apartaron de los fallos que ellos mismo dictaron anteriormente, en casos similares."* (El subrayado nos corresponde). Más adelante concluye *"... en el presente caso se ha demostrado que los sumariados no motivaron suficiente y congruentemente su criterio por el cual se separaron de sus resoluciones y sentencias dictadas anteriormente en juicios similares, evidentemente no idénticos"*; (el subrayado nos pertenece); de lo transcrito se desprende que el Consejo arribó a la conclusión, no de **falta**



de motivación sino de **motivación insuficiente**, respecto de una glosa, no siquiera del fallo en su totalidad, sin que la autoridad administrativa señale de modo expreso, de qué manera ocurre tal insuficiencia, ni cómo se arriba a tal conclusión, con lo cual su resolución es carente de motivación, por consiguiente, nula, al tenor de la norma constitucional, art. 76.7,1); b) Respecto del error inexcusable, a la luz de los razonamientos del Consejo de la Judicatura, vertidos en la resolución que impugnamos, se entiende que *“...se debe considerar que para que un error de derecho pueda ser calificado como inexcusable, es condición tanto suficiente como necesaria que exista un precepto jurídico que siendo legítimo y estando vigente, contenga un mandato positivo o negativo que fuere claramente identificable, preciso y unívoco”*. (El subrayado nos pertenece). Luego expresa que *“El artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial consagra el principio dispositivo, en virtud del cual todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y los jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley, lo cual concuerda con lo dispuesto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis. Por otra parte, el segundo inciso del artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que los jueces no podrán ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”*. Seguido, refiere a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en materia civil y al criterio vertido por Murcia Ballén, citado en un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Y sobre el caso en cuestión expresa *“En el presente caso, el recurso de casación planteado por Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A., se fundamentó en las causales primera, segunda y cuarta del artículo 3 de la Codificación*

de la Ley de Casación, sin embargo, los servidores sumariados en el literal a) del considerando cuarto de la sentencia de 18 de julio de 2013, (fs.93 via.) manifestaron "...erróneamente lo fundamenta en el numeral 1ro., del Art. 3 de la Ley de Casación, por cuanto estaría más encasillada en la causal 5ta., del referido artículo, pero que esta Sala ha sido laxa en aceptar dicha equívocación y en casos iguales ha procedido a conocer sobre el fondo de la impugnación..." De lo anterior se concluye que los sumariados procedieron contraviniendo lo dispuesto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, conducta que se agudiza considerando que la casación no es una instancia sino un recurso extraordinario que procede contra las sentencias o autos que pongan fin a los procesos de conocimiento..., es decir que no se admite que el examen del recurso sea por causal distinta a la propuesta por el recurrente." (El subrayado nos pertenece); y, c) Sobre la valoración de pruebas en la Resolución se sostiene que "El carácter extraordinario del recurso de casación determina que únicamente el juez a quo puede valorar la prueba y que los jueces que ejercen control de legalidad están obligados a atenerse a dicha apreciación. El artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que la casación no constituye instancia ni grado de los procesos, sino recurso extraordinario de control de legalidad. A lo antes expuesto se agrega el hecho de que los jueces sumariados se excedieron en sus competencias, previstas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Codificación de la Ley de Casación, al haber valorado prueba", para lo cual se remite al contenido de la sentencia impugnada cuyo literal c) del considerando cuarto transcribe y concluye que "...asumieron indebidamente la atribución de valorar prueba, facultad que no tenían en virtud de que la causal tercera del artículo 3 de la Codificación de la Ley de Casación no fue invocada por la parte recurrente ni analizada por los jueces sumariados". Los razonamientos del Consejo de la Judicatura



vertidos en su resolución contienen flagrantes contradicciones que las señalamos de manera expresa: i. El proceso contencioso tributario, como lo ha reconocido en forma unánime la jurisprudencia de la Sala Especializada tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Nacional de Justicia, **no es un proceso dispositivo**, por el contrario, **es cuasi oficioso**, de allí que incluso, prevé la actuación de pruebas de oficio, luego de vencido el término probatorio, ordenadas a criterio del juzgador (art. 262 del Código Tributario), oficiosidad que también está consagrada en el art. 273 del Código Tributario que prevé de manera expresa, **el control de legalidad del fallo de instancia, de única instancia**, como es la que expiden las Salas de los tribunales distritales fiscales; estos elementos apartan al juicio contencioso tributario del principio dispositivo consagrado en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Orgánico de la Función Judicial, tomado como argumento central por el Consejo de la Judicatura en su resolución, para determinar la existencia del supuesto error inexcusable. Mal puede entonces acusarnos de error inexcusable por una norma que para la materia especializada de lo contencioso tributario, el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, es supletoria, y no cumple con la exigencia que el propio Consejo arguye como condición tanto suficiente como necesaria para que exista error inexcusable, cual es que *“exista un precepto jurídico que siendo legítimo y estando vigente, contenga un mandato positivo o negativo que fuere claramente identificable, preciso y unívoco”*, tales condiciones no cumple el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, al existir norma expresa en materia tributaria, la del art. 273 del Código Tributario, que es de obligada observancia por el juez especializado, de manera prioritaria, antes que la norma supletoria, conforme así se lo hace en la sentencia, una de cuyas glosas es cuestionada por el Director del SRI y que conduce a la resolución de destitución; ii. La conclusión a la que arriba el Consejo de la Judicatura de que *“los sumariados*



de manera oficiosa resolvieron el recurso de casación fundamentándose en causales distintas a las alegadas por Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A., lo que a todas luces constituye un proceder abiertamente contrario a dispuesto en los artículos 19 y 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia del Código de Procedimiento Civil" es errada por las consideraciones anotadas en el literal precedente, pero además porque no es que se resolvió por una causal distinta, pues lo que en la sentencia se deja sentado es que si bien el recurrente alega falta de motivación del fallo de instancia con base en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación y la falta de motivación correspondería más a la causal quinta del mismo artículo, la Sala, de manera reiterada, como en el caso en cuestión, **ha aceptado la falta de motivación fundada en la causal primera**; es decir, el recurrente fundó la falta de motivación de la sentencia de instancia en la causal primera del art. 3 de la ley de la materia, y en el fallo cuestionado se atendió dicha alegación de falta de motivación con base en la misma causal, **NEGANDO TAL ARGUMENTO DEL RECURRENTE**, así se expresa de forma clara en la parte final de la letra A) del considerando Cuarto de la sentencia: "*en consecuencia no porque los argumentos esgrimidos por el Tribunal A quo no son compartidos por una de las partes, puede sostenerse que la sentencia carece de motivación, como tampoco puede sostenerse que en una sentencia motivada, sus razonamientos sean conforme a Derecho, como así lo calificado esta Sala Especializada en casos similares, por lo mismo se rechaza la pretendida causal [la causal primera] esgrimida por el recurrente" (el resaltado nos pertenece); por tanto, **NO EXISTE FUNDAMENTACION EN CAUSAL DISTINTA A LA ALEGADA**, como equivocadamente argumenta el Consejo en la resolución que impugnamos, es más, la presunta aplicación de causal diferente, ni siquiera existe **PORQUE DICHA CAUSAL ALEGADA FUE EXPRESAMENTE***

**RECHAZADA**, pues si se lee todo el fallo cuestionado con prolijidad, se llegará a la conclusión que la única causal aceptada es la CUARTA, por haber omitido resolver todos los puntos de la litis, es decir, no decidir sobre todas las glosas cuestionadas. Lo que no se dice en la resolución cuestionada es que desde el año 1993, en que entró en vigencia el recurso extraordinario de casación en materia tributaria al amparo de la Ley de Casación, la Sala (en muchos casos para proteger los mal planteados recursos de casación del Servicio de Rentas Internas) ha tenido esa política, es decir, desde mucho antes de que nosotros fuésemos designados jueces; y, la explicación jurídica del por qué, la argumentó el Magistrado Dr. José Vicente Troya, pues consideró no solamente que se estaba denegando justicia por la sola omisión de una simple formalidad (Art. 169 de la Constitución), sino que en materia tributaria, en la fase contenciosa sólo existe una única y definitiva instancia. Ello es fácilmente demostrable con muchas sentencias que en ese sentido expidió la Sala y que solicitaremos su reproducción en el término respectivo, muchas de las cuales beneficiaron a la Administración Tributaria, que jamás argumentó su improcedencia. Además, existe una circunstancia que refuerza el argumento de aceptar la falta de motivación (error de derecho) al amparo de la causal primera del artículo 3 de la ley de Casación, -cuando se lo ha hecho así, pues en el caso 497-2010, como se deja expuesto, se rechazó de modo expreso la causal primera- es porque la causal quinta de modo expreso no habla de la falta de motivación, sino del incumplimiento de requisitos que debe contener la sentencia, porque no hay que olvidar que la Ley de Casación es un cuerpo normativo pre constituyente, expedida en 1993, por lo que mal puede ser argumento válido para sostener, como lo hace el Consejo de la Judicatura, que la falta de motivación se encasilla en la causal quinta, cuando la falta de motivación, con los efectos de nulidad únicamente está prevista a partir de la vigencia de la Constitución de 2008, por lo que cabe



perfectamente adecuar la falta de motivación en la causal primera, pues la falta de motivación es también un error de derecho, pero que en la sentencia que ha motivado nuestra ilegal destitución fue rechazado el recurso por no encontrar la falta de motivación argüida por el recurrente, tema que por lo demás, se encasilla en una discusión estrictamente jurídica, de aplicación de una norma de derecho, que no conlleva ninguna conducta ilícita o irregular del juzgador; **iii.** Lo más lamentable de todo esto es que este tema de la causal primera alegada por el recurrente en el caso 497-2010 y desechada de manera expresa en el fallo de mayoría, no es materia de la denuncia presentada por el Director del Servicio de Rentas Internas, por lo que el Consejo de la Judicatura **nos ha sancionado por una conducta que no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del denunciante y a la que arriba luego de un análisis jurídico del contenido de una decisión judicial**, lo cual le está vedado hacer a un órgano administrativo y disciplinario como es el Consejo de la Judicatura. Frente a la denuncia del Director del SRI, el Consejo debió advertir si existen o no tales conductas, **pero con base al contenido de la denuncia**, no buscar argumentos no denunciados e inexistentes, para justificar su ilegal decisión. El Consejo, con su decisión, incurre en flagrante contradicción, determinando como norma con la que habríamos cometido error inexcusable, el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, que para la materia contencioso tributaria es norma supletoria, es decir, aplicable, únicamente a falta de norma expresa, que en este caso, si existe, el art. 273 del Código Tributario, que es el que expresamente se aplicó, lo que vuelve inaplicable el art. 273 del CPC por su carácter de supletorio. Debemos ser reiterativos en manifestar que la denuncia presentada por el Econ. Carrasco, no tiene ninguna argumentación en este sentido, pues su argumentación era que, como error inexcusable, habríamos vulnerado el art. 17 del Código Tributario y 19 de la Ley de Casación sobre lo que nada se dice en la parte

considerativa de la Resolución cuya legitimidad y legalidad cuestionamos, por la evidencias que dejamos expuestas; es decir que el Consejo de la Judicatura se fundamentó para nuestra destitución, en un tema que no fue motivo de la denuncia y concluyó analizando el fondo jurídico de la sentencia, de un tema abordado en ella, UNA GLOSA, no de todo el fallo, cual si fuera un órgano administrativo con facultades jurisdiccionales, forzando argumentos en pro de justificar su ilegal decisión, encontrando un error inexcusable en un artículo del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria, y en una causal que expresamente fue rechazada; iv. Finalmente, respecto a la presunta valoración de prueba en la que habríamos incurrido, hay que señalar que la ausencia de valoración de prueba mediante el recurso de casación, no es absoluta, pues, por un lado, si la sentencia se declara nula por falta de motivación al tenor de lo previsto en el art. 76.7,1) de la Constitución, corresponde al juez de casación valorar prueba porque la sentencia declarada nula ya no existe (éste no es el caso, precisamente porque no se aceptó la causal primera) y para resolver, se lo hace “por los méritos del proceso”, como ha ocurrido en innúmeros fallos de la Sala; por otro lado, si se alega la causal tercera, (que tampoco es el caso porque no fue esgrimido por la empresa recurrente y que la Sala tampoco aplica en la sentencia cuestionada), también corresponde valorar prueba cuando la realizada por el tribunal de instancia resiente la lógica, conforme así lo ha establecido la Sala, también en forma reiterada, como lo demostraremos en el momento procesal oportuno; pero en el caso en cuestión, si lo que se determinó en el voto de mayoría es que “no existe en el fallo de instancia pronunciamiento expreso sobre algunas glosas”, es de simple lógica, la necesidad de que se realice un ejercicio de valoración de los elementos que obren de proceso sobre la glosa para decidir en consecuencia, porque precisamente el juzgador de instancia omitió hacerlo y los jueces, en cualquier instancia y recurso están para “administrar justicia”, sin sacrificarla



por la mera omisión de formalidades como lo exige la propia Constitución, de directa y obligatoria aplicación, pues si no se rompe el formalismo del que está revestida la casación, la gran sacrificada será la justicia. Este tema, como el de la presunta aplicación de una causal no alegada por el recurrente, tampoco fue materia de la denuncia formulada por parte del Director del SRI, por lo que el Pleno del Consejo de la Judicatura, realizando un análisis de una decisión judicial, que no le corresponde por ser órgano administrativo y disciplinario, no judicial, concluye, equivocadamente que hemos asumido indebidamente la atribución de valorar prueba, lo cual, si se analiza el texto íntegro de la sentencia, no solo partes de ella, tampoco se da, por lo que el Pleno del Consejo, incurre nuevamente en otra ilegalidad.

**7.4. Ilegal e inmotivada negativa a ser oído por el Pleno del Consejo de la Judicatura:** El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que *"Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil..."*. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 8 establece que *"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley"*; Así mismo, la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza: *"8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal*



*formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". El artículo 75 de la Constitución de la República dispone lo siguiente: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. El artículo 76 en sus numerales 1 y 7 literales a), b), c) y h) consagran: "Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes... 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones... h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes;"*

En el contenido de las normas de tratados internacionales y de la Constitución de la República transcritas, se enfatiza que las garantías básicas del debido proceso deben ser respetadas por cualquier autoridad pública, ya sea en el ámbito administrativo o judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido al debido proceso como aquellas "*condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial*"<sup>3</sup>; a efectos de

<sup>3</sup> Corte IDH. OC-9/87 "Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, 6 de octubre de 1987, párr. 28

*"que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos";<sup>4</sup> constituyendo un límite infranqueable a la discrecionalidad del poder público, en cualquier materia.<sup>5</sup>*

Tanto el funcionario sustanciador como el Pleno del Consejo de la Judicatura vulneran el debido proceso, al negarnos el derecho a exponer, ante los miembros del Consejo de la Judicatura las razones que motivaron la expedición del fallo con voto de mayoría: a) Del funcionario sustanciador, porque arrogándose atribuciones, niega el pedido, según él de "audiencia de estrados" con el baladí argumento de que no lo contempla la norma reglamentaria y porque tampoco, la misma norma prevé la apelación de providencias dentro del sumario, es decir que para su criterio, la norma reglamentaria, prevalece sobre la norma constitucional. Su intervención es ilegal y vicia el procedimiento, toda vez que nuestra petición, que jamás fue de "audiencia de estrados", fue con fundamento en el art. 76.7.c) de la Constitución, que garantiza el derecho a ser escuchado, en cualquier tiempo del proceso y en igualdad de condiciones y porque su actuación en la sustanciación del sumario ya había concluido, cuando declaró agotado su trámite y dispuso que pase a conocimiento del Consejo de la Judicatura para su decisión; además, de manera expresa en nuestras peticiones, dirigimos las solicitudes al Presidente y a los miembros del Consejo de la Judicatura, pues son ellos los que tienen la facultad para resolver el sumario, como en efecto lo hicieron, no se trataba entonces de una supuesta "apelación" de la que habla el

<sup>4</sup> Corte IDH. Caso Baena Ricardo. Sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 124. "Al respecto, este Tribunal también ha señalado que "el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu".

<sup>5</sup> Corte IDH. Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Voto razonado de los Jueces Cançado y Pacheco, párr. 16 in fine, "...la discrecionalidad del poder público, en cualquier materia, "tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos" y la "garantía del debido proceso".



funcionario sustanciador; b) Los integrantes del Consejo de la Judicatura, tampoco repararon en nuestras peticiones legítimas, las desatendieron y sin ella, se pronunciaron en la resolución que ahora impugnamos, vulnerando flagrantemente nuestro derecho al debido proceso, lo que vuelve ilegal lo resuelto, al vulnerarse, como consecuencia del irrespeto al debido proceso, nuestro derecho de defensa.

**OCTAVO: PRETENSIÓN CONCRETA.-** Con los antecedentes expuestos, amparados en los artículos 1, 3 y demás pertinentes de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y 217.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, en acción subjetiva o de plena jurisdicción, impugnamos la Resolución de destitución expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 20 de diciembre de 2013, notificada el 23 de diciembre de 2013, para que en sentencia y luego del trámite de ley, se declare su nulidad e invalidez jurídica, por falta de competencia del órgano administrativo y de gobierno de la Función Judicial que lo emitió analizando una decisión judicial que no le corresponde como órgano administrativo y la omisión de formalidades que rigen su emisión; alternatively, solicitamos se declare la ILEGALIDAD de dicho acto, pues sus antecedentes y fundamentos de derecho, son totalmente ajenos a la realidad y a la aplicación estricta del derecho; como consecuencia, se ordenará nuestra restitución a los cargos de Juez Nacional y Conjuez Nacional que legítimamente ostentábamos y al pago de las remuneraciones que dejamos de percibir por la ilegal destitución de la que fuimos objeto, así como el pago de los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más las bonificaciones de ley. Se reconocerán los intereses, a la tasa activa referencial vigente al momento en que se produzca el pago. Se dejará a salvo el derecho del Estado para repetir lo pagado a los autores del ilegítimo y nulo acto administrativo que impugnamos.

De no ser posible la restitución, se dispondrá el pago de la indemnización correspondiente.

**NOVENO: PRUEBAS.-** En el término de prueba respectivo actuaremos las pruebas documentales que corroboran los hechos relatados y las violaciones al ordenamiento jurídico provocadas por la ilegal resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura que impugnamos. Se agregarán pronunciamientos y publicaciones generadas en la opinión pública y en la academia como consecuencia de la ilegal decisión del Consejo de la Judicatura.

**DÉCIMO: CITACIÓN.-** A los demandados, señores: Dr. Gustavo Jalkh Roben, abogada Doris Gallardo Cevallos y Dr. Diego García Carrión, por los derechos que cada uno de ellos representa, según lo dicho en el acápite segundo de la presente demanda, se los citará en las Oficinas públicas de sus respectivos despachos, ubicados en las direcciones señaladas en el encabezado de esta demanda.


**DÉCIMO PRIMERO: CUANTÍA.-** Por la naturaleza de la causa y por expresa disposición del Art. 67 de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cuantía es indeterminada.


**DECIMO SEGUNDO: DOMICILIO.-** Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en el casillero judicial No. 3214 de la Sala de Sorteos del Palacio de Justicia de esta ciudad de Quito. Adicionalmente, para notificaciones electrónicas señalamos los correos electrónicos: jdsuing@gmail.com; y, gustavodurangovela@hotmail.com


**DÉCIMO TERCERO: DOCUMENTOS.**- Acompañamos copias notariadas de la Resolución adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 20 de diciembre de 2013, dentro del Expediente Disciplinario N° D-0879-UCD-2013-ACS.

En su primera providencia dispondrá que la autoridad demandada remita al Tribunal copia íntegra del sumario administrativo instaurado, junto con la resolución de destitución cuya legitimidad y validez impugnamos.

Firmamos por nuestros propios derechos y acompañados de nuestros abogados patrocinadores, profesionales a quienes autorizamos para que de manera conjunta o individual presenten cuanto escrito sea necesario en defensa de nuestros legítimos derechos.

  
Dr. José Suñig Nagua,  
Mat. No. 3331, C.A.P.

  
Dr. Gustavo Durango Vela  
Mat. No. 1897, C. A. P.

  
Dr. Armando Serrano Puig  
Mat. 3904 C. A. P.

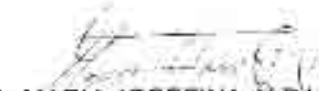


**UNIDAD CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA**  
**SORTEOS - TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1**

Ingresado por: ALDANAM

Recibido el día de hoy, viernes veinte y ocho de febrero del dos mil cartorce, a las trece horas y dieciseis minutos, el proceso por DESTITUCION seguido por DR. SUING NAGUA JOSE DIONICIO en contra de DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, en: 18 foja(s), anexos ocho fojas y siete copias de la demanda iguales a su original. Por sorteo de ley la competencia se radica en el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1, conformado por JUECES: DR. JAIME ENRIQUEZ YEPEZ en reemplazo del DR. MARCO IDROBO ARCINIEGA, DRA. HIPATIA ORTIZ VARGAS Y AB. PATRICIO CALDERON IMBAQUINGO (Ponente). SECRETARIO: AB. MIGUEL PATRICIO ANDRADE HERNANDEZ Juicio No. 17811-2014-0463.

QUITO, Viernes 28 de Febrero del 2014.

  
SRA. MARIA JOSEFINA ALDANA VEGA  
RESPONSABLE DE SORTEOS

**RAZON:** En mi calidad de Secretario Relator Encargado del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, en virtud del contrato de fecha 04 de julio de 2013, sienta por tal que en esta fecha, la presente demanda signada con el No. 0463-2014 se entrega al Juez Ponente Ab. Patricio Calderón Imbuquingo.- Quito 05 de marzo del 2014.- Lo certifico




**Ab. Miguel Andrade Hernández**  
**SECRETARIO RELATOR**


**JUEZ PONENTE: AB. PATRICIO CALDERON IMBAQUINGO, JUEZ DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1**

**TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1.**

Quito, miércoles 12 de marzo del 2014, las 12h08. En virtud del sorteo correspondiente, avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.- En lo principal, la demanda propuesta por sus propios derechos por los doctores JOSE DIONICIO SUNG NAGUA y GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, en contra del CONSEJO DE LA JUDICATURA, representado por su Presidente y representante legal DR. GUSTAVO JALKH ROBEN; AB. DORIS GALLARDO CEVALLOS, DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA; y, además se contará con el Sr. DIEGO GARCIA CARRIÓN, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO; calificándola de clara y completa, se ordena que se la tramite en la forma establecida en el Capítulo IV y más normas pertinentes a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debiendo citarse a los demandados con el contenido de la demanda y esta providencia en los lugares designados para el efecto en libelo inicial. Los demandados tendrán el término de veinte días para contestar la acción planteada y deducir las excepciones de las que se crean asistidos, debiendo señalar domicilio judicial para las notificaciones correspondientes; en igual término, los funcionarios demandados, remitirán a este Tribunal el expediente administrativo debidamente ordenado y foliado. Tómese en cuenta a su abogado defensor y el casillero judicial y correos electrónicos señalados por los actores para futuras notificaciones. En virtud del contrato de 4 de julio de 2013, actúe en calidad de Secretario Relator de este Tribunal el Ab. Miguel Andrade Hernández. - CÍTESE Y NOTIFIQUESE.-

  
AB. PATRICIO CALDERON IMBAQUINGO  
JUEZ DE SUSTANCIACION

En Quito, miércoles doce de marzo del dos mil catorce, a partir de las dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: DR. SUNG NAGUA JOSE DIONICIO en la casilla No. 3214 y correo electrónico [gustavodurangovela@hotmail.com](mailto:gustavodurangovela@hotmail.com) del Dr./Ab. DURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO. Certifico:

  
AB. MIGUEL PATRICIO ANDRADE HERNANDEZ  
SECRETARIO DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1

CALDERONPAT

veinte

**RAZON:** Siento por tal que en esta fecha, entrego el presente proceso signado con el No. 0463-2014, a la Ayudante Judicial María Belén Semanate, para que realice las respectivas boletas de citación.- Quito 12 de marzo del 2014.- Lo certifico

  
**Ab. Miguel Andrade Hernández**  
**SECRETARIO RELATOR (E)**

**RAZON:** Recibo el día de hoy jueves veinte de marzo del dos mil catorce, las boletas de citación a la (s) autoridad(es) demandada(s) (06 boletas), más la del Procurador General del Estado (1 boleta), dentro del juicio No. 17811-2014-0463; cuyo responsable de la tramitación es María Belén Semanate Larco.



Srta. Yolanda Pozo

**OFICINA DE CITACIONES DE ESTE TRIBUNAL.**





-37.2.  
Ponce y Cía A

**CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA**  
**OFICINA DE CITACIONES**

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1

Causa No: 17811-2014-0463


**CITACIÓN POR BOLETA: 1**

En Quito, martes veinte y cinco de marzo del dos mil cartorce, a las nueve horas, CITÉ POR BOLETA a ABOGADA DORIS GALLARDO CEVALLOS, DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, en el lugar señalado, esto es en: CALLE JORGE WASHINGTON E4 - 157 Y AV. AMAZONAS cerciorándome de ser el domicilio, entregué la boleta que contiene copia certificada de la demanda/petición inicial y auto en ella recaído, a una persona que dijo ser DIRECCIÓN JURÍDICA ya que en ese momento no se encontraba la persona citada. Manifestándome que le hará conocer del particular cuando llegue. En la boleta se les advierte la obligación de señalar domicilio jurídico para posteriores notificaciones. Lo certifico.

  
.....  
MARCELO PONCE TARRE


**CITACIÓN POR BOLETA: 2**

En Quito, jueves diez de abril del dos mil cartorce, a las diez horas, CITÉ POR BOLETA a ABOGADA DORIS GALLARDO CEVALLOS, DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, en el lugar señalado, esto es en: CALLE JORGE WASHINGTON E4 - 157 Y AV. AMAZONAS cerciorándome de ser el domicilio, entregué la boleta que contiene copia certificada de la demanda/petición inicial y auto en ella recaído, a una persona que dijo ser DIRECCIÓN JURÍDICA ya que en ese momento no se encontraba la persona citada. Manifestándome que le hará conocer del particular cuando llegue. En la boleta se les advierte la obligación de señalar domicilio jurídico para posteriores notificaciones. Lo certifico.

  
.....  
MARCELO PONCE TARRE

**CITACIÓN POR BOLETA: 3**

En Quito, jueves ocho de mayo del dos mil cartorce, a las once horas, CITÉ POR BOLETA a ABOGADA DORIS GALLARDO CEVALLOS, DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, en el lugar señalado, esto es en: CALLE JORGE WASHINGTON E4 - 157 Y AV. AMAZONAS cerciorándome de ser el domicilio, entregué la boleta que contiene copia certificada de la demanda/petición inicial y auto en ella recaído, a una persona que dijo ser DIRECCIÓN JURÍDICA ya que en ese momento no se encontraba la persona citada. Manifestándome que le hará conocer del particular cuando llegue. En la boleta se les advierte la obligación de señalar domicilio jurídico para posteriores notificaciones. Lo certifico.

  
.....  
MARCELO PONCE TARRE

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1

Causa No: 17811-2014-0463

**CITACIÓN POR BOLETA: 1**

En Quito, martes veinte y cinco de marzo del dos mil cartorce, a las once horas y cuarenta y cinco minutos, CITÉ POR BOLETA a DR. GUSTAVO JALKH ROBEN, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, en el lugar señalado, esto es en: CALLE JORGE WASHINGTON E4 - 157 Y AV. AMAZONAS cerciorándome de ser el domicilio, entregué la boleta que contiene copia certificada de la demanda/petición inicial y auto en ella recaído, a una persona que dijo ser DIRECCIÓN JURÍDICA ya que en ese momento no se encontraba la persona citada. Manifestándome que le hará conocer del particular cuando llegue. En la boleta se les advierte la obligación de señalar domicilio jurídico para posteriores notificaciones. Lo certifico.

.....  
**MARCELO PONCE TARRE**

**CITACIÓN POR BOLETA: 2**

En Quito, jueves diez de abril del dos mil cartorce, a las diez horas, CITÉ POR BOLETA a DR. GUSTAVO JALKH ROBEN, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, en el lugar señalado, esto es en: CALLE JORGE WASHINGTON E4 - 157 Y AV. AMAZONAS cerciorándome de ser el domicilio, entregué la boleta que contiene copia certificada de la demanda/petición inicial y auto en ella recaído, a una persona que dijo ser DIRECCIÓN JURÍDICA ya que en ese momento no se encontraba la persona citada. Manifestándome que le hará conocer del particular cuando llegue. En la boleta se les advierte la obligación de señalar domicilio jurídico para posteriores notificaciones. Lo certifico.

.....  
**MARCELO PONCE TARRE**

**CITACIÓN POR BOLETA: 3**

En Quito, jueves ocho de mayo del dos mil cartorce, a las once horas, CITÉ POR BOLETA a DR. GUSTAVO JALKH ROBEN, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, en el lugar señalado, esto es en: CALLE JORGE WASHINGTON E4 - 157 Y AV. AMAZONAS cerciorándome de ser el domicilio, entregué la boleta que contiene copia certificada de la demanda/petición inicial y auto en ella recaído, a una persona que dijo ser DIRECCIÓN JURÍDICA ya que en ese momento no se encontraba la persona citada. Manifestándome que le hará conocer del particular cuando llegue. En la boleta se les advierte la obligación de señalar domicilio jurídico para posteriores notificaciones. Lo certifico.

.....  
**MARCELO PONCE TARRE**



- 1000000  
D-2

**CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA  
OFICINA DE CITACIONES**

TRIBUNAL DISTRICTAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1

Causa No: 17811-2014-0463

**CITACIÓN PERSONAL**

En Quito, jueves veinte y siete de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, CITÉ con el contenido de la demanda y providencia que antecede al DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO para suscribir las actas de CITACION en el domicilio señalado para el efecto calle AV. AMAZONAS N 39-123 Y ARIZAGA, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. Para constancia firma AB. MARCOS ARTEAGA VALENZUELA. En la boleta constan las prevenciones de Ley. Certifico.

  
AB. MARCOS ARTEAGA VALENZUELA  
DIRECTOR DE PATROCINIO  
DELEGADO DEL PROCURADOR  
GENERAL DEL ESTADO

  
YOLANDA POZO INACALLA



Número: 334-DNATH Fecha: 2 de enero de 2013

MARCOS EDISON  
Nombres

### Certificado de Votación

Rige a partir de:  
7 de enero de 2013

**OBJETO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:** REVISIÓN DE LA VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS

RESOLUCIÓN No. MRL-2012-0512 DE 24 DE JULIO DE 2012, RESUELVE EXPEDIR EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS Y LA ESTRUCTURA DE PUESTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.  
RESOLUCIÓN No. 053 DE 2 DE AGOSTO DE 2012, RESUELVE EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, APROBAR EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.  
RESOLUCIÓN No. MRL-2012-0788 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2012, RESUELVE REVISAR LA VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.

RESOLUCIÓN SOBRE LA BASE DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, DEL INFORME N.º 003 DNATH 2011 DE 2 DE ENERO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN N.º 003 DP-DNATH-2013 DE 2 DE ENERO DE 2013, SE RESUELVE EXPEDIR LA PRESENTE ACCIÓN DE PERSONAL AL ACORDADO MARCOS EDISON ARTEAGA VALENZUELA, DE ACUERDO A LA SITUACIÓN PROPUESTA; Y, DE CONFORMIDAD A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA, INCISO CUARTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, JOSEP.

### SITUACIÓN PROPUESTA

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO

Puesto: DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO

Grupos Ocupacionais: NIVEL JERARQUICO SUPERIOR

Lugar de trabajo: OUITO

Remuneración Mensual Unificada: \$ 5009.00

P. Presupuestaria: 2013596999963000100000001A96510105

000000100000000 0280

F: Personnel

Ing. John Maldonado Herrera

## DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Esta COPIA es igual al documento  
que reposa en el ARCHIVO DE LA  
DIRECCION RESPECTIVA, de esta  
PROCURADURIA y al cual me remito  
en caso necesario. LO CERTIFICO.  
Fecha: 1982

Fecha: 2009-09-08

Dr. Diego García Carrión

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL  
TALENTO HUMANO

REGISTERED: 426892013

FECHA: 2 de mayo de 2013

1

St. Patricio Vasco Mescuera


JEFE 2 ( UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL  
TALENTO HUMANO)

**SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUITO:**

**Abogado Marcos Arteaga Valenzuela**, Director Nacional de Patrocinio y delegado del Procurador General del Estado, de conformidad con los artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; y 14 de su respectivo Reglamento Orgánico Funcional, en el juicio No. **0463-2014-MBS**, que siguen los señores José Donisio Suing Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela en contra del Presidente y Directora del Consejo de la Judicatura, ante ustedes comparezco y manifiesto:

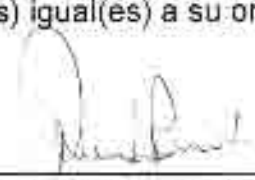
Notificaciones que correspondan recibiré en la casilla judicial No. **1200**.

Acompaño copia certificada de la acción de personal que acredita la calidad en la que comparezco.

  
Ab. Marcos Arteaga Valenzuela  
**DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO**  
**DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**  
**MAT. 3.632 C.A.G**

No. 17811-2014-0463

Presentado en Quito el día de hoy martes ocho de abril del dos mil catorce, a las catorce horas y trece minutos, con 2 copia(s) igual(es) a su original. Adjunta: 1 FOJA. Certifico.

  
**AB. MIGUEL PATRICIO ANDRADE HERNANDEZ**  
**SECRETARIO DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**NO.1**

DELAVEGAS id: 4030538

Av. Amazonas N39-123 y Arisaga, Edif. Amazonas Plaza - Quito, Ecuador - PHX: (593 2) - 2 941 300  
www.pge.gob.ec



ACCIÓN DE PERSONAL	REPÚBLICA DEL ECUADOR FUNCIÓN JUDICIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA	Nro. 8988 DNP-OF Fecha 04/abr/2013
CONSEJO DE LA JUDICATURA	2 Resolución	Nro Fecha 28/mar/2013
ZAVALA PALACIOS Apellidos	SIMON ESTEBAN Nombre	4 Rige A Partir De 01/abr/2013 Rige Hasta
5 Cédula de Ident. 170854186-5	6 Cédula Militar	7 Certificado de Votación
8 Tipo Acción de Personal	Designación	
9 Explicación		

El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2013, RESUELVE: Designar como Director Nacional de Asesoría Jurídica al doctor Esteban Zavala Palacios, a partir del 1 de abril de 2013.

Referencia: Memorando No. DG-2013-1432 de 01 de abril de 2013.



10 Situación Actual	11 Situación Propuesta
Dependencia	Dependencia CONSEJO DE LA JUDICATURA
Departamento	Departamento DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Puesto	Puesto DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Remuneración Unif.	Remuneración Unif. 4100
Lugar de Trabajo	Lugar de Trabajo QUITO
Partida	Partida 2013-010-9999-0000-20-00-000-001-C31-510105-0000-001-0000-0000-285

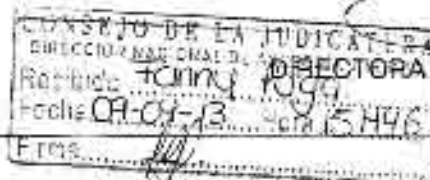
12 La persona reemplaza a  
Quien cesó en el Cargo con fecha Causal

13  
Registro Nro  
Fecha

CONSEJO DE LA JUDICATURA  
DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL

Luis B. Escobar  
DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL

Ab. Doris Gallardo Cevallos  
DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



ACCIÓN DE PERSONAL		REPÚBLICA DEL ECUADOR FUNCIÓN JUDICIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA		Nro. 8986 DNP-OF Fecha 04/abr/2013	
1 CONSEJO DE LA JUDICATURA		2 Resolución		Nro Fecha 28/mar/2013	
3 ZAVALA PALACIOS Apellidos		SIMON ESTEBAN Nombre		4 Rige A Partir De 01/abr/2013 Rige Hasta	
5 Cédula de Ident. 170854186-5		6 Cédula Militar		7 Certificado de Votación	
8 Tipo Acción de Personal		Designación			
9 Explicación					
<p>El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2013, RESUELVE: Designar como Director Nacional de Asesoría Jurídica al doctor Esteban Zavala Palacios, a partir del 1 de abril de 2013.</p> <p>Referencia: Memorando No. DG-2013-1422 de 01 de abril de 2013.</p>					
10 Situación Actual			11 Situación Propuesta		
Dependencia			Dependencia CONSEJO DE LA JUDICATURA		
Departamento			Departamento DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA		
Puesto			Puesto DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA		
Remuneración Unif.			Remuneración Unif. 4100		
Lugar de Trabajo			Lugar de Trabajo QUITO		
Partida			Partida 2013 010 9999-0000-20-00-000-001-C31-510135-0000-001-0000-0000-285		
12 La persona reemplaza a			Causal		
Quien cesó en el Cargo con fecha					
13 Registro Nro					
Fecha					
 Ab. Doris Gallardo Cevallos DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA			 Luis Basantes Escobar DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL		

**RESOLUCIÓN Nro.017-2014**

**ECON. ANDREA BRAVO MOGRO**

**DIRECTORA GENERAL**

**CONSEJO DE LA JUDICATURA**

**CONSIDERANDO**

- Que,** el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, inciso segundo, establece que: "El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial";
- Que,** el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe que: "El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos";
- Que,** el artículo 280 numeral 2, del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con lo establecido en el numeral 1.3., literal b) del Estatuto de Gestión Organizacional por procesos que incluye la Cadena de Valor, el Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura, establece que es función de la Directora o Director General: "Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial";
- Que,** el último inciso del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con lo establecido en el numeral 1.3., literal i) del Estatuto de Gestión Organizacional por procesos que incluye la Cadena de Valor, el Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura, faculta al Director o Directora General delegar sus funciones a los servidores de la Función Judicial, cuando lo considere necesario.

En ejercicio de sus funciones y atribuciones,

**RESUELVE**

- Art. 1.-** Delegar al Director Nacional de Asesoría Jurídica, para que a mi nombre y representación, en calidad de Directora General del Consejo de la Judicatura, comparezca como actor o demandado o tercero interesado, denunciante o denunciado, accionante o accionado ante los órganos jurisdiccionales y autónomos de la Función Judicial, Corte Constitucional, Centros de Mediación y Arbitraje; y, demás órganos del Estado en defensa de los intereses institucionales.



Para su cabal cumplimiento, el Director Nacional de Asesoría Jurídica, podrá requerir la colaboración y/o intervención de los profesionales del derecho que presten sus servicios en las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.

El Director Nacional de Asesoría Jurídica, deberá informar sobre los actos realizados en ejercicio de esta delegación, el trámite de los expedientes y acciones que se iniciaren.

Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal por infracciones al ordenamiento jurídico, el funcionario delegado responderá sus actuaciones ante la autoridad delegante.

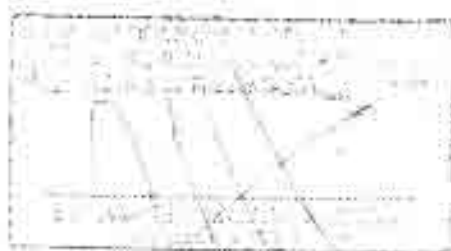
**COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** Dado y suscrito en el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de marzo del año dos mil catorce.

  
Econ. Andrea Bravo Mogro  
DIRECTORA GENERAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA



Elaborado por: Ab. M. Alexandra Leocadia Cevallos

Revisado por: Ab. Yury Iturzales



<b>ACCIÓN DE PERSONAL</b>		<b>REPÚBLICA DEL ECUADOR FUNCIÓN JUDICIAL</b>		<b>Nro. 1864-DNTH-ROG</b> <b>Fecha 06/mar/2014</b>	
<b>1</b> CONSEJO DE LA JUDICATURA		<b>2</b>		<b>Nro</b> <b>Fecha</b>	
<b>3</b> BRAVO Apellidos		MOGRO ANDREA ALEXANDRA Nombre		<b>4</b> Rige A Partir De 06/mar/2014 Rige Hasta	
<b>5</b> Cédula de Ident. 180328670-5		<b>6</b> Cédula Militar		<b>7</b> Certificado de Votación	
<b>8</b> Tipo Acción de Personal Nombramiento					
<b>9</b> Explicación El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión ordinaria de 8 de marzo del 2014, resolvió por unanimidad de los presentes, nombrar a la economista ANDREA BRAVO MOGRO como Directora General del Consejo de la Judicatura, a partir del 6 de marzo del 2014.  Ref: memorando N° CJ-SG-PCJ-2014-160 de 6 de marzo de 2014, suscrito por el Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.					
<div style="text-align: right;"></div>					
<b>10</b> Situación Actual Dependencia CONSEJO DE LA JUDICATURA Departamento DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION Puesto DIRECTOR NACIONAL Remuneración Unif. 4100 Lugar de Trabajo QUITO Código 2014-010-9999-0000-20-00-000-001-C31-510105-0000-001-0000-0000-920			<b>11</b> Situación Propuesta Dependencia CONSEJO DE LA JUDICATURA Departamento DIRECCION GENERAL Puesto DIRECTOR GENERAL C.J. Remuneración Unif. 5568 Lugar de Trabajo QUITO Partida 2014-010-9999-0000-20-00-000-001-C31-510105-0000-001-0000-0000-225		
<b>12</b> La persona reemplaza a Quien cesó en el Cargo con fecha Causal					
<b>13</b> Registro Nro Fecha		<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="text-align: center;"> Dr. Gustavo Jalck Röben PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA</div><div style="margin-left: 20px; text-align: center;"> Juan Manuel Chiriboga Ariza DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO</div><div style="margin-left: 20px; text-align: center;"></div></div>			



14

Declaro con juramento que no desempeño otro cargo en el sector público ni tengo contrato vigente con la Función Judicial.

f. 

15

Yo, **BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA**, Juro lealtad a la Función Judicial.

f. 

**OBSERVACIONES:**

**RAZÓN:** En la ciudad de Quito, hoy **7 DE MAR. 2014**, ante mí, Dr. Gustavo Jalkh Röben Presidente del Consejo de la Judicatura, tomó legal posesión del cargo de **DIRECTORA GENERAL** del Consejo de la Judicatura la servidora **BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA**.

  
Gustavo Jalkh Röben

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA**



**SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRICTAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1. SEDE QUITO**

Doctor **ESTEBAN ZAVALA PALACIOS**, Director Nacional de Asesoría Jurídica y delegado de la Econ. Andrea Bravo Mogro, Directora General del Consejo de la Judicatura, y como tal representante legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial, conforme lo justifico con los documentos que adjunto, dentro del juicio No. **17811-2014-0463**, propuesto por los doctores **JOSÉ DIONICIO SUING NAGUA y GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA**, ante ustedes muy respetuosamente comparezco y contesto la demanda en los siguientes términos:

**I. CITACIÓN:**

El Consejo de la Judicatura ha sido citado con el contenido de la demanda y auto inicial, mediante tres boletas, siendo la última de fecha 8 de mayo de 2014 por lo que, me encuentro dentro del término legal para contestar la demanda.

**II. PRETENSIONES DE LOS ACTORES:**

Los actores interponen Recurso de Plena Jurisdicción o Subjetivo en contra de la Resolución de 20 de diciembre de 2013, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituirlos del cargo de Juez Nacional y Conjuez Nacional de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, y solicitan que en sentencia se declare la nulidad e invalidez jurídica de la Resolución referida por falta de competencia del órgano administrativo que la emitió, al analizar una decisión judicial que no le correspondía como órgano administrativo y por la omisión de formalidades que rigen su emisión y que se les restituya a sus puestos de trabajo, al pago de las remuneraciones que dejaron de percibir y el pago de los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social más los beneficio de ley.

Los actores proponen acción subjetiva o de plena jurisdicción en contra del Consejo de la Judicatura, "... representado por su Presidente y **representante legal**, en los términos del art. 269.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, cargo actualmente desempeñado por el DR. GUSTAVO JALKH RÖBEN..." (sic) (Lo resaltado fuera de texto)

En atención a lo manifestado por los accionantes es preciso puntualizar lo siguiente:

El numeral 4 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone:

*"Art. 269.- FUNCIONES.- A la Presidenta o el Presidente le corresponde:  
(...)*

*4. Legalizar con su firma, juntamente con la Secretaria o el Secretario, las actas y demás documentos que contengan los reglamentos, manuales, circulares y resoluciones de carácter normativo interno expedidos por el Pleno"*

*K*



Esta disposición legal establece la atribución del Presidente del Consejo de la Judicatura respecto de suscribir documentos que contengan los reglamentos, manuales, circulares y resoluciones de carácter normativo interno. Estos instrumentos bajo ningún concepto pueden confundirse o asimilarse a las resoluciones administrativas adoptadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro de un sumario disciplinario las cuales también son suscritas por su Presidente.

Es preciso destacar que la norma aludida, tampoco determina que el Presidente del Consejo es el representante legal de la institución.

### **III. ANTECEDENTES:**

#### **1. DENUNCIA:**

La queja que motivó el sumario disciplinario instaurado en contra de los doctores José Dionicio Suing Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, fue presentada por el señor economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), quien en lo principal expresó lo siguiente:

- a) Que los doctores José Dionicio Suing Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, conocieron el recurso de casación (Proceso No. 497-2010) interpuesto por parte de la Compañía de Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A (OCP), en contra de la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 dentro del juicio seguido por la citada empresa en contra del Director General y del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas.
- b) Que al dictar sentencia el 18 de julio de 2013, ésta no fue debidamente fundamentada ni motivada y que adoptaron una decisión opuesta al criterio establecido por la Sala que integraron los actores en tres fallos anteriores, en específico, las sentencias emitidas dentro de las causas: 271-2010, de 1 de agosto de 2012, dentro del juicio de impugnación seguido por la Compañía Andes Petroleum Ecuador LTD, en contra del Director General y del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas; 442-2010 de 14 de septiembre de 2012, dictado dentro del juicio de impugnación seguido por la Compañía Andes Petroleum Ecuador LTD en contra del Director General y del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas; y, 357-2011 de 21 de diciembre de 2012, dictada dentro del juicio de impugnación seguido por la Compañía Occidental Exploration and Production Company, en contra del Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas.
- c) Que en todos los procesos antes referidos se consideró como subcapitalización un préstamo concedido por la matriz a su subsidiaria con intereses más altos que los máximos permitidos, ya que se entendió en dichos casos que la finalidad del préstamo era disminuir el impuesto a la renta que debían pagar en el Ecuador. Que sin embargo, en la sentencia de 18 de julio de 2013, dictada dentro del recurso de casación No. 497-2010, la Sala citó las mismas consideraciones que han esgrimido en casos similares, y llegaron con un diminuto sustento a una

conclusión diametralmente opuesta a la que mantenían en casos exactamente iguales y expresados en fallos anteriores.

- d) Que los servidores judiciales sumariados, contradiciendo su propio criterio vertido en anteriores sentencias, sin ningún fundamento desvanecen la glosa proveniente de la subcapitalización, obviando considerar que existieron elementos iguales en las anteriores sentencias.
- e) Que existe flagrante y clara violación al artículo 17 del Código Tributario, principal fundamento de las glosas establecidas por el Servicio de Rentas Internas y de los fallos precitados que sentaron el criterio de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
- f) Solicita que previo el proceso pertinente se sancione al Juez y Conjuez de la Corte Nacional por haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, por falta de motivación y error inexcusable respectivamente.

## 2. SUMARIO DISCIPLINARIO:

- a) El 23 de septiembre de 2013, de conformidad con el artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en concordancia con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, se dispuso la apertura del sumario disciplinario en contra de los doctores José Dionicio Suing Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela.
- b) El 23 de septiembre de 2013, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Presidente del Consejo de la Judicatura, dispuso la medida provisional de suspensión en el ejercicio de sus funciones sin pérdida de remuneración por 90 días.
- c) Dentro del sumario disciplinario, se abrió la etapa probatoria, las partes presentaron las pruebas de cargo y descargo, las cuales han sido dispuestas y practicadas, contaron con la oportunidad procedimental de contradecirlas, respetándose con ello las garantías del debido proceso y derecho a la defensa, reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República.
- d) Concluido el término de prueba respectivo, de conformidad con el artículo 72 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria vigente a esa fecha, se remitió el expediente al Pleno del Consejo de la Judicatura para su correspondiente análisis y resolución.
- e) Con fecha 20 de diciembre de 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió:

*\*10.1 Declarar al doctor José Dionicio Suing Nagua, Juez de la Corte Nacional de Justicia, responsable de las infracciones de falta de motivación y error inexcusable,*





*tipificadas en el numeral 8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial respectivamente.*

**10.2.** *Declarar al doctor Gustavo Adolfo Durango Vela, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, responsable de las infracciones de falta de motivación y error inexcusable, tipificadas en el numeral 8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial respectivamente.*

**10.3** *De conformidad con el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, por existir concurrencia de infracciones, imponer al doctor José Dionicio Suing Nagua la sanción de destitución de su cargo de Juez Nacional de la Corte Nacional de Justicia.*

**10.4** *De conformidad con el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, por existir concurrencia de infracciones, imponer al doctor Gustavo Adolfo Durango Vela la sanción de destitución de su cargo de Conjuez Nacional de la Corte Nacional de Justicia.*

#### **IV. LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO:**

Respecto a la legalidad del acto administrativo, es preciso señalar que los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones o potestades constitucionales y legales, en la esfera de su jurisdicción y competencia realizan actos jurídicos de derecho público, o sea, actos administrativos que son la manifestación de la voluntad de la Administración del Estado.

Los actos administrativos se rigen por los principios de competencia, legitimidad, ejecutividad e impugnabilidad. Se presume que todo acto administrativo es legítimo porque ha sido dictado por las autoridades y órganos competentes, y que se ha cumplido con todas las disposiciones contempladas en la normativa respectiva.

Los estudios doctrinarios que giran en torno a las características de los actos administrativos, afirman que aquellos son inmediatamente eficaces, es decir, de cumplimiento inmediato. En este sentido los actos administrativos se encuentran revestidos de presunción de legitimidad y legalidad; es decir, son legítimos porque emanan de la autoridad pública con competencia para hacerlo y son legales porque han sido expedidos con estricta observancia del ordenamiento jurídico vigente.

El Doctor Patricio Secaira Durango en su obra "Curso Breve de Derecho Administrativo" señala que son dos las características de un acto administrativo: la presunción de legalidad y la presunción de ejecutoriedad. El autor enseña: "La presunción de legalidad de los actos administrativos es aquella característica por medio de la cual se considera que toda decisión emanada del poder público está enmarcada en el respectivo ordenamiento jurídico". Agrega que: "la presunción de ejecutoriedad va ligada a la de legalidad, por cuanto al considerarse que todo acto administrativo es legal, de suyo viene como consecuencia que la resolución administrativa es factible de



*ejecución inmediata, aún en el caso de que éstos hayan sido objeto de impugnación judicial?*

Nicolás Granja Galindo manifiesta lo siguiente: *"la eficacia del acto, constituye aquella una propiedad del acto administrativo consistente en su obligatoriedad, o exigibilidad, para que se la cumpla como la mejor garantía de los intereses que tutela la administración".*<sup>1</sup> Es claro que en el concepto de Nicolás Granja Galindo son los intereses que tutela o persigue la administración lo que justifica la ejecutividad del acto.

Por lo expuesto, la Resolución de 20 de diciembre de 2013, emitida por el Pleno de Consejo de la Judicatura por la cual se decidió imponer la sanción de destitución a los doctores José Dionicio Suñig Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, goza de plena legalidad, pues fue emitida por la autoridad (organismo colegiado) con competencia para hacerlo en aplicación del ejercicio de la Potestad Disciplinaria consagrado en el inciso segundo del artículo 178 de la Constitución de la República y los artículos 254 y 264 numerales 11 y 14 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Para adoptar la decisión de destitución en contra de los doctores José Dionicio Suñig Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vega, se observaron normas constitucionales y legales:

**Constitución de la República:**

El artículo 178 establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

El artículo 181 numeral 3 determina como una de las funciones del Consejo de la Judicatura:


*"Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción..."*. (Lo resaltado fuera de texto).

El artículo 233 dispone:

**"Art. 233.-** Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos..."

**Código Orgánico de la Función Judicial:**

**"Art. 100.- DEBERES.-** Son deberes de las servidoras y servidores de la Función Judicial, según corresponda al puesto que desempeñen, los siguientes:

  
Nicolás Granja Galindo, Op. Cit., pág. 304



1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos;”.

**“Art. 104.- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.-** Las servidoras y los servidores de la Función Judicial serán sancionados por las infracciones disciplinarias que incurrieren en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo regulado en este Capítulo, independientemente de las responsabilidades civiles o penales que hubieren lugar. En cualquier tiempo, de presumirse motivadamente la existencia de un delito de acción pública, se remitirán los antecedentes al Fiscal General del Estado, a los fiscales distritales o agentes fiscales, según corresponda”.

**“Art. 105.- CLASES DE SANCIONES DISCIPLINARIAS.-** Las sanciones disciplinarias serán de las siguientes clases: (...)

#### 4. Destitución.

**“Art. 108.- INFRACCIONES GRAVES.-** A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: (...)

**“8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República”.**

**“Art. 109.- INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.-** A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: (...)

**7.- Intervenir en las causa que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable;”.**

**“Art. 112.- CONCURRENCIA DE FALTAS.-** En caso de concurrencia de faltas se impondrá la **sanción por la falta más grave**. De ser todas de igual gravedad se impondrá el máximo de la sanción.”. (Lo resaltado fuera de texto).

El Código Orgánico de la Función Judicial determina el régimen disciplinario y las sanciones existentes por orden de gravedad. Las clases de sanciones disciplinarias se encuentran establecidas en el artículo 105 del Código antes mencionado, entre ellas la

destitución que opera en los casos en que los servidores judiciales por sus actuaciones incurrir en alguna de las faltas gravísimas tipificadas en el artículo 109 ibídem.

En el presente caso, al existir concurrencia de infracciones, en aplicación del artículo 112 del cuerpo legal citado, el Pleno del Consejo de la Judicatura por unanimidad impuso a los actores la sanción por la falta más grave, esto es, destitución por haber incurrido en error inexcusable.

#### **V. SOBRE LA INFRACCIÓN GRAVE: FALTA DE MOTIVACIÓN.**

La Constitución de la República en el artículo 76 numeral 7 literal 1) establece: *"Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados"*.

Por su parte el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 130 numeral 4 establece como una facultad esencial de las juezas y jueces: *"Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos."*

En el presente caso, consta la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, expedida con voto de mayoría por los doctores José Dionicio Suñig Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela el 18 de julio de 2013, por la cual aceptaron parcialmente el recurso de casación interpuesto por la Compañía de Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A (OCP) en contra de la sentencia emitida por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 de Quito, en la que se desecha la demanda de impugnación presentada por el señor Wong Loon, representante legal de la referida compañía y declara válida la Resolución No. 117012008RRECO13034 de 6 de octubre de 2008, con lo que se confirma el acta de Determinación Tributaria No. 172008100033, emitida por el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, en concepto del impuesto a la renta del año 2003.

En la sentencia referida los hoy actores, no obstante establecido su criterio en casos análogos en cuanto a lo que se entiende por "subcapitalización", concluyen que la compañía demandante OCP Ecuador S.A., no ha incurrido en tal hecho, basando su afirmación en que el préstamo obtenido por OCP Ecuador S.A., de parte de su matriz Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ltda., nace de una estipulación contractual; que la empresa ha demostrado su capacidad de endeudamiento por los contratos tipo "ship or pay"; que la empresa ha demostrado haber pagado intereses sobre un préstamo vinculado y buena parte del capital; y, que la empresa ha demostrado el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las retenciones en la fuente por concepto de impuesto a la renta.



Bajo este diminuto análisis los Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario doctores José Dionicio Suñig Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela supuestamente fundaron su cambio de criterio acerca de la subcapitalización y fallaron de forma contraria a lo resuelto en los juicios números: 271-2010, seguido por la Compañía Andes Petroleum Ecuador LTD, en contra del Director General y del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas; 442-2010, seguido por la Compañía Andes Petroleum Ecuador LTD en contra del Director General y del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas; y, 357-2011, seguido por la Compañía Occidental Exploration and Production Company, en contra del Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas.

La motivación no se agota con la sola mención de las disposiciones jurídicas relacionadas a los hechos sometidos a juzgamiento, sino que por mandato constitucional resulta necesario e imprescindible explicar la pertinencia de aplicación de estas disposiciones al caso en concreto. La motivación de una resolución jurisdiccional debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica, por el contrario no motivar constituye un error de garantía que afecta el debido proceso, que necesariamente conduce a declarar la nulidad de todo o en parte de la sentencia. La sentencia está constituida por tres partes: la expositiva, donde se hace constar los antecedentes fácticos del proceso; la considerativa, donde el juzgador analiza el debate dialéctico de argumentos y contra argumentos, de afirmaciones e informaciones, razones de hecho y derecho; y, la parte resolutoria, donde se concreta y singulariza las pretensiones de los sujetos procesales. Todo esto por el principio de unidad integral de la sentencia, necesariamente tiene que tener el respaldo de una consideración en las que se den las razones de orden constitucional, legal y jurisprudencial que las apoye, formando un todo de manera secuencial y coherente.

Además, la sentencia debe ser el resultado de una confrontación de tesis y de un ponderado análisis de las causales por las cuales se fundamenta un recurso para llegar a la conclusión que se determina en su parte resolutoria. No responder los argumentos de los sujetos procesales al aplicar el principio de contradicción en el acto procesal en el que se fundamenta el recurso de casación implica una vía de hecho susceptible de tutelarse a través del derecho de la impugnación. Vale decir que es esencia del derecho de defensa que la motivación opere en todas las fases del proceso y eso incluye en la resolución de los recursos.

En las sentencias emitidas con anterioridad por la misma Sala en casos similares y que constan dentro del proceso disciplinario, se puede observar claramente, que en éstas si existe motivación suficiente y pertinente; sin embargo, en la sentencia de 18 de julio de 2013, los juzgadores se apartan de sus propios criterios emitidos en fallos dictados con anterioridad, ocasionando inseguridad jurídica.

Señores Jueces, la falta de motivación incurrida por los hoy actores en la sentencia de 18 de julio de 2013, emitida dentro de la causa No. 497-2010, ha sido **PLENAMENTE DECLARADA** por la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia dictada el 26 de diciembre de 2013, por la cual, al aceptar la Acción Extraordinaria de Protección planteada por el Servicio de Rentas Internas, **DECLARÓ VULNERADOS LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES AL DEBIDO PROCESO EN LA GARANTÍA DE LA**

**MOTIVACIÓN Y LA SEGURIDAD JURÍDICA**, y como medida de reparación integral, dispuso dejar sin efecto la citada sentencia.

La sentencia de la Corte Constitucional en su parte resolutive determinó:

*\*1. Declarar vulnerados los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de la motivación y a la seguridad jurídica.*

*2. Aceptar la Acción Extraordinaria de Protección planteada.*

*3. Como medida de reparación integral, se dispone lo siguiente:*

**3.1.** *Dejar sin efecto la sentencia emitida el 18 de julio del 2013 a las 09h30 por los Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la causa No. 497-2010.*

**3.2.** *Retrotraer el proceso hasta el momento anterior al de dictar sentencia de casación, disponiendo que los con jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, resuelvan el recurso, conforme a la Constitución, la Ley y la jurisprudencia dictada por la Corte...<sup>2</sup>.*

Es importante destacar que la Corte Constitucional, en la sentencia antes referida claramente consideró: ***“Es decir, el respeto a los propios criterios vertidos en casos análogos por parte de la Corte Nacional de Justicia, aun cuando formalmente no hayan pasado por el procedimiento previsto en el artículo 185 de la Constitución para el establecimiento de jurisprudencia obligatoria, responde a la observancia del principio de igualdad y seguridad jurídica, dado que no es admisible a los juzgadores, a pretexto de que un criterio vertido en uno o varios casos anteriores no es formalmente jurisprudencia obligatoria, desconociendo sus decisiones, las que deben ser adoptadas con vocación de universalidad, es decir, ante las mismas circunstancias de casos anteriores, cuando no media circunstancias relevantes para un cambio de criterio, es imperioso resolver como se lo ha hecho en el pasado. Con lo cual, los jueces al administrar justicia deben realizarlo principalmente con sujeción a los derechos constitucionales de igualdad y seguridad jurídica”.*** (Lo escrito en letras negras es mío)

De igual forma, la Corte Constitucional en la sentencia singularizada, ha citado la sentencia No. 070-13-SEP-CC emitida por dicho organismo, dentro del caso No. 0308-13-EP de 21 de agosto de 2013, en el cual señaló:

*“El caso sub judice, siendo similar a los detallados en la jurisprudencia transcrita, la Sala de Con jueces inadmitió el caso, sin una carga argumentativa que señale la justificación por la cual ante un patrón factico similar desconoce sus criterios, lo que deviene en una vulneración al principio de igualdad, ya que existe precedente jurisprudencial que le permite a la Sala conocer los recursos de casación interpuestos para que estos sean resueltos bajo la misma línea jurisprudencial, a menos que se justifique razonablemente que a un caso en particular le merece un trato, una solución distinta o que la Sala considera que es necesario cambiar de criterio.”*



De lo expuesto, queda demostrado una vez más que los ahora actores, en la sentencia emitida el 18 de julio de 2013, dentro del recurso de casación, violaron derechos constitucionales del debido proceso en la garantía de la motivación y de la seguridad jurídica lo cual es absolutamente concordante con lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura en cuanto a la falta de motivación incurrida por los doctores José Dionicio Suñig Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela en la sentencia emitida en la causa No. 497-2010, infracción disciplinaria tipificada en el numeral 8 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial.

#### **VI. ERROR INEXCUSABLE:**

El error inexcusable constituye la notoria ineptitud o descuido, al momento de administrar justicia por parte del servidor judicial, y por su propia naturaleza, siempre es imputable al juzgador, más que a cualquier otro servidor judicial.

Para que un error de derecho pueda ser calificado de inexcusable, es necesario que exista un precepto jurídico que, siendo legítimo y estando vigente, contenga un mandato positivo o negativo que fuese claramente identificable, preciso y unívoco; es decir, no susceptible de interpretaciones jurídicas aceptables caso en el cual, constituirá un error inexcusable cuando el operador de justicia se separe de toda interpretación admisible, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la argumentación jurídica.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala sobre el error:

*"Concepto equivocado o juicio falso. Acción desacertada o equivocada. Cosa hecha erradamente"*

*"Inexcusable, que no puede eludirse con pretextos y no puede dejar de hacerse. Que no tiene disculpa. Un error inexcusable. Sin excusa".*

De la anotado se desprende, que **error** significa: defecto, equivocación, desacierto, culpa y por extensión juicio o criterio falso; y, como error inexcusable a las omisiones graves, evidentes e imperdonables, que pueden comprender tanto la negligencia, como la falta de pericia, por notoria falta de conocimientos, como dice el tratadista Carlos Jaramillo Delgado: *"(...) convierte y convierten a los funcionarios del orden jurisdiccional en un verdadero peligro, pues frente a un estado de cosas así, y para decirlo con palabras de un reputado escritor, se trata de casos demostrativos de la gravedad que encierran y que generalmente se acercan a la perversidad del individuo y lo colocan por tanto en estado peligroso (...)".* Al error inexcusable se lo entiende como equivocación o desacuerdo, que puede dimanar de un falso concepto sobre lo que una cosa es realmente o de ignorancia de la misma.

La doctrina señala que hay dos clases de errores inexcusables, el de forma y del fondo, esto es: **El error inexcusable es de forma**, cuando no lesiona la sustancia de la decisión; caso típico el error material por omisión o por equivocación. **El error inexcusable es de fondo**, cuando la lesión se infiere a la sustancia, no impedir es

facilmente imperceptible, se presta a la duda y puede acarrear consecuencias irreversibles; pueden ser por omisión o por equivocación.

Si bien es cierto que la Constitución de la República, establece que los órganos de la Función Judicial, gozarán de independencia interna y externa, no es menos cierto que los servidores públicos no están exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal. La doctrina del derecho administrativo moderno considera que el error inexcusable constituye falta grave en el cumplimiento de los deberes de juezas y jueces en la administración de justicia que puede llevar a la destitución de sus funciones. De ahí lo que dispone el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por esto, la aplicación de dicha norma le corresponde al órgano correspondiente encargado de la administración disciplinaria de la Función Judicial.

El error inexcusable no es otra cosa que los casos de extrema ignorancia judicial que notoriamente evidencia la falta de idoneidad del juez, es decir, una grosera manifestación de ignorancia o de dolo. El juez, en atención al principio **iura novit curia** está obligado a conocer la ley y el derecho y todos los marcos jurídicos existentes; pues una de las características, además de la independencia e imparcialidad de las juezas y jueces, es su **responsabilidad**; de tal modo que si el juez fuera excusable por sus errores, sería afirmar que el juez es libre y no tiene que sujetarse al derecho y a la ley, lo cual es inconcebible en el ordenamiento jurídico del país, y tiene por tanto que responder por los actos que constituyan **errores inexcusables**, pues estos son fatales y funestos para la sociedad, para los ciudadanos, para las partes procesales y para la justicia; esto es para la sociedad ecuatoriana que confía en las nuevas juezas y jueces cuya misión constituye el establecimiento de la verdad procesal y la paz social, garantizando la ética laica y social.

El error inexcusable se caracteriza por la falta de atención en el cumplimiento de cualquiera de los deberes inherentes al ejercicio de la función jurisdiccional y la inobservancia de un específico deber profesional, inobservancia ésta que por lo demás ha de reunir los requisitos de manifiesta e inexcusable, esto es, evidente, palpable y a todas luces demostrativa de que se ha omitido la diligencia minimamente exigible en la normal y generalmente aceptada como debida atención en el despacho y resolución de cada proceso sometido a juzgamiento. Dicha infracción disciplinaria tiene lugar en aquellos casos en que, ante un terminante inequívoco mandato legal de actuación, el titular del correspondiente órgano jurisdiccional incumple dicho mandato legal.

En el presente caso, el recurso de casación planteado por la compañía Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador (OCP) S.A., se fundamentó en las causales primera, segunda y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación.

Señores Jueces, como es de vuestro conocimiento, el recurso de casación es, por su naturaleza, restrictivo, esencialmente formal y no admite interpretación extensiva, por lo que, no le está permitido a ningún tribunal juzgador suplir las deficiencias y enmendar errores del recurrente, como los que se registró en el recurso de casación interpuesto por la empresa Oleoducto de Crudos Pesados S.A. pues, los hoy actores **OFICIOSAMENTE** suplicaron las deficiencias del recurrente y pasaron a conocer y



resolver sobre el fondo del asunto, aplicando **UNA CAUSAL DISTINTA A LAS PROPUESTAS**, olvidándose que el recurso de casación es un recurso extraordinario que procede contra las sentencias o autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores (hoy Cortes Provinciales), los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo, es decir, que no admite que el examen del recurso sea por una causal distinta a la que propone el recurrente.

Para ejemplificar lo expuesto, es preciso subsumirse en el literal a) del considerando cuarto de la sentencia de 18 de julio de 2013, emitida en voto de mayoría por los ex servidores judiciales sumariados y hoy actores en el presente juicio, quienes al referirse a las causales propuestas dentro del recurso de casación planteado por la compañía Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A., expresaron lo siguiente:

*"...erróneamente lo fundamenta en el numeral 1ro, del Art. 3 de la Ley de casación, por cuando estaría encasillada en la causal 5ta., del referido artículo, pero que esta Sala ha sido laxa en aceptar dicha equivocación y en casos iguales ha procedido a conocer sobre el fondo de la impugnación..."*

La Corte Nacional de Justicia en varios de sus fallos ha señalado respecto al recurso de casación que éste **"...ES UN RECURSO EstrictAMENTE FORMALISTA Y LIMITADO, ya que la actividad del juez de casación se restringe a revisar la sentencia impugnada solamente por las causales que el recurrente invoque y por la razones jurídicas que exponga, señalando con absoluta precisión el error en el que ha incurrido el juez de instancia, errores de derecho y no a clarificar la situación fáctica en que se fundamenta la sentencia de instancia. La doctrina, la ley y la amplia jurisprudencia han determinado que el recurso de casación es una demanda que se formula contra una sentencia y en nada se parece a una apelación o a un alegato de instancia; de ahí que al interponerlo es importante que el recurrente determine la causal o causales en que funda el recurso, analizando norma por norma las mencionadas como infringidas, señalando si se trata de errores "in-judicando" o "in-procedendo", individualizando el vicio en que ha incurrido, a criterio del recurrente, cada norma exponiendo con absoluta claridad los argumentos jurídicos (...)** El recurso de casación es eminentemente técnico, se configura, como se ha señalado, con gran vigor formal, exigiendo la Ley de Casación, para que se pueda entrar a conocer el fondo de las cuestiones planteadas, que concurren en su interposición una serie de requisitos de procedibilidad, de tal manera que la falta de cualquiera de ellos impone su inadmisión, consagrándose de este modo, el carácter formalista del recurso de casación..."

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia por reiteradas ocasiones ha resuelto:

Sentencia de 23 de julio de julio de 2010, Juicio: Contencioso Administrativo N.-18-2009 Res. 247-2009:

*"...El recurso de casación es un recurso extraordinario, completo y de rigor legal, por lo que debe cumplir los requisitos formales y las exigencias legales que permitan a la Sala*

de Casación examinar si se ha violentado la ley en la sentencia materia del recurso; (...) **La Sala no tiene facultad para llenar vacíos, ni puede variar de oficio el ámbito de las causales invocadas, ni dar una extensión respecto a las normas y modo de infracción que no fueron planteadas o que se plantearon deficientemente.**" (Lo resaltado me corresponde)

Sentencia de 30 de julio del 2009 Juicio: Contencioso Administrativo -N.-29-2009, Res. 251-2009.

"El recurso de casación es un recurso extraordinario, completo y de rigor legal, por lo que debe reunir los requisitos formales y las exigencias legales que permitan a la Sala de Casación examinar, de manera inequívoca, si se ha violentado la ley en la sentencia materia del recurso; por lo tanto, no es suficiente enunciar, de modo general, normas y causales que se estiman infringidas, si no que la recurrente debió determinar específicamente a cuál de los vicios contenidos en cada una de las causales invocadas se acoge para impugnar la decisión del inferior, señalando con precisión, respecto a cada norma, la causal y modo de infracción, (...) es decir con cada norma debe detallarse si ha existido indebida aplicación, falta de aplicación o errónea interpretación, tanto en las normas sustantivas como de las adjetivas, por lo tanto no pueden usarse dichas expresiones como sinónimas de los vicios previstos en la Ley de Casación y, menos aún, acumular vicios respecto de una misma norma, atento el carácter restrictivo, formal y completo del recurso de casación para su admisibilidad y procedencia. **La Sala no tiene facultad para llenar vacíos, ni puede variar, de oficio, el ámbito de la causal que se hubiere invocado, ni darle una extensión respecto de las normas, causales y modo de infracción que no fueron planteadas o que se plantearon deficientemente.**" (Lo resaltado fuera del texto).

Por lo expuesto, en el presente caso, los ahora actores de manera oficiosa resolvieron el recurso de casación fundamentándose en causales distintas a las alegadas por el recurrente, constituyendo claramente en una actuación contraria a lo establecido en el artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial que dispone: "OMISIONES SOBRE PUNTOS DE DERECHO.- La jueza o el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o la haya sido erróneamente. Sin embargo, no podrá ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes...". (Lo resaltado no corresponde al texto).

#### **SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA REALIZADA POR EL JUEZ Y CONJUEZ DE SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SUMARIADOS:**

El inciso segundo del artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: "...La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados. La casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de la legalidad y del error judicial en los fallos de instancia".



Señores Jueces, conforme se desprende de la sentencia No. 001-13-SEP-CC emitida por la Corte Constitucional dentro del caso No. 1647-11-EP de 06 de febrero de 2013, la casación se la debe entender como: *"... aquel recurso de carácter extraordinario que únicamente procede respecto de una sentencia, más no una instancia adicional en la cual se puedan analizar temas de legalidad que ya fueron resueltos por jueces anteriores (...) los jueces de casación únicamente podrán valorar la contravención a la ley, indebida aplicación o errónea interpretación de la misma para la valoración de la prueba, más no valorar la prueba en sí..."*, (...)

*La casación es un recurso extraordinario que fue establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano a finales del siglo anterior, cuyo objetivo principal es el de analizar si en la sentencia existen violaciones a la ley, ya sea por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación o por errónea interpretación de la misma. De esta forma, no debe concebirse al recurso de casación como un recurso ordinario más, sino al contrario los usuarios y operadores de justicia deben tener presente que la casación es aquel recurso de carácter extraordinario que únicamente procede respecto de una sentencia, más no una instancia adicional en la cual se puedan analizar temas de legalidad que ya fueron resueltos por jueces inferiores".*

Por la propia naturaleza extraordinaria del recurso de casación, los juzgadores no pueden efectuar un nuevo examen del proceso, sino solamente efectuar una comparación de la sentencia con la norma que se dice ha sido violada a fin de determinar si el precepto legal ha sido acertadamente aplicado, y por tanto no puede hacerse nueva valoración de la prueba,

Los hoy actores en la sentencia tantas veces mencionada no solo que valoraron la prueba practicada en la instancia procesal respectiva sino que DE OFICIO y sin que exista petición de parte practicaron una prueba y resolvieron sobre aquello al determinar en el literal c) del considerando cuarto lo siguiente:

*"C) De la revisión exhaustiva de la sentencia, se puede colegir que, efectivamente no se ha hecho un pronunciamiento expreso sobre algunas de las Glosas, por cuanto el criterio vertido por las anteriormente señaladas, es el que utiliza la sentencia recurrida para desechar la impugnación de todas las demás..."*

Acto seguido y dentro del mismo considerando cuarto literal c), hacen referencia a la evolución de las normas en materia tributaria y en flagrante contravención de la ley realizan un estudio de los documentos que obran del proceso en cuatro numerales los cuales me permito transcribir:

*"1) Consta que en el contrato suscrito por el Estado Ecuatoriano y OCP para la construcción del oleoducto de crudos pesados, se estipula que el financiamiento del proyecto corre a cargo de la Empresa OCP ECUADOR S.A., salvo su capital social que debía necesariamente ascender a USD \$ 55'000.000, (cincuenta y cinco millones de dólares), (en el caso de ANDES su capital era de \$ 2.000); en consecuencia, el crédito subordinado obedece a una cláusula contractual; 2) La Administración Tributaria considera que existe "subcapitalización" por el análisis*

financiero de la Empresa, sin embargo la actora ha demostrado su capacidad de endeudamiento por los contratos tipo "ship or pay" suscritos con sus clientes, lo cual no está prohibido por nuestra legislación y que le permitió contratar un crédito por 900 millones de dólares con la banca privada internacional; 3) Demostró que ha pagado intereses sobre el préstamo vinculado y buena parte del capital, lo que desvanece la presunción de simulación; y, 4) Las retenciones en la fuente por concepto del impuesto a la renta cuyas tasas excedieron los máximos legales, demuestran el cumplimiento de una obligación material, prevista en la norma transcrita. **En conclusión, esta Sala Especializada observa que en este caso no es posible, como en otros, establecer hechos que constituyan prácticas elusivas, básicamente tomando en cuenta que el crédito subordinado nace como condición contractual impuesta por el mismo Estado Ecuatoriano. Por todo esto, se desvanece la presente glosa.**" (Las negrillas y el subrayado me pertenecen)

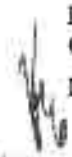
De lo transcrito se colige que los doctores José Dionicio Suing Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela para dictar la sentencia retrotrajeron su análisis a todo lo actuado en la etapa de prueba sustanciada en el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 de Quito, dando valor objetivo a favor de la compañía Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador (OCP) S.A. a documentos como por ejemplo: el contrato suscrito por el Estado Ecuatoriano y la citada empresa para la construcción del oleoducto de crudos pesados, contratos tipo "ship or pay", comprobantes de retención en la fuente por concepto de impuesto a la renta, entre otros. Es evidente que los documentos aludidos merecieron un gran estudio en vista de que, según lo plasmado en el fallo por los juzgadores, fueron suficientes para formarse un criterio, y como consecuencia resolver el desvanecimiento de una glosa.

Algo similar sucede en el literal D) del considerando cuarto de la sentencia cuya tenor literal es el siguiente:

*"Sobre la Glosa III.2.7 "Intereses y comisiones en el exterior", sobre la cual tampoco hay pronunciamiento de la Sala A quo, resulta obvio, porque así lo requería la Ley de Contratación Pública, que la contratista con el Estado debía rendir las garantías en ella previstas lo cual tiene un costo, habiendo demostrado con la documentación pertinente que, la fórmula de cálculo para el pago de comisiones debía realizarse neto de impuestos, por lo que debió realizar un doble cálculo, lo cual no perjudica los intereses del Estado, por lo que procede dar de baja la mentada Glosa"*

En el presente caso se hace una valoración de unos documentos que ni si quiera se los individualiza y nuevamente deciden dejar sin efecto una glosa.

Por todo lo expuesto, queda evidenciado que los ex servidores judiciales José Dionicio Suing Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, hicieron una indebida valoración de la prueba practicada en el Tribunal Distrital lo cual se encuentra totalmente prohibido pues dicha valoración les corresponde únicamente a los jueces de instancia. La Ley de Casación restringe a los jueces la posibilidad de examinar las pruebas que las partes procesales hayan introducido dentro de la causa sujeta a juzgamiento siendo





precisamente ese juzgamiento, es decir, la sentencia emitida por la instancia inferior la que debe ser objeto de análisis para ubicar y determinar el error de derecho alegado por quien recurre.

El ex juez y el ex conjuce de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en la sentencia emitida el 18 de julio de 2013, con su actuación incurrieron en un error inexcusable, lo cual trajo como consecuencia su responsabilidad administrativa y por ende la respectiva sanción de destitución.

## **VII. NO EXISTE NULIDAD EN EL PROCESO DISCIPLINARIO NI EN EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO:**

Los actores, han demandado la nulidad de la Resolución de destitución, manifestando que se han dado las causas de nulidad previstas en el artículo 59 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Al respecto, dicho artículo establece dos causas de nulidad: "... a) *La incompetencia de la autoridad, funcionario o empleado que haya dictado la resolución o providencia;* y, b) *La omisión o cumplimiento de las formalidades legales que se deben observar para dictar una resolución o iniciar un procedimiento...*".

En el presente caso, no existe ninguna de las causas expuestas, por cuanto la autoridad que dictó el acto administrativo que está siendo impugnado, es la competente para hacerlo, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial conforme se ha señalado en el presente memorial.

En la tramitación del sumario disciplinario se observó la normativa jurídica pertinente y se garantizó el cumplimiento de las normas legales que regulan el procedimiento del sumario disciplinario, el mismo que se llevó a cabo observando el debido proceso, garantizándose el derecho a la legítima defensa y a la seguridad jurídica.

Señoras Jueces, los actos administrativos constituyen el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa, y por consiguiente, toda invocación de nulidad contra estos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio.

Respecto a lo manifestado por los actores, en cuanto a que dentro del sumario disciplinario solicitaron ser escuchados y que sin embargo dicho pedido fue rechazado ilegalmente por parte del funcionario sustanciador del sumario, cabe señalar que los actores fueron escuchados a través del procedimiento establecido en la norma reglamentaria respectiva presentando todos los escritos y documentos que consideraron pertinentes. Si los actores pretendían ser escuchados verbalmente, es preciso destacar que ni el Código Orgánico de la Función Judicial, ni en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura vigente a esa fecha, contemplan el hecho de que dentro de un sumario disciplinario se lleve a cabo algún tipo de audiencia o reunión con los sumariados.

El artículo 82 de la Constitución de la República establece el derecho a la seguridad jurídica, mismo que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; por lo expuesto, mal podía el Pleno del Consejo de la Judicatura o el funcionario sustanciador del sumario disciplinario disponer la práctica de una diligencia que no se encuentra previamente determinada en el Reglamento ni en la Ley.

De igual forma, han manifestado los actores que se rechazó la reproducción de pruebas por ellos presentadas. Al respecto es importante señalar que los sumariados dentro de la etapa procesal respectiva, ejercieron su legítimo derecho a la defensa pues las pruebas que fueron anunciadas y solicitadas en sus escritos, fueron oportunamente recibidas, dispuestas y practicadas. No obstante lo anotado, el artículo 28 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, vigente a esa fecha, en sus incisos tercero y quinto, establecían que la autoridad tiene la potestad de calificar la pertinencia de la prueba, por lo que atenderá únicamente aquellas que permitan establecer la responsabilidad administrativa de los servidores judiciales sumariados. La decisión que niegue a acepte la práctica de la prueba solicitada no es sujeta a recurso alguno.

Por lo manifestado, y conforme obra del expediente administrativo, no existió violación a norma constitucional alguna, así como tampoco existió nulidades que declarar dentro del sumario disciplinario.

#### **VIII. NO EXISTE VULNERACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES:**

Los actores han manifestado que en la Resolución de destitución, el Pleno del Consejo de la Judicatura violó el principio de independencia judicial, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y honra, y que la mencionada resolución carece de motivación.

##### **1. NO HAY VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL:**

Se alega que en la Resolución impugnada, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha violentado el principio de independencia judicial, por el cual los jueces de todo nivel, incluidos los del máximo órgano de la justicia ordinaria, Corte Nacional de Justicia, deben resolver los asuntos sometidos a su decisión, sin ninguna presión, intromisión y menos amenazas de ninguna parte procesal.

Al respecto señores Jueces, lo manifestado por los actores está fuera de todo contexto lógico y más aún legal, en razón de que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ningún momento ha violentado el principio por ellos referido; el Consejo de la Judicatura, en ninguna parte de la resolución que ahora está siendo impugnada, se ha pronunciado respecto a temas jurisdiccionales, menos aún ha dejado sin efecto o revocado la sentencia dictada por los jueces. La decisión de los hoy actores se mantuvo firme independientemente de la resolución tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, sin embargo, como se expresó anteriormente, la Corte Constitucional





del Ecuador dentro del ámbito de su competencia dejó sin efecto la referida decisión jurisdiccional.

## **2. DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA:**

El debido proceso es un derecho que se debe cumplir para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, es el cumplimiento de las etapas del proceso y el cumplimiento de las distintas actuaciones judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y legales.

Sobre el debido proceso, el procesalista español Leonardo Pérez dice *"Es aquel juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y derechos establecidos por el constituyente en un Estado democrático, las cuales, acto seguido, deben ser recogidas y garantizadas eficazmente por el legislador procesal"*.

De tal modo que el debido proceso, es una garantía constitucional, de cuyo cumplimiento depende mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, pues garantiza una correcta administración de justicia, además de una real vigencia y respeto de los derechos humanos y es el mecanismo de aplicación de los principios y garantías del derecho constitucional, penal y procesal. De igual forma esta garantía fundamental cobija al procedimiento administrativo.

Permite un real ejercicio del derecho a la defensa, de la presunción de inocencia, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; de tal manera que constituye el eje fundamental del acceso a la administración de justicia.

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo el debido proceso es *"el que se inicia, se desarrolla, y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos: los principios y las normas constitucionales, legales e internacionales aprobadas previamente, así como los principios generales que informan el Derecho Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de la Justicia; que le asegure la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho"*.

En el presente caso, se ha garantizado el debido proceso. El sumario disciplinario instaurado en contra de los ahora actores, fue tramitado con estricta observancia de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, los sumariados fueron notificados con la iniciación del sumario y todas las providencias emitidas dentro del mismo, se abrió el término de prueba respectivo, dentro del cual todas las pruebas solicitadas por los sumariados fueron debidamente dispuestas y practicadas, otorgándose el ejercicio del legítimo derecho a la defensa y a la contradicción como garantías consagradas en la Constitución de la República.

### 3. RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE MOTIVADA:

Han manifestado los actores que el acto administrativo de destitución no tiene la debida motivación exigida por la Constitución y la Ley.

El acto administrativo posee tres elementos, el subjetivo, el objetivo y el formal. Uno de los elementos, el objetivo se genera en el análisis existente en el nexo causal entre el presupuesto de hecho y la norma jurídica, es lo que se denomina comúnmente MOTIVACION, considerado éste como la exposición de motivos de hecho y de derecho que sustentan la emisión de un acto administrativo.

La motivación, *"Es la exposición de razones que debe relatar el administrador público para tomar una decisión. Es la explicación que hace sobre el caso materia del acto administrativo. En ella debe analizarse los fundamentos fácticos, es decir el hecho que genera la emisión del acto administrativo, haciendo la vinculación jurídica con la norma positiva aplicable al caso, lo cual permite asumir un juicio de valor y una resolución sobre el tema".*<sup>2</sup>

*"Es la exposición de razones que debe relatar el administrador público para tomar una decisión. Es la explicación que hace sobre el caso materia del acto administrativo. En ella debe analizar los fundamentos fácticos, es decir el hecho que genera la emisión del acto administrativo, haciendo la vinculación jurídica con la norma positiva aplicable al caso, lo cual permite asumir un juicio de valor y una resolución sobre el tema".*<sup>3</sup>

En el presente caso, la Resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, contiene la suficiente motivación, ya que están expuestos ampliamente los fundamentos tanto de hecho como de derecho, es decir la resolución contiene la narración de manera clara, secuencial y cronológica de los actos procedimentales del sumario disciplinario desde la disposición de inicio hasta el momento de la resolución. De igual forma se han expuesto los fundamentos de derecho, la valoración de la prueba, se han expuesto las razones jurídicas que determinaron la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura, se ha enunciado los artículos de la Ley y su aplicación al caso concreto.

Como se puede observar señores Jueces, no se ha violado la garantía constitucional que establece que todas las resoluciones de los poderes públicos que afecten derechos subjetivos de los ciudadanos deberán ser dictadas con suficiente motivación, conforme a lo prescrito en el artículo 76 numeral 7 literal I) de la Constitución de la República, como en el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado.

<sup>2</sup>Patricio Secaira Durango, *Curso Breve de Derecho Administrativo*, Quito, Editorial universitaria 2004, pág 183

<sup>3</sup>Patricio Secaira Durango, *Curso Breve de Derecho Administrativo*, Quito, Editorial universitaria 2004, pág 183



#### **4. DERECHO AL TRABAJO:**

Han manifestado los actores, que se ha violado el derecho al trabajo. Respecto al derecho al trabajo supuestamente violentado, es importante señalar que este derecho es la base para una vida digna. Significa que todas las personas deben tener la posibilidad de ganarse la vida desempeñando las actividades que elijan en condiciones seguras, saludables y principalmente dignas. Se debe garantizar un salario mínimo para los trabajadores que les permita llevar una vida decente a ellos/ellas y sus familias. No se debe discriminar en el empleo y los ascensos, o en el goce de derechos relacionados con el trabajo, en base al género, la raza, el origen étnico, la religión o la opinión política. El mismo trabajo debe ser compensado con el mismo salario.

Respecto a la supuesta violación de derecho al trabajo manifestada por la parte actora, es importante recurrir a lo manifestado por la Corte Constitucional en la Sentencia No. 0016-09-SIS-CC: *"Dogmáticamente, el derecho al trabajo se sustenta en los principios de libertad del trabajo y de contratación y en la prohibición de realizar trabajos gratuitos y forzosos, por lo demás, está sujeto a cumplir con la vigencia de normas que definen y regulan la naturaleza de modalidad de la prestación del servicio. En el caso, los jueces están sujetos al control disciplinario que como efecto puede devenir la destitución del cargo, constituida en una medida de control que busca el correcto funcionamiento del servicio bajo una relación de subordinación entre el sujeto pasivo de la sanción y el órgano que aplica"*.

La destitución, es una forma de retiro del servicio público, pero al mismo tiempo es la máxima sanción que puede imponerse a un servidor judicial por faltas gravísimas cometidas en su desempeño. El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 109 prevé esta sanción a las infracciones gravísimas dentro del régimen disciplinario establecido para los funcionarios judiciales, sanción disciplinaria que no se deriva de la relación laboral sino de la forma de actuación en el ejercicio de la Función Judicial en directa relación con el no acatamiento de los principios que rigen esa función.

En el presente caso, no cabe la supuesta violación manifestada por los actores, por cuanto los doctores José Dionicio Suñig Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, laboraron en la Función Judicial por varios años, bajo la modalidad de nombramiento, en condiciones dignas, seguras y saludables con un trabajo remunerado, justo libremente escogido y aceptado; por ende mal pueden manifestar que existe violación de derechos por parte de esta institución, cuando ejercieron el derecho al trabajo; sin embargo fueron destituidos por los actos que han sido claramente definidos, por ende no se ha violentado el derecho al trabajo, como erróneamente manifiestan.

#### **5. SEGURIDAD JURÍDICA:**

Se ha manifestado por parte de los actores que se ha violado el derecho a la seguridad jurídica. Al respecto el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece: *"El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas"*.

por autoridades competentes."; en el presente caso, se ha reconocido y garantizado la misma, entendiéndose como tal a la certeza que tiene la persona de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares establecidos previamente.

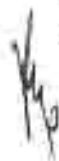
La Resolución mediante la cual se destituyó en sus funciones a los ahora actores, fue dictada por autoridad competente, y bajo procedimientos previamente establecidos tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial como en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria que se encontraba vigente al inicio del sumario disciplinario, respetando los derechos al debido proceso, derecho a la defensa y a la seguridad jurídica.

No existió vulneración de derechos constitucionales; los procedimientos administrativos se inician por presunciones que deben esclarecerse mediante la producción de pruebas de cargo y de descargo que son o no susceptibles de sanciones tipificadas en la ley.

#### **IX. EXCEPCIONES:**

Amparado en los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la presente contestación a la demanda propongo las siguientes excepciones:

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
2. Legitimidad y legalidad del acto administrativo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
3. Falta de derecho de los actores para proponer el recurso en la forma que lo han hecho, puesto que no se ha justificado lo establecido en el artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
4. Alego nulidades por el fondo y por la forma de la acción planteada.
5. Alego improcedencia de la acción, por cuanto dentro del expediente del sumario disciplinario, se han observado todas las garantías constitucionales y normas del debido proceso, sin que se haya provocado indefensión alguna, toda vez que, el Pleno del Consejo de la Judicatura fue el órgano competente para imponer la sanción.
6. Improcedencia de la demanda.
7. Alego improcedencia del recurso, pues existe incompatibilidad entre el recurso de plena jurisdicción o subjetivo y la petición efectuada de que se declare la nulidad del acto administrativo y por lo tanto se deje sin efecto la Resolución impugnada.





#### **X. PRUEBA:**

En la respectiva estación probatoria, practicaré cuanta prueba sea menester, especialmente la testimonial, documental y confesión judicial y toda aquella que me franquee la ley adjetiva civil, supletoria en esta materia.

Adjunto a este escrito en mil ciento cuarenta y cuatro (1144) fojas, copias certificadas debidamente numeradas y foliadas del expediente del sumario disciplinario, instaurado en contra de los actores, que las presento como prueba de mi parte, en todo lo que me fuere favorable.

#### **XI. PETICIÓN:**

Por todo lo manifestado y las excepciones propuestas, ustedes señores Jueces se dignarán rechazar el recurso o demanda interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura, por ser atentatorio contra nuestro ordenamiento jurídico.


#### **4. AUTORIZACIÓN:**

Nombro como mis abogados defensores a los doctores: Viviana Pazmiño Naranjo, Fernanda Chiriboga Arico, Angélica Orellana Rubio, María José Palacios Vivero, Inés Guerrero Celi, Gerardo Alarcón Guillén y René Arrobo Celi, a quienes autorizo para que a mi nombre y representación suscriban de manera individual o conjunta, cuantos escritos estimen necesarios y acudan a cuanta diligencia sea menester en la defensa de los intereses de la institución.

#### **5. NOTIFICACIONES:**


Notificaciones que me correspondan las recibiremos en la casilla judicial No. 292 del Palacio de Justicia de Quito y en el correo electrónico [patrociniocj@funcionjudicial.gob.ec](mailto:patrociniocj@funcionjudicial.gob.ec), Casillero Judicial Electrónico No. 1768097520001 y al Correo Electrónico No. [conscjudicatura17@abogados.ec](mailto:conscjudicatura17@abogados.ec).

Firmo con mis abogados defensores.





Dr. Esteban Zavala Palacios  
**DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA**  
**DELEGADO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
Mat. No. 17-2003-201 F.A





  
Dra. Viviana Pazmiño Naranjo  
Mat. No. 10.459 C.A.P

  
Dra. Fernanda Chiriboga Arico  
Mat. No. 17-2007-601 F.A

  
Dra. Maria José Palacios Vivero  
Mat. No. 17-2007-485 F.A Mat.

  
Dra. Inés Guerrero Celi  
Mat. No. 17-2007-193 F.A


  
Dra. Angélica Orellana Rubio  
Mat. No. 10.360 C.A.P

  
Dr. Rene Arrobo Celi  
Mat. No. 17-2006-97 F.A

  
DRAJ/BAP/FCHA/VPS

No. 17811-2014-0463

Presentado en Quito el día de hoy martes tres de junio del dos mil catorce, a las ocho horas y cincuenta y cinco minutos, con 2 copia(s) igual(es) a su original. Adjunta: anexos tres fojas y un expediente administrativo en tres cuerpos. Certifico.


  
AB. MIGUEL PATRICIO ANDRADE HERNANDEZ  
SECRETARIO DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
NO.1

ALDANAM id: 4166259




**TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1**

Quito, viernes 29 de agosto del 2014, las 12h54. Agréguese al proceso las contestaciones a la demanda presentadas por la Procuraduría General del Estado y Consejo de la Judicatura y el expediente administrativo.- Tómese en cuenta la calidad en la que comparece el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, Director Nacional de Patrocinio y delegado del Procurador General del Estado, conforme la documentación que adjunta.- Tómese en cuenta la calidad en la que comparece el doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica y la autorización conferida a los Viviana Pazmiño Naranjo, Fernanda Chiriboga Arico, Angélica Orellana Rubio, María José Palacios Vivero, Inés Guerrero Celi, Gerardo Alarcón Guillén y René Arrobo Celi, para que presenten en forma individual o conjunta cuanto escrito sea necesario en defensa de los intereses institucionales.- Tómese en cuenta las casillas judiciales 1200, 292 y los correos electrónicos [patrocinioej@funcionjudicial.gob.ec](mailto:patrocinioej@funcionjudicial.gob.ec) y [consejo.judicatura17@foroabogados.ec](mailto:consejo.judicatura17@foroabogados.ec) para futuras notificaciones.- Notifíquese.

  
AB. PATRICIO CALDERON IMBAQUINGO  
JUEZ DE SUSTANCIACION

En Quito, viernes veinte y nueve de agosto del dos mil catorce, a partir de las dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: DR. SUING NAGUA JOSE DIONICIO en la casilla No. 3214 y correo electrónico [gustavodurangovela@hotmail.com](mailto:gustavodurangovela@hotmail.com). DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA en la casilla No. 292 y correo electrónico [consejo.judicatura17@foroabogados.ec](mailto:consejo.judicatura17@foroabogados.ec); [patrocinioej@funcionjudicial.gob.ec](mailto:patrocinioej@funcionjudicial.gob.ec); PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1200 y correo electrónico 0. Certifico:

  
AB. MIGUEL PATRICIO ANDRADE HERNANDEZ  
SECRETARIO DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1

SEMANATEM

*Quinto y...*  
*Calderon 51-*

**Juicio No. 17811-2014-0463**

**SEÑORES JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1 CON ASIENTO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**


**Nosotros, DR. JOSE SUING NAGUA y DR. GUSTAVO DURANGO VELA**, en la acción subjetiva o de plena jurisdicción que seguimos en contra del Consejo de la Judicatura, en las personas de su Presidente y Director Ejecutivo, así como en contra del Procurador General del Estado, comparecemos respetuosamente ante ustedes y comedidamente solicitamos:

Habiéndose practicado la citación con la demanda y primera providencia a los demandados, quienes incluso han presentado la correspondiente contestación, en atención a lo señalado en el Art. 38 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y por existir hechos que deben justificarse, sírvanse recibir la causa a prueba por el término legal de diez días.

Seguiremos recibiendo las notificaciones en el domicilio señalado para el efecto: casillas judiciales N° 3214 o 1005 de la H. Corte Provincial de Quito, o en los correos electrónicos: [gustavodurangovela@hotmail.com](mailto:gustavodurangovela@hotmail.com) o [ldsuing@gmail.com](mailto:ldsuing@gmail.com)


En nuestras calidades de abogados en libre ejercicio de la profesión y por nuestros propios derechos;

**Dr. José Suing Nagua,**  
**Matr. # 3331 C.A.P.**

  
**Dr. Gustavo Durango Vela,**  
**Matr. # 1897 C.A.P.**

No. 17811-2014-C463 (AB. MIGUEL PATRICIO ANDRADE HERNANDEZ)

Presentado en el día de hoy martes trece de enero del dos mil quince, a las catorce horas y treinta y nueve minutos, con 2 copia(s) igual(es) a su original, sin anexos. Certifico.



---

BERNAL OÑATE DIANA BEATRIZ  
RESPONSABLE DE SORTEOS

DIANA.BERNAL id: 20120038

*Concurto y de. Sa*

*H...*

**Juicio No. 17811-2014-0463**

**SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1, QUITO:**

**DR. JOSE SUING NAGUA y DR. GUSTAVO DURANGO VELA**, en la acción subjetiva o de plena jurisdicción que seguimos en contra del Consejo de la Judicatura, en las personas de su Presidente y Director Ejecutivo, así como en contra del Procurador General del Estado, comparecemos respetuosamente ante ustedes y comedidamente solicitamos:

Reiteramos nuestro pedido de que se sirva disponer la apertura de la causa a prueba por el término legal correspondiente, por ser ese el estado del proceso.

Seguiremos recibiendo notificaciones en los casilleros judicial y electrónico que tenemos señalados.

**Dr. José Suing Nagua**  
**Matr. 3331, C.A.P.**

*Gustavo Durango Vela*

**Dr. Gustavo Durango Vela**  
**Matr. No. 1897, C. A. P.**



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

[www.funcionjudicial.gob.ec](http://www.funcionjudicial.gob.ec)



Código de verificación de documento: 1219b0f8-25e6-461d-9382-73d7d5c72a32


## CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1

Juez(a): CALDERON IMBAQUINGO PATRICIO ARNULFO

Recibido el día de hoy, miércoles diez de junio del dos mil quince, a las dieciseis horas y cuarenta y ocho minutos, presentado por DR. SUING NAGUA JOSE DIONICIO, dentro del juicio número 17811-2014-0463(1), en uno fojas y se adjunta los siguientes documentos:

Tipo Documento	Nombre Documento	Detalle Documento
Escrito	abrir prueba	abrir prueba

QUITO, miércoles 10 de junio de 2015

  
ALDANA VEGA MARIA JOSEFINA  
RESPONSABLE DE SORTEOS

*Comuniqué y h*  
*-53-*

**Juicio No. 17811-2014-0463**

**SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1, QUITO:**

**DR. JOSE SUING NAGUA y DR. GUSTAVO DURANGO VELA**, en la acción subjetiva o de plena jurisdicción que seguimos en contra del Consejo de la Judicatura, en las personas de su Presidente y Director Ejecutivo, así como en contra del Procurador General del Estado, comparecemos respetuosamente ante ustedes y comedidamente solicitamos:

Reiteramos el pedido de que se sirva sírvase abrir la causa a prueba por el término legal correspondiente, por ser ese el estado procesal y por existir hechos que deben probarse.

**Dr. José Suing Nagua**  
**Matr. 3331, C.A.P.**

*17.1979-2 Foro*  
**Dr. Gustavo Durango Vela**  
**Matr. 1.897 C.A.P.**  
*17.1979-2 Foro*



af96df92-f09c-421e-9052-a5ef081b4279



CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA  
TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1

Juez(a): CALDERON IMBAQUINGO PATRICIO ARNULFO

No. Juicio: 17811-2014-0463(1)

Recibido el día de hoy, martes seis de octubre del dos mil quince, a las trece horas y treinta y dos minutos, presentado por DR. SUING NAGUA JOSE DIONICIO, quien solicita:

\* ESCRITO SOLICITANDO APERTURA DE LA CAUSA PRUEBA

En uno fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1. Escrito



POLO CONGO BERTHA OFELIA  
RESPONSABLE DE SORTEOS

Juicio No. 17811-2014-0463

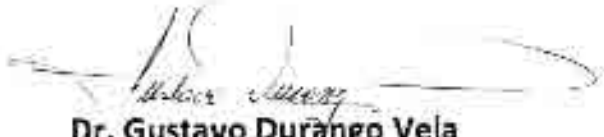
**SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1, QUITO:**

**DR. JOSE SUING NAGUA y DR. GUSTAVO DURANGO VELA**, en la acción subjetiva o de plena jurisdicción que seguimos en contra del Consejo de la Judicatura, en las personas de su Presidente y Director Ejecutivo, así como en contra del Procurador General del Estado, comparecemos respetuosamente ante ustedes y comedidamente solicitamos:

Insistimos, una vez más, que se sirva disponer la apertura de la causa a prueba por el término legal correspondiente, toda vez que existen hechos que deben justificarse.

Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en los casilleros y direcciones electrónicas señaladas.

**Dr. José Suing Nagua**  
**Matr. 3331, C.A.P.**

  
**Dr. Gustavo Durango Vela**  
**Matr. 1897 C.A.P.**  
17-1979-2 FORO





ee9ce673-fdb6-4fbc-a09b-311825c93b8a



CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA  
TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.1

Juez(a): CALDERON IMBAQUINGO PATRICIO ARNULFO

No. Juicio: 17811-2014-0463(1)

Recibido el día de hoy, martes veintiseis de enero del dos mil dieciseis, a las quince horas y treinta minutos, presentado por DR. SUING NAGUA JOSE DIONICIO, quien solicita:

\* ESCRITO SOLICITANDO APERTURA DE LA CAUSA PRUEBA

En uno fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1. Escrito (ORIGINAL)



POLO CONGO BERTHA-OFELIA  
RESPONSABLE DE SORTEOS



**MEMORANDO No. DNJ-SNCD-5105-2013**

**PARA:** Doctor Gustavo Durango Vela  
**CONJUEZ DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO  
 TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA**

**DE:** Doctora María Aurora Coyago  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA UNIDAD CONTROL  
 DISCIPLINARIO**

**ASUNTO:** NOTIFICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR

**FECHA:** 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la Resolución expedida por el doctor Gustavo Jalkh Röben, Presidente del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente No. S-085-UCD-2013-PM.

Muy atentamente,

**Dra. María Aurora Coyago**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA UNIDAD CONTROL DISCIPLINARIO**  
**MAC/PM**

Recibido 25 IX 13

13 FEB. 2014

Trámite de suspensión provisional No. S-0085-UCD-013-ACS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Quito, 23 de septiembre de 2013, las 16h10.

VISTOS:

#### 1.- ANTECEDENTES.

En mi calidad de Presidente del Consejo de la Judicatura, de conformidad a las facultades que me otorgan el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 11 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, conozco el presente expediente disciplinario para resolver sobre la medida de suspensión preventiva solicitada en contra de los doctores José Suíng Nagua y Gustavo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, el mismo que se lo resuelve al tenor de los siguientes antecedentes:

#### EXPEDIENTE DISCIPLINARIO DOCTORES JOSÉ SUÍNG NAGUA Y GUSTAVO DURANGO VELA

El expediente disciplinario No. D-0879-UCD-013-ACS fue iniciado mediante providencia de 23 de septiembre de 2013, suscrita por el Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario (e) del Consejo de la Judicatura, en base a la denuncia presentada por el Director General del Servicio de Rentas Internas, economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, en la que se menciona que en el recurso de casación 497-2010 interpuesto por Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A., el fallo de mayoría, de manera inmotivada, se ha apartado de antecedentes jurisprudenciales emitidos por la propia Corte Nacional en casos similares, incurriendo presumiblemente en falta de motivación y error inexcusable, faltas disciplinarias tipificadas en el numeral 8 del artículo 108 y numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

#### 2.- COMPETENCIA

El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y ejerce sus funciones a través del Pleno, la Presidencia, la

Dirección General y demás órganos administrativos, según lo establecido en el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Según dispone el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, es atribución del Presidente del Consejo de la Judicatura suspender en el ejercicio de sus funciones, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y servidores de la Función Judicial, en casos graves y urgentes, por el máximo de noventa días.

El inciso segundo del artículo 11 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura establece que la suspensión preventiva podrá ser ordenada, de oficio o a petición de parte, cuando el Presidente del Consejo de la Judicatura considere que existen hechos graves y urgentes que hagan presumir la existencia de la comisión de infracciones disciplinarias o a fin de evitar que las acciones u omisiones de una servidora o servidor judicial, llegaren a producir o sigan produciendo daños a la prestación del servicio al que está llamado o a la vulneración de derechos de terceros.

En consecuencia, es competencia del Presidente del Consejo de la Judicatura dictar la medida cautelar de suspensión de la servidora o servidor de la Función Judicial cuando, a criterio del Presidente del Consejo la Judicatura, se produzcan las circunstancias antes mencionadas.

### **3.- LEGITIMACIÓN ACTIVA**

El numeral dos del artículo 12 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura señala que la suspensión preventiva podrá ser solicitada por la persona que al momento de interponer la denuncia así lo solicite.

En el caso que nos ocupa, el Director General del Servicio de Rentas Internas, en el numeral VIII de su denuncia expresamente solicitó la medida de suspensión preventiva de los doctores José Suñig Nagua y Gustavo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, y por lo tanto el denunciante contó con la legitimación suficiente para solicitar la presente medida de suspensión preventiva, conforme así se lo declara.



#### 4.- SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL

El numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial ha consagrado la facultad del Presidente del Consejo de la Judicatura de ordenar preventivamente la suspensión de funciones de la servidora o servidor judicial que se encuentre inmerso en hechos denunciados como graves y urgentes.

En esencia, la suspensión provisional busca evitar el desarrollo de una situación de peligro causada por la presunta comisión de infracciones graves o gravísimas. A dichos actos la doctrina los denomina actos preparatorios o de trámite, pues en nada influyen o afectan en la decisión final en la resolución del proceso disciplinario.

La suspensión provisional como acto preparatorio constituye una medida de carácter preventiva y como tal tiene los mismos fundamentos y finalidad de toda medida cautelar pero con dos elementos adicionales que son: la **urgencia y gravedad** de los hechos que se denuncian. En este sentido, para determinar la procedencia de la suspensión provisional de los servidores sumariados es necesario analizar si las faltas por las cuales va a ser adoptada una medida cautelar son graves o gravísimas, que en tales actos existe una situación susceptible de causar daño a terceros, que pueda vulnerar sus derechos o que se trate de beneficiar a un tercero por una acción u omisión de sus obligaciones (gravedad) y que por tales circunstancias se torne ineludible repelerla inmediatamente para evitar que se produzcan mayores daños o se sigan produciendo los existentes (urgencia).

Por otro lado, la doctrina ha recogido varios presupuestos jurídicos que es necesario considerar como requisitos previos para declarar procedente una medida de suspensión provisional. Estos requisitos son: 1) que exista cierto grado de verosimilitud, "el fumus boni iuris" (apariencia de buen derecho); 2) que los hechos denunciados sean graves y urgentes, la concurrencia de "periculum in mora" (peligro por la mora procesal) y, 3) la ponderación de los intereses afectados.<sup>1</sup>

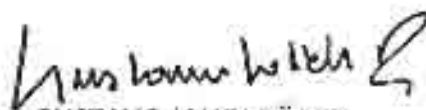
<sup>1</sup> COUTURE, J. Eduardo, CALAMANDREI, Piero, Las medidas cautelares. Librería El Foro, Madrid, 1996.

Del contenido del expediente que he llegado a tener conocimiento se desprenden hechos que esta autoridad considera se enmarcan en los presupuestos legales y doctrinarios de urgencia y gravedad estipulados en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el artículo 11 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura.

#### 5. DECISIÓN.

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, el **PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA** resuelve:

1. Disponer la medida provisional de suspensión en el ejercicio de sus funciones, sin pérdida de remuneración, hasta por noventa días, a los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente.
2. Notifíquese y cúmplase.



GUSTAVO JALKH RÖBEN

PRESIDENTE

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Lo que comunico para los fines de Ley



Dra. María Aurora Coyago

**SECRETARÍA AD-HOC DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO  
CONSEJO DE LA JUDICATURA**

13 FEB. 2014

**EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.-** Quito, a 20 de diciembre de 2013; a las 11h01.- **VISTOS:**

**EXPEDIENTE DISCIPLINARIO N°: D-0879-UCD-2013-PM.**

**FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE:** 23 de septiembre de 2013 (fs.8).

### **1. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

#### **1.1 Accionante:**

Carlos Marx Carrasco, en calidad de Director General del Servicio de Rentas Internas.

#### **1.2 Servidores judiciales sumariados:**

Doctor José Dionicio Suñig Nagua, Juez Nacional de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia; y, doctor Gustavo Adolfo Durango Vela, Conjuez Nacional de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.

#### **1.3 Situación actual de los sumariados:**

Mediante acción de personal No. 311-DNP de 26 de enero de 2012, se nombró Juez de la Corte Nacional de Justicia al doctor José Dionicio Suñig Nagua.

Mediante acción de personal No. 317-DNP de 01 de marzo de 2012, se nombró Conjuez de la Corte Nacional de Justicia al doctor Gustavo Adolfo Durango Vela.

El 23 de septiembre de 2013, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Presidente del Consejo de la Judicatura suspendió en sus funciones a los servidores judiciales sumariados, sin pérdida de remuneración, hasta por 90 días.

### **2. ANTECEDENTES**

Mediante oficio No. 0027802 de 19 de septiembre de 2013, el Servicio de Rentas Internas, a través de su Director General, Carlos Marx Carrasco, presentó una queja relacionada con la actuación de los doctores José Dionicio Suñig Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez Nacional de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente. En la queja presentada se manifestó que en la resolución del recurso de casación N° 497-2010, propuesto dentro del juicio de impugnación N° 26247-208-09-VJ, seguido por Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP) en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas y del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, los sumariados habrían incurrido en falta de motivación y error inexcusable, infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el numeral 8 del artículo 108 y el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en su orden. La argumentación de la queja se analiza en los numerales octavo y noveno de esta resolución.

### **3. COMPETENCIA**

Por mandato del artículo 178, segundo inciso, de la Constitución de la República, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Entre las competencias del Consejo de la Judicatura están las consignadas en los numerales 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, que dicen: "...3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas.", "...5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial". Asimismo, en los artículos

254 y 264, numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ratifica que el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; y que el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene atribución para imponer las sanciones disciplinarias a las servidoras o los servidores judiciales, o absolverles si fuere conducente.

Por lo tanto, el Pleno del Consejo de la Judicatura es competente para conocer y resolver el presente sumario disciplinario.

#### **4. VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso...."*

De la revisión del expediente se desprende el cumplimiento del mandato constitucional referido. Se advierte que con el auto inicial fueron debidamente citados los servidores sumariados, conforme se desprende de las razones de citación que obran a fojas 82 y 84 del expediente. De igual manera se ha constatado que los sumariados han ejercido plenamente su derecho a la defensa, presentando las pruebas de descargo a las que esta resolución se refiere en el numeral 8.3.

Al no haberse incurrido en violación de solemnidad alguna, se declara la validez del procedimiento disciplinario.

#### **5. LEGITIMACIÓN ACTIVA**

El artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que la acción disciplinaria puede ser ejercida de oficio, por queja o denuncia.

En el presente caso, el Director General del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, presentó queja en contra de los doctores José Dionicio Suing Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez Nacional de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente. De la revisión del expediente se aprecia que el Director General del Servicio de Rentas Internas fue parte procesal en el recurso de casación No. 497-2010, materia primigenia del presente sumario disciplinario, por lo que tiene interés directo en dicho proceso.

En consecuencia, el Director General del Servicio de Rentas Internas cuenta con legitimación activa para presentar la queja materia de análisis del presente sumario disciplinario.

#### **6. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN MOTIVO DE ESTE SUMARIO**

En el auto de apertura del presente sumario se consideró que los servidores judiciales sumariados son presumiblemente responsables de las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 5 del artículo 108 y, en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

#### **7. OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA**

De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial y vista la fecha de presentación de la queja y de inicio del sumario, se colige que no ha operado la prescripción de la acción disciplinaria.

En consecuencia, el accionante ha interpuesto la queja oportunamente, conforme así se declara.



## 8. FUNDAMENTOS PARA RESOLVER

### 8.1 Argumentos de la queja

En la queja propuesta en contra de los servidores judiciales sumariados, el Director General del Servicio de Rentas Internas señala:

- a) Que los sumariados conocieron el recurso de casación No. 497-2010, presentado por parte de la Compañía Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP), en contra del Director General y del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, apartándose en su resolución del criterio jurisprudencial vertido en tres fallos anteriores, en específico dentro de los procesos Nos. 271-2010 del 1 de agosto de 2012, seguido por Andes Petroleum Ecuador LTD, en contra del Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas; 442-2010 del 14 de septiembre de 2012, seguido por Andes Petroleum Ecuador LTD en contra del Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas; y, 357-2011 del 21 de diciembre de 2012, seguido por Occidental Exploration and Production Company en contra del Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas. En criterio del Servicio de Rentas Internas, en todos esos procesos se consideró como subcapitalización un préstamo concedido por la matriz a su subsidiaria con intereses más altos que los máximos permitidos, ya que se entendió en dichos casos que la finalidad del préstamo era disminuir el impuesto a la renta que debían pagar en el Ecuador;
- b) Que los servidores judiciales sumariados, contradiciendo su propio criterio, vertido en anteriores sentencias que en copias certificadas incorporó al expediente y que constan a fojas 25 a 34; 35 a 40; y, 44 a 51 decidieron, sin ningún fundamento, desvanecer la glosa proveniente de la subcapitalización, obviando considerar que existieron elementos iguales tales como la vinculación entre empresas y un crédito que no correspondía a las condiciones normales del negocio;
- c) Que cuando el Servicio de Rentas Internas requirió a la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia que se aclare y amplíe la sentencia de 18 de julio de 2013, en auto de 12 de septiembre de 2013 se pronunció señalando: *"...la falta de trascendencia de que el préstamo sea con una entidad vinculada"*, añadiendo que: *"en el que el fallo de mayoría señala que no existe subcapitalización y desvanece la glosa, no tienen ninguna diferencia con la casística de los otros procesos en los que se confirmaron las glosas levantadas por concepto de subcapitalización, por lo que la conclusión en la sentencia debió haber sido exactamente la misma."*;
- d) Que existe *"...flagrante y clara violación al artículo 17 del Código Tributario"*, principal fundamento de las glosas establecidas por el Servicio de Rentas Internas y de los fallos precitados, que sentaron el criterio de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia;
- e) En el anuncio de la prueba el Servicio de Rentas Internas incorporó copia certificada de la sentencia expedida por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N° 544-2010 de 29 de junio de 2012, propuesto por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur, en contra de la sentencia dictada el 01 de octubre de 2010 por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital Fiscal N° 2, con sede en Guayaquil, dentro de la impugnación propuesta por la compañía Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico S.A., que consta a fojas 41 a 43; y,

- 1) El Director General del Servicio de Rentas Internas manifestó que en la resolución expedida por los jueces sumariados, habrían incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, por falta de motivación y error inexcusable, respectivamente,

## 8.2 Argumentos del auto de inicio

De conformidad con el artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial y con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, el 23 de septiembre de 2013 se dispuso la apertura del presente sumario disciplinario en contra de los doctores José Dionicio Suing Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela, Juez Nacional y Conjuez Nacional de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en su orden, por presumirse que habrían incurrido en falta de motivación y error inexcusable, infracciones disciplinarias tipificadas en el numeral 8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

## 8.3 Descargos de los servidores judiciales sumariados:

### 8.3.1 Contestación del Juez de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Dionicio Suing Nagua (fojas 210 a 222):

Que no existe ningún hecho, menos aún grave y urgente, ni que haya producido o pueda producir daños a la prestación del servicio pues, según el sumariado, lo que cuestiona el Director General del Servicio de Rentas Internas es la decisión judicial de mayoría, contenida en una sentencia. En tal sentido sostiene que no procede la medida de suspensión provisional dispuesta, considerando el tiempo transcurrido desde la notificación del auto por el cual se atendieron los recursos de aclaración y ampliación, con fecha 12 de septiembre de 2013.

Que la queja presentada ha inducido a engaño al Presidente del Consejo de la Judicatura.

Que no se ha cumplido con la obligación de justificar la gravedad y urgencia de los hechos por los cuales se solicita la medida cautelar, justificación que no consta en el expediente.

Que la medida cautelar adoptada, de suspensión provisional sin pérdida de remuneración, es prematura y atenta contra la independencia interna y externa de los jueces, reconocida y garantizada en la Constitución de la República.

Que respecto a la acusación de falta de motivación y violación de derechos constitucionales señala que se debe tener en cuenta que la motivación es la *"necesaria confrontación de los hechos en disputa, con las normas de derecho aplicables"*. Agrega que la sentencia sobre el punto de la subcapitalización está debidamente motivada. Sostiene que en este caso específico no aplica lo señalado por el Servicio de Rentas Internas, ya que no son casos iguales, existiendo la adecuada ponderación de los hechos confrontados con el derecho, por lo que al tratarse solamente de un punto de la sentencia de los cinco que contiene, no puede existir falta de motivación.

Que la divergencia entre la sentencia materia de análisis con las anteriores sentencias, es la diferencia en el capital, obedeciendo el crédito subordinado a una cláusula contractual.

Que sólo la Corte Constitucional puede establecer que hubo falta de motivación, sin que un órgano administrativo lo pueda hacer sin resentir el principio de independencia de la Función Judicial.

Que justificadamente pueden apartarse de líneas jurisprudenciales e incluso de criterios jurisprudenciales obligatorios por la diversa casuística que se presenta, sin que en este caso exista un precedente jurisprudencial obligatorio.

El sumariado solicita que se deseché la queja, calificándola de maliciosa y temeraria, dejando sin efecto la medida de suspensión provisional.

En el anuncio de prueba el sumariado solicitó varias diligencias, las mismas que fueron debidamente dispuestas y practicadas.

**8.3.2. Contestación del Conuez de la Corte Nacional de Justicia, doctor Gustavo Adolfo Durango Vela (fojas 250 a 258):**

Que el tiempo transcurrido entre la fecha de expedición de la sentencia materia de análisis y de la providencia de apertura del presente sumario disciplinario denota que no hay hechos graves o urgentes que den lugar a la medida de suspensión provisional expedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura.

Que en la resolución tomada por ellos no existe error alguno y menos aún falta de motivación, ya que lo único que se impugnó por parte del Director General del Servicio de Rentas Internas es un punto de la misma, esto es, la subcapitalización, y no los cinco puntos que se resolvió, estando suficientemente explicadas las razones por las cuales se apartaron del criterio que en fallos anteriores dictaron, ya que los casos no eran iguales.

Que se puede recurrir ante la Corte Constitucional para verificar si efectivamente hay falta de motivación de la sentencia.

Que la decisión tomada en el recurso de casación No. 497-2010 es totalmente jurídica y que la sanción de suspensión provisional es absurda.

Solicita que se deseché lo propuesto por el Director General del Servicio de Rentas Internas y se califique la queja de temeraria y maliciosa, dejando sin efecto la medida de suspensión provisional.

En el anuncio de las pruebas, el sumariado solicitó varias diligencias, las mismas que fueron debidamente dispuestas y practicadas.

**9. CRITERIOS A CONSIDERARSE**

**9.1 Hechos probados**

Dentro del presente sumario administrativo, se han demostrado los siguientes hechos:

A fojas 91 del expediente consta la sentencia de 18 de julio de 2013 expedida por los sumariados, en voto de mayoría, de la que se desprende que: a) Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP), fundamentó su recurso de casación en las causales contempladas en los numerales primero, segundo y cuarto del artículo 3 de la Ley de Casación; y, b) que los sumariados aceptaron parcialmente el recurso de casación propuesto por el representante legal del Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP), en la forma y consideraciones que constan en el numeral cuarto de esta sentencia.

**9.2 Sobre la falta de motivación**

El literal l) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República dispone que: *"Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados."*

1

El numeral 4 del artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que es facultad esencial de las juezas y jueces: *"Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos."*

Del análisis de las piezas procesales que constan en el expediente administrativo, a fojas 25 a 61, que corresponden a las sentencias expedidas por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, suscritas por los sumariados, se desprenden casos similares, no idénticos, pues por obvias razones, las acciones judiciales no se proponen sobre hechos y partes exactos.

En cada una de las sentencias mencionadas, agregadas al expediente disciplinario, existe motivación pertinente y suficiente, que concuerda con el análisis del juzgador, concluyendo en resoluciones coherentes con las consideraciones previas. Sin embargo, en el caso propuesto, materia del presente expediente, los sumariados no motivaron con suficiencia los criterios por los cuales se apartaron de los fallos que ellos mismos dictaron anteriormente, en casos similares.

En tal sentido, la motivación no debe comprenderse como el simple agregado de consideraciones en un acto jurídico, sino que evidentemente, ese conjunto de razonamientos debe guardar congruencia con los criterios emitidos en las resoluciones adoptadas en el pasado y en el caso que se resuelve por los mismos juzgadores.

Es preciso destacar que el juez debe decidir de acuerdo a lo resuelto en el pasado, y no hacer lo contrario de lo decidido anteriormente, sin un motivo determinante, suficientemente explicado y razonado, lo que concuerda con el principio *"stare decisis"*. Lo contrario significaría ocasionar inseguridad jurídica en detrimento de las relaciones institucionales, y las actuaciones societarias e interpersonales que se producen cotidianamente.

Por lo expuesto, en el presente caso se ha demostrado que los sumariados no motivaron suficiente y congruentemente su criterio por el cual se separaron de sus resoluciones y sentencias dictadas anteriormente en juicios similares, evidentemente no idénticos.

### 9.3 Sobre el error inexcusable

El numeral 1 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial impone como deber de las servidoras y servidores de la Función Judicial: *"Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución ... y la ley"*.

El numeral 2 del artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial impone como deber de las juezas y jueces *"Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente."*

En lo que corresponde al error inexcusable, tipificado en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, se debe considerar que para que un error de derecho pueda ser calificado como inexcusable, es condición tanto suficiente como necesaria que exista un precepto jurídico que siendo legítimo y estando vigente, contenga un mandato positivo o negativo que fuese claramente identificable, preciso y unívoco.

El error inexcusable es aquel no susceptible de interpretaciones jurídicas aceptables, como podría ser el del operador de justicia que se separe de toda interpretación admisible, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la argumentación jurídica.

Según lo descrito en el Diccionario Jurídico de Cabanellas se entiende como "Error" la *"Equivocación, yerro, desacierto. Concepto equivocado. Juicio inexacto o falso. Oposición, discordancia o discordancia entre nuestras ideas y la naturaleza de las cosas. Lo contrario de la verdad. (...) Acción inconveniente, perjudicial o desacertada (...)"* y define "Inexcusable" como *"Carente de excusa o justificación. Imperdonable. De cumplimiento absolutamente obligatorio"*,



señalándose que la figura de error inexcusable es el "error o desacierto o concepto equivocado que carece de excusa o justificación y que resultaría imperdonable".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, dentro de la sentencia del 05 de agosto del 2008 manifestó: "(...) el error judicial inexcusable ha sido entendido como aquel que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables, lo cual le confiere del carácter de falta grave que amerita la máxima sanción disciplinaria, esto es, la destitución." Señala además, que: "...se trata de un concepto jurídico indeterminado o indefinido, por lo cual se requiere en cada asunto particular ponderar la actitud de un juez normal y de acuerdo a ello y a las características propias de la cultura jurídica del país, establecer el carácter de inexcusable de actuación del funcionario judicial (...)"

Asimismo, se considera lo resuelto en el expediente MOT-085-UCD-012-MEP en el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó: "El error judicial, por su propia naturaleza, es atribuible al juzgador más que a cualquier otro servidor judicial. Por otra parte, el error judicial, en sentido estricto se produce exclusivamente cuando se lo comete en un acto formal de la administración de justicia. Para que se configure el error inexcusable, es necesario que una norma jurídica legítima que a su vez contenga una obligación clara, inequívoca y prescriptiva y que el juzgador conociéndola y teniendo la obligación jurídica de conocerla, actúa de forma abiertamente contraria, sin motivar satisfactoriamente dicho desacato."

Lo anterior concuerda con lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente disciplinario No. MOT-620-UCD-011-PM, en el cual se consideró lo siguiente: "Es importante señalar que el error judicial, en sentido estricto, se produce exclusivamente cuando el mismo se comete en un acto formal y materialmente jurisdiccional, que a su vez, puede ser de iure o de facto. El de iure se produce cuando el juzgador se aparta considerablemente de las reglas que para el efecto se establecen en los ordenamientos jurídicos, o bien, cuando dicta una resolución contraviniendo, de cualquier forma, una o varias normas jurídicas vigentes. En cuanto al error judicial de facto se produce cuando el juzgador cambia los hechos materia de la litis, o altera cualquier otro hecho relacionado con las actuaciones del juicio."

El artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial consagra el principio dispositivo, en virtud del cual todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y los jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley, la cual concuerda con lo dispuesto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis.

Por otra parte, el segundo inciso del artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que los jueces no podrán ir más allá del pectorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

La Corte Suprema de Justicia, mediante resolución No. 466-98, publicada en el Registro Oficial No. 45 de 13 de octubre de 1998, señaló: "TERCERO.- El artículo 277 (273) del Código de Procedimiento Civil dispone: 'La sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis y los incidentes que, originados durante el juicio, hubieren podido reservarse sin causar gravamen a las partes, para resolverlos en ella. Esta disposición impone al Juez el deber de estudiar en su sentencia tanto las pretensiones deducidas en la demanda como las contrapretensiones expuestas en la contestación o ella, siguiendo un orden lógico...'"

En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación dictada el 25 de enero de 2007 por la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil, publicada en la Gaceta Judicial Año CVIII, Serie XVII, No. 3, página 884, señaló: "...que el principio de congruencia o armonía del fallo se contraría a la necesidad de que se encuentre en consonancia con las pretensiones deducidas por el demandante en la demanda, o en las oportunidades que la ley le ofrece para proponerlas; y con las

*excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido invocadas por el demandado, si no se autoriza su declaración oficiosa. O sea que el juez en su sentencia tiene que pronunciarse sobre todo lo que se ha pedido por los litigantes y solamente sobre lo demandado; pero, además, su decisión no puede fundarse sobre hechos que no están en debate...”*

Murcia Ballén es citado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en sentencia que corresponde al proceso No. 549.2010, publicada en la Gaceta Judicial Serie XVIII, No. 11, página 4207, en la cual se señala: *“... por virtud del carácter extraordinario de la casación, no puede revisar la sentencia por aspectos que el recurrente no señale, ni por cargos ni infracciones que este no denuncie, a ello (a la Corte) no le es permitido aniquilar el fallo oficiosamente cuando este resulte violatorio de normas sustanciales, las cuales sin embargo no se han citado como quebrantadas en la sentencia.”*

En el presente caso, el recurso de casación planteado por Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A., se fundamentó en las causales primera, segunda y cuarta del artículo 3 de la Codificación de la Ley de Casación, sin embargo, los servidores sumariados en el literal a) del considerando cuarto de la sentencia de 18 de julio de 2013, (fs. 93 vta.) manifestaron: *“... erróneamente lo fundamenta en el numeral 1ro. del Art. 3 de la Ley de Casación, por cuanto estaría más encasillada en la causal 5ta. del referido artículo, pero que esta Sala ha sido laxa en aceptar dicha equivocación y en casos iguales ha procedido a conocer sobre el fondo de la impugnación...”*

De lo anterior se concluye que los sumariados procedieron contraviniendo lo dispuesto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, conducta que se agudiza considerando que la casación no es una instancia, sino un recurso extraordinario que procede contra las sentencias o autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo, es decir, que no admite que el examen del recurso sea por causal distinta a la propuesta por el recurrente.

Aún más, la observación antes expuesta comporta más atención tratándose de servidores judiciales de la Corte Nacional de Justicia, el más elevado Tribunal de Justicia del país, que actúa como Corte de Casación, cuyas ejecutorias deben estar investidas de la mayor rigurosidad ante el mandato de la ley, resultando inaceptable la afirmación de los sumariados, en el numeral cuarto de los considerandos de la sentencia: *“... A) En relación a la causa esgrimida como “falta de motivación”, por no resolver todos los puntos de la litis y no pronunciarse sobre las pruebas, como lo exige el literal 1) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República (Arts. 24 numeral 13 de la Constitución Política de 1998, aplicable al año del litigio), en concordancia con el Art. 273 del Código Tributario y 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual por sus efectos de nulidad debe ser afrontado en primer término y que erróneamente lo fundamenta en el numeral 1ro. del Art. 3 de la Ley de Casación, por cuanto estaría más encasillada en la causal 5ta. del referido artículo, pero que esta Sala ha sido laxa en aceptar dicha equivocación y en casos iguales ha procedido a conocer sobre el fondo de la impugnación.”* (La negrilla es nuestra).

Los sumariados de manera oficiosa resolvieron el recurso de casación fundamentándose en causales distintas a las alegadas por Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A., lo que a todas luces constituye un proceder abiertamente contrario a lo dispuesto en los artículos 19 y 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil.

#### 9.4 Sobre la valoración de pruebas

El carácter extraordinario del recurso de casación determina que únicamente el juez a quo puede valorar la prueba y los jueces que ejercen el control de legalidad están obligados a atenerse a dicha apreciación. El artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que la casación no constituye instancia ni grado de los procesos, sino recurso extraordinario de control de la legalidad.

A lo antes expuesto se agrega el hecho de que los jueces sumariados se excedieron en sus competencias, previstas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Codificación de la Ley de Casación, al haber valorado prueba, cuando en el considerando cuarto de la sentencia de mayoría, establecieron lo siguiente:

*"C) De la revisión exhaustiva de la sentencia, se puede colegir que, efectivamente no se ha hecho un pronunciamiento expreso sobre algunas de las Glosas, por cuanto el criterio vertido por las anteriormente señaladas, es el que utiliza la sentencia recurrida para desechar la impugnación de todas las demás". En base a dicho criterio, en el literal D) del mismo considerando de la sentencia, los jueces sumariados manifestaron: "Sobre la Glosa III.2.7 'intereses y comisiones del exterior', sobre la cual tampoco hay pronunciamiento expreso de la Sala A quo, resulta obvio, porque así lo requería la Ley de Contratación Pública, que la contratista con el Estado debía rendir las garantías en ella prevista lo cual tiene un costo, habiendo demostrado con la documentación pertinente que, la fórmula de cálculo para el pago de comisiones debía realizarse neto de impuestos, por lo que debió realizar un doble cálculo, lo cual no perjudica los intereses del Estado, por lo que procede dar de baja la mentada glosa."*

De conformidad con la amplia jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, la formación de la convicción sobre los hechos objeto del debate procesal está atribuida al órgano jurisdiccional que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido el ejercicio de dicha facultad, puesto que la errónea valoración de la prueba ha sido excluida del recurso de casación. Es por esta razón que la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación determina, de forma restrictiva, que el recurso de casación sólo podrá fundarse en la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación exclusivamente de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.

Precisamente en relación a lo anterior, conforme fallo que corresponde al proceso de casación No. 668, publicado en el Registro Oficial No. 70 de 28 de abril de 2013, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia señaló: *"QUINTO.- ... Por la naturaleza del recurso no corresponde a la Sala de Casación efectuar nuevo examen del proceso, en los hechos y en el derecho, sino únicamente efectuar una comparación de la sentencia con la norma que se dice ha sido violada, a fin de determinar si el precepto legal ha sido acertadamente aplicado. No puede hacerse nueva valoración de la prueba, como tampoco juzgar los medios intelectivos que condujeron a la formación de la convicción del Tribunal juzgador."*

Los servidores judiciales sumariados valoraron la prueba como si se tratase del antiguo recurso de tercera instancia, aún cuando para el caso y en virtud de la causal cuarta alegada, no correspondía, conforme fallo de la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil ya citado, en el cual se menciona: *"Solo las causales segunda y tercera permiten restrictivamente (sic) entrar a analizar la prueba. Es la casación indirecta"*.

En consecuencia, al haber resuelto sobre una causal distinta a la propuesta en el recurso de casación, los servidores judiciales sumariados desnaturalizaron la esencia del recurso de casación, y a la vez, asumieron indebidamente la atribución de valorar prueba, facultad que no tenían en virtud de que la causal tercera del artículo 3 de la Codificación de la Ley de Casación no fue invocada por la parte recurrente ni analizada por los jueces sumariados.

## 10. PARTE RESOLUTIVA

En mérito a las consideraciones expuestas, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR UNANIMIDAD** resuelve:

**10.1** Declarar al doctor José Dionicio Suing Nagua, Juez de la Corte Nacional de Justicia, responsable de las infracciones de falta de motivación y error inexcusable, tipificadas en el numeral

8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, respectivamente.

10.2 Declarar al doctor Gustavo Adolfo Durango Vela, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, responsable de las infracciones de falta de motivación y error inexcusable, tipificadas en el numeral 8 del artículo 108 y en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, respectivamente.


10.3 De conformidad con el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, por existir concurrencia de infracciones, imponer al doctor José Dionicio Suñig Nagua la sanción de destitución de su cargo de Juez Nacional de la Corte Nacional de Justicia.

10.4 De conformidad con el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, por existir concurrencia de infracciones, imponer al doctor Gustavo Adolfo Durango Vela la sanción de destitución de su cargo de Conjuez Nacional de la Corte Nacional de Justicia.


10.5 Actúe la Secretaría de la Unidad de Control Disciplinario.

10.6 Notifíquese y cúmplase.

**CERTIFICO.-** Que en sesión de 20 de diciembre de 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura por unanimidad aprobó la presente resolución.

  
DR. ANDRÉS SEGOVIA SALCEDO  
SECRETARIO GENERAL  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Lo que comunico para los fines de Ley

  
Dra. María Aurora Coysago  
SECRETARIA AD-HOC DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO  
CONSEJO DE LA JUDICATURA



13 FEB. 2014



**SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1, QUITO:**

**NOSOTROS, Doctor**

**JOSE DIONICIO SUING NAGUA** ciudadano ecuatoriano, de cincuenta años de edad, casado, Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, domiciliado en esta ciudad de Quito; y, **Doctor GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA**, ciudadano ecuatoriano, de 60 años de edad, viudo, Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, domiciliado en esta ciudad de Quito; por nuestros propios personales y respectivos derechos; con toda consideración ante ustedes nos presentamos para deducir la siguiente **ACCION SUBJETIVA O DE PLENA JURISDICCION** contra la Resolución expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el 20 de diciembre de 2013, notificada el 23 de diciembre de 2013, en los términos que exponemos a continuación:

**PRIMERO: GENERALES DE LEY.-** Nuestros nombres, apellidos, el derecho por el que comparecemos y más generales de ley son los que dejamos expuestos en el párrafo introductorio.

**SEGUNDO: DEMANDADOS.-** 1) Proponemos la presente **acción subjetiva o de plena jurisdicción** en contra del **CONSEJO DE LA JUDICATURA**, órgano colegiado del organismo del mismo nombre, representado por su Presidente y representante legal, en los términos del art. 269.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, cargo actualmente desempeñado por el **DR. GUSTAVO JALKH ROBEN**; en razón que de conformidad con lo preceptuado en el art. 280.2 del mismo cuerpo legal, la representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo de la Judicatura, le

corresponde ejercer al Director o Directora General, se citará también a la Directora General, Abogada Doris Gallardo Cevallos, o a quien ejerza tal función; a los demandados se les citará en su despacho, en el edificio del Consejo de la Judicatura ubicado en la calle Jorge Washington E4-157 y Ave. Amazonas de esta ciudad de Quito, conocidas por el funcionario citador; y, 2) De acuerdo a lo previsto en el art. 6 de la Ley de la Procuraduría General del Estado, deberá también contarse con el doctor **DIEGO GARCIA CARRIÓN**, Procurador General del Estado, a quien se le citará en sus oficinas, ubicadas en la Avenida Amazonas N39-123 y Arízaga de esta misma ciudad de Quito, también conocida por el señor actuario.

**TERCERO: ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.-** Es la Resolución adoptada por unanimidad por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 20 de diciembre de 2013, dentro del Expediente Disciplinario N° D-0879-UCD-2013-ACS, notificada el 23 de diciembre de 2013, en el trámite del sumario administrativo instaurado en nuestra contra, por la que nos destituyen de los cargos de Juez titular y Conjuez titular, respectivamente, de la Corte Nacional de Justicia.

**CUARTO: ANTECEDENTES PERSONALES.-** Es necesario señores Jueces hacer una breve referencia de nuestros antecedentes profesionales y judiciales: **1. Doctor José Suing Nagua:** soy profesional del Derecho desde enero de 1991, año en que obtuve el título profesional de Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de la República en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiempo desde el cual he desempeñado varias funciones públicas y privadas con probidad, honradez y profesionalismo; me vinculé a la Corte Nacional de Justicia desde el mes de abril de 2009, en calidad de Conjuez, titularizado en julio de 2009 por

renuncia del Dr. Genaro Eguiguren Valdivieso, Juez titular en aquel entonces. Participé en el Concurso de Oposición y Merecimientos convocado por el Consejo de la Judicatura de Transición para integrar la Corte Nacional de Justicia, habiendo alcanzado una de las más altas calificaciones, obteniendo la designación de Juez Nacional, posesionado del cargo el 26 enero del 2012, para un periodo de nueve años, en los términos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial. Durante ese tiempo desempeñé las funciones de Juez de la Sala Contencioso Administrativo y de la Sala Contencioso Tributaria, de las cuales fui su presidente en los años 2013 y 2012, en ese orden, habiendo despachado no menos de 300 sentencias, solo en el periodo 2012 y 2013. Soy profesor universitario desde 1995 y actualmente docente de post grado en la Universidad Andina Simón Bolívar, desde el año 2006, como docente contratado, además de docente invitado en otras universidades del país, desde hace varios años. Autor de varias obras y artículos académicos en materia de derecho tributario y administrativo. En 22 años de ejercicio profesional y en mis actos públicos y privados he demostrado total responsabilidad, absoluta honradez y apego a la ley; jamás en mi desempeño profesional he sido ni siquiera llamado la atención por actuación alguna, por el contrario he recibido el aprecio y reconocimiento en todos los estamentos en los que me ha correspondido desenvolverme; 2.

**Doctor Gustavo Durango Vela:** Desde que fui estudiante de Derecho en la Universidad Central, me vinculé con la Administración de justicia, pues fui designado Ayudante de Abogacía en la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo en 1975, fui ascendiendo hasta Secretario Relator. Mi tesis doctoral se tituló "El procedimiento Contencioso Administrativo en el Ecuador" (el Tribunal calificador sugirió su publicación en Anales de la Universidad). Fui nombrado Conjuez de ese Tribunal desde que salí en 1985 hasta que me vinculé a la Corte Suprema de Justicia, como

Conjuez del Magistrado Alfredo Contreras en el año 2004, luego como Asesor del Presidente de la Corte Nacional Dr. José Vicente Troya. Gracias a un concurso público, ejercí como Vocal Suplente del Consejo de la Judicatura, y Conjuez de la Corte Nacional desde el 2008. Participé en el Concurso de Oposición y Merecimientos para la Elección de jueces nacionales, alcanzando el puesto 21 (pese a la calificación de 3/10 en la entrevista personal, observado por el Dr. Baltasar Garzón), sin embargo y por el tema de “género” fui desplazado a primer conjuez. Por excusa de integrar la Sala del Presidente de la Corte, fui titularizado en el Despacho de todas las causas en la Sala Contencioso Tributaria desde el 1 de marzo de 2012. Adicionalmente, he sido por 32 años profesor de “Derecho Tributario” en la Universidad Central del Ecuador, profesor de “Derecho Material Tributario” en post grado de la Universidad Andina Simón Bolívar. He publicado dos obras sobre la materia: “Legislación Sustantiva Tributaria Ecuatoriana” y “El Recurso de Casación en Materia Tributaria Ecuatoriana”. Últimamente fui escogido por la Escuela Judicial, para impartir conocimientos sobre tributación a los postulantes a notarios en Quito, Guayaquil y Cuenca (9,5 en la evaluación hecha por ellos). En estos 34 años de ejercicio profesional y en mis actos públicos y privados he demostrado total responsabilidad, absoluta honradez y apego a la ley; jamás en mi desempeño profesional en la cátedra universitaria o como funcionario judicial he sido ni siquiera llamado la atención por actuación alguna, por el contrario he recibido el aprecio y reconocimiento en todos los estamentos en los que me ha correspondido desenvolverme.

**QUINTO: RELACION DE LOS HECHOS.-** La relación circunstanciada de los hechos es como sigue:



**5.1. Expedición del fallo cuya glosa se cuestiona:** Observando el proceso interno de sorteo de causas en las Salas de la Corte Nacional de Justicia, la N° 497-2010, seguida por la empresa Oleoductos de Crudos Pesados del Ecuador S.A., contra el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, le correspondió al compareciente Doctor Gustavo Durango Vela preparar el proyecto de sentencia, como Juez ponente; luego de más de ocho meses de estudio, discusiones continuas entre los integrantes de la Sala y el análisis de más de siete mil fojas del expediente de instancia y de casación, con voto salvado de la Dra. Tatiana Pérez, también integrante de la Sala, el 18 de julio de 2013 se emitió sentencia de mayoría, y la aclaración a la misma el 12 de septiembre de 2013. Dentro del trámite interno de discusión y elaboración del pronunciamiento, el proyecto tuvo una primera versión en el mes de octubre del 2012; luego, ante las dudas que suscitaba la temática relacionada con la glosa por subcapitalización levantada por la Administración Tributaria, uno de los temas en discusión del caso, el Ponente del proyecto, lo presenta reformulado el 17 de febrero de 2013, proyecto al que el compareciente Doctor José Suñig Nagua se adhiere el 23 de febrero de 2013; posteriormente lo hace la tercera integrante de la Sala la Dra. Pérez, el 18 de marzo de 2013, sin observaciones ni objeciones, con lo cual existe ya un proyecto, en este caso de consenso, **UNÁNIME**, fecha a partir de la cual, conforme al procedimiento interno de la Sala, el proyecto se pasa a limpio y la Secretaría de la Sala procede a recepcionar las firmas, hecho así ocurrido, lo cual se puede cotejar con el registro de dicho proceso interno que se agregó al expediente del sumario administrativo, por lo que para los primeros días del mes de abril, ya existía sentencia, la cual debía ser notificada, gestión interna que escapa al control individual de cada juez, dada la elevada carga procesal de cada despacho; sin embargo ello no había ocurrido y recién fue notificada en la fecha antes indicada, pero con el voto salvado de la tercera integrante,

quién luego de suscribir su conformidad con el proyecto, se apartó del criterio de mayoría y emitió VOTO SALVADO.

**5.2. Inexistencia de precedente jurisprudencial obligatorio y la jurisprudencia obligatoria:** Mientras se encuentra en circulación el proyecto de sentencia, la presidenta de la Sala, Dra. Pérez, el 25 de febrero de 2013, presenta al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, informe encaminado a elevar a precedente jurisprudencial obligatorio por la reiteración de fallos, el tema de la subcapitalización, en base a pronunciamientos que se habían expedido al respecto. Tal informe es conocido por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de seis de marzo de 2013, en la que luego de las deliberaciones del caso, se solicita a la Presidenta de la Sala, reformular el informe, previo acuerdo con los integrantes de la Sala, hecho que no se había dado en la preparación del primer informe; el segundo informe es nuevamente tratado por el Pleno de la Corte en sesión de cinco de junio de 2013, sesión en la que la Presidenta de la Sala decide retirar el informe por falta de acuerdo entre los integrantes de la misma. Consiguientemente, a la fecha en la que se expide la sentencia del caso en cuestión, causa 497-2010, no existe precedente obligatorio en los términos previstos en el art. 185 de la Constitución de la República, cuyo texto expresamente señala: "**Art. 185.-** *Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que esta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria. La jueza o juez ponente para cada sentencia será designado mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para cambiar*

*el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la sala.*". salvo claro está, los fallos reiterados sobre el tema, que a la luz del art. 19 de la Ley de Casación, puede considerarse jurisprudencia obligatoria para los juzgadores de instancia, pero que de manera expresa, por disposición de dicha norma, no aplica para la Corte Nacional de Justicia.

**5.3. Denuncia del Director del SRI, suspensión e inicio del sumario:** El Director del Servicio de Rentas Internas, el 19 de septiembre de 2013, en rueda de prensa que es reseñada el 20 de septiembre de 2013 de diversas maneras por medios de comunicación escritos y televisivos, denuncia un posible perjuicio al Estado por la emisión de la sentencia de mayoría en la causa 497-2010; en la misma rueda de prensa anuncia que presentará una queja en nuestra contra como autores del fallo de mayoría, que interpondrá una acción extraordinaria de protección en contra del fallo para ante la Corte Constitucional, y que estudia la posibilidad de plantear acciones penales también en nuestra contra. El 23 de septiembre de 2013, el Presidente del Consejo de la Judicatura, en base a la **denuncia** presentada por el Director del SRI, instaura el trámite de suspensión provisional No. S-0085-UCD-013-ACS, por el cual, en efecto nos suspende en forma provisional del ejercicio de la judicatura con derecho a remuneración, en base a lo previsto en el art. 269.5 del Código Orgánico de la Función Judicial y 11 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, suspensión que nos es notificada el 24 de septiembre de 2013, fecha desde la que dejamos de ejercer funciones jurisdiccionales. Frente a la fulminante suspensión de la que fuimos objeto, fundada únicamente en la denuncia presentada por UNA parte del litigio, sin justificación ni prueba, salvo sus

aseveraciones, en nuestras contestaciones al sumario expusimos nuestros argumentos que refutan la decisión del Presidente del Consejo, en conocimiento de que de dicha decisión, no cabe recurso alguno, en los términos expuestos en el aludido Reglamento disciplinario. Con la misma fecha, 23 de septiembre de 2013, el Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, en base a la **“denuncia”** (hacemos notar que según los antecedentes de la resolución por la que nos destituye el Consejo de la Judicatura, que por esta acción cuestionamos su legalidad y legitimidad, lo que presentó el Director del Servicio de Rentas Internas fue una **“queja”**, no refiere a la **“denuncia”** que en cambio se menciona tanto en la resolución de suspensión como en la de inicio del sumario instaurado en nuestra contra, copia de la cual se acompañó a la notificación con el inicio del sumario) presentada por el Director General del Servicio de Rentas Internas, señor Carlos Marx Carrasco Vicuña, inicia el expediente disciplinario en nuestra contra, signado con el No. 0879 –UDC-013-ACS. Los argumentos esgrimidos por el Director del Servicio de Rentas Internas, en resumen, son que en el recurso de casación No. 497-2010, en el fallo de mayoría suscrito por nosotros, **“inmotivadamente”** nos hemos apartado de **“antecedentes jurisprudenciales”** emitidos por la Sala Especializada de la Corte Nacional en **casos similares**, incurriendo, según el Director del SRI, en **falta de motivación y error inexcusable**, faltas disciplinarias grave y gravísima, tipificadas en los artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, al no haber aplicado el mencionado antecedente, con lo que habríamos vulnerado el art. 17 del Código Tributario y 19 de la Ley de Casación; nos acusa además de haber **violado derechos constitucionales del Servicio de Rentas Internas como es la seguridad jurídica y el debido proceso**; solicita nuestra suspensión inmediata y nuestra destitución, alegando que con la sentencia supuestamente causamos un



perjuicio a la recaudación estatal por más de 252 millones de dólares. El Director del Servicio de Rentas Internas, luego de conocer de nuestra destitución, en pronunciamiento público reseñado en la prensa, vuelve a insinuar la posibilidad de un enjuiciamiento penal, dejando entrever que existen “irregularidades en la emisión del fallo”, las cuales negamos enfáticamente que existan, ya que se trata de una sentencia emitida conforme a derecho, excepto para quien no tiene razón, como lo sostiene el Doctor Jorge Zavala Egas, en su editorial del Diario El Comercio de 16-1-2014, *“No es verosímil que exista una opinión, académicamente calificada, que no coincida en que el fallo judicial fue jurídico y, por tanto, nula la resolución ilegal.”*

**5.4. Tramitación del sumario y resolución del Consejo:** En la sustanciación del sumario, a cargo del Coordinador (e) de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, dicho funcionario, en providencia de 8 de octubre de 2013, las 11h01, provee las pruebas que fueron enunciadas en nuestras respectivas contestaciones a la denuncia, rechazando la reproducción del auto y demás providencias expedidas por nosotros conjuntamente con el doctor Javier Cordero Ordóñez en la causa No 608-2010, seguido por Exportadora Bananera Noboa contra el Servicio de Rentas Internas, que tenía como único propósito evidenciar la probidad e idoneidad de nuestras actuaciones como Jueces Nacionales, las cuales fueron públicamente reconocidas por el propio Econ. Carlos Marx Carrasco como se expuso en la contestación al sumario, petición que fue negada; el pedido de revocatoria también se la niega con el argumento de que *“De conformidad a lo que disponen los incisos tercero y quinto del artículo 28 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, la autoridad tiene la potestad de calificar la pertinencia de la prueba... las*

*sentencias (SIC) que se han dictado en el proceso No. 608-2010 no guardan relación con este sumario disciplinario...”; hacemos notar que no se había solicitado la reproducción de “sentencias”, pues ni siquiera hubo sentencia en dicho recurso, sino un auto que negó a trámite el recurso de casación, sin embargo el hecho evidencia, la ligereza de la actuación del funcionario sustanciador que como tal no tiene atribución para “calificar la pertinencia de la prueba”, pues tal calificación corresponde al órgano con facultad resolutoria, es decir al Consejo de la Judicatura. Pero además, con fundamento en el artículo 76.7, c) de la Constitución de la República, también por petición separada, solicitamos ser escuchados en el seno del Consejo de la Judicatura, a efectos de exponer verbalmente nuestra defensa y las razones para haber expedido el fallo en los términos en los que se hizo, una de cuyas glosas fue objeto del cuestionamiento del Director General del Servicio de Rentas Internas, pero el Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, en providencia de 31 de octubre de 2013, a las 15h059 niega tal petición con el argumento de que “...el presente expediente tiene el carácter de sumario administrativo y se lo realiza en base a la normativa prevista tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial, así como en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, previamente establecidas para este tipo de trámites, en las que no se encuentra contemplada la figura jurídica denominada “audiencia de estrados””; luego los pedidos de revocatoria los niega en función de que “...el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura no contempla la posibilidad de que los sujetos del procedimiento administrativo recurran de las providencias que no ponen fin al sumario administrativo” (providencia de 14 de noviembre de 2013, las 14h20); esta actuación del Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario es ilegal en tanto, primero, jamás solicitamos “audiencia de*

estrados" sino el ejercicio de nuestro derecho constitucional a ser escuchados previsto en el art. 76.7,c), cuyo texto expresamente señala: "Art. 76.- *En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:* 7. *El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:* c) **Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.**", norma que por la aplicación directa de la Constitución es de obligatorio cumplimiento por parte de cualquier autoridad administrativa o judicial, en cualquier clase de proceso; y segundo, porque en providencia anterior, de 29 de octubre de 2013, las 16h00, el propio Coordinador dispone la remisión del expediente para su correspondiente resolución al Pleno del Consejo, por lo que la negativa a los pedidos de ser escuchados por el Pleno del Consejo y la negativa de su revocatoria, la expidió el funcionario sustanciador, sin competencia, que ya la había perdido al agotarse la sustanciación del sumario, porque además, las peticiones de ser escuchados fueron dirigidas al Presidente y a los miembros del Consejo de la Judicatura quienes tienen la facultad INDELEGABLE de resolver, no al funcionario sustanciador; con tales actuaciones el funcionario sustanciador vulnera el PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, por volver a actuar, sin competencia para ello, pues ya había agotado el trámite de sustanciación del expediente sumario. Finalmente, el 20 de diciembre de 2013, las 11h01, el Consejo de la Judicatura, sin habernos dado la oportunidad de ser escuchados, en flagrante vulneración de nuestro derecho de defensa, expide la resolución por la que nos impone la sanción de destitución de los cargos de Juez Nacional y Conjuez Nacional que legítimamente ostentábamos.

5.5. Como consecuencia de los hechos relatados, de manera abrupta e ilegal nos encontramos sin trabajo, único medio de sustento personal y familiar;

afectaron nuestra dignidad personal y familiar, al poner en entredicho nuestro accionar como jueces, con simples declaraciones y afirmaciones de un funcionario que es PARTE PROCESAL, sin pruebas que lo sustenten; ello provocó afectación familiar, fruto de las declaraciones públicas de las autoridades del SRI y del Consejo de la Judicatura, luego de la resolución de destitución adoptada. Consiguientemente, por estas actuaciones del órgano de administración y gobierno de la Función judicial también se afectó nuestro buen nombre que queda en entredicho, pese a que la denuncia y el sumario no hacen relación a ninguna conducta que esté reñida con la ética, salvo la supuesta falta de motivación y el presunto error inexcusable que ha sido determinado por el Consejo en los términos que dejamos expuestos.

**SEXTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO.-** El Ecuador es definido por el art. 1 de la Constitución de la República, como un “*Estado constitucional de derechos y justicia*”, lo cual implica que todo acto o norma debe fundamentarse absolutamente en los principios y garantías señalados en ella. Así mismo, la propia Constitución prevé que el principal deber del Estado es el de respetar y hacer respetar las normas constitucionales y demás normas jurídicas que protegen los derechos de sus ciudadanos, principios que deben cumplir todos los órganos del poder público; ello se desprende de lo previsto en los arts. 3, 11, 75, 76 y otros de la Constitución que reiteran que el Estado garantizará a todos sus habitantes sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y goce de sus derechos y que adoptará medidas para el efectivo goce de los mismos; igualmente, contempla la aplicación directa de sus disposiciones, con lo que remarca su fuerza normativa.

Un acto de autoridad pública es ilegítimo – dice la Resolución Obligatoria de la Corte Suprema de Justicia, (Registro Oficial No 559 de 19 de abril de



2002) -, cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o sin observar los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico o cuando su contenido es contrario a dicho ordenamiento, o ha sido dictado arbitrariamente, esto es, sin fundamento o suficiente motivación, y sin duda ello ha ocurrido al dictarse la Resolución S/N del Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 20 de diciembre de 2013, violaciones que nos causan evidente e irreparable daño.

**SÉPTIMO: NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE DESTITUCIÓN.-** Conforme lo señalado en el art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dos son las causas de nulidad de una resolución administrativa, la falta de competencia de la autoridad que lo dictó y la omisión de solemnidades sustanciales que rigen su emisión, y la Constitución del 2008, específicamente el numeral 7 del literal d del Art. 76, ha agregado como causa de nulidad la “falta de motivación” del acto impugnado. En el presente caso, señores jueces, se han dado las 3 causas de nulidad previstas en las normas referidas, vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que el Consejo de la Judicatura con la resolución de destitución, ha violentado ese ordenamiento jurídico, al vulnerar nuestros derechos fundamentales como el derecho subjetivo a la independencia judicial, máxima obligación que el Estado debe respetar, así como nuestro derecho al trabajo y a la honra también reconocidos de manera expresa por la Constitución; existe incompetencia del Consejo de la Judicatura para interpretar una decisión judicial, lo cual le está expresamente prohibido hacerlo; vicia de nulidad el sumario al no disponer el reconocimiento de la denuncia por parte del denunciante; vulnera nuestro derecho de defensa al no observar el debido proceso dejándonos en la indefensión; al no dar paso a pruebas sustanciales; luego, con la ilegal negativa a nuestro derecho

constitucional de ser escuchados por los integrantes del Consejo de la Judicatura y finalmente con la resolución de destitución, contradictoria e inmotivada en su contenido, como lo pasamos a demostrar:

**7.1. Vulneración del derecho a la independencia judicial y la incompetencia del Pleno del Consejo de la Judicatura para imponer una sanción como consecuencia de un fallo judicial:** El Consejo de la Judicatura con la resolución de destitución y el Presidente del Consejo con la decisión de suspensión provisional, han afectado gravemente los derechos de independencia interna y externa de los jueces consagrado en el artículo 168 de la Constitución de la República cuyo numeral 1, de manera clara consagra: *“La administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación de este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.”* (El subrayado nos pertenece). El Pleno del Consejo de la Judicatura ha violentado el principio de independencia judicial, por el cual los jueces de todo nivel, incluidos los del máximo órgano de la justicia ordinaria, la Corte Nacional de Justicia, deben resolver los asuntos sometidos a su decisión, sin ninguna presión, intromisión y menos amenazas de ninguna parte procesal, aunque una de ellas sea el propio Estado; tampoco cabe que un organismo administrativo y financiero como lo es el Consejo de la Judicatura, califique de “falta de motivación” y de “error inexcusable” al contenido de una sentencia expedida por un órgano judicial, basada en la interpretación de normas de derecho, que analizada en foros académicos, ha sido considerada total y absolutamente ajustada a la normativa legal.

Dar paso a una denuncia, sin que existan elementos que demuestren lo afirmado en ella, salvo el argumento de presuntamente habernos apartado de una línea jurisprudencial, que por lo demás, de modo expreso, se deja consignado en el fallo cuestionado por qué se lo hace, deja en evidencia la interferencia en la administración de justicia que pretendió y consiguió el Director del SRI. PARTE PROCESAL en el juicio en cuestión, que dio origen al Expediente Disciplinario y se lo materializa con la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, que concluye con la presunta identificación de conductas presuntamente reprochables, fruto de un análisis judicial, que le está vedado al órgano administrativo, por más órgano de gobierno y disciplinario que sea, ya que de lo contrario, equivaldría a establecer, al margen de la ley, un mecanismo administrativo de revisión de los fallos de jueces y tribunales, que no está previsto en ninguna disposición del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por el contrario, sobre este punto, el art. 115 inciso segundo del COFJ a la letra dispone que "*Asimismo, no se admitirá a trámite la queja o la denuncia si en ella se impugnan criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales.*" (El resaltado nos pertenece). Y es precisamente eso lo que hace el denunciante, impugnar criterios de interpretación jurídica. Haciendo caso omiso de esta expresa disposición legal, el Presidente del Consejo de la Judicatura dio paso a la denuncia, (queja, según los antecedentes de la resolución) nos suspendió en el ejercicio de nuestras funciones, dispuso la sustanciación del sumario y el Pleno del Consejo emitió la resolución de destitución que ahora impugnamos.

Los pronunciamientos que se materializan en las decisiones, primero del Presidente del Consejo, al suspenderos de las funciones que legítimamente desempeñábamos, sin que exista de por medio ninguna prueba de los

presuntos **hechos graves y urgentes** que lo justifiquen, pues acoge sin más los motivos que esgrimió el Director del SRI, sin prueba alguna; y, la Resolución del Consejo en Pleno por la que nos destituye, en base a análisis jurídicos del contenido de la sentencia, NO DE HECHOS, lo que es prohibido a un órgano administrativo, producto de lo cual encuentran que existe “falta de motivación” en el fallo por una supuesta contradicción entre los antecedentes y la decisión final, sin entender que en los antecedentes se menciona el concepto vertido por la Sala en casos sobre subcapitalización como un mecanismo de clarificación de qué es lo que se discute y por qué, en el caso, no aplica, mencionando de modo expreso las razones de por qué no se lo hace, dónde está entonces, la supuesta contradicción que permite aseverar la supuesta falta de motivación del fallo?. El Consejo encuentra también incongruencia entre la causal esgrimida por la OCP (otra de las partes del Recurso de Casación N° 497-2010) al proponer el recurso de casación y la utilizada por la sentencia dictada por el Tribunal de Casación, lo que evidencia que lo que hace el órgano administrativo es analizar el contenido de una decisión judicial, lo cual, reitero, le está expresamente prohibido, por no tener jurisdicción y menos COMPETENCIA para ello, y porque no existe esta suerte de recurso administrativo que ha conseguido el Director del SRI, puesto que, de aceptar como válida la decisión de destitución, estaría consagrándose en la práctica, el actuar flagrantemente ilegal del órgano de administración y gobierno de la Función Judicial como es el Consejo de la Judicatura y el atropello a la independencia externa (al aceptar como válida sin prueba que lo demuestre lo afirmado por una de las partes en litigio, el SRI) e interna de los jueces (con el análisis jurídico de la decisión judicial por parte del órgano administrativo), que prevé la Constitución.



Es necesario recalcar que resulta contradictorio el análisis realizado por el Consejo de la Judicatura en su resolución, ya que para destituirmos no utiliza los argumentos esgrimidos por el Director del SRI en su denuncia (queja?), incurriendo en manifiesta contradicción, que aunque los menciona en los antecedentes de la resolución, nada dice en la parte considerativa por ejemplo, que el Director del SRI nos acusa de error inexcusable por supuestamente no aplicar el art. 17 del Código Tributario y no observar la línea jurisprudencial que sobre subcapitalización habíamos sostenido en otros fallos en los que se dio la razón a la Administración Tributaria, lo que habría producido la violación del art. 19 de la Ley de Casación que no aplica para los Jueces de la Corte Nacional; el SRI no nos acusa de aplicar una causal no esgrimida por el recurrente que es el fundamento del CONSEJO DE LA JUDICATURA en su resolución de destitución. Además, negamos rotundamente que ello haya ocurrido; ni siquiera la Corte Constitucional lo establece en la sentencia que deja sin efecto la dictada por nosotros en la causa 497-2010, sentencia de la Corte Constitucional que fue emitida con fecha posterior a la resolución de destitución adoptada por el Consejo de la Judicatura (26 de diciembre de 2013), por lo que mal pudo servir de antecedente para la decisión del Consejo, (la deja sin efecto por una supuesta falta de motivación que, conforme el art. 108.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, es falta grave sancionada con suspensión, siempre que dicha conducta haya sido reiterada y de ello no se nos acusa por parte del Director del SRI, en los términos requeridos por la norma legal referida. Nada dice la Corte Constitucional del error inexcusable que si encuentra el Consejo de la Judicatura), sin embargo el órgano administrativo y de control disciplinario, haciendo un análisis jurídico de una parte de la sentencia, LA GLOSA POR SUBCAPITALIZACIÓN (tema ni disciplinario ni de conducta, sino estrictamente jurídico, de interpretación de normas de derecho) encuentra las

presuntas deficiencias, lo califica de error inexcusable y por ello nos sanciona con la destitución, en una flagrante vulneración de nuestro derecho subjetivo a la independencia judicial, por nuestra calidad de Jueces que legítimamente ostentábamos, sentando un precedente negativo en la administración de justicia ecuatoriana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en múltiples fallos, resalta la necesidad de la división de poderes, en la que sobresale la independencia judicial. Así en la sentencia del caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana, Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia de 23 de agosto de 2013, al tratar de los estándares generales sobre independencia judicial señala “144. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. En el caso *Reverón Trujillo vs Venezuela*, la Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del poder judicial, lo cual, la Corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial”. El Tribunal reiteró que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de judicatura (en Adelante “Principios

Básicos”), las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo, y la garantía contra las presiones externas. 145. Entre los alcances de la inamovilidad relevantes para el presente caso, los Principios Básicos establecen que “la ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos” y que “se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que se cumpla la edad para la jubilación forzosa o expire el periodo para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto”. Además, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los jueces solo pueden ser removidos por faltas disciplinarias graves o incompetencia y acorde a procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley. Este Tribunal ha acogido los principios y ha afirmado que la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse independiente e imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. Ello es así toda vez que la libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias. 146. Respecto a la garantía contra presiones externas los Principios Básicos disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan “basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Así mismo dichos Principios establecen que “no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial”. 147. Ahora bien la garantía de estabilidad de los jueces en el cargo no es absoluta. El derecho internacional de los derechos humanos admite que los jueces sean destituidos por

conductas claramente reprochables. En su Observación General No. 32, el Comité de Derechos Humanos estableció que los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia. Así mismo, los Principios Básicos precisan lo siguiente sobre medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo: "17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. 18. Los jueces solo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando funciones". 148. Por otro lado, otros estándares diferencian entre las sanciones aplicables. Se insiste en que la garantía de inamovilidad implica que la destitución obedezca a conductas bastante graves, mientras que otras sanciones pueden contemplarse ante eventos como negligencia o impericia"<sup>1</sup>. Más adelante en el mismo fallo señala "Finalmente, la Corte ha señalado que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad. Así mismo, existe una relación directa entre la dimensión objetiva de la independencia judicial y el derecho de los jueces a acceder y

---

<sup>1</sup> Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Quintana Coello VS. Ecuador, págs. 45 y 46.



*permanecer en sus cargos en condiciones generales de igualdad, como expresión de su garantía de estabilidad.”<sup>2</sup> (Los resaltados nos pertenecen).*

Por todo lo expuesto, es absurdo, inconstitucional e ilegal, fuera de toda lógica, que el Consejo de la Judicatura sancione a un Juez por un criterio jurídico sobre un tema específico vertido en un fallo, por más que el “perjudicado” sea el Estado, todo lo cual hace concluir que dicho órgano administrativo y de gobierno de la Función Judicial NO ES COMPETENTE para sancionarnos por una decisión judicial, por lo que la resolución deviene en nula, de nulidad absoluta, máxime que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 de la Constitución de la República. “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”.

**7.2. Vulneración del debido proceso:** El debido proceso lo vulnera tanto el funcionario sustanciador, delegado por norma reglamentaria para sustanciar el sumario, lo cual ya es discutible pues la norma del art. 114 inciso final señala que en caso de denuncias en contra de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia, “...será el Pleno del Consejo de la Judicatura quien tramite los sumarios e imponga las sanciones correspondientes” (el resaltado nos corresponde), atribución respecto de la cual la norma no prevé delegación; también lo vulnera el propio Consejo de la Judicatura, al no dar paso al ejercicio pleno de nuestro derecho de defensa. El funcionario sustanciador, al negar nuestras pertinentes solicitudes de pruebas, encaminadas a demostrar nuestra absoluta probidad e idoneidad para el ejercicio de la judicatura, pues según la doctrina es esta probidad e idoneidad

lo que se cuestiona en el error inexcusable de un juez. Al respecto el Director del Servicio de Rentas Internas, reconoció públicamente nuestra probidad e idoneidad que se desprenden además de las resoluciones que el funcionario sustanciador ilegalmente impidió que se agreguen al expediente al negarnos la prueba, pese al pedido de revocatoria.

Por otra parte, tanto la decisión de suspensión, como la del inicio del sumario, se fundamentan en la “denuncia presentada por el Director del Servicio de Rentas Internas”; sin embargo, en la resolución de destitución del Consejo, en los antecedentes señalan “*Mediante oficio No. 0027802 de 19 de septiembre de 2013, el Servicio de Rentas Internas, a través de su Director General, Carlos Marx Carrasco, presentó una queja relacionada con la actuación de los doctores...*” (el resaltado nos corresponde); de lo relatado se evidencia, que tanto la suspensión como el sumario, se fundamentan en la **denuncia** que presenta el Director del SRI, la cual no cumplió con el mandato legal expreso de ser reconocida ante el funcionario encargado de tramitarla; el art. 113, inciso tercero del COFR, señala: “*Podrá presentar denuncia escrita, cualquier persona natural o jurídica, grupo de personas, pueblo o nacionalidad, que tenga interés directo en un juicio o servicio solicitado. Presentada la denuncia se reconocerá la firma ante el funcionario encargado de tramitarla.*” (el resaltado nos corresponde) ; sin embargo, del contenido de la resolución, transcrita en su parte pertinente, resulta que lo que el indicado funcionario ha presentado es una **queja**, figuras distintas que expresamente reconoce el COFJ en el art. 113, ya referido, con tratamiento, contenido sustancialmente distintos (por ejemplo, para la queja la ley no prevé requisitos que si lo hace para la denuncia); de expuesto, se colige que fuimos suspendidos y sumariados con base en una **denuncia**, que no cumple con los

---

<sup>2</sup> CIDH, caso referido, pág. 48

requisitos de ley ni fue reconocida, lo cual nulita el sumario, pero además, fuimos destituidos en base a una **queja**, por lo que, al no haber tenido acceso a la queja ni conocer el contenido de la misma, se vulneró nuestro derecho de defensa y el debido proceso, ya que durante todo el sumario desconocimos las razones de la queja a la que hace alusión expresa el antecedente de la resolución de destitución, como queda evidenciado. Adicionalmente, la resolución en ninguna parte hace referencia, en cambio a la denuncia que motivó tanto la suspensión, como el inicio del sumario, copias de la cual se nos acompañó junto con la notificación de inicio del sumario y en base a la cual formulamos nuestras contestaciones.

**7.3. Ilegal, contradictoria e inmotivada resolución de destitución:** De la lectura de la Resolución que impugnamos por ilegal, Apartado "9. CRITERIOS A CONSIDERARSE" se desprenden varios elementos a resaltar: a) Sobre la presunta falta de motivación sostiene: *"En cada una de las sentencias mencionadas, [las referidas por el Director General del SRI en su denuncia] agregadas al expediente disciplinario, existe motivación pertinente y suficiente, que concuerda con el análisis del juzgador, concluyendo en resoluciones coherentes con las consideraciones previas. Sin embargo, en el caso propuesto, [el 497-2010, objeto de la denuncia] materia del presente expediente, los sumariados no motivaron con suficiencia los criterios por los cuales se apartaron de los fallos que ellos mismo dictaron anteriormente, en casos similares."* (El subrayado nos corresponde). Más adelante concluye *"... en el presente caso se ha demostrado que los sumariados no motivaron suficiente y congruentemente su criterio por el cual se separaron de sus resoluciones y sentencias dictadas anteriormente en juicios similares, evidentemente no idénticos"*; (el subrayado nos pertenece); de lo transcrito se desprende que el Consejo arribó a la conclusión, no de **falta**

**de motivación** sino de **motivación insuficiente**, respecto de una glosa, no siquiera del fallo en su totalidad, sin que la autoridad administrativa señale de modo expreso, de qué manera ocurre tal insuficiencia, ni cómo se arriba a tal conclusión, con lo cual su resolución es carente de motivación, por consiguiente, nula, al tenor de la norma constitucional, art. 76.7.I); b) Respecto del error inexcusable, a la luz de los razonamientos del Consejo de la Judicatura, vertidos en la resolución que impugnamos, se entiende que *"...se debe considerar que para que un error de derecho pueda ser calificado como inexcusable, es condición tanto suficiente como necesaria que exista un precepto jurídico que siendo legítimo y estando vigente, contenga un mandato positivo o negativo que fuere claramente identificable, preciso y unívoco"*. (El subrayado nos pertenece). Luego expresa que *"El artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial consagra el principio dispositivo, en virtud del cual todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y los jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley, lo cual concuerda con lo dispuesto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis. Por otra parte, el segundo inciso del artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que los jueces no podrán ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes"*. Seguido, refiere a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en materia civil y al criterio vertido por Murcia Ballén, citado en un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Y sobre el caso en cuestión expresa *"En el presente caso, el recurso de casación planteado por Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A., se fundamentó en las causales primera, segunda y cuarta del artículo 3 de la Codificación*



de la Ley de Casación, sin embargo, los servidores sumariados en el literal a) del considerando cuarto de la sentencia de 18 de julio de 2013, (fs.93 vta.) manifestaron "...erróneamente lo fundamenta en el numeral 1ro., del Art. 3 de la Ley de Casación, por cuanto estaría más encasillada en la causal 5ta., del referido artículo, pero que esta Sala ha sido laxa en aceptar dicha equivocación y en casos iguales ha procedido a conocer sobre el fondo de la impugnación..." De lo anterior se concluye que los sumariados procedieron contraviniendo lo dispuesto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, conducta que se agudiza considerando que la casación no es una instancia sino un recurso extraordinario que procede contra las sentencias o autos que pongan fin a los procesos de conocimiento.... es decir que no se admite que el examen del recurso sea por causal distinta a la propuesta por el recurrente." (El subrayado nos pertenece); y, c) Sobre la valoración de pruebas en la Resolución se sostiene que "El carácter extraordinario del recurso de casación determina que únicamente el juez a quo puede valorar la prueba y que los jueces que ejercen control de legalidad están obligados a atenerse a dicha apreciación. El artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que la casación no constituye instancia ni grado de los procesos, sino recurso extraordinario de control de legalidad. A lo antes expuesto se agrega el hecho de que los jueces sumariados se excedieron en sus competencias, previstas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Codificación de la Ley de Casación, al haber valorado prueba", para lo cual se remite al contenido de la sentencia impugnada cuyo literal c) del considerando cuarto transcribe y concluye que "...asumieron indebidamente la atribución de valorar prueba, facultad que no tenían en virtud de que la causal tercera del artículo 3 de la Codificación de la Ley de Casación no fue invocada por la parte recurrente ni analizada por los jueces sumariados". Los razonamientos del Consejo de la Judicatura

vertidos en su resolución contienen flagrantes contradicciones que las señalamos de manera expresa: **i.** El proceso contencioso tributario, como lo ha reconocido en forma unánime la jurisprudencia de la Sala Especializada tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Nacional de Justicia, **no es un proceso dispositivo**, por el contrario, **es cuasi oficioso**, de allí que incluso, prevé la actuación de pruebas de oficio, luego de vencido el término probatorio, ordenadas a criterio del juzgador (art. 262 del Código Tributario), oficiosidad que también está consagrada en el art. 273 del Código Tributario que prevé de manera expresa, **el control de legalidad del fallo de instancia, de única instancia**, como es la que expiden las Salas de los tribunales distritales fiscales; estos elementos apartan al juicio contencioso tributario del principio dispositivo consagrado en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Orgánico de la Función Judicial, tomado como argumento central por el Consejo de la Judicatura en su resolución, para determinar la existencia del supuesto error inexcusable. Mal puede entonces acusarnos de error inexcusable por una norma que para la materia especializada de lo contencioso tributario, el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, es supletoria, y no cumple con la exigencia que el propio Consejo arguye como condición tanto suficiente como necesaria para que exista error inexcusable, cual es que *“exista un precepto jurídico que siendo legítimo y estando vigente, contenga un mandato positivo o negativo que fuere claramente identificable, preciso y unívoco”*, tales condiciones no cumple el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, al existir norma expresa en materia tributaria, la del art. 273 del Código Tributario, que es de obligada observancia por el juez especializado, de manera prioritaria, antes que la norma supletoria, conforme así se lo hace en la sentencia, una de cuyas glosas es cuestionada por el Director del SRI y que conduce a la resolución de destitución; **ii.** La conclusión a la que arriba el Consejo de la Judicatura de que *“los sumariados*

de manera oficiosa resolvieron el recurso de casación fundamentándose en causales distintas a las alegadas por Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A., lo que a todas luces constituye un proceder abiertamente contrario a dispuesto en los artículos 19 y 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia del Código de Procedimiento Civil" es errada por las consideraciones anotadas en el literal precedente, pero además porque no es que se resolvió por una causal distinta, pues lo que en la sentencia se deja sentado es que si bien el recurrente alega falta de motivación del fallo de instancia con base en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación y la falta de motivación correspondería más a la causal quinta del mismo artículo, la Sala, de manera reiterada, como en el caso en cuestión, **ha aceptado la falta de motivación fundada en la causal primera**; es decir, el recurrente fundó la falta de motivación de la sentencia de instancia en la causal primera del art. 3 de la ley de la materia, y en el fallo cuestionado se atendió dicha alegación de falta de motivación con base en la misma causal, **NEGANDO TAL ARGUMENTO DEL RECURRENTE**, así se expresa de forma clara en la parte final de la letra A) del considerando Cuarto de la sentencia: "*en consecuencia no porque los argumentos esgrimidos por el Tribunal A quo no son compartidos por una de las partes, puede sostenerse que la sentencia carece de motivación, como tampoco puede sostenerse que en una sentencia motivada, sus razonamientos sean conforme a Derecho, como así lo calificado esta Sala Especializada en casos similares, por lo mismo se rechaza la pretendida causal [la causal primera] esgrimida por el recurrente" (el resaltado nos pertenece); por tanto, **NO EXISTE FUNDAMENTACION EN CAUSAL DISTINTA A LA ALEGADA**, como equivocadamente argumenta el Consejo en la resolución que impugnamos, es más, la presunta aplicación de causal diferente, ni siquiera existe **PORQUE DICHA CAUSAL ALEGADA FUE EXPRESAMENTE***

**RECHAZADA**, pues si se lee todo el fallo cuestionado con prolijidad, se llegará a la conclusión que la única causal aceptada es la CUARTA, por haber omitido resolver todos los puntos de la litis, es decir, no decidir sobre todas las glosas cuestionadas. Lo que no se dice en la resolución cuestionada es que desde el año 1993, en que entró en vigencia el recurso extraordinario de casación en materia tributaria al amparo de la Ley de Casación, la Sala (en muchos casos para proteger los mal planteados recursos de casación del Servicio de Rentas Internas) ha tenido esa política, es decir, desde mucho antes de que nosotros fuésemos designados jueces; y, la explicación jurídica del por qué, la argumentó el Magistrado Dr. José Vicente Troya, pues consideró no solamente que se estaba denegando justicia por la sola omisión de una simple formalidad (Art. 169 de la Constitución), sino que en materia tributaria, en la fase contenciosa sólo existe una única y definitiva instancia. Ello es fácilmente demostrable con muchas sentencias que en ese sentido expidió la Sala y que solicitaremos su reproducción en el término respectivo, muchas de las cuales beneficiaron a la Administración Tributaria, que jamás argumentó su improcedencia. Además, existe una circunstancia que refuerza el argumento de aceptar la falta de motivación (error de derecho) al amparo de la causal primera del artículo 3 de la ley de Casación, -cuando se lo ha hecho así, pues en el caso 497-2010, como se deja expuesto, se rechazó de modo expreso la causal primera- es porque la causal quinta de modo expreso no habla de la falta de motivación, sino del incumplimiento de requisitos que debe contener la sentencia, porque no hay que olvidar que la Ley de Casación es un cuerpo normativo pre constituyente, expedida en 1993, por lo que mal puede ser argumento válido para sostener, como lo hace el Consejo de la Judicatura, que la falta de motivación se encasilla en la causal quinta, cuando la falta de motivación, con los efectos de nulidad únicamente está prevista a partir de la vigencia de la Constitución de 2008, por lo que cabe



perfectamente adecuar la falta de motivación en la causal primera, pues la falta de motivación es también un error de derecho, pero que en la sentencia que ha motivado nuestra ilegal destitución fue rechazado el recurso por no encontrar la falta de motivación argüida por el recurrente, tema que por lo demás, se encasilla en una discusión estrictamente jurídica, de aplicación de una norma de derecho, que no conlleva ninguna conducta ilícita o irregular del juzgador; **iii.** Lo más lamentable de todo esto es que este tema de la causal primera alegada por el recurrente en el caso 497-2010 y desechada de manera expresa en el fallo de mayoría, no es materia de la denuncia presentada por el Director del Servicio de Rentas Internas, por lo que el Consejo de la Judicatura **nos ha sancionado por una conducta que no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del denunciante y a la que arriba luego de un análisis jurídico del contenido de una decisión judicial**, lo cual le está vedado hacer a un órgano administrativo y disciplinario como es el Consejo de la Judicatura. Frente a la denuncia del Director del SRI, el Consejo debió advertir si existen o no tales conductas, **pero con base al contenido de la denuncia**, no buscar argumentos no denunciados e inexistentes, para justificar su ilegal decisión. El Consejo, con su decisión, incurre en flagrante contradicción, determinando como norma con la que habríamos cometido error inexcusable, el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, que para la materia contencioso tributaria es norma supletoria, es decir, aplicable, únicamente a falta de norma expresa, que en este caso, si existe, el art. 273 del Código Tributario, que es el que expresamente se aplicó, lo que vuelve inaplicable el art. 273 del CPC por su carácter de supletorio. Debemos ser reiterativos en manifestar que la denuncia presentada por el Econ. Carrasco, no tiene ninguna argumentación en este sentido, pues su argumentación era que, como error inexcusable, habríamos vulnerado el art. 17 del Código Tributario y 19 de la Ley de Casación sobre lo que nada se dice en la parte

considerativa de la Resolución cuya legitimidad y legalidad cuestionamos, por la evidencias que dejamos expuestas; es decir que el Consejo de la Judicatura se fundamentó para nuestra destitución, en un tema que no fue motivo de la denuncia y concluyó analizando el fondo jurídico de la sentencia, de un tema abordado en ella, UNA GLOSA, no de todo el fallo, cual si fuera un órgano administrativo con facultades jurisdiccionales, forzando argumentos en pro de justificar su ilegal decisión, encontrando un error inexcusable en un artículo del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria, y en una causal que expresamente fue rechazada; iv. Finalmente, respecto a la presunta valoración de prueba en la que habríamos incurrido, hay que señalar que la ausencia de valoración de prueba mediante el recurso de casación, no es absoluta, pues, por un lado, si la sentencia se declara nula por falta de motivación al tenor de lo previsto en el art. 76.7.1) de la Constitución, corresponde al juez de casación valorar prueba porque la sentencia declarada nula ya no existe (éste no es el caso, precisamente porque no se aceptó la causal primera) y para resolver, se lo hace “por los méritos del proceso”, como ha ocurrido en innúmeros fallos de la Sala; por otro lado, si se alega la causal tercera, (que tampoco es el caso porque no fue esgrimido por la empresa recurrente y que la Sala tampoco aplica en la sentencia cuestionada), también corresponde valorar prueba cuando la realizada por el tribunal de instancia resiente la lógica, conforme así lo ha establecido la Sala, también en forma reiterada, como lo demostraremos en el momento procesal oportuno; pero en el caso en cuestión, si lo que se determinó en el voto de mayoría es que “no existe en el fallo de instancia pronunciamiento expreso sobre algunas glosas”, es de simple lógica, la necesidad de que se realice un ejercicio de valoración de los elementos que obren de proceso sobre la glosa para decidir en consecuencia, porque precisamente el juzgador de instancia omitió hacerlo y los jueces, en cualquier instancia y recurso están para “administrar justicia”, sin sacrificarla

por la mera omisión de formalidades como lo exige la propia Constitución, de directa y obligatoria aplicación, pues si no se rompe el formalismo del que está revestida la casación, la gran sacrificada será la justicia. Este tema, como el de la presunta aplicación de una causal no alegada por el recurrente, tampoco fue materia de la denuncia formulada por parte del Director del SRI, por lo que el Pleno del Consejo de la Judicatura, realizando un análisis de una decisión judicial, que no le corresponde por ser órgano administrativo y disciplinario, no judicial, concluye, equivocadamente que hemos asumido indebidamente la atribución de valorar prueba, lo cual, si se analiza el texto íntegro de la sentencia, no solo partes de ella, tampoco se da, por lo que el Pleno del Consejo, incurre nuevamente en otra ilegalidad.

**7.4. Ilegal e inmotivada negativa a ser oído por el Pleno del Consejo de la Judicatura:** El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que *"Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil..."*. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 8 establece que *"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley"*; Así mismo, la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza: *"8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal*

*formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". El artículo 75 de la Constitución de la República dispone lo siguiente: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. El artículo 76 en sus numerales 1 y 7 literales a), b), c) y h) consagran: "Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes... 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones... h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes;"*

En el contenido de las normas de tratados internacionales y de la Constitución de la República transcritas, se enfatiza que las garantías básicas del debido proceso deben ser respetadas por cualquier autoridad pública, ya sea en el ámbito administrativo o judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido al debido proceso como aquellas "*condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial*"<sup>3</sup>; a efectos de

---

<sup>3</sup> Corte IDH. OC-9/87 "Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, 6 de octubre de 1987, párr. 28



*"que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos";<sup>4</sup> constituyendo un límite infranqueable a la discrecionalidad del poder público, en cualquier materia.<sup>5</sup>*

Tanto el funcionario sustanciador como el Pleno del Consejo de la Judicatura vulneran el debido proceso, al negarnos el derecho a exponer, ante los miembros del Consejo de la Judicatura las razones que motivaron la expedición del fallo con voto de mayoría: a) Del funcionario sustanciador, porque arrogándose atribuciones, niega el pedido, según él de "audiencia de estrados" con el baladí argumento de que no lo contempla la norma reglamentaria y porque tampoco, la misma norma prevé la apelación de providencias dentro del sumario, es decir que para su criterio, la norma reglamentaria, prevalece sobre la norma constitucional. Su intervención es ilegal y vicia el procedimiento, toda vez que nuestra petición, que jamás fue de "audiencia de estrados", fue con fundamento en el art. 76.7.c) de la Constitución, que garantiza el derecho a ser escuchado, en cualquier tiempo del proceso y en igualdad de condiciones y porque su actuación en la sustanciación del sumario ya había concluido, cuando declaró agotado su trámite y dispuso que pase a conocimiento del Consejo de la Judicatura para su decisión; además, de manera expresa en nuestras peticiones, dirigimos las solicitudes al Presidente y a los miembros del Consejo de la Judicatura, pues son ellos los que tienen la facultad para resolver el sumario, como en efecto lo hicieron, no se trataba entonces de una supuesta "apelación" de la que habla el

<sup>4</sup> Corte IDH. Caso Baena Ricardo. Sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 124. *"Al respecto, este Tribunal también ha señalado que "el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu" .*

<sup>5</sup> Corte IDH. Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Voto razonado de los Jueces Cançado y Pacheco, párr. 16 in fine, *"...la discrecionalidad del poder público, en cualquier materia, "tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos" y la "garantía del debido proceso" .*

funcionario sustanciador; b) Los integrantes del Consejo de la Judicatura, tampoco repararon en nuestras peticiones legítimas, las desatendieron y sin ella, se pronunciaron en la resolución que ahora impugnamos, vulnerando flagrantemente nuestro derecho al debido proceso, lo que vuelve ilegal lo resuelto, al vulnerarse, como consecuencia del irrespeto al debido proceso, nuestro derecho de defensa.

**OCTAVO: PRETENSIÓN CONCRETA.-** Con los antecedentes expuestos, amparados en los artículos 1, 3 y demás pertinentes de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y 217.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, en acción subjetiva o de plena jurisdicción, impugnamos la Resolución de destitución expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 20 de diciembre de 2013, notificada el 23 de diciembre de 2013, para que en sentencia y luego del trámite de ley, se declare su nulidad e invalidez jurídica, por falta de competencia del órgano administrativo y de gobierno de la Función Judicial que lo emitió analizando una decisión judicial que no le corresponde como órgano administrativo y la omisión de formalidades que rigen su emisión; alternatively, solicitamos se declare la ILEGALIDAD de dicho acto, pues sus antecedentes y fundamentos de derecho, son totalmente ajenos a la realidad y a la aplicación estricta del derecho; como consecuencia, se ordenará nuestra restitución a los cargos de Juez Nacional y Conjuez Nacional que legítimamente ostentábamos y al pago de las remuneraciones que dejamos de percibir por la ilegal destitución de la que fuimos objeto, así como el pago de los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más las bonificaciones de ley. Se reconocerán los intereses, a la tasa activa referencial vigente al momento en que se produzca el pago. Se dejará a salvo el derecho del Estado para repetir lo pagado a los autores del ilegítimo y nulo acto administrativo que impugnamos.

De no ser posible la restitución, se dispondrá el pago de la indemnización correspondiente.

**NOVENO: PRUEBAS.-** En el término de prueba respectivo actuaremos las pruebas documentales que corroboran los hechos relatados y las violaciones al ordenamiento jurídico provocadas por la ilegal resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura que impugnamos. Se agregarán pronunciamientos y publicaciones generadas en la opinión pública y en la academia como consecuencia de la ilegal decisión del Consejo de la Judicatura.

**DÉCIMO: CITACIÓN.-** A los demandados, señores: Dr. Gustavo Jalkh Roben, abogada Doris Gallardo Cevallos y Dr. Diego García Carrión, por los derechos que cada uno de ellos representa, según lo dicho en el acápite segundo de la presente demanda, se los citará en las Oficinas públicas de sus respectivos despachos, ubicados en las direcciones señaladas en el encabezado de esta demanda.

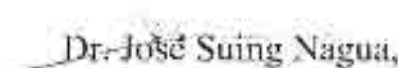
**DÉCIMO PRIMERO: CUANTÍA.-** Por la naturaleza de la causa y por expresa disposición del Art. 67 de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cuantía es indeterminada.


**DECIMO SEGUNDO: DOMICILIO.-** Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en el casillero judicial No. 3214 de la Sala de Sorteos del Palacio de Justicia de esta ciudad de Quito. Adicionalmente, para notificaciones electrónicas señalamos los correos electrónicos: [jdsuing@gmail.com](mailto:jdsuing@gmail.com); y, [gustavodurangovela@hotmail.com](mailto:gustavodurangovela@hotmail.com)

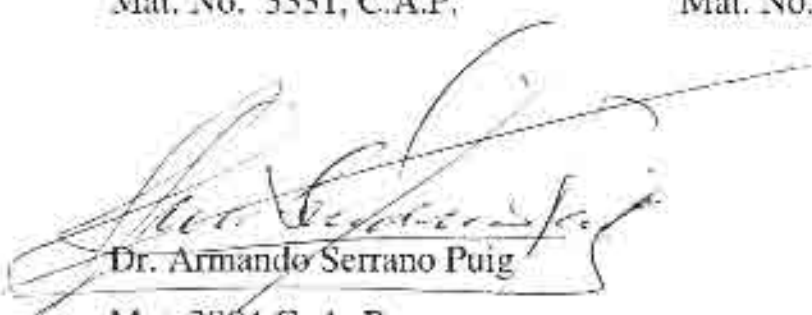
**DÉCIMO TERCERO: DOCUMENTOS.-** Acompañamos copias notariadas de la Resolución adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 20 de diciembre de 2013, dentro del Expediente Disciplinario N° D-0879-UCD-2013-ACS.

En su primera providencia dispondrá que la autoridad demandada remita al Tribunal copia íntegra del sumario administrativo instaurado, junto con la resolución de destitución cuya legitimidad y validez impugnamos.

Firmamos por nuestros propios derechos y acompañados de nuestros abogados patrocinadores, profesionales a quienes autorizamos para que de manera conjunta o individual presenten cuanto escrito sea necesario en defensa de nuestros legítimos derechos.

  
Dr. José Suñig Nagua,  
Mat. No. 3331, C.A.P.

  
Dr. Gustavo Durango Vela  
Mat. No. 1897, C. A. P.

  
Dr. Armando Serrano Puig  
Mat. 3904 C. A. P.



DEMANDA  
PABLO CORDERO

319 Terceros de Cuenca  
TCA

34

**SEÑORES JUECES DE LA SALA UNICA TRIBUNAL DISTRITAL NO. 3  
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN CUENCA.**

Nosotros: **JORGE ISAAC CALLE BELTRAN**, quien es ecuatoriano, de 66 años de edad, de estado civil casado, con cédula de ciudadanía No. 0100795780 domiciliado en la ciudad de Cuenca; **PABLO MARIANO CORDERO DIAZ**, ecuatoriano, de 57 años de edad, de estado civil casado, con cédula de ciudadanía No. 0101395721, domiciliado en la ciudad de Cuenca; y, **SONIA ALEJANDRINA QUEZADA QUEZADA**, de 46 años de edad, de estado civil casada, con cédula de ciudadanía No. 0102753316, domiciliada en la ciudad de Cuenca, comparecemos ante Ustedes y proponemos acción contencioso administrativa, para lo cual consignamos los presupuestos de admisibilidad pertinentes:

El órgano demandado, por ser el responsable de la resolución que produce la violación de derechos constitucionales y legales, es el Pleno del Consejo de la Judicatura del Ecuador, conformado por: el Dr. Gustavo Jalkh Röben, Presidente; y, en calidad de vocales, los Señores: Abogado Néstor Arbitro Chica, Dra. Tania Arias Manzano, Abogada Ana Karina Peralta Velásquez; y, el Ing. Civil Alejandro Subia Sandoval; así como también la acción va dirigida en contra de la representante legal del Consejo de la Judicatura, Economista Andrea Bravo por ser la Directora General.

De conformidad a lo previsto en el literal c) del Art. 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, hágase conocer de la presente acción al Sr. Director Distrital de la Procuraduría General del Estado en Cuenca.

La resolución administrativa que se impugna es expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la ciudad de Quito el 17 de septiembre del 2014 dentro del expediente disciplinario A -1054-SNCD-013-MBM, notificado el 19 de igual mes y año. La referida resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura impone a los comparecientes la sanción de destitución por considerar que nuestras actuaciones jurisdiccionales se encuentran afectadas de error inexcusable para lo cual se invoca el Art. 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Es necesario hacer presente que el primer compareciente Pablo Cordero Díaz, a la fecha de la destitución se encontraba en funciones, en tanto que los demás habíamos cesado el día 21 de mayo del 2013, pues teníamos la calidad de jueces interinos.-

**ANTECEDENTES**

El Dr. Washington Omar Obando Rosero con denuncia presentada en el mes de julio del año 2013 invocando la calidad de Apoderado del Abogado Xavier Amauri Sinaball Mosquera, Coordinador General Jurídico, Subrogante del

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pone en conocimiento del Consejo de la Judicatura hechos que en apreciación de su autor constituyen actuaciones jurisdiccionales afectadas de error inexcusable, que dicen, se producen dentro del juicio contencioso administrativo No. 286-2010 seguido por el Arq. Edgar Ugalde Noritz en contra del Presidente de la República, y de los Ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores, esto es de una de las funciones del Estado, la **Función Ejecutiva**, lo cual ocasiona que se inicie un sumario administrativo disciplinario en contra de los Doctores Alejandro Peralta Posantez, Hernán Monsalve Vintimilla, Pablo Cordero Díaz, Jorge Calle Beltrán, Sonia Quezada Q., Natalia Larriva Calle y Javier Cordero López, Jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en Cuenca.

En un primer momento, se inicia la acción en contra de los doctores Alejandro Peralta Posantez, Hernán Monsalve Vintimilla y Pablo Cordero Díaz; luego el 6 de septiembre se amplía también en contra de los jueces interinos, Doctores Sonia Quezada Quezada; y, Jorge Calle Beltrán, quienes habíamos reemplazado a los Jueces que se acogieron a la Jubilación (Dr. Monsalve Vintimilla y Peralta Posantez), así como de los señores jueces, doctores Natalia Larriva Calle y Javier Cordero López, procedimiento disciplinario que mereció la resolución de la Dirección Provincial del Azuay del Consejo de la Judicatura de fecha 18 de noviembre del 2013, a través del cual se ratificaba la inocencia de todos los procesados.

La denuncia cuestiona las siguientes actuaciones jurisdiccionales:

Uno. La sentencia de 26 de marzo del 2012 (expedida por los Doctores Monsalve, Peralta y Cordero Díaz);

Dos. El auto expedido en ejecución de la sentencia de 21 de marzo del 2013 (expedido por los Doctores Cordero Díaz, Sonia Quezada y Jorge Calle);

Tres. El auto de 28 de mayo del 2013 (expedido por Natalia Larriva, Javier Cordero; y, Pablo Cordero Díaz).

Es necesario destacar que respecto de la sentencia el órgano administrativo, Pleno del Consejo de la Judicatura, no formula cuestionamiento que merezca pronunciamiento sancionatorio, pero si lo hace respecto del auto de 21 de marzo de 2013, **ratificado** con providencia de 28 de mayo del mismo año.

En este contexto es indispensable resaltar que el Consejo Provincial de la Judicatura del Azuay, tuvo una apreciación distinta a la sancionatoria y consideró que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ante quien se interpuso el recurso de casación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, respecto de la providencia de ejecución de la sentencia **de 28 de mayo del 2013** que ratifica el auto de 21 de marzo del 2013, con las que se ordena el embargo de fondos del Ministerio de



Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, es el órgano jurisdiccional –Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia– competente para determinar la procedencia o no de la revocatoria del embargo de la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores que mantiene en el Banco de Fomento, y que al decir del Ministerio denunciante es inembargable, punto de la controversia, que según la resolución del Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, se **encuentra pendiente** de resolución por parte de la Corte Nacional de Justicia, por consecuencia, decidió que el Consejo de la Judicatura Provincial – como órgano administrativo – “no puede entrar a realizar una valoración integral de la actuación de los jueces accionados, y menos de providencias judiciales que se encuentran subjudice, es decir que no han sido aún resueltas”, resaltando que es la Sala de Casación como órgano judicial, la que tiene competencia para determinar en el momento oportuno si existen o no, incorrecciones u errores en la actuación de los accionados, de conformidad con el No. 3 del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el Art. 124 ibídem, considerando además, que al estar pendiente de resolución definitiva por haber sido impugnada, “no puede determinar una conducta que se adecue a los tipos disciplinarios previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial”.

Inconforme el denunciante con la Resolución del Señor Director Provincial del Consejo de la Judicatura, interpone recurso de apelación para ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, órgano administrativo de alzada, que tiene una apreciación diferente y considera que tres de los siete jueces sumariados actuaron contra ley expresa, al afirmarse según la resolución, que se reforma la sentencia mediante auto de embargo, además de disponer esta medida respecto de cuentas del Estado que sostiene, son inembargables.

Los argumentos del órgano sancionador son:

**SUPUESTA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA:** El Pleno del Consejo de la Judicatura, indica en su resolución que del análisis de la sentencia de 26 de marzo de 2012, se aprecia que los doctores Pablo Mariano Cordero Díaz, Juez ponente, Alejandro Agustín Peralta Posantez y Hernán Edmundo Monsalve Vintimilla, “dispusieron que la omisión, falta de cuidado, negligencia o inobservancia detectada en los empleados o funcionarios de Migración, no puede hacer la pretensión procesal económica procedente, y dispusieron que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración gestione la ubicación de la niña, sin que exista disposición alguna que determine que el Ministerio antes mencionado tiene responsabilidad alguna respecto de la negligencia referida, ni se dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores pague el valor mencionado”, **(afirmación parcial y por ende imprecisa del texto de la sentencia y que por consecuencia afectante de la verdad)** y agregan: “sin embargo, posteriormente, mediante auto de 21 de marzo de 2013, los doctores Pablo Mariano Cordero Díaz, Isaac Calle Beltrán y Sonia Quezada Quezada, dispusieron el embargo de la suma de US\$239.889.71, de la cuenta corriente de Ingreso de Valores No. 0010002823 que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y

que se encuentra en el Banco Nacional de Fomento, esto, por considerar que en la sentencia de 26 de marzo de 2012, se determinó la responsabilidad del Estado, y más concretamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.... "que es un órgano de la Función Ejecutiva (Art. 16 del ERJAFE)..." (el texto consta en la foja 10 de la resolución).

También agrega el Pleno del Consejo, que en el auto de 21 de marzo de 2013, se afirma que: "...en sentencia se ha determinado la responsabilidad del Estado, y más concretamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un órgano de la Función Ejecutiva...". Esta expresión señala, que es un argumento que carece de veracidad por cuanto en la sentencia de 26 de marzo de 2012, no se determinó dicha responsabilidad. Dicen: "en definitiva, los doctores Pablo Mariano Cordero Díaz, Jorge Isaac Calle Beltrán y Sonia Quezada Quezada, al alterar el contenido de la sentencia ejecutoriada de 26 de marzo de 2012 con este proceder vulneraron lo dispuesto por el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se determina que los doctores antes mencionados habrían incurrido en error inexcusable, infracción disciplinaria tipificada y sancionada por el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial". (el texto destacado en la palabra habrían tiene el propósito de evidenciar la inseguridad de sus autores).

**INEMBARGABILIDAD DE LA CUENTA DEL BANCO DE FOMENTO:**  
Respecto de la inembargabilidad de los recursos pertenecientes a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, dice el Pleno del Consejo de la Judicatura:

Que el artículo 170 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: "...Los recursos de la Cuenta Única del Tesoro son inembargables y no pueden ser objeto de ningún tipo de apremio, medida preventiva ni cautelar". Que el artículo 162 del mismo Código dispone "que los recursos públicos se manejarán a través de la banca pública, considerando las respectivas normas técnicas y las capacidades de gestión de las entidades que conforman la banca pública. El cobro, pago o transferencia de dichos recursos se podrá realizar a través de otras entidades financieras".

Sostiene también el Pleno del Consejo de la Judicatura, que "de lo expuesto se puede determinar que los recursos públicos también se pueden manejar a través de la banca pública, considerando que en la misma pueden constar las subcuentas que pertenecen a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, para lo cual cita el numeral 4.4.2, del Acuerdo Ministerial No. 447, expedido por el Ministro de Economía y Finanzas, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 259 de 24 de enero de 2008. Por otra parte resalta el numeral 4.4.2.2 del referido Acuerdo que identifica lo que debe entenderse por la subcuenta auxiliar CCU-recursos de autogestión.

Destaca "que la característica de inembargabilidad abarca a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional y a sus subcuentas auxiliares, esto, debido a



que dicho concepto y característica se refiere a los recursos públicos que se manejan en las mismas", por lo que a su criterio, dicen que "queda evidenciado que los recursos públicos que alimentan y por ende forman parte de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional no pueden ser objeto de embargo, apremio, medida preventiva o cautelar ni de ejecución, pues el legislador ha incorporado esta regla general de inembargabilidad de los recursos de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional ante la necesidad de afianzar el postulado de la prevalencia del interés general sobre el particular ya que, es con estos recursos que el Estado da movimiento a toda la maquinaria necesaria para la consecución de su objetivo primordial, el Buen Vivir" y resuelven que los comparecientes, mediante auto de 21 de marzo de 2013 al disponer el embargo de la suma de US\$239.889.71, de la cuenta corriente de Ingreso de Valores No. 0010002823 que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y que se encuentra en el Banco Nacional de Fomento, expedimos un auto que a todas luces es contrario a lo dispuesto expresamente por el artículo 170 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el numeral 4.4.2.2 del Acuerdo Ministerial No. 447, expedido por el Ministro de Economía y Finanzas, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 259, de 24 de enero de 2008, y declaran que los doctores Pablo Mariano Cordero Díaz, Jorge Isaac Calle Beltrán y Sonia Quezada Quezada habríamos "incurrido en error inexcusable, infracción disciplinaria tipificada y sancionada por el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial". Lo expuesto es el argumento para sostener que los comparecientes hemos incurrido en error inexcusable.-

#### **LA VERDAD DE LOS HECHOS Y LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LOS EXPONENTES.-**

##### **FALTA DE MOTIVACIÓN EN LA RESOLUCIÓN**

Es preciso señalar que la motivación constituye un derecho constitucional, concebido como garantía del debido proceso en el artículo 76, numeral 7, literal I, en cuanto dispone: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: Las resoluciones de los poderes públicos **deberán ser motivadas**. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados **se considerarán nulos**. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados" (el texto destacado es intencional). Adicionalmente la obligación de motivar correctamente los actos administrativos se encuentra consagrada en el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado y 122 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

En sentencia No. 020-13-SEP-CC, la Corte Constitucional manifestó que: "La motivación implica la explicación ordenada de las razones que llevan a la

autoridad en este caso, la autoridad judicial, para adoptar determinada decisión. La motivación es la mayor garantía de la juridicidad de la actuación pública en un Estado Constitucional de Derechos como el ecuatoriano".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 21 de mayo del 2013, caso Melba Suárez Peralta vs. Ecuador, manifestó que: "La motivación es la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. En este sentido, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido proceso".

En los casos acumulados 0023-09-EP, 0024-09- EP y 0025- 09 – EP, la Corte Constitucional, para el periodo de transición, expresó:

"Una de las tareas primordiales de fundamentar toda sentencia o **acto administrativo** es la de proporcionar un razonamiento lógico y, de cómo las normas y entidades normativas del ordenamiento jurídico encajan en las expectativas de solucionar los problemas o conflictos presentados, conformando de esta forma un derecho inherente al debido proceso, por el cual el Estado pone a disposición de la sociedad las razones de su decisión. De acuerdo a lo expresado en la sentencia No. 227-12-SEP-CC, estos requisitos son la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad y la Corte Constitucional para el periodo de transición, lo expresó de la siguiente manera: "Para que determinada resolución se halla correctamente motivada es necesario que la autoridad que tome la decisión exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecuan a los deseos de solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los principios constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre ésta y la decisión. Una decisión comprensible, por último debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto".

En la resolución que cuestionamos se hacen dos apreciaciones que se alejan de la verdad, probablemente por falta de prolijidad en el análisis de los hechos:

**PRIMERO:** Se sostiene que se ha reformado la sentencia, pues se afirma que en la misma no se ordena el pago de valores al actor en el juicio y para ello es necesario poner en evidencia el texto de la sentencia en la parte que omite el Pleno del Consejo de la Judicatura:

En la sentencia se resuelve: "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", Acepta la demanda en los

términos previstos en el considerando duodécimo. La liquidación se practicará pericialmente.- Sin Costas, Notifíquese". En el considerando duodécimo, se determina: "Sin embargo de lo expuesto en el considerando precedente, se establece, esta omisión, falta de cuidado, negligencia o inobservancia detectada, en los empleados o funcionarios de migración, no pueden hacer a la pretensión procesal económica procedente. (son varias las pretensiones procesales con las que se persigue indemnizaciones) por cuanto, la reparación monetaria no subsana la grave crisis del padre.- Sontados estos antecedentes, precisa señalar que al padre se le debe reconocer los gastos que hayan demandado las gestiones realizadas para recuperar a la niña, los cuales justificará documentada y con pertinencia a la gestión de recuperar a la niña. Para que se proceda a su liquidación, se advierte que la documentación deberá tener correspondencia con viajes, gestiones, reclamaciones legales y honorarios debidamente justificados y que tengan relación con las gestiones.- De igual forma el Ministerio de Relaciones Exteriores, gestionará la ubicación de la niña y buscará que se haga efectivo el retorno al Ecuador, si la actual situación de la menor, aconseja y si la menor decide, por cuanto tiene el derecho de ser consultada, conforme a lo previsto en el Art. 45 de la Constitución. Se aclara que la disposición que se establece en esta sentencia, tiene sustento en lo previsto en el Art. 46 de la Carta Magna, en cuanto establece: El Estado adoptará, entre otras, las medidas pertinentes y adecuadas al caso que aseguren a las niñas, niños y adolescentes...". (el texto destacado es intencional).

De lo expuesto se establece con claridad meridiana que se dispuso el pago de los gastos en los que incurrió el padre, es decir la reparación, el resarcimiento, lo cual no fue advertido por el órgano administrativo sancionador por cuanto les fue esquivo el ordenamiento jurídico y en concreto el contenido del inciso segundo del artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, que establece que para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no sólo la parte resolutive, sino también los fundamentos objetivos de la misma, por lo que es evidente que existe una falsa y parcial apreciación de la sentencia y su alcance, pues no se ha puesto atención en el contenido del considerando duodécimo, que no debió ni pudo ser soslayado para una adecuada apreciación.

**SEGUNDO:** En cuanto al embargo de la cuenta del Banco de Fomento, se debe señalar que compartimos con la afirmación del Pleno del Consejo de la Judicatura, en cuanto establece que los recursos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional son inembargables y evidencia de ello, es que en nuestra actuación jurisdiccional, cuando se intentó la ejecución en la misma causa, y en otros procesos judiciales de la cuenta única del Tesoro Nacional, se han negado peticiones en este sentido, como se demuestra del documento adjunto que obra de autos a fojas 908.

Sin embargo de lo expuesto es evidente que una vez que se negó el embargo de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL, por ser inembargable, se dispuso que la parte accionada considere que es de su obligación cumplir con

la sentencia, lo cual no fue nunca considerado, por lo que el actor insistió en el embargo, pero en esta ocasión **NO** de la CUENTA ÚNICA, sino de la cuenta del Banco de Fomento y para actuar conforme a Derecho se consideró el ordenamiento jurídico que nos rige, esto es la Carta Magna ecuatoriana, que ordena:

"El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes..." (Art. 299 C.E.).

Actuar de manera contraria a lo que dispone la Constitución, sería indeciso por lo siguiente:

UNO. El Art. 299 de la Constitución dispone: "El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes..."

DOS. El Art. 170 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: "Sentencias. Las entidades y organismos del sector **público deberán dar cumplimiento inmediato a las sentencias ejecutoriadas y pasadas en autoridad de cosa juzgada**, y si implican el egreso de recursos fiscales, dicha obligación se financiará con cargo a las asignaciones presupuestarias de la respectiva entidad u organismo, para lo cual si es necesario se realizarán las reformas respectivas en el gasto no permanente. Los recursos de la Cuenta Única del Tesoro son inembargables y no pueden ser objeto de ningún tipo de apremio, medida preventiva ni cautelar", (el texto destacado es intencional).

TRES. El Art. 424 de la Carta Magna ecuatoriana, que establece que la Constitución es la norma suprema y que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y que las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales y que en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

CUATRO. En absolución a la consulta realizada al Señor Procurador General del Estado, publicada en el Registro Oficial 746 de 16 de julio de 2012, se establece: "...por lo cual las entidades y organismos del sector público deben dar cumplimiento inmediato a las sentencias ejecutoriadas y pasadas en autoridad de cosa juzgada".

Evidenciado que el embargo se dispuso, una vez que la Secretaría del Tribunal estableció que la parte demandada no cumplió con su obligación y que la CUENTA EN LA QUE SE PRACTICABA EL EMBARGO, **no es la que tiene la protección legal para el sujeto procesal incumplido**, se dispuso el mismo en la cuenta de la entidad demandada que tiene en el Banco de Fomento, por lo que no es pertinente sostener que se ha incurrido en error inexcusable.



En el contexto en análisis cabe preguntarse:

¿Qué hubiere sucedido si el órgano judicial, no ordenaba la ejecución de lo resuelto? La respuesta sería que se inobservó lo dispuesto en el Art. 3 de la Constitución que establece que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos internacionales; los artículos 4, 5, 28, 29 del Código Orgánico de la Función Judicial y probablemente hubiésemos tenido que enfrentar un proceso judicial.

Aquella afirmación que se formula en la resolución por la que se invoca el Acuerdo Ministerial 447, expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas, publicado en el Registro Oficial 259 de 24 de enero de 2008, para sostener que los exponentes habríamos incurrido en error inexcusable, es absolutamente impropio del quehacer y ordenamiento jurídico, por cuanto dicho Acuerdo por una parte es contrario a la Constitución y por otra fue derogado por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que en la disposición derogatoria, establece: "Deróguense todas las normas legales de igual o menor jerarquía que se opongan o no guarden conformidad con las disposiciones del presente Código", lo cual nos permite afirmar que la invocación del Pleno Consejo de la Judicatura al Acuerdo Ministerial es indebida. Pese a la derogatoria expresa de la norma referida, sin embargo, en el supuesto caso, no consentido, de que dicha norma a criterio del demandado, era la aplicable para sostener la inembargabilidad de los dineros depositados en el Banco Nacional de Fomento, no realizó una correcta interpretación de dicho Acuerdo, pues omitió observar lo que dispone el numeral 4.4.1. que trata sobre la Obligatoriedad de mantener los fondos públicos en el depositario oficial (Banco Central del Ecuador según el Art. 299 de la Constitución de la República), disponiendo en forma contundente que ninguna institución pública podrá aperturar cuentas fuera del depositario oficial de los fondos públicos. Sólo en los casos que por circunstancias geográficas y tecnológicas no sea factible mantener una cuenta en el depositario oficial, la unidad responsable del Tesoro Nacional autorizará la apertura en el Banco Nacional de Fomento".

Demostrado cómo se encuentra, que no existe ningún error en la actuación jurisdiccional y que en la resolución sancionatoria se hacen citas parciales de la sentencia, no se determina el verdadero alcance de la misma, se toman partes de su texto y no su integridad, pues no se advierte que la sentencia es un documento íntegro por lo que llegamos a la conclusión de que la actuación del Consejo de la Judicatura, parte de premisas deformadas, por lo que no pudo arribar a una conclusión coherente,

De otra parte evidenciamos más violaciones de derechos constitucionales y para efectos del análisis pongamos en escena otra situación, desde luego

Inadmisible en Derecho, pero en imagen supongamos que la actuación jurisdiccional está afectada de error inexcusable con la expedición de la providencia de 21 de marzo de 2013. Si esto es como aprecia el órgano sancionador, cabe la siguiente interrogante:

¿Por qué si la providencia de 21 de marzo de 2013, que fue objeto de petición de revocatoria en la que actuaron además del primer exponente otros jueces que ratificaron la actuación jurisdiccional, no cometieron el mismo error?.

La respuesta es demasiado evidente, NO hubo el error atribuido por cuanto se encontraba conforme al ordenamiento jurídico, ya que, de no ser así, la misma consecuencia atribuida a los jueces acusados de error inexcusable, hubiesen tenido los otros, a los que se les debe sumar los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que inadmitieron el recurso extraordinario de casación que se interpuso sobre la providencia de **28 de mayo de 2013**, que ratifica la de **21 de marzo de 2013**. En este escenario hipotético estaríamos frente a un trato discriminatorio inadmisile constitucionalmente, por cuanto las providencias desestimatorias del rolamo, evidencian la corrección del auto de 21 de marzo de 2013.

Los fundamentos de la denuncia presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que además están recogidos tanto en las peticiones de revocatoria como en el recurso de casación, surtió efecto sólo ante el Pleno Consejo de la Judicatura, más no ante los órganos de justicia (el mismo Tribunal con jueces nuevos no los acogió en la revocatoria, y la Sala de lo Administrativo de la Corte Nacional de Justicia no admitió el recurso), de tal suerte que se puede evidenciar las injerencias en la labor de administrar justicia por parte del poder ejecutivo a través de la intervención como parte procesal en el juicio contencioso administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministro de Gobierno hoy, Presidente del Consejo de la Judicatura sancionador que han afectado la independencia de los jueces.

En resumen podemos señalar si la resolución sancionatoria parte de premisas alteradas, deformadas, como la de sostener que en la sentencia no se dispuso la reparación de los gastos en los que incurrió el actor en el juicio: trastocar la pirámide constitucional, para sostener una supuesta inembargabilidad y además invocar como fundamento un cuerpo normativo insolvente para contradecir la Constitución y además derogado, se requerirá de un esfuerzo extraordinario para sostener sin rubor que la resolución se encuentra motivada.

### **INCONSTITUCIONAL E ILEGAL INTEGRACIÓN DEL ORGANO SANCIONADOR / PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA**

La resolución no sólo se encuentra afectada por la violación constitucional y legal señalada, también contiene otro defecto que nos permitimos demostrar a continuación y que es la inconstitucional e ilegal integración del órgano sancionador, esto es del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA:

El Señor Presidente del organismo sancionador, Dr. Gustavo Jalkh Röben, cuando Ministro de Gobierno fue demandado dentro del juicio generador del sumario administrativo, esto es en el juicio contencioso administrativo No. 286 - 2010 planteado por Edgar Ugalde en contra del Presidente de la República, del Ministro de Gobierno (ahora llamado Ministerio del Interior) y del Ministro de Relaciones Exteriores.

El Dr. Jalkh, cuando se desempeñaba como Ministro de Gobierno y como tal fue destinatario de la petición administrativa del actor, a través de la cual le solicitaba el pago de una indemnización por los gastos en que había incurrido por la omisión de los agentes de migración dependientes del Ministerio, por lo que, el mismo integrante del órgano sancionador, **Dr. Jalkh solicitó el pronunciamiento del Procurador General del Estado conforme obra del expediente** y luego en sede judicial es uno de los demandados dentro del juicio contencioso administrativo, por lo que el Señor Juez de sustanciación de la época dispuso su citación en su calidad de Ministro demandado, en consecuencia, el Dr. Jalkh fue parte dentro del proceso. Teniendo en cuenta este aspecto se debió reparar que ningún servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, como lo establece el Art. 233 de la Constitución de la República y es por ello que se establece el impedimento o prohibición de actuar, para los funcionarios y miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan potestad estatal de control y regulación, o para quienes tengan intereses en las áreas que van a ser controladas, prohibición que proviene de la Constitución de la República.

Para ovidenciar esta situación traslademos el texto del precepto constitucional, Art. 232:

"No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos **de entidades que ejerzan la potestad estatal de control** y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan.

Las servidoras y servidores públicos **se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses** entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios.", (el texto subrayado es intencional).

En este contexto se debe tener en cuenta el contenido del Art. 75 de la Constitución, que dispone:

"Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, **imparcial** y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley, (el subrayado de la palabra imparcial es intencional). Este precepto constitucional,

guarda correspondencia con las reglas del debido proceso desarrolladas en el Art. 76, que establece:

**GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO:** "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. ... 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento", (los textos destacados son de nuestra intención). 7. k.- Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente.

Establecidos los textos de los preceptos constitucionales, es importante establecer cuando se afecta la condición de imparcialidad exigida a la autoridad y para el efecto nos permitimos hacer cita de lo expuesto por la Corte Constitucional de Colombia, (es de nuestra esperanza que no se diga, eso es en Colombia en el Ecuador este principio no importa) cuyo texto es por demás explícito, por lo que pedimos se digne considerar para los efectos de esta contienda constitucional y legal, y lo trasladamos:

"El principio de imparcialidad como parte del debido proceso disciplinario, debe ser entendido como la garantía con la cual se asegura que el funcionario que adelante la investigación, o que conozca de los recursos interpuestos contra las actuaciones adelantadas, obre efectivamente como tercero neutral, tanto ante el sujeto disciplinado como ante la causa misma y el objeto o situación fáctica que se analiza. Un tercero que además debe desarrollar sus competencias, **sin prejuicios ni posturas previas que afecten su ánimo** y la sana crítica para actuar y en su momento decidir".

La misma Corte Constitucional, expresa que la Imparcialidad debe exigirse desde su dimensión subjetiva como objetiva, y ha definido en que consiste cada una de ellas: **IMPARCIALIDAD OBJETIVA** – Concepto. La imparcialidad objetiva exige que los asuntos sometidos al juzgador le sean ajenos, de manera tal que no tenga interés de ninguna clase ni directo ni indirecto... "esto es, sin contacto anterior con el tema decidendi, "de modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde el punto de vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto"... **IMPARCIALIDAD SUBJETIVA** – Concepto. La imparcialidad subjetiva garantiza que el juzgador no haya tenido relaciones con las partes del proceso que afecten la formación de su parecer". (SENTENCIA 762/09,2009).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha "afirmado que la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse



331 Tierras  
fueron y no

imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de Defensa" (lo subrayado es intencional) (CASO APITZ BARBERA Y OTROS VS. VENEZUELA, 2008, pág. 16. Apartado 44.-) Además ha expresado que la imparcialidad "exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. (Caso Apitz Barbera y Otros vs. Venezuela. 2008, pág. 18, apartado 56)

La Corte Constitucional de Colombia, en sentencias en las que aborda el principio de imparcialidad, señala que debe cumplirse tanto en su dimensión subjetiva como objetiva, es decir que el juzgador no tenga contacto de ninguna naturaleza con el proceso y que obre como un tercero neutral, que actúe **"sin prejuicios ni posturas previas"** que afecten su ánimo y la sana crítica para actuar y en su momento decidir. Anexamos el pronunciamiento y aclaramos que lo destacado es intencional. (Sentencia 762/09, 2009).

El Señor Presidente del Pleno Consejo de la Judicatura, fue accionado dentro del proceso, cuando cumplía las funciones de Ministro de Gobierno, esto es, miembro del gabinete conjuntamente con el Ministro de Relaciones Exteriores, también demandado, Ricardo Patiño, y en el desempeño de estas mismas actividades consultó a la Procuraduría General del Estado, sobre la petición administrativa del actor en el juicio, esto es sobre el reclamo por el pago de indemnización por la omisión de los agentes de Migración dependientes del Ministro del Interior esto es del Dr. Jalkh, lo cual demuestra que no solo tuvo contacto con el caso, sino que fue directamente el reclamado en sede administrativa, como en judicial, pues en sede administrativa fue el destinatario de varias peticiones del actor para que no se deje salir a la menor del país, pero que no tuvieron atención, además fue a quien, el Arq. Ugalde, actor del juicio contencioso administrativo, le solicitó el pago de una indemnización por la omisión de los servidores de migración, que al no ser resuelta, fue objeto de ejecución del silencio administrativo en sede judicial.

Sentado estos antecedentes, caben interrogantes:

¿El Señor Presidente del Consejo de la Judicatura, antes Ministro reclamado y demandado dentro del juicio que motiva la denuncia, está investido de la cualidad de imparcialidad que exige la norma constitucional?, NO, pues es evidente que el Dr. Jalkh, fue parte del procedimiento en sede administrativa y luego citado con la acción judicial, lo cual revela que fue parte y como tal ¿podrá ser funcionario independiente, habiendo sido parte del reclamo no atendido, y que ocasionó la demanda?. Es muy claro que no podía integrar el órgano administrativo que sanciona a jueces, porque fue parte interesada.

El Presidente del Consejo de la Judicatura, siendo parte procesal en el juicio contencioso administrativo que generó la denuncia, tenía conflicto de intereses, por haber participado como Ministro de Gobierno, de tal manera que si de acuerdo con la jurisprudencia citada, se presumía la imparcialidad del Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura, presunción que evidentemente se descarta por ser PARTE como se establece con los documentos que constan a fojas 4,5,6, 7, 227 a la 229 del juicio contencioso administrativo, violándose en consecuencia las normas constitucionales previstas en los Arts. 75; literal k) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República; y, No. 1 del Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Una norma de jerarquía inferior a la ley, como es el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, publicado en el R. O. 567 de 31 de octubre del 2011, también contiene el precepto que refiere el impedimento.

**FALTA DE COMPETENCIA DEL ÓRGANO ADMINISTRADOR SANCIONADOR. POR CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONADORA:**

Para abordar el tema relacionado con la extinción de la facultad sancionadora, es importante primero dejar en claro que en el supuesto inadmitido de la existencia del error jurisdiccional atribuido, la facultad de imponer sanciones tiene un tiempo en el que se debe ejercer la atribución, y para demostrar esta situación nos permitimos analizar:

**ANTECEDENTES:** En el presente caso, el sumario se apertura el 04 de septiembre del 2013; el 18 de noviembre del mismo año el Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay resuelve ratificar la inocencia tanto de los comparecientes como de los demás Jueces denunciados. Sin embargo el proceso administrativo continúa por el recurso del denunciante, lo que ocasiona la expedición de la resolución el día 17 de septiembre del 2014, notificada el 19 de los mismos mes y año, es decir, cuando había caducado o extinguida la facultad de sancionar.

Analicemos el caso: Si se tiene en cuenta que la Seguridad Jurídica es parte del ordenamiento jurídico constitucional ecuatoriano que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, llegaremos a la conclusión de que la facultad del Consejo de la Judicatura se extinguió, veamos por qué:

El Art. 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone:

"La acción disciplinaria prescribe: ...3. Por las infracciones susceptibles de destitución, en el plazo de un año, salvo las que estuvieren vinculadas con un delito que prescribirán en cinco años, sin perjuicio del régimen de prescripción del delito o de la acción establecida en la ley. Los plazos de prescripción de la acción

disciplinaria se contarán, en el caso de queja o denuncia desde que se cometió la infracción; y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. **Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente**".

Determinada la norma regulatoria, se tiene que la facultad sancionatoria se extinguió por el transcurso del tiempo. Como no es descartable que ante lo expuesto se sostenga que alguna autoridad en un cuerpo normativo de menor jerarquía, establece otro período, es necesario hacer presente que el orden jerárquico de aplicación de las normas jurídicas tiene prescripción constitucional y al efecto tenemos el Art. 425 de la Carta Magna que dispone: "El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos".

Lo expuesto es suficiente para demostrar lo evidente que resulta que una sanción expedida fuera del tiempo determinado en la Ley, es nula, sin embargo es pertinente resaltar lo siguiente:

La competencia de toda autoridad o funcionario entre otros aspectos se encuentra atribuida en razón del tiempo y es por ello que la norma determina que la acción disciplinaria prescribe definitivamente en el plazo de un año y al respecto se debe tener en cuenta lo siguiente:

El derecho constitucional del ciudadano garantiza contar con un Juez **competente** y esto se encuentra previsto en el No. 3 del Art. 76 de la Constitución de la República, así como en el No. 1 del Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La no observancia del término o plazo previsto en la ley para el ejercicio de una potestad disciplinaria, vicia al acto por falta de competencia del Juez. Así lo pronuncia Agustín Gordillo, cuando respecto de la Competencia en razón del tiempo dice: "En razón del tiempo es también factible distinguir según que la competencia sea permanente, temporaria o accidental. La competencia es, por regla general, permanente, en cuanto el órgano de que se trata puede ejercer en cualquier tiempo las atribuciones que le han sido conferidas. Pero en ciertos casos el ordenamiento jurídico otorga una facultad al órgano sólo por un lapso determinado" (GORDILLO, 2014, págs. XII-14). Así también se ha pronunciado la Primera Sala del Tribunal Constitucional del Ecuador, cuando dice: "La autoridad para imponer la sanción disciplinaria en el caso que se analiza tiene 90 días, por lo precedentemente señalado, se infiere que la referida sanción fue dictada en forma extemporánea, y por ende la autoridad actuó sin competencia, lo cual torna su acto en ilegítimo" (DESTITUCIÓN DE CARGO, 2007, pág. 3).-



La facultad Sancionadora Administrativa.- Por medio del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, mediante la aplicación -por parte de las autoridades administrativas- de una sanción al administrado o servidor público en general que no sólo condene una conducta sino que también prevenga la realización de las conductas contrarias a las normas legales. Se ha dicho por parte de la jurisprudencia constitucional que varios principios que rigen en el derecho penal también lo hacen en el derecho disciplinario, porque ambos son de carácter sancionador.

En el derecho administrativo sancionador al igual que en el derecho penal, uno de esos principios que guían el proceso es el de la Presunción de Inocencia, presunción iuris tantum, que precisa que el acusador prueba los hechos que motivan la iniciación del expediente administrativo lo que debe hacerlo en un procedimiento administrativo, presunción que se mantiene mientras no se ejecutorie una resolución que determine lo contrario. En el caso que es motivo de análisis, recordemos que el Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay resolvió ratificar la inocencia de los comparecientes y de los demás jueces denunciados, de tal suerte, que la presunción de inocencia de la que gozábamos los comparecientes, fue ilegal e ilegítimamente desvirtuada al resolver el recurso de apelación que condenó a los recurrentes a la sanción de destitución, y lo hizo, según su resolución, en mérito de las pruebas aportadas dentro del proceso, sin embargo, las normas tanto del Código Orgánico de la Función Judicial como del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, que rigen al proceso disciplinario judicial, no hacen referencia a un término o plazo en concreto en el que deba dictarse la "resolución de apelación", empero, como la prescripción se funda en razones de seguridad jurídica, permitir que la "resolución de apelación" se pueda dictar en un plazo amplio, sería infringir el Principio Constitucional de la Seguridad Jurídica. Al respecto vale recordar las palabras de los doctrinarios Gómez Tomillo y Sanz Rubiales, que haciendo alusión a la falta de precisión del día en el que debe comenzar a contarse el plazo de prescripción dicen: "El encausado tiene que tener constantemente sobre sí pendiente la espada de Damocles de la eventual reiteración del procedimiento y -por lo tanto- de la sanción, durante años, o incluso decenios, por no entender iniciado el día a quo de la prescripción?" (GÓMEZ TOMILLO, 2010, pág. 899), lo que al decir de los referidos autores "la inactividad de la administración pública en resolver un recurso de apelación convertiría en imprescriptibles las sanciones recurridas", de tal manera que el plazo previsto en la parte final del Art. 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, para la prescripción del procedimiento sancionador, y que a la letra dice: "La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente" plazo que incluye a los recursos que se puedan plantear con relación al acto primario, por lo que, si bien en el presente caso, se expidió la resolución de destitución que fue notificada, sin embargo esta se la dictó y se la notificó cuando el procedimiento sancionador había caducado (prescrito dice la norma referida), es decir, cuando no existía un debido proceso sancionador porque éste ya se había



extinguido por sobrepasar el plazo de un año desde que se inició el sumario administrativo.

Así también lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que de conformidad a lo previsto en el Art. 8.2.h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que "el derecho a recurrir el fallo hace parte del debido proceso legal", en base de lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo ha sostenido en el documento denominado "Garantía para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el Fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas", aprobado por el Pleno de la Comisión Interamericana el 05 de diciembre del 2013, en su apartado 236, ha considerado que "la etapa de revisión del fallo sancionatorio es parte del proceso disciplinario que debe observarse para poder destituir efectivamente a un operador u operadora de justicia".

Plazo para dictar la resolución.-El Art. 21 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, prevé "que el sumario administrativo se inicia desde que la autoridad competente declara la apertura del sumario", en el caso que nos ocupa, el sumario se apertura el 04 de septiembre del 2013, pero el inciso segundo de la norma citada, advierte que "iniciado el proceso disciplinario, éste prescribirá en el plazo de un año", es decir, el proceso disciplinario en el presente caso, al abrirse el 04 de septiembre del 2013 prescribió el 04 de septiembre del 2014, sin embargo la resolución de destitución se dicta en forma extemporánea esto es el 17 de septiembre del 2014 y se notifica el 19 de igual mes y año, esto es, cuando ya había caducado el proceso sancionador y por lo tanto cuando había prescrito la facultad sancionadora, es decir, cuando se había extinguido el sumario administrativo, que es el debido proceso en el cual se debió dictar la resolución correspondiente, violando en consecuencia el No. 3 del Art. 76 de la Constitución de la República, que consagra el derecho a contar un juez competente e imparcial y con observancia del trámite propio de cada procedimiento que además se encuentra consagrado en varios instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, por lo tanto también transgredidos.

Al respecto existe pronunciamientos de la Primera Sala de la Corte Constitucional del Ecuador, que dice: "...a fs.181 del proceso consta la resolución, de fecha 23 de agosto del 2007, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura por medio de la cual se sanciona al accionante, esto es más de dos años después de iniciado el procedimiento. Lo relatado constituye una evidente inobservancia en el Art. 28 del Reglamento de Control Disciplinario, Quejas y Sanciones de la Función Judicial..." (No. 0062-08-RA.- CONCEDE AMPARO POR DESTITUCION, 2008, pág. 4 consideración séptima. R.O. S. 91 de 07-I-2009)).-

Por lo expuesto, a más de que el acto de destitución, se dictó fuera de un debido proceso, por haber prescrito el mismo, se tiene que el Pleno del Consejo de la Judicatura, al carecer de competencia en razón del tiempo, dictó el acto

administrativo, contraviniendo los preceptos constitucionales expuestos, y lo previsto en el Art. 226 de la Carta Magna, que dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución".

### EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL

Este principio se encuentra consagrado en el Art. 168 de la Constitución de la República, así como en varios instrumentos internacionales, como son: el Art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; el Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; y, el Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

### **¿EL CONSEJO DE LA JUDICATURA TIENE FACULTADES, PARA DECLARAR QUE UN ÓRGANO JUDICIAL INCURRE EN ERROR INEXCUSABLE?**

Para dar respuesta a esta interrogante, también se debe acudir al ordenamiento jurídico y para el efecto precisa señalar lo siguiente:

**Uno.** El Código Orgánico de la Función Judicial, al determinar los principios rectoros y las disposiciones fundamentales de la estructura judicial, fija en el Art. 10 el siguiente principio de unidad Jurisdiccional y gradualidad: "De conformidad con el principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados. La casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de la legalidad y del error judicial en los fallos de instancia".

Teniendo en cuenta lo señalado, cabe hacer mención a lo dispuesto en el Art. 131 del mismo Código invocado, en cuanto establece facultades correctivas de las juezas y jueces y al efecto determina: "A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces **deben:** ...3. Declarar en las sentencias y providencias respectivas, la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de servidoras y servidores judiciales, y comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones". En el presente caso no existe duda, que un órgano con competencia para la declaratoria de error inexcusable, **NO** se ha pronunciado en éste sentido, más bien la providencia que el Consejo de la Judicatura la aprecia equivocada, fue ratificada

por dos jueces no sancionados y el recurso extraordinario de casación inadmitido, por lo que, es un contra sentido que se sostenga por un órgano administrativo, declare que existe error judicial inexcusable, cuando un órgano judicial con atribuciones sostiene lo contrario.

**Dos.** En el contexto de los hechos, nuevamente se acude al ordenamiento jurídico, para destacar lo previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, en relación a la Independencia externa e interna de la Función Judicial, en cuanto determina en el artículo 123 que: "Los jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores, están sometidos únicamente a la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley"; "que las providencias judiciales dictadas dentro de los juicios, cualquiera sea su naturaleza, sólo pueden ser revisadas a través de los mecanismos de impugnación ordinarios y extraordinarios, establecidos en la ley"; que "ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y los funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrá interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias"; que "los reclamos de los litigantes por las actuaciones jurisdiccionales de las juezas y jueces en la tramitación y resolución de las causas, no podrán utilizarse como mecanismos de presión a favor del quejoso o reclamante y se adoptarán las medidas necesarias para evitarlo...".

La irrespetada Constitución de la República en el Art. 168, consagra la Independencia interna y externa de la función judicial, con el objeto de engendrar en sus justiciables y en general en los ciudadanos de una sociedad democrática, legitimidad y confianza suficientes.

Con relación a la Independencia de la Función Judicial, la Corte Constitucional Colombiana ha dicho: "Según se ha reconocido también, la autonomía e independencia de la Rama Judicial respecto de las otras ramas, así como la de cada uno de los funcionarios que la conforman, es condición esencial y necesaria para el correcto cumplimiento de su misión" (Sentencia T-238/11, 2011).-

La Corte Interamericana ha destacado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces, y que se constituye en uno de los principios esenciales para prevenir el abuso de poder por parte de otros órganos del Estado en el funcionamiento adecuado del poder judicial. Un poder judicial independiente es indispensable como contralor de la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado, así como también como órgano encargado de administrar justicia. Además ha expresado con relación a la independencia tanto funcional como individual de la función judicial, "que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. Los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como



**"esencial para el ejercicio de la función judicial".** "El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular **se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos** al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación.- Conforme a su jurisprudencia reiterada, esta Corte consideró que las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: **un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad del cargo y la garantía contra presiones externas**" (JURISPRUDENCIA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CAMBA CAMPOS, 2013), (lo resaltado es intencional).

Con relación al control disciplinario de los jueces, la Corte Constitucional de Colombia ha dispuesto que no comprende a las providencias, autos y sentencias que dictan los jueces en ejercicio de función, pronunciándose así: "es claro y no ofrece ninguna duda que los funcionarios judiciales se encuentran sujetos en sus actuaciones a la potestad disciplinaria del Estado. Empero, es igualmente diáfano que esa sujeción no se extiende al contenido de las decisiones y providencias que dictan dentro del ejercicio de sus funciones, pues éste es producto de la autonomía e independencia que, según se explicó, caracterizan la función judicial." (Sentencia C-818/05, 2005) (Sentencia T-238/11, 2011).-

En el caso en estudio, recordemos que la sanción de destitución que se impone a los comparecientes es por considerar, que el acto jurisdiccional de dictar el auto de ejecución de la sentencia, de 21 de marzo del 2013, los hoy accionantes hemos alterado el contenido de la sentencia ejecutoriada de 26 de marzo del 2012 y porque supuestamente la ejecución es de la cuenta única del Tesoro Nacional, lo cual es una apreciación indebida.-

Como se podrá apreciar el auto de 21 de marzo del 2013, es de ejecución y se limita a efectivizar lo que la sentencia ha dispuesto, de tal suerte que, el referido auto se dicta en ejercicio de la potestad soberana e independiente de ejecutar las sentencias, prevista en el Art. 1 del Código de Procedimiento Civil en relación con el Art. 142 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el que a criterio del Pleno del Consejo de la Judicatura se incurre en error inexcusable, de allí la necesidad de saber: **¿Qué es el Error Inexcusable?** El error inexcusable no se encuentra determinado por la legislación ecuatoriana, pero tendremos presente la reproducida por los Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca, en su manifiesto de 25 de octubre del 2013, quienes acogen el concepto del Dr. Hernández Marín:

"Es la equivocación crasa y palmaria cometida por un juez, magistrado o sala de magistrados, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, siempre que dicha equivocación haya alcanzado firmeza, no sea debida a culpa del perjudicado y haya causado daños efectivos, valüables e individualizados".



Se ha afirmado por parte del Dr. Luis Urgilés Contreras, Juez Provincial de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, que las características destacadas en el concepto del tratadista Hernández Marín, "deberían ser tomadas en cuenta por las máximas instancias jurisdiccionales, para declarar la existencia del error, antes de someter a los jueces, a los procesos judiciales o administrativos que no se encuentran claramente delimitados".- (Revista del Colegio de Abogados del Azuay.- Diciembre 2014, pág. 38)

Por su parte el doctrinario colombiano Martín Bermúdez Muñoz, haciendo referencia al error inexcusable dice que Colombia lo adopta en el Código de Procedimiento Civil de 1970 y que parece tener su origen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de España de 1870 en el cual, dice el autor citado: "que la ignorancia o la negligencia era inexcusables "cuando aunque sin intención se hubiera dictado providencia manifiestamente contraria a la ley, o se hubiere faltado a algún trámite o solemnidad, mandado a observar por la misma bajo pena de nulidad (MARTÍN, 1998, pág. 18)".

**¿EN BASE A LOS CRITERIOS DOCTRINARIOS Y JURIDICOS EXPUESTOS, NOS PREGUNTAMOS EXISTE ERROR INEXCUSABLE EN EL AUTO DE 21 DE MARZO DEL 2013 DICTADO POR LOS JUECES DESTITUIDOS?** El Pleno del Consejo de la Judicatura en el expediente disciplinario A-1054-SNCD-013-MBM, que concluye con la sanción de destitución de los accionantes, en sus argumentos sostiene: "En definitiva, al evidenciarse la existencia de un proceder contrario a lo dispuesto expresamente por el artículo 170 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el numeral 4.4.22 del Acuerdo Ministerial No. 447, expedido por el Ministro de Economía y Finanzas, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 259, de 24 de enero de 2008, se determina que los doctores Pablo Mariano Cordero Díaz, Jorge Isaac Callo Beltrán y Sonia Quezada Quezada, habrían incurrido en error inexcusable, infracción disciplinaria tipificada y sancionada por el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial", (el texto destacado en la palabra habrían es intencional, para resaltar la inseguridad, la duda del propio órgano sancionador).

Esto evidencia que el Pleno del Consejo de la Judicatura se ha entrometido en asuntos estrictamente jurisdiccionales, pues el tema de la ejecución de sentencias en contra del Estado se encuentra regulado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la que determina que para hacer efectivo el pago de indemnizaciones se deberá seguir el procedimiento establecido para los juicios ejecutivos, siendo necesario hacer presente que cuando el actor pidió el embargo de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL, éste fue negado, desde luego por indebido. (ver providencia de 18 de enero del 2013, fojas 908 del juicio contencioso Administrativo No. 286-2010)

En todo proceso contencioso administrativo, cuando se llega al punto de que el Juez debe ejecutar la sentencia para hacer efectivo el principio de la tutela

judicial efectiva, puede y debe disponer el embargo de dinero, teniendo presente que casi todas las contiendas legales sometidas a su conocimiento tiene como accionados a entidades del Estado, encontrándonos entonces con el tema jurídico de ¿QUE DEBEMOS ENTENDER POR INEMBARGABILIDAD DE FONDOS PUBLICOS?, asunto ampliamente tratado tanto por la doctrina como por órganos de tutela de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo de Perú (PERU, 1998, pág. 17) que citando a Silva Sánchez Manuel J. ("La ejecución de sentencias contencioso-administrativas: Nuevos horizontes", en Poder Judicial (Madrid), 1996, N° 41-42), sobre el tema ha manifestado: "La regla general es la posibilidad que tienen los tribunales de despachar mandamiento de pago y si no es atendido en el plazo de un mes, (aclaramos que se trata de otra legislación) pueden despachar directamente embargo sobre los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. Así sólo se consideran inembargables, con mejor criterio, los bienes indispensables para la satisfacción de la función pública que se enumeran con carácter taxativo' ...." (...) el único fundamento objetivo que se puede esgrimir para mantener el privilegio de la inembargabilidad, es la necesaria protección del funcionamiento de los servicios públicos. De modo que la inembargabilidad, por esencia, ha de responder a un criterio objetivo, siendo inadmisibles que se aplique subjetivamente a todo el patrimonio del ente. A este respecto ha señalado GARCÍA DE ENTERRÍA que la inembargabilidad en ningún momento debería considerarse como una prerrogativa subjetiva de la Administración sino como una cualidad de determinados bienes públicos, imprescindibles para el funcionamiento de los servicios públicos (...) Cualquier otra extensión de este principio es totalmente injustificable; debiendo entender especialmente aplicable en este punto el dogma de la economía de mercado, que se fundamenta en el normal intercambio, el cual se vería absolutamente truncado si una de las partes de cualquier relación pudiera transformar en facultativas sus obligaciones patrimoniales".-

Para ningún jurista es desconocido que las sentencias que ordenan el pago de indemnizaciones, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se deben ejecutar en el respectivo Estado, por medio del procedimiento interno vigente para la ejecución de la sentencia contra el Estado, es decir, nuevamente volvemos a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que prevé que la forma de ejecutar la sentencias contra el Estado, es a través del procedimiento de ejecución del juicio ejecutivo, y en este camino de ejecución, el doctrinario Carlos M. Ayala Corao, nos dice que podemos encontrar varios obstáculos. Entre estos obstáculos suelen encontrarse: 1. la formulación restrictiva del principio de legalidad presupuestaria, en el sentido de que el Estado no puede hacer erogaciones de su tesoro, no previstas en sus leyes de presupuesto, y 2. disposiciones normativas sobre la inembargabilidad de los fondos públicos, las cuales en caso de incumplimiento voluntario por el Estado prohíben el embargo y la posibilidad de despachar mandamientos de ejecución contra fondos públicos. El profesor García de Enterría ha denominado a estos privilegios como "un asombroso fósil medieval viviente fuera de su medio". "Estos obstáculos para la ejecución de sentencias contra el Estado que dificultan, y en algunos casos

impiden que las indemnizaciones compensatorias ordenadas a favor de las víctimas en las sentencias de la Corte Interamericana se puedan ejecutar, configuran, en primer lugar, una violación del derecho humano a la tutela judicial efectiva como derecho de toda persona, el cual implica el compromiso de los Estados a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En segundo lugar, estos obstáculos configuran una violación del derecho de las víctimas al pago de una justa indemnización, como parte del derecho a la reparación de las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de sus derechos, cuando la Corte Interamericana lo juzgue procedente. Y en tercer lugar, configuran una violación al derecho de las víctimas a que los Estados cumplan las decisiones de la Corte Interamericana en todos los casos en que sean partes y, en especial, a su derecho a que se ejecute la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria. Además de lo anterior, debemos resaltar que esos obstáculos para la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana contra los Estados, configuran una violación de otros derechos humanos reconocidos en la Convención Americana como son los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la propiedad, y en su caso a la indemnización por error judicial." (AYALA CORAO, 2007.- pág. 17.-)

En base a lo expuesto, queda totalmente demostrado como el PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, ha interferido en las funciones judiciales de los jueces de lo Contencioso Administrativo, incurriendo en las responsabilidades previstas en el No. 1 del Art. 168 de la Constitución de la República y violando la Independencia Interna de la Función Judicial, también regulada en el Art. 123 del Código Orgánico de la Función Judicial.

**¿EL ERROR INEXCUSABLE, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL?** La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que "la destitución por error inexcusable resulta contraria al principio de independencia judicial pues atenta contra la garantía de fallar libremente en derecho", criterio sostenido en el caso *Apitz Barbera y otros* en contra de Venezuela, cuando manifestó "los magistrados no fueron juzgados por su conducta disciplinaria sino por la interpretación jurídica que adoptaron en el fallo" (Apartado 79, página. 23).

De igual manera se ha pronunciado la Primera Sala de la Corte Constitucional del Ecuador, cuando en su consideración CUARTA, dice: "...La Comisión de Recursos Humanos y el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió sancionar al recurrente por estimar que su actuación, derivada estrictamente de un criterio jurídico, constituye una falta disciplinaria, lo que resulta absolutamente inadmisibles en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, pues de esta manera se atenta fehacientemente contra el principio consagrado en el texto constitucional y en los Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es signatario, que garantizan la independencia que deben tener los administradores de justicia en su accionar. Por lo precedentemente invocado, la actuación de los

Ver 12/14  
Error judicial  
Hacia una  
independencia  
judicial  
Corte  
Constitucional  
del Ecuador



demandados viola la norma contenido en el Art. 199 de la Constitución de 1998.....- La sanción al recurrente no se deriva de infracción alguna en el cumplimiento de sus funciones, pues su actuación como juez no se enmarca en falta de probidad moral sino en el hecho de que uno de sus fallos no es del agrado de los miembros de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura, lo que constituye un acto arbitrario, ilegítimo, ilegal y desde todo punto de vista discriminatorio. Todos los seres humanos tienen derecho a disenter con los fundamentos esgrimidos por un juez en un determinado fallo, sin embargo para impugnarlos, la propia ley ha señalado cuál es la vía que debe seguir. Para eso, existen los recursos horizontales y verticales, de apelación, de nulidad, de hecho, los petitorios de revocatoria, etc." (CONCEDE AMPARO POR DESTITUCION, 2008, pág. 3).- (No corresponde al texto el subrayado).

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Apitz Barbera y otros en contra de Venezuela, ha indicado "que el derecho internacional ha formulado pautas sobre las razones válidas para proceder a la suspensión o remoción de un juez, las cuales pueden ser entre otras, mala conducta o incompetencia. Ahora bien, los jueces no pueden ser destituidos únicamente debido a que su decisión fue revocada mediante una apelación o revisión de un órgano judicial superior, (menos cuando ha sido negada la impugnación). Ello preserva la independencia interna de los jueces, quienes no deben verse compelidos a evitar disenter con el órgano revisador de sus decisiones, el cual, en definitiva, solo ejerce una función judicial diferenciada y limitada a atender los puntos recursivos de las partes disconformes con el fallo originario" (apartado 85); el texto diferenciado es intencional).

La referida Corte, cuyos fallos son de estricto cumplimiento para los Estados suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, en base al principio de convencionalidad, ha recalcado que a través de los recursos de apelación, casación o revisión, se corrige las decisiones del juez inferior, y, por medio del control disciplinario, se valora la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público, considerando que "aun cuando existiera una declaración de error judicial inexcusable por parte de un órgano de revisión, debe analizarse la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción" (CASO APITZ BARBERA Y OTROS VS. VENEZUELA, 2008. Apartado 86), sin embargo ha dicho requiere de una motivación autónoma para determinar o no la existencia de una falta disciplinaria y no reiterar la calificación realizada por el órgano judicial revisador, disponiendo la Corte "que en el proceso disciplinario es necesario el análisis del error judicial inexcusable como ilícito disciplinario, lo cual exigía, en primer lugar, UNA MOTIVACION RELACIONADA CON LA IDONEIDAD DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO" (Apartado 88) además dice que se debe dar razones sobre la gravedad de la falta supuestamente cometida y sobre la proporcionalidad de la sanción propuesta, (lo resaltado nos corresponde).



En el Ecuador, con el objetivo de viabilizar el Principio de Independencia de los Jueces, el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 124, obliga a que los Jueces que conocen de recursos, deben revisar si las y los servidores judiciales observaron los plazos y leyes y de ser el caso comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que ejerza el correspondiente control disciplinario en caso de que advierta que ha habido violación del ordenamiento jurídico, pero, incluso, el Consejo de la Judicatura, conforme las decisiones de la Corte Interamericana debe realizar su propio análisis sobre el tema, lo cual se encuentra en perfecta armonía con el No. 3 del Art. 168 de la Constitución de la República que consagra el Principio de la Unidad Jurisdiccional, desarrollado adecuadamente en el Art. 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prevé que el control de legalidad y el error judicial en los fallos de instancia que serán controlados a través de los recursos.

Recordemos que en la resolución de destitución materia de la presente acción, se hace referencia a que en el auto de ejecución de la sentencia de 21 de marzo del 2013, se ha ordenado el embargo de dineros del Estado, contraviniendo, según el criterio del Pleno del Consejo de la Judicatura, varias normas jurídicas como son el los Arts. 162 y 170 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y el numeral 4.4.2.2 del Acuerdo Ministerial No. 447 dictado por el Ministro de Finanzas; y; que en dicho auto además se ha modificado lo dispuesto en sentencia, contraviniendo a su entender el Art. 295 del Código de Procedimiento Civil.

Como se puede observar, el Pleno Consejo de la Judicatura al realizar su argumentación entra en el análisis jurídico de la providencia, indicando las normas que supone debimos aplicar, cómo interpretar, cuáles otras se infringieron, tal cual es la función de una Sala de Casación de la Corte Nacional de Justicia, porque no olvidemos que los jueces comparecientes, al dictar el auto de 15 de abril del 2013 que ratifica el de 21 de marzo del 2013 (fojas 936 de los autos) ya realizó su interpretación con relación al Art. 170 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en pleno ejercicio de la función de administrar justicia, por lo que, con la resolución de destitución, el Consejo de la Judicatura rebasa sus competencias administrativas y entra al análisis de una providencia judicial.-

En el caso, en estudio, la denuncia presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en contra de los ex jueces exponentes, que emitimos la providencia de 21 de marzo del 2013 y ratificada posteriormente por los nuevos Jueces a través de auto de 28 de mayo del 2013, la que adquirió firmeza por no admitirse a trámite el Recurso de Casación presentado por el Ministro quejoso, no debió admitirse porque a través de ella se estaba impugnado criterios de interpretación de normas jurídicas y otros elementos netamente jurisdiccionales, sabiendo que el Art. 115 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que cuando ello suceda la denuncia se deberá enviar a la Comisión de Administración de Recursos Humanos del Consejo de la judicatura para efectos de la evaluación

de desempeño, es decir, para determinar la idoneidad de los jueces denunciados en el ejercicio del cargo, tal cual lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y,

Por otra parte, el recurso de apelación interpuesto respecto de la resolución de 18 de noviembre del 2013, no debió admitirse, porque la resolución no aborda el fondo de la denuncia, como lo establece el Art. 41 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, vigente a la época de los acontecimientos.

Los fundamentos de la denuncia presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que además están recogidos tanto en las peticiones de revocatoria como en el recurso de casación, surtió efecto sólo ante el Consejo de la Judicatura, más no ante los órganos de justicia (el mismo Tribunal con jueces nuevos no los acogió en la revocatoria, y la Sala de lo Administrativo de la Corte Nacional de Justicia no admitió el recurso), de tal suerte que se pueda evidenciar las injerencias en la labor de administrar justicia por parte del poder ejecutivo a través de la intervención como parte procesal en el juicio contencioso administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministro de Gobierno hoy, Presidente del Consejo de la Judicatura sancionador que han afectado la independencia de los jueces.

#### PRETENSIONES.-

1.- Que a través de sentencia se declare la nulidad e ilegalidad del acto administrativo impugnado, por el que se destituyó a los actores, toda vez que el mismo se ha dictado por un Juez Imparcial e incompetente en razón del tiempo; además porque se ha dictado la resolución sin que existe un debido proceso por haber prescrito el mismo; y porque la resolución de destitución se encuentra indebidamente motivada, tornando al acto impugnado en arbitrario, y por último porque el acto administrativo de destitución es violatorio de varias normas constitucionales, motivo por el cual la petición de nulidad la fundamentamos en el Art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.-

2.- Que en consecuencia se deje sin efecto la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura de fecha 17 de septiembre del 2014 y notificada el 19 de igual mes y año, por el cual se destituyó a los Jueces: Dr. Pablo Cordero Díaz, titular y a la fecha de la destitución en funciones; y, a los Dres. Sonia Alejandrina Quezada Quezada y Jorge Calle Beltrán, Jueces Interinos, quienes habíamos cesado el 21 de mayo del 2013, así como se elimine de las carpetas personales dicha sanción.

3.- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se dispondrá además: 1) para el Dr. Pablo Mariano Cordero Díaz, la restitución inmediata al cargo, así como el pago de las remuneraciones y beneficios salariales y sociales dejados de percibir desde que fue destituido hasta la efectiva reincorporación; 2) En el caso

de la Dra. Sonia Alejandrina Quezada Quezada, se lo reintegre al Banco de Elegibles, quien constaba en éste, conforme a la Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura No. 054-2014 de 07 de abril del 2014, por haber obtenido la más alta calificación en materia contencioso administrativa, del cual quedó excluida por mandato del No. 3 del Art. 36 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinario, y se le reconozca una indemnización por los perjuicios que la decisión de destitución le ha provocado, por no poder ingresar a la Función Judicial, toda vez que en fundamento al No. 2 de la Resolución No. 157-2013 del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, que Unificó los Bancos de Elegibles a partir del 13 de noviembre del 2011, y que por tanto incluye a los que ingresaron al Banco de Elegibles el 07 de abril del 2014, la Dra. Quezada debió ser la primera en ser escogida por su calificación, tanto para cargos nuevos en lo Contencioso administrativo, como para reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento o contingencia, lo que no sucedió por haber sido eliminada del Banco de Elegibles por la decisión de destitución. 3) Se fije una compensación económica por el daño inmaterial, por los perjuicios morales que hemos sufrido los comparecientes, para lo cual se tomará en cuenta que los Drs. Pablo Cordero Díaz y Sonia Quezada Quezada, han sido servidores de carrera, la misma que ha sido injustamente cortada. 4) Que se fije un término razonable en el que deba cumplirse la sentencia, así como se fijará un término en el que deba cumplirse el pago de las reparaciones solicitadas, así como pedimos se supervise su cumplimiento.

#### **EL LUGAR DONDE SE LE PUEDE HACER CONOCER DE LA ACCIÓN A LA PERSONA O ENTIDAD ACCIONADA.**

Al Presidente y Vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, se les citará en el Edificio del Consejo de la Judicatura, on donde se encuentran sus despachos, edificio ubicado en la calle 12 de Octubre N24-563 y Francisco Salazar en la ciudad de Quito, cuya practicará se deprecará al Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo.-

La citación a la Directora General del Consejo de la Judicatura se la practicará en el edificio del Consejo de la Judicatura ubicado en la Calle Jorge Washington E4-157 y Avenida Amazonas de la ciudad de Quito, diligencia que se la deprecará al Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, a quien se les enviará el despacho en forma.

Al Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Cuenca, se le hará saber de la demanda en su despacho ubicado en la Calle Manuel J. Calle y Cornelio Merchán.-

#### **EL LUGAR DONDE HA DE NOTIFICARSE A LOS ACTORES.**

Los actores seremos notificados en la casilla judicial No. 486 de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca, así como en los correos electrónicos:

A



[pacorderod@hotmail.com](mailto:pacorderod@hotmail.com)  
[dordonezaray@yahoo.com](mailto:dordonezaray@yahoo.com):-

[sonia-quezada2010@hotmail.com](mailto:sonia-quezada2010@hotmail.com)

y

## DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN.

### 1.- MANIFESTACIONES DE RESPALDO A LABOR DE LOS JUECES SANCIONADOS Y RECHAZO POR LA INTERFERENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN LA FUNCION JUDICIAL.-

Una vez que se hizo público la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de la cual se destituyó a los Jueces que conformamos el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, las muestras de respaldo y de protesta por la burda y grotesca intervención de la Función Ejecutiva —a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores— en la decisiones de la Función Judicial, no se hicieron esperar, así se publicito y difundió un Manifiesto Público a la Opinión Pública realizado por los Doctores Carlos Castro Riera, y, Remigio Auquilla Lucero, Docentes de las Facultades de Jurisprudencia de las Universidades de Cuenca y del Azuay en su orden, y suscrito además por el Presidente del Colegio de Abogados del Azuay y por el Presidente de la Asociación Escuela de Derecho.

El Principio de la Independencia Judicial en el Ecuador, ha sido objeto de denuncias constantes no solo a nivel nacional sino internacional, pues adjunto a la presente se encontrará un CD que contiene una copia de la 153 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 23 de octubre del 2014, dentro de la cual varios profesionales del Derecho intervienen y alertan a la Comisión, sobre la falta de independencia interna y externa de la Función Judicial en el Ecuador.

De igual manera la prensa local, -Diario El Mercurio, Diario El Tiempo- y la prensa nacional -Diario El Comercio-, revistas locales como "El Observador" han publicitado el tema de la destitución de los Jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, ya sea a través de notas periodísticas o a través de editoriales, que acompañamos a la presente, de igual manera el tema se ha difundido en emisoras de radio como la Voz del Tomebamba y Ondas Azuayas, ya sea a través de noticias, de entrevistas.-

La Corte Provincial de Justicia del Azuay, en sesión de 25 de octubre del 2013, preocupada por el destino incierto de quienes ejercen funciones judiciales hacen un análisis jurídico sobre el error judicial inexcusable, cuyo texto se acompaña a la presente, y que no ha tenido una respuesta puntual, más por el contrario, la respuesta se encuentra dada a través de los procesos disciplinarios que por error judicial inexcusable se ha venido instaurando contra Jueces del país, cuya finalidad es atemorizar a los jueces en la toma de sus decisiones, a fin de que pierdan el sentido de impartir justicia, y actúen en base a directrices emanadas fundamentalmente del poder ejecutivo, como lo demuestran el Oficio No. T.J. 808-SGJ-14-137 de 13 de febrero del 2014, suscrito por el Dr. Alexis Mora Giler,



Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, al cual se acompañó el escrito amenazador en contra de los Jueces del Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo con sede en Portoviejo, documento que para surtir el impacto deseado fue increíblemente difundido por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia a través de Oficio No. 288-SP-CNJ-2014; así como los efectos que han perdurado en el tiempo del Memorando Circular 3524 de 9 de julio del 2012, para que se resuelvan favorablemente acciones contra organismos estatales.-

2.- El acto de destitución tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura de 17 de septiembre del 2014.-

3.- Copias certificadas que demuestran la participación del Dr. Jalkh actualmente Presidente del Consejo de la Judicatura, como Ministro de gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, dentro del juicio contencioso Administrativo No. 286-2010 seguido por el Arq. Edgar Ugalde en contra del Presidente de la República, y de los Ministerios de gobierno y de Relaciones Exteriores: Fojas 4, 5, 6, 7; dictamen de la Procuraduría General del Estado realizado a pedido del Dr. Jalkh, Ministro de Gobierno sobre el pago de indemnización al Arq. Edgar Ugalde (fojas 227 a la 229) además la demanda (fojas 153 a 155) auto de 27 de septiembre del 2010 (fojas 159) auto de 05 de octubre del 2010 a través del cual se ordena la citación al Ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores (fojas 160); contestaciones a la demanda del Dr. Alexis Mera Giler, Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República (fojas 191 a 199) contestación a la demanda del Ministerio del interior (fojas 230 a 231), actas de citación al Ministro de Gobierno (fojas 378 de los autos), que indican que el Ministro de Gobierno fue citado el 13, 14 y 15 de diciembre del 2010, cuando aún el Dr. Jalkh ejercía las funciones de Ministro de Gobierno; sentencia de fecha 26 de marzo del 2012 (fojas 709 a la 718); informe pericial presentado por el Perito Luis Guamán (fojas 884 a 895), providencia de 11 de octubre del 2012 que concede término a las partes para que se pronuncien sobre el informe pericial (fojas 896), copia de la providencia de 22 de octubre del 2012 (fojas 899) que dispone que se sienta razón si la providencia de 11 de octubre del 2012 se encuentra ejecutoriada por no haberse reclamado dentro del término concedido para el efecto, de la razón de la secretaria relatora de que la providencia de 11 de octubre del 2012 se encuentra ejecutoriada (fojas 899 vuelta), copia de la providencia de 12 de noviembre del 2012 a través del cual se aprueba el informe pericial (fojas 901); 7.3.- Decreto Ejecutivo No. 1579 de 11 de febrero del 2009 a través del cual se le designa Ministro de Gobierno, Cultos, Política y Municipalidades al Dr. Gustavo Jalkh R.; copia certificada del auto de 21 de marzo del 2013 (fojas 920) a través del cual se decreta el embargo; copia de la providencia de 15 de abril del 2013, (fojas 936) a través de la cual en base al Art. 170 de la Ley Orgánica de Planificación el Tribunal se ratifica en el embargo de 21 de marzo del 2014; de la providencia de 28 de mayo del 2013 (fojas 975) a través de la cual los Jueces Nuevos conjuntamente con el Dr. Pablo Cordero, se ratifican en el auto de 21 de marzo del 2013 y niegan la revocatoria solicitada por el Ministro de Relaciones Exteriores

por no tener sustento; copia del auto de 29 de julio del 2013 (fojas 1019) por el Tribunal se ratifica en el auto de 28 de mayo del 2013; auto de 15 de agosto del 2013 (fojas 1024); escrito de casación del Ministerio de Relaciones Exteriores (fojas 1026 a 1030); copia de la sentencia de casación de la Sala de lo Contencioso Administrativo, inadmitiendo la casación del Ministerio de Relaciones Exteriores.-

4.- Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio del 2010 a través del cual se cambia de denominación de Ministerio de Gobierno a Ministerio del Interior.

5.- Decreto Ejecutivo No. 586 de 17 de diciembre del 2010, a través del cual se acepta la renuncia al Dr. Jalkh de su cargo de Ministro del Interior, decreto publicado en el Registro Oficial No. 352 de 30 de diciembre del 2010.

6.- Resoluciones del Consejo de la Judicatura No. 54-2014, que indica los Jueces que constan en el Banco de Elegibles, y 157-2012 que trata sobre la Unificación de los Bancos de Elegibles.

7.- Se adjunte al proceso copias de los documentos obtenidos de la página web del Consejo de la Judicatura que demuestran que la Dra. Sonia Quezada Quezada, participó en el nuevo Curso de Formación inicial para aspirantes a jueces a nivel nacional convocado mediante Resolución No. 212-2013 de 27 de diciembre del 2013.

8.- Copias de notas publicitarias acerca de la destitución de los comparecientes, publicadas en los Diarios El Mercurio de Cuenca, El Tiempo y El Comercio.

9.- Se acompaña copia de un CD que recoge las intervenciones de Profesionales Ecuatorianos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de octubre del 2014 que denuncian la interferencia de los otros poderes del Estado Ecuatoriano en la Función Judicial, dentro de la cual resaltan la destitución de varios jueces por error judicial inexcusable como el caso de los comparecientes.

10.- Se adjunte al expediente copia del Oficio No. T.J. 808-SGJ-14-137 de 13 de febrero del 2014, suscrito por el Dr. Alexis Mera Giler, Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, y el escrito suscrito por el referido servidor, dirigido a los Jueces del Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo con sede en Portoviejo dentro del juicio No. 13801-2011-0295 seguido por Augusto Simón Baque Indacochea y la Sra. Betty Paz García, Procuradora Común en contra del Ministerio de Educación y otros, y el Oficio No. 288-SP-CNJ-2014 suscrito por Presidente de la Corte Nacional de Justicia; así como la copia del Memorando Circular 3524 de 9 de julio del 2012.-

11.- Copia certificada del Manifiesto a la Opinión Pública, suscrita por los Decanos de Derechos de la Universidad de Cuenca y del Azuay; así como por el Presidente

del Colegio de Abogados del Azuay al Presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad de Cuenca.

### **ENUNCIACION DE LAS PRUEBAS QUE NOS PROPONEMOS RENDIR.**

#### **1.- Prueba Documental:**

##### **1.1.- Que el Consejo Provincial de la Judicatura del Azuay:**

a) Remita al Tribunal una certificación en la que conste los años de servicios en la función judicial de los Doctores Pablo Cordero Díaz y Sonia Quezada Quezada, y los cargos ocupados en la misma.-

b) Remita la nómina de los elegibles tanto para el Tribunal distrital de lo Contencioso Administrativo cuanto para el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario de Cuenca, con las calificaciones respectivas.

c) Remita una certificación de la última remuneración mensual que percibía el Dr. Pablo Mariano Cordero Díaz y del cargo que ocupaba antes de la fecha de destitución.-

d) Remita una lista detallada de los cargos creados para los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo del país, desde el 07 de abril del 2014, así como las vacantes que se han presentado en igual período.

##### **1.2.- Que se oficie a la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, a fin de que remitan al proceso:**

a) Una copia certificada de Resolución del Pleno de la Corte Provincial de Justicia del Azuay sobre la "Independencia de los Jueces y el Régimen Disciplinario" de fecha 25 de octubre del 2013.-

2.- A más de las pruebas referidas, dentro de la estación probatoria haremos uso de las demás pruebas previstas en el Art. 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, como la prueba testimonial, la contestación de preguntas vía Informe que se solicitará a los servidores públicos a quienes conciernen los hechos controvertidos.

### **REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONA EN CUYO FAVOR HA DERIVADO EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.-**

De conformidad a lo previsto en el Art. 34 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativo, se dispondrá que el demandado, remita el original o copia



certificada del expediente administrativo disciplinario tramitado tanto en la Dirección Provincial del Consejo de la judicatura del Azuay signado con el No. DA-126-2013, cuanto del expediente que contiene el recurso de apelación interpuesto para ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, expediente seguido en contra de los comparecientes, y de los Doctores Alejandro Poralta, Hernán Monsalvo, Natalia Larriva y Javier Cordero, que concluyó con la resolución de 17 de septiembre del 2014 que se impugna a través de la presente acción, e indique el nombre de la persona en cuyo favor ha derivado el acto administrativo que se impugna a fin de que se le haga conocer de la demanda y comparezca a juicio a hacer valer sus derechos.

#### **BIBLIOGRAFIA.-**

- 1.-D-7607 (CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 29 de 10 de 2009).
- 2.-ACEPTA ACCION DE PROTECCION POR DESTITUCION DE CARGO, 0529-11-EP.- CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO DE TRANSICION-Sentencia No. 056-11-SEP-CC.- R. Oficial S. 617 de 12 de enero del 2012.
- 3.-AYALA CORAO, C. M. (2007). [www.cecoch.c/htm/revista/docs/...](http://www.cecoch.c/htm/revista/docs/)
- 4.-CASO APITZ BARBERA Y OTROS VS. VENEZUELA (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 05 de 08 de 2008).
- 5.-CONCEDE AMPARO POR DESTITUCION, 0062-08-RA (PRIMERA SALA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 17 de 12 de 2008).
- 6.-CONCEDE AMPARO POR DESTITUCION, No. 0062-8-RA (PRIMERA SALA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 17 de 12 de 2008).
- 7.-DESTITUCION DE CARGO, 0977-06-RA (PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11 de 07 de 2007).
- 8.-GOMEZ TOMILLO, M. S. (2010). DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADO. PARTE GENERAL. Pamplona: España.
- 9.-GORDILLO, A. (03 de 11 de 2014). [www.gordillo.com/pdf\\_tomo1/Capitulo XII.pdf](http://www.gordillo.com/pdf_tomo1/Capitulo%20XII.pdf).
- 10.-JURISPRUDENCIA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CAMBA CAMPOS, Registro Oficial 127 (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 20 de 11 de 2013).
- 11.-MARTIN, B. M. (1998). RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES Y DEL ESTADO. Santa Fe de Bogotá D.C.: Colombia.



12.-PALACIO HINCAPIE, J. A. (s.f.). LA PRUEBA JUDICIAL, Tomo I, Bogotá: Ediciones, Doctrina y Ley Ltda.

13.-PERU, D. D. (octubre de 1998), [www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/modulo/.../](http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/modulo/.../),

14.-Sentencia 762/09, D 7607 (Corte Constitucional de Colombia 29 de 10 de 2009).

15.-Sentencia C 818/05, Expediente D-5521 (CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 09 de 08 de 2005).

16.-SENTENCIA C248/13, D-9285 (CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 24 de ABRIL de 2013).

17.-SENTENCIA NO. 031-10-SEP-CC, 649-09-EP (CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 15 de 07 de 2010).

18.-Sentencia T-238/11, Expediente T-2.860.298 (CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 1 de 04 de 2011).

19.- Revista del Colegio de Abogados del Azuay.- Diciembre 2014.-

20.- Documento titulado: "Garantía para la Independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el Fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de derecho en las Américas", aprobado por el Pleno de la Comisión Interamericana el 05 de diciembre del 2013.-



Dr. Dr. Jorge Isaac Calle Beltrán,

Atentamente,



Dr. Pablo Mariano Cordero Díaz,



Dra. Sonia Alejandrina Quezada Quezada,